

REPUBLICA ARGENTINA  
DIARIO DE SESIONES  
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION  
37ª REUNION - 18ª SESION ORDINARIA - 22/23 DE SEPTIEMBRE DE 1993

**Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,**  
**doctor EDUARDO MENEM,**  
**del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,**  
**doctor CONRADO H. STORANI,**  
**del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado,**  
**doctor JUAN CARLOS OYARZUN**  
**y del señor presidente de la Comisión de Defensa Nacional, doctor EDUARDO P. VACA**  
Secretarios: **doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI** y señor **EDGARDO P.V. MURGUÍA**  
Prosecretarios: señor **JUAN JOSE CANALS** y doctor **DONALDO ANTONIO DIB**

PRESENTES	VACA, Eduardo P.
AGUIRRE LANARI, Juan R.	VERNA, Carlos A.
ALASINO, Augusto	
AVELIN, Alfredo	AUSENTES CON AVISO
BITTEL, Deolindo F.	
BORDON, José O.	BRITOS, Oraldo N.
BRANDA, Ricardo A.	HUMADA, Julio C.
BRAVO, Leopoldo	JUAREZ, Carlos A.
CABANA, Fernando V.	VILLAROEL, Pedro G.
CAFIERO, Antonio F.	
CENDOYA, Jorge J.	
COSTANZO, Remo J.	
DE LA RUA, Fernando	
FADEL, Mario N.	
FIGUEROA, José O.	
GENOUD, José	
LAFFERRIERE, Ricardo E.	
LEON, Luis A.	
LOSADA, Mario A.	
LUDUEÑA, Felipe E.	
MAC KARTHY, César	
MARTINEZ, Daniel E.	
MARTINEZ ALMUDEVAR, Enrique M.	
MASSAT, Jorge	
MAZZUCCO, Faustino M.	
MENEM, Eduardo	
MIRANDA, Julio	
MOLINA, Pedro E.	
OTERO, Edison	
OYARZUN, Juan C.	
PEÑA de LOPEZ, Ana	
RIVAS, Olijela del Valle	
RODRIGUEZ SAA, Alberto J.	
ROMERO, Juan C.	
ROMERO FERIS, José A.	
RUBEO, Luis	
SÁNCHEZ, Libardo N.	
SAN MILLAN, Julio A.	
SAPAG, Felipe	
SNOPEK, Guillermo E.	
SOLANA, Jorge D.	
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito	
STORANI, Conrado H.	

---

## SUMARIO

15. Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre reforma del Sistema Nacional de Previsión Social. (C.D.-2/93). Se aprueba. (Pág. 3306).

---

15

## REFORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

**Sr. Presidente** (Menem).- Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión sobre reforma del Sistema Nacional de Previsión Social (Orden del Día N° 486)

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario** (Piuzei).- (Lee).

### Dictamen de comisión en mayoría

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley en revisión sobre reforma del Sistema Nacional de Previsión Social (C.D.-2/93); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.

De acuerdo con los términos del artículo 117 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de comisiones, 8 de septiembre de 1993.

*Juan C. Romero - Julio A. San Millán. - Ricardo A. Branda - Eduardo Menem. - Pedro E. Molina - Mario N. Fadel.- Julio C. Humada - Eduardo P. Vaca - Felipe Ludueña - Augusto Alasino*

### Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(6 de mayo de 1993)

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y la Cámara de Diputados, etc.*

## LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES

### LIBRO I

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones

### TITULO I

Disposiciones generales

### Capítulo I

Creación - Ambito de aplicación

*Institución del sistema integrado de jubilaciones y pensiones*  
Artículo. 1° -. Institúyese con alcance nacional y con sujeción a las normas de esta ley, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que cubrirá las contingencias de vejez, invalidez y muerte y se integrará al Sistema Unico de Seguridad Social (SUSS).

Conforman este sistema: 1) un régimen previsional público, fundamentado en el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado que se financiarán a través de un sistema de reparto, en adelante también régimen de reparto; y 2) Un régimen previsional basado en la capitalización individual, en adelante también régimen de capitalización.

### *Incorporación obligatoria.*

Art. 2°- Están obligatoriamente comprendidas en el SIJP y sujetas a las disposiciones que sobre afiliación establece esta ley y a las normas reglamentarias que se dicten, las personas físicas mayores de dieciocho (18) años de edad que a continuación se detallan:

a) Personas que desempeñen alguna de las actividades en relación de dependencia que se enumeran en los apartados siguientes, aunque el contrato de trabajo o la relación de empleo público fueren a plazo fijo;

1. Los funcionarios, empleados y agentes que en forma permanente o transitoria desempeñen cargos, aunque sean de carácter electivo, en cualquiera de los poderes del Estado nacional, sus reparticiones u organismos centralizados, descentralizados o autárquicos, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales y obras sociales del sector público, con exclusión del personal militar de las fuerzas armadas y del personal militarizado o con estado policial de las fuerzas de seguridad y policiales;
2. El personal civil de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad y policiales.
3. Los funcionarios, empleados y agentes que en forma permanente o transitoria desempeñen cargos en organismos oficiales interprovinciales, o integrados por la Nación y una o más provincias, cuyas remuneraciones se atiendan con fondos de dichos organismos;
4. Los funcionarios, empleados y agentes civiles dependientes de los gobiernos y municipalidades provinciales, a condición que previamente las autoridades respectivas

adhieran al SIJP, mediante convenio con el Poder Ejecutivo nacional;

5. Las personas que en cualquier lugar del territorio del país presten en forma permanente, transitoria o eventual, servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada;
6. Las personas que en virtud de un contrato de trabajo celebrado o relación laboral iniciada en la República, o de un traslado o comisión dispuestos por el empleador, presten en el extranjero servicios de naturaleza prevista en el apartado anterior, siempre que dichas personas tuvieran domicilio real en el país al tiempo de celebrarse el contrato, iniciarse la relación laboral o disponerse el traslado o comisión;
7. En general todas las personas que hasta la vigencia de la presente ley estuvieran obligatoriamente comprendidas en el régimen nacional de jubilaciones y pensiones por actividades no incluidas con carácter obligatorio en el régimen para trabajadores autónomos.

Cuando se trata de socios en relación de dependencia con sociedades se estará a lo dispuesto en el inciso d)

- b) Personas que por sí solas o conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, ejerzan habitualmente en la República alguna de las actividades que a continuación se enumeran, siempre que éstas no configuren una relación de dependencia

1. Dirección, administración o conducción de cualquier empresa, organización, establecimiento o explotación con fines de lucro, o sociedad comercial o civil, aunque por esas actividades no obtengan retribución, utilidad o ingreso alguno;
2. Profesión desempeñada por graduado en universidad nacional o en universidad provincial o privada autorizada para funcionar por el Poder Ejecutivo, o por quien tenga especial habilitación legal para el ejercicio de profesión universitaria reglamentada;
3. Producción o cobranza de seguros, reaseguros, capitalización, ahorro, ahorro y préstamo, o similares;
4. Cualquier otra actividad lucrativa no comprendida en los apartados precedentes;

- c) Personas al servicio de las representaciones y agentes diplomáticos o consulares acreditados en el país, como también el dependiente de organismos internacionales que preste servicios en la República, si de conformidad con las convenciones y tratados vigentes resultan

aplicables a dicho personal las leyes de jubilaciones y pensiones argentinas. Al personal que quede excluido le será de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 4º;

- d) Cuando se trata de socios de sociedades, a los fines de su inclusión obligatoria en los incisos a) o b), o en ambos serán de aplicación las siguientes normas:

1. No se incluirán obligatoriamente en el inciso a):

- 1.1 Los socios de sociedades de cualquier tipo cuya participación en el capital sea igual o superior al por ciento que resulte de dividir el número cien (100) por el número total de socios.

- 1.2 El socio comanditado único de las sociedades en comandita simple o por acciones. Si hubiera más de un socio comanditado se aplicará lo dispuesto en el punto anterior tomando en consideración solamente el capital comanditado.

- 1.3 Los socios de las sociedades civiles y de las sociedades comerciales irregulares de hecho, aunque no se cumpla el requisito al que se refiere el punto

- 1.4 Los socios de sociedades de cualquier tipo –aunque no estuvieran comprendidos en los puntos anteriores– cuando la totalidad de los integrantes de la sociedad estén ligados por un vínculo de parentesco de hasta el segundo grado de consanguinidad y/o afinidad.

2. Sin perjuicio de su inclusión en el inciso b) cuando un socio quede incluido obligatoriamente en el inciso a) la sociedad y el socio estarán sujetos a las obligaciones de aportes y contribuciones obligatorias por la proporción de la remuneración y participación en las utilidades que el socio perciba y/o se le acrediten en cuenta, en la medida que exceda el monto que le hubiera correspondido con su participación en el capital social.

#### *Incorporación voluntaria*

Art. 3º-. La incorporación al SIJP es voluntaria para las personas mayores de dieciocho (18) años de edad, que a continuación se detallan:

- a) Con las obligaciones y beneficios que corresponden a los incluidos en el inciso a) del artículo anterior:

1. Los directores de sociedades anónimas por las asignaciones que perciban en la misma sociedad por actividades especialmente remuneradas que configuren una relación de dependencia.

2. Los socios de sociedades de cualquier tipo que no resulten incluidos obligatoriamente conforme a lo dispuesto en el inciso d) del artículo anterior.
- b) Con las obligaciones y beneficios que corresponden a los incluidos en el inciso b) del artículo anterior:
  1. Los miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna por esas funciones, socios no gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, síndicos de cualquier sociedad y fiduciarios.
  2. Los titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común.
  3. Los miembros del clero y de organizaciones religiosas pertenecientes al culto católico apostólico romano, u otros inscritos en el Registro Nacional de Cultos.
  4. Las personas que ejerzan las actividades mencionadas en el artículo 2° inciso b), apartado 2, y que por ellas se encontraren obligatoriamente afiliadas a uno o más regímenes jubilatorios provinciales para profesionales, como asimismo aquellas que ejerzan una profesión no académica autorizada con anterioridad a la promulgación de esta ley. Esta incorporación no modificará la obligatoriedad que dimana de los respectivos regímenes locales.
  5. Las amas de casa.

#### *Excepción*

Art. 4°-. Quedan exceptuados del SIJP los profesionales, investigadores, científicos y técnicos contratados en el extranjero para prestar servicios en el país por un plazo no mayor de dos (2) años y por una sola vez, a condición que no tengan residencia permanente en la República y estén amparados contra las contingencias de vejez, invalidez y muerte por las leyes del país de su nacionalidad o residencia permanente. La solicitud de exención deberá ser formulada ante la autoridad de aplicación por el interesado o su empleador.

La precedente exención no impedirá la afiliación a este sistema, si el contratado y el empleador manifestaren su voluntad expresa en tal sentido, o aquél efectuare su propio aporte y la contribución correspondiente al empleador.

Las disposiciones precedentes no modifican las contenidas en los convenios sobre seguridad social celebrados por la República con otros países, ni las de la ley 17.514.

#### *Actividades simultáneas*

Art. 5° -. La circunstancia de estar también comprendido en otro régimen jubilatorio nacional, provincial o municipal, así como el hecho de gozar de cualquier jubilación, pensión o retiro, no eximen de la obligatoriedad de efectuar aportes y contribuciones a este sistema salvo en los casos expresamente determinados en la presente ley.

Las personas que ejerzan en forma simultánea más de una actividad de las comprendidas en los incisos a), b) o c) del artículo 2°, así como los empleadores en su caso contribuirán obligatoriamente por cada una de ellas.

## CAPITULO II

### Remuneración. Aportes y contribuciones

#### *Concepto de remuneración*

Art. 6°-. Se considera remuneración, a los fines del SIJP, todo ingreso que percibiera el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su actividad personal, en concepto de sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, participación en las ganancias, habilitación, propinas, gratificaciones y suplementos adicionales que tengan el carácter de habituales y regulares, viáticos y gastos de representación excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, y toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia.

La autoridad de aplicación determinará las condiciones en que los viáticos y gastos de representación no se considerarán sujetos a aportes ni contribuciones, no obstante la inexistencia total o parcial de comprobantes que acrediten el gasto.

Las propinas y las retribuciones en especie de valor incierto serán estimadas por el empleador. Si el afiliado estuviera disconforme, podrá reclamar ante la autoridad de aplicación la que resolverá teniendo en cuenta la naturaleza y modalidades de la actividad y de la retribución. Aun mediando conformidad del afiliado, la

autoridad de aplicación podrá rever la estimación que no considerara ajustada a estas pautas. Se consideran asimismo remuneración las sumas a distribuir a los agentes de la administración pública o que éstos perciban en carácter de:

1. Premio estímulo, gratificaciones u otros conceptos de análogas características. En este caso también las contribuciones estarán a cargo de los agentes, a cuyo efecto antes de proceder a la distribución de dichas sumas se deberá retener el importe correspondiente a la contribución.
2. Cajas de empleados o similares, cuando ello estuviere autorizado. En este caso el organismo o entidad que tenga a su cargo la recaudación y distribución de estas sumas deberá practicar los descuentos correspondientes a los aportes personales y depositarlas dentro del plazo pertinente.

#### *Concepto excluidos*

Art. 7º. No se consideran remuneración las asignaciones familiares las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo, por vacaciones no gozadas y por incapacidad permanente provocada por accidente del trabajo o enfermedad profesional, las prestaciones económicas por desempleo, ni las asignaciones pagadas en concepto de becas. Tampoco se consideran remuneración las sumas que se abonen en concepto de gratificaciones vinculadas con el cese de la relación laboral, en el importe que exceda del promedio anual de las percibidas anteriormente en forma habitual y regular.

#### *Renta imponible*

Art. 8º -. Los trabajadores autónomos efectuarán los aportes previsionales obligatorios establecidos en el artículo 10, sobre los niveles de rentas de referencia calculados en base a categorías que fijarán las normas reglamentarias de acuerdo con las siguientes pautas:

- a) Capacidad contributiva
- b) La calidad de sujeto o no en el impuesto al valor agregado y en su caso su condición de responsable inscripto, de responsable no inscripto o no responsable en dicho impuesto.

#### *Base imponible*

Art. 9º -. A los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al SIJP, las

remuneraciones no podrán ser inferiores al importe equivalente a tres (3) veces el valor del aporte medio previsional obligatorio (AMPO), definido en el artículo 21. A su vez, la mencionada base imponible previsional tendrá un límite máximo equivalente a veinte (20) veces el citado mínimo.

Si un trabajador percibe simultáneamente más de una remuneración o renta como trabajador en relación de dependencia o autónomo, cada remuneración o renta será computada separadamente a los efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior. En función de las características particulares de determinadas actividades en relación de dependencia, la reglamentación podrá establecer excepciones a lo dispuesto en el presente párrafo.

#### *Aportes y contribuciones obligatorios*

Art. 10 -. Los aportes y contribuciones obligatorios al SIJP se calcularán tomando como base las remuneraciones y rentas de referencia, y serán los siguientes:

- a) Aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en este sistema;
- b) Contribución a cargo de los empleadores;
- c) Aporte personal de los trabajadores autónomos comprendidos en el presente sistema.

#### *Porcentajes de aportes y contribuciones*

Art. 11 -. El aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia será del once por ciento (11 %), y la contribución a cargo de los empleadores del dieciséis por ciento (16 %).

El aporte personal de los trabajadores autónomos será del veintisiete por ciento (27 %).

Los aportes y contribuciones obligatorios serán ingresados a través del SUSS. A tal efecto, los mismos deberán ser declarados o ingresados por el trabajador autónomo o por el empleador en su doble carácter de agente de retención de las obligaciones a cargo de los trabajadores y de contribuyente al SIJP, según corresponda, en los plazos y con las modalidades que establezca la autoridad de aplicación.

### Capítulo III

Obligaciones de los empleadores, de los afiliados y de los beneficiarios

#### *Obligaciones de los empleadores*

Art. 12 -. Son obligaciones de los empleadores, sin perjuicio de las demás establecidas en la presente ley:

- a) Inscribirse como tales ante la autoridad de aplicación y comunicar a la misma toda modificación en su situación como empleadores, en los plazos y con las modalidades que dicha autoridad establezca;
- b) Dar cuenta a la autoridad de aplicación de las bajas que se produzcan en el personal;
- c) Practicar en las remuneraciones los descuentos correspondientes al aporte personal y depositarlos a la orden del SUSS;
- d) Depositar en la misma forma indicada en el inciso anterior las contribuciones a su cargo;
- e) Remitir a la autoridad de aplicación las planillas de sueldos y aportes correspondientes al personal;
- f) Suministrar todo informe y exhibir los comprobantes y justificativos que la autoridad de aplicación les requiera, en ejercicio de sus atribuciones, y permitir las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que aquélla ordene en los lugares de trabajo, libros anotaciones, papeles y documentos;
- g) Otorgar a los afiliados y beneficiarios y sus derechohabientes, cuando éstos lo soliciten, y en todo caso a la extinción de la relación laboral, las certificaciones de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos, y toda otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u otorgamiento de cualquier prestación ;
- h) Requerir de los trabajadores comprendidos en el SIJP al comienzo de la relación laboral, en los plazos y con las modalidades que la autoridad de aplicación establezca, la presentación de una declaración jurada escrita de si son o no beneficiarios de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, con indicación, en caso afirmativo, del organismo otorgante y datos de individualización de la prestación;
- i) Denunciar a la autoridad de aplicación todo hecho o circunstancia concerniente a los trabajadores, que afecten o puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones que a éstos y a los empleadores imponen las leyes nacionales de previsión;

- j) En general, dar cumplimiento en tiempo y forma a las demás disposiciones que la presente ley establece, o que la autoridad de aplicación disponga.

Las reparticiones y organismos del Estado mencionados en el apartado 1 del inciso a) del artículo 2º , están también sujetos a las obligaciones enumeradas precedentemente

*Obligaciones de los afiliados y de los beneficiarios*

Art.13.-.

- a) Son obligaciones de los afiliados en relación de dependencia, sin perjuicio de las demás establecidas en la presente ley:

1. Suministrar los informes requeridos por la autoridad de aplicación, referentes a su situación frente a las leyes de previsión.
2. Presentar al empleador la declaración jurada a la que se refiere el inciso h) del artículo 12, y actualizar la misma cuando adquieran el carácter de beneficiarios de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, en el plazo y con las modalidades que la autoridad de aplicación establezca.
3. Denunciar a la autoridad de aplicación todo hecho o circunstancia que configure incumplimiento por parte del empleador a las obligaciones establecidas por las leyes nacionales de jubilaciones y pensiones.

La autoridad de aplicación, en un plazo no mayor de 45 días, deberá investigar los hechos denunciados, dictar resolución desestimando la denuncia o imponiendo las sanciones pertinentes y efectuar la denuncia penal, según corresponda, y notificar fehacientemente al denunciante todo lo actuado y resuelto. El funcionario público que no diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en este inciso incurrirá en falta grave;

- b) Son obligaciones de los afiliados autónomos, sin perjuicio de las demás establecidas en la presente ley:

- 1) Depositar el aporte a la orden del SUSS
- 2) Suministrar todo informe referente a su situación frente a las leyes de previsión exhibir los comprobantes y justificativos que la autoridad de aplicación les requiera en ejercicio de sus atribuciones, y permitir las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que aquélla ordene en los

- lugares de trabajo, libros, anotaciones, papeles y documentos.
- 3) En general dar cumplimiento en tiempo y forma a las demás disposiciones que la presente ley establece, o que la autoridad de aplicación disponga;
  - c) Son obligaciones de los beneficiarios, sin perjuicio de las demás establecidas en la presente ley:
    1. Suministrar los informes requeridos por la autoridad de aplicación, referentes a su situación frente a las leyes de previsión;
    2. Comunicar a la autoridad de aplicación toda situación prevista por las disposiciones legales, que afecte o pueda afectar el derecho a la percepción total o parcial de la prestación que gozan.
    3. Presentar al empleador la declaración jurada respectiva en el caso que volvieren a la actividad.

Si el beneficiario fuera incapaz, el cumplimiento de las obligaciones precedentemente establecidas incumbe a su representante legal.

Si existiera incompatibilidad total o limitada entre el goce de la prestación y el desempeño de la actividad, y el beneficiario omitiere denunciar esta circunstancia, a partir del momento en que la autoridad de aplicación tome conocimiento de la misma, se suspenderá o reducirá el pago de la prestación, según corresponda. El beneficiario deberá, además, reintegrar lo cobrado indebidamente en concepto de haberes previsionales, con los accesorios correspondientes, importe que será deducido íntegramente de la prestación que tuviere derecho a percibir, si continuare en actividad; en caso contrario se le formulará cargo en los términos del inciso d) del artículo 14.

El empleador que conociendo que el beneficiario se halla en infracción a las normas sobre incompatibilidad no denunciara esta circunstancia a la autoridad de aplicación, se hará pasible de una multa equivalente a diez (10) veces lo percibido indebidamente por el beneficiario en concepto de haberes previsionales. El hecho de que el empleador no practique las retenciones en concepto de aportes hace presumir, cuando el trabajador fuere beneficiario de prestación previsional, que aquél conocía la circunstancia señalada precedentemente.

#### Capítulo IV

##### Caracteres de las prestaciones

Art. 14 -. Las prestaciones que su acuerden por el SIJP reúnen los siguientes caracteres:

- a) Son personalísimas, y sólo corresponden a sus titulares;
- b) No pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno, salvo las prestaciones mencionadas en los incisos a) y b) del artículo 17, las que previa conformidad formal y expresa de los beneficiarios, pueden ser afectadas a favor de organismos públicos, asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial, asociaciones de empleadores, obras sociales, cooperativas y mutualidades, con los cuales los beneficiarios convengan el anticipo de las prestaciones;
- c) Son inenajenables, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas;
- d) Las prestaciones del régimen de reparto están sujetas a las deducciones que las autoridades judiciales y administrativas competentes dispongan en concepto de cargos provenientes de créditos a favor de organismos de seguridad social o por la percepción indebida de haberes de jubilaciones, pensiones, retiros o prestaciones no contributivas. Dichas deducciones no podrán exceder del veinte por ciento (20 %) del haber mensual de la prestación, salvo cuando en razón del plazo de duración de ésta no resultara posible cancelar el cargo mediante ese porcentaje, en cuyo caso la deuda se prorrateará en función de dicho plazo;
- e) Son imprescriptibles, salvo las establecidas en el artículo 17, que se regirán por las normas del artículo 82 de la ley 18.037 (texto ordenado en 1976);
- f) Sólo se extinguen por las causas previstas por la ley.

Todo acto jurídico que contrarie lo dispuesto precedentemente será nulo y sin valor alguno.

#### *Reapertura del procedimiento. Nulidad*

Art. 15. -. Cuando hubiere recaído resolución judicial o administrativa firme, que denegare en todo o en parte el derecho reclamado, se estará al contenido de la misma. Si como consecuencia de la reapertura del procedimiento a frente nuevas invocaciones se hiciera lugar al reconocimiento de este derecho, se considerará como fecha de solicitud la del pedido de reapertura del procedimiento.

Cuando la resolución otorgante de la prestación estuviere afectada de nulidad absoluta que resultara de hechos o actos fehacientemente



probados, podrá ser suspendida, revocada, modificada o sustituida por razones de ilegitimidad en sede administrativa, mediante resolución fundada aunque la prestación se hallare en curso de pago.

## TITULO II

### Régimen previsional público

#### Capítulo I

##### Garantía - Financiamiento – Prestaciones

###### *Garantía del Estado*

Art. 16.-. El Estado nacional garantiza el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este título, las que se financiarán a través de un régimen de reparto.

###### *Prestaciones*

*Artículo. 17-* El régimen instituido en el presente título otorgará las siguientes prestaciones

- a) Prestación Básica Universal;
- b) Prestación compensatoria;
- c) Retiro por invalidez
- d) Pensión por fallecimiento
- e) Prestación adicional por permanencia

###### *Financiamiento.*

Art. 18. Las prestaciones correspondientes al régimen de reparto se financiarán mediante fondos provenientes de:

- a) Las contribuciones a cargo de los empleadores, establecidas en el artículo 11;
- b) Dieciséis (16) puntos de los veintisiete (27) correspondientes a los aportes de los trabajadores autónomos, establecidos en el Artículo 11;
- c) La recaudación del impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico y otros tributos de afectación específica al Régimen Nacional de Previsión Social o a este régimen;
- d) Los recursos provenientes de "Rentas Generales de la Nación";
- e) Intereses, multas y recargos;
- f) Rentas provenientes de inversiones;

g) Todo otro recurso que corresponda ingresar al régimen de reparto;

h) Los aportes correspondientes a los afiliados previstos en el artículo 30 que no hayan ejercido la opción prevista en el artículo 39 .

#### Capítulo II

##### Prestación básica universal

###### *.Requisitos*

Art. 19. Tendrán derecho a la prestación básica universal (PBU), y a los demás beneficios establecidos por esta ley, los afiliados:

- a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad;
- b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad;
- c) Acrediten treinta (30) años de servicios con aportes, computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad

En cualquier de los regímenes previstos en esta ley, las mujeres podrán optar por continuar su actividad laboral hasta los sesenta y cinco (65) años de edad; en este supuesto se aplicará la escala del artículo 128..

Al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la prestación básica universal, se podrá compensar el exceso de edad con la falta de servicios, en la proporción de dos (2) años de edad excedentes por uno (1) de servicios faltantes.

A los efectos de cumplimentar los requisitos establecidos precedentemente, se aplicarán las disposiciones de los artículos 36 y 37, respectivamente.

###### *Haber de la Prestación*

Art. 20. -. El haber mensual de la prestación básica universal se determinará de acuerdo con las siguientes normas:

- a) Para los beneficiarios que acrediten treinta (30) años de servicios en las condiciones del inciso c) del artículo anterior, el haber será equivalente a dos veces y media (2,5) el aporte medio previsional obligatorio al que se refiere el artículo siguiente;
- b) Para los beneficiarios que acrediten más de treinta (30) y hasta cuarenta y cinco (45) años como máximo de servicios en las condiciones preindicadas, el haber se incrementará en un uno por ciento (1

%) por año adicional sobre la suma a que alude el inciso a)

#### *Aporte medio previsional obligatorio*

Art. 21. - El Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO) se obtendrá dividiendo el promedio mensual de los aportes establecidos en el artículo 39, ingresados en cada semestre, excluidos los aportes sobre sueldo anual complementario, por el número total promedio mensual de afiliados que se encuentren aportando, de acuerdo con el procedimiento que establezcan las normas reglamentarias.

El cómputo del AMPO se realizará en los meses de marzo y septiembre de cada año.

#### *Cómputo de servicios*

Art. 22.- A los fines del artículo 19, inciso c), serán computables los servicios comprendidos en el presente sistema, como también los prestados con anterioridad. Dicho cómputo comprenderá exclusivamente las actividades desarrolladas hasta el momento de solicitar la prestación básica universal.

### Capítulo III

#### Prestación compensatoria

##### *Requisitos*

Art. 23.- Tendrán derecho a la prestación compensatoria, los afiliados que:

- a) Acrediten los requisitos para acceder a la prestación básica universal;
- b) Acrediten servicios con aportes comprendidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria, prestados hasta la fecha de vigencia del presente libro;
- c) No se encuentren percibiendo retiro por invalidez, cualquiera fuera el régimen otorgante.

##### *Haber de la prestación*

Art. 24.- El haber mensual de la prestación compensatoria se determinará de acuerdo con las siguientes normas:

- a) Si todos los servicios con aportes computados fueren en relación de dependencia, el haber será equivalente a uno y medio por ciento (1,5 %) por cada año de servicios con aportes, o fracción mayor de seis (6) meses, hasta un máximo de treinta y cinco (35) años, calculado

sobre el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, actualizadas y percibidas durante el período de diez (10) años inmediatamente anteriores a la cesación en el servicio. Las normas reglamentarias establecerán los procedimientos de cálculo del correspondiente promedio.

A fin de practicar la actualización prevista en el párrafo anterior, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reglamentará la aplicación del índice salarial a utilizar. Este índice será de carácter oficial.

- b) Si todos los servicios con aportes computados fueren autónomos, el haber será equivalente a un uno y medio por ciento (1,5 %) por cada año de servicios con aportes, o fracción mayor de seis (6) meses, hasta un máximo de treinta y cinco (35) años, calculado sobre el promedio mensual de los montos actualizados de las categorías en que revistió el afiliado, ponderado por el tiempo con aportes computados en cada una de ellas;
- c) Si se computaren sucesiva o simultáneamente servicios con aportes en relación de dependencia y autónomos, el haber se establecerá sumando el que resulte para los servicios en relación de dependencia y el correspondiente a los servicios autónomos, ambos en proporción al tiempo computado para cada clase de servicios. Si el período computado excediera de treinta y cinco (35) años a los fines de este inciso se considerarán los treinta y cinco (35) años más favorables. Para determinar el haber de la prestación se tomarán en cuenta únicamente servicios de los indicados en el inciso b) del artículo anterior.

##### *Promedio de remuneraciones*

Art. 25.- Para establecer el promedio de las remuneraciones no se considerará el sueldo anual complementario ni los importes que en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9º excedan el máximo fijado en el primer párrafo del mismo artículo.

*Haber máximo*

Art. 26.- El haber máximo de la prestación compensatoria será equivalente a una (1) vez el AMPO por cada año de servicios con aportes computados.

## CAPITULO IV

Prestaciones de retiro por invalidez y de pensión por fallecimiento

*Normas aplicables*

Art. 27. - Estarán a cargo del régimen previsional público las prestaciones de retiro por invalidez y de pensión por fallecimiento del afiliado en actividad hasta la suma de la Prestación Básica Universal más la Prestación Compensatoria que correspondiere al momento de producida la contingencia.

También estará a cargo de dicho régimen la pensión por fallecimiento del beneficiario de alguna de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 17.

Las prestaciones indicadas en los párrafos precedentes se regirán para su otorgamiento, por los mismos requisitos que para dichas prestaciones establece el régimen de Capitalización.

El cálculo de la Prestación Básica Universal se efectuará de acuerdo al artículo 20, inciso a), considerando como años de servicio la suma de los años de servicios con aportes anteriores a la invalidez o al fallecimiento, más los años futuros hasta la edad establecida en el artículo 19, inciso a) y b), o la establecida en el artículo 37, si correspondiere.

En ningún caso la prestación establecida en este artículo será superior al haber de las prestaciones establecido en el artículo 28

Las normas reglamentarias establecerán el procedimiento a seguir relacionado con la determinación de la invalidez en el caso de los afiliados que hubieran ejercido la opción por el régimen de reparto, el que deberá ser compatible en lo pertinente, con lo dispuesto en el capítulo II del título III.

Las prestaciones por invalidez o fallecimiento a otorgarse a los beneficiarios que opten por permanecer en el régimen de reparto, será equivalentes a las que se establecen en los artículos 97 y 98.

*Haber de las prestaciones*

Art. 28.- El haber de las prestaciones mencionadas en el artículo anterior se determinará de acuerdo con las siguientes normas:

- a) El retiro por invalidez, según lo establecido en el artículo 97;
- b) La pensión por fallecimiento del afiliado en actividad, según lo establecido en el apartado 2 del artículo 98;
- c) La pensión por fallecimiento del beneficiario, establecida en el segundo párrafo del artículo anterior, según las disposiciones del apartado 3 del artículo 98

*Pago de las prestaciones*

Art. 29.- Las prestaciones indicadas en el primer párrafo del artículo 27, y la pensión derivada de la prestación mencionada en el inciso c) del artículo 17, serán abonadas a los beneficiarios en forma directa por el SUSS.

*Opción de los afiliados*

Artículo.30.- Prestación adicional por permanencia: las personas físicas comprendidas en el artículo 2° podrán optar por no quedar comprendidas en las disposiciones establecidas en el título III del presente libro. Las normas reglamentarias establecerán los procedimientos administrativos para el ejercicio de la mencionada opción.

La mencionada opción producirá los siguientes efectos para los afiliados.

- a) Los aportes establecidos en el artículo 39 serán destinados al financiamiento del régimen previsional público.
- b) Los afiliados tendrán derecho a la percepción por parte del régimen público de una prestación adicional por permanencia que se adicionará a las prestaciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 17. El haber mensual de esta prestación se determinará computando ochenta y cinco centésimos por ciento (0,85%) por cada año de servicios con aportes realizados al SIJP en igual forma y metodología que la establecida para la prestación compensatoria.

Para acceder a la prestación adicional por permanencia los afiliados deberán acreditar los requisitos establecidos en los incisos a) y c) del artículo 23;

- c) Las prestaciones de retiro por invalidez y pensión por fallecimiento del afiliado en actividad serán financiadas por régimen de reparto acorde a lo establecido en el título III del capítulo VII, independientemente de la fecha de nacimiento del afiliado
- d) A los efectos de aspectos de movilidad, prestación anual complementaria y otros inherentes a la prestación adicional por permanencia, ésta es asimilable a las disposiciones que a tal efecto se establecen para la prestación compensatoria.

### Capítulo V

#### Disposiciones comunes

##### *Prestación anual complementaria*

Art. 31.- Se abonará una prestación anual complementaria, pagadera en dos (2) cuotas, equivalente cada una al cincuenta por ciento (50 %) de las prestaciones mencionadas en el artículo 17, en los meses de junio y diciembre.

Cuando se hubiere tenido derecho a gozar de las prestaciones sólo durante parte de un semestre, la cuantía respectiva se determinará en proporción al tiempo en que se devengaron los haberes.

##### *Movilidad de las prestaciones*

Art. 32.- Los haberes de las prestaciones correspondientes al régimen de reparto serán móviles, en función de las variaciones entre dos (2) estimaciones consecutivas del AMPO, no pudiendo ello importar por ningún concepto la disminución en términos nominales del haber respectivo.

##### *Límite de acumulación*

Art. 33. -. La misma persona no podrá ser titular de más de una (1) prestación básica universal y, en caso de corresponder, de más de una (1) prestación compensatoria, ni más de una (1) prestación adicional por permanencia, debiendo optar por cada una de ellas.

##### *Incompatibilidad - Excepción para el personal docente universitario*

Art. 34.- Si el beneficiario de una prestación básica universal reingresare a la actividad en relación de dependencia, se le suspenderá el goce de esa prestación, como también el de la

prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia en caso de corresponder, hasta tanto cese en dicha actividad, la que no dará derecho a reajuste del haber de las prestaciones mencionadas.

Exceptuase de lo dispuesto en el párrafo anterior al beneficiario que se reintegrare a la actividad o continuare en la misma en cargos docentes o de investigación en universidades nacionales o en universidades provinciales o privadas autorizadas para funcionar por el Poder Ejecutivo, o en facultades, escuelas, departamentos, institutos y demás establecimientos de nivel universitario que dependan de ellas.

El Poder Ejecutivo podrá extender esa compatibilidad a los cargos docentes o de investigación científica desempeñados en otros establecimientos o institutos oficiales de nivel universitario, científico o de investigación, como también establecer en los supuestos contemplados en este párrafo y en el anterior, límites de compatibilidad con reducción del haber de las prestaciones.

##### *Percepción unificada*

Art. 35.- La prestación básica universal y la prestación compensatoria serán abonadas en forma coordinada con el haber de la jubilación ordinaria o con algunas de las prestaciones detalladas en el artículo 27 otorgada a través del Régimen de Capitalización. Las normas reglamentarias instrumentarán los mecanismos de transferencia por parte del Sistema Unico de la Seguridad Social a la entidad responsable del pago de la prestación derivada del régimen de capitalización, a fin de procurar la inmediatez y simultaneidad de los pagos respectivos.

### CAPÍTULO VI

#### Autoridad de aplicación, fiscalización y control

##### *Facultades y atribuciones*

Art. 36- La ANSES tendrá a su cargo la aplicación, control y fiscalización del régimen de reparto, así como la recaudación de la Contribución Unica de la Seguridad Social (CUSS), la que además de los conceptos que constituyen recursos del régimen de reparto, incluirá el aporte personal de los trabajadores que se orientará al Régimen de Capitalización.

Corresponderá al citado organismo el dictado de normas reglamentarias en relación a los siguientes ítem:

- a) Las modalidades de recaudación de los aportes y contribuciones previsionales, los que deberán efectivizarse por los obligados al pago, en entidades regidas por la ley 21.526 conforme a la forma en que lo establezcan las normas reglamentarias;
- b) Las transferencias de los correspondientes aportes previsionales a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, debiendo las entidades bancarias receptoras de los mismos remitirlos directamente a las administradoras correspondientes dentro de las 48 horas de recibidos, y enviar a la ANSES la información de las transferencias efectuadas dentro de las 48 horas siguientes;
- c) La fiscalización del cumplimiento de las obligaciones previsionales;
- d) La determinación de intereses moratorios y punitivos y sanciones aplicables en caso de mora;
- e) La fijación de las fechas para declaración e ingreso de los aportes y contribuciones;
- f) La certificación de los requisitos necesarios para acceder a las prestaciones estatuidas en el presente título;
- g) La instrumentación de normas y procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 35;
- h) El requerimiento de toda información periódica u ocasional a los responsables de la declaración e ingreso de los aportes y contribuciones necesarias para un adecuado cumplimiento de sus funciones de control;
- i) La concesión de las prestaciones establecidas en el presente título;
- j) El procedimiento para la tramitación de denuncias a que se refiere el apartado 3 del inciso a) del artículo 13.

En el ejercicio de sus atribuciones podrá recabar el auxilio de la fuerza pública, iniciar acciones judiciales, denunciar delitos y constituirse en parte querellante.

Esta enumeración es meramente enunciativa, pudiendo el citado organismo realizar todas aquellas funciones no especificadas que hagan al normal ejercicio de sus facultades de administración del Sistema Único de Seguridad Social.

## CAPITULO VII

### Disposiciones Transitorias

#### *Gradualismo de edad*

Art. 37.- La edad establecida en el artículo 19, inciso b) para el logro de la prestación básica universal se aplicará de acuerdo con la siguiente escala:

Hombres		Mujeres		
Desde el Año	Relación de dependencia	Autónomos	Relación de dependencia	Autónomos
1994	62	65	57	60
1996	63	65	58	60
1998	64	65	59	60
2001	65	65	60	60
2003	65	65	60	60
2005	65	65	60	60
2007	65	65	60	60
2009	65	65	60	60
2011	65	65	60	60

#### *Declaración jurada de servicios con aportes*

Art. 38.- Para el cómputo de los años de servicios con aportes requeridos por el artículo 19 para el logro de la prestación básica universal, sólo podrán acreditarse mediante declaración jurada, como máximo, la cantidad de años que a continuación se indican, según el año de cese del afiliado:

1994 .....	7 años
1995 .....	7 años
1996 .....	6 años
1997 .....	6 años
1998 .....	5 años
1999 .....	5 años
2000 .....	4 años
2001 .....	4 años
2002 .....	3 años
2003 .....	3 años
2004 .....	2 años
2005 .....	2 años
2006 .....	1 año
2007 .....	1 año

### TITULO III

#### Régimen de capitalización

#### CAPITULO I

#### Disposiciones generales

##### *Financiamiento*

Art. 39. —. Se destinarán al régimen de capitalización las aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia establecidos en el artículo 11, y once (11) puntos de los veintisiete (27) correspondientes a los aportes de los trabajadores autónomos, que no hubieran ejercido la opción prevista en el mismo artículo 30

##### *Entidades receptoras de los aportes*

Art. 40-. La capitalización de los aportes destinados a este régimen será efectuada por sociedades anónimas denominadas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), en adelante también administradoras, las que estarán sujetas a los requisitos, normas y control previstos en esta ley y en sus normas reglamentarias.

Asimismo los estados provinciales, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, otras sociedades, entidades o asociaciones de diversa naturaleza -con o sin fines de lucro-, que se erigieren con este objeto exclusivo podrán constituirse como administradoras, las que sin perjuicio de adoptar una figura jurídica diferente, quedarán sujetas a idénticos requisitos, normas y controles.

Toda administradora, sin distinción de su forma jurídica quedará bajo el control y la supervisión directa de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que instituye el artículo 117 de la presente; ello no obstante el controlar que pudieren desarrollar los diversos órganos de fiscalización pertinentes, según la forma legal que hubieren adoptado. Dichos órganos deberán actuar sin interferir en las funciones específicas de la citada Superintendencia, cuyas formas serán de observancia obligatoria para las administradoras.

Queda derogada toda norma que impida a las asociaciones profesionales de trabajadores o empleadores, mutuales, cooperativas, colegios públicos de profesionales que ejerzan libremente su profesión y cualquier otro ente de derecho público no estatal que tenga por objeto principal atender a la seguridad social, constituir o participar como accionista de una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones.

Dispónese que el Banco de la Nación Argentina desempeñe, sin perjuicio de las actividades que le permite su Carta Orgánica, la actividad de administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, debiendo adecuar su estructura a tal efecto dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente ley.

Agrégase al artículo 3º de la ley 21.799:

Inciso g): Administrar Fondos de Jubilaciones y Pensiones y la actividad aseguradora exclusivamente inherente a este efecto, dando cumplimiento en lo pertinente a la ley 20.091 sometándose a su organismo de control.

La AFJP así constituida quedará bajo el control y supervisión directa de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, estando sujeta a los mismos requisitos, normas y controles que rigen al resto de las AFJP. El Estado nacional garantiza a los afiliados de la AFJP creada en la segunda parte de este artículo que el aporte depositado, deducidas exclusivamente las primas del seguro previsto en el artículo 99 de la presente, en ningún caso será inferior a la mayor de las siguientes alternativas:

- Los importes depositados en pesos con más una tasa de interés que devengue el Banco de la Nación Argentina en sus cajas de ahorro para depósitos en pesos;
- Los importes depositados en pesos convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio comprador correspondiente al cierre de las operaciones del Banco de la Nación Argentina del día en que se efectúe

cada depósito, con más la tasa LIBO para depósitos a 90 días.

Esta administradora del Banco de la Nación Argentina orientará no menos del 20% de los aportes que constituyan su fondo, a créditos o inversiones con destino a las economías regionales en las condiciones que fije la reglamentación.

Las AFJP administradas por el sector privado podrán otorgar garantías a su costo y riesgo.

#### *Elección de la administradora*

Art. 41.- Toda persona que quede incorporada al régimen de capitalización deberá elegir individual y libremente una administradora, la cual capitalizará en su respectivo fondo de jubilaciones y pensiones los aportes establecidos en el artículo 39 y las imposiciones y depósitos a que se refieren los artículos 56 y 57. La libertad de elección de la administradora no podrá ser afectada por ningún mecanismo ni acuerdo, quedando prohibido condicionar el otorgamiento de beneficios, a la afiliación o cambio del trabajador a una determinada administradora. Cualquier acuerdo contractual al respecto resultará nulo de nulidad absoluta, sin que ello afecte al beneficio concedido.

El afiliado deberá incorporarse a una única administradora aunque el mismo preste servicios para varios empleadores o realice simultáneamente tareas como trabajador dependiente y en forma autónoma.

#### *Obligaciones de la administradora relativas a la incorporación*

Art. 42- Las administradoras no podrán rechazar la incorporación de un afiliado efectuada conforme a las normas de esta ley ni realizar discriminación alguna entre los mismos, salvo las expresamente contempladas en la presente.

Las administradoras deberán hacer llegar al empleador una copia de la solicitud de incorporación o traspaso de cada trabajador en relación de dependencia.

#### *Obligaciones del afiliado y del empleador*

Art. 43. - El trabajador en relación de dependencia deberá comunicar a su empleador la administradora en la que se encuentra incorporado o decida incorporarse, dentro del término de treinta (30) días corridos posteriores al inicio de la relación laboral o la opción ejercida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30.

Si el afiliado omitiere la notificación y el empleador tampoco hubiere recibido comunicación de alguna administradora sobre la incorporación del empleado, los aportes destinados a este régimen deberán hacerse efectivos indicando como administradora a aquella en la cual se encuentren incorporados la mayoría de sus empleados.

#### *Derecho de traspaso a otra administradora*

Art. 44- Todo afiliado o beneficiario que cumpla las normas del artículo 45 tiene derecho a cambiar de administradora, para lo cual deberá notificar fehacientemente a aquella en la que se encuentre incorporado y a su empleador en caso de corresponder. El cambio tendrá efecto a partir del segundo mes siguiente al de la solicitud y estará sujeto a lo que dispongan las normas reglamentarias

#### *Condiciones para el traspaso*

Art. 45- El derecho a traspaso por parte del afiliado o beneficiario se limitará a dos (2) veces por año calendario y se registrará por las siguientes normas:

- a) Tratándose de afiliados, el traspaso podrá ser efectuado en la medida en que éste registre al menos cuatro (4) meses de aportes en la entidad que abandona;
- b) Tratándose de beneficiarios bajo las modalidades establecidas en los incisos b) o c) del artículo 100, el traspaso podrá ser efectuado siempre que el beneficiario registre al menos cuatro (4) cobros en la entidad que abandona;
- c) Tratándose de beneficiarios que se encuentran percibiendo retiro transitorio por invalidez, el derecho a traspaso de administradora no podrá ser ejercido mientras aquéllos perciban el correspondiente haber.

## Capítulo II

### Prestaciones

#### *Prestaciones*

Art. 46.- El régimen instituido en el presente título otorgará las siguientes prestaciones:

- a) Jubilación ordinaria;
- b) Retiro por invalidez;
- c) Pensión por fallecimiento del afiliado o beneficiario.

Dichas prestaciones se financiarán a través de la capitalización individual de los aportes previsionales destinados a este régimen.

#### *Jubilación ordinaria*

Art. 47. -. Tendrán derecho a la jubilación ordinaria los afiliados hombres que hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad, y mujeres que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad, con la salvedad de lo que dispone el artículo 128 y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110.

Si un afiliado permanece en actividad con posterioridad a la fecha en que cumpla la edad establecida para acceder al beneficio de jubilación ordinaria, se aplicarán las disposiciones del artículo 111

Art. 48. – Tendrán derecho al retiro por invalidez, los afiliados que:

- a) Se incapaciten física o intelectualmente en forma total por cualquier causa. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en su capacidad laborativa una disminución del sesenta y seis por ciento (66 %) o más; se excluyen las invalideces sociales o de ganancias;
- b) No hayan alcanzado la edad establecida para acceder a la jubilación ordinaria ni se encuentren percibiendo la jubilación en forma anticipada.

La determinación de la disminución de la capacidad laborativa del afiliado será establecida por una comisión médica cuyo dictamen deberá ser técnicamente fundado, conforme a los procedimientos establecidos en esta ley y los que dispongan el decreto reglamentario de la presente.

No da derecho a la prestación la invalidez total temporaria que sólo produzca una incapacidad verificada o probable que no exceda del tiempo en que el afiliado en relación de dependencia fuere acreedor a la percepción de remuneración u otra prestación sustitutiva, o de un (1) año en el caso del afiliado autónomo.

#### *Dictamen transitorio por invalidez*

Art. 49-

##### *1. - Solicitud*

El afiliado que esté comprendido en la situación indicada en el inciso b) del artículo 48 y que considere estar comprendido en la situación

descrita en el inciso a) del mismo artículo, podrá solicitar el retiro por invalidez ante la administradora a la cual se encuentre incorporado.

Para efectuar tal solicitud el afiliado deberá acreditar su identidad, denunciar su domicilio real, adjuntar los estudios diagnósticos y certificaciones médicas que poseyera, las que deberán ser formuladas y firmadas exclusivamente por los médicos asistentes del afiliado, detallando los médicos que lo atendieron o actualmente lo atienden, si lo supiera, así como también la documentación que acredite los niveles de educación formal alcanzados, si la poseyera, y en su defecto una declaración jurada sobre el nivel de educación formal alcanzado.

La administradora no podrá requerir ninguna otra información o documentación de la descrita para dar curso a la solicitud. En el mismo momento de presentarse ésta, deberá verificar si el afiliado se encuentra incorporado a la misma.

Si la verificación fuere negativa, rechazará la solicitud, sirviendo el certificado emitido por la administradora de resolución fundada suficiente, entregándole un duplicado de igual tener al solicitante. Si la verificación fuere positiva, la administradora deberá remitirla dentro de las 48 horas a la comisión médica con jurisdicción en el domicilio real del afiliado. Atento lo normado en el artículo 90 in fine, la administradora deberá remitir a la dependencia de la ANSES que la reglamentación determine, copia de la solicitud del afiliado.

##### *2. Actuación ante las comisiones médicas*

La comisión médica analizará los antecedentes y citará fehacientemente al afiliado en su domicilio real denunciado a revisión, la que deberá practicarse dentro de los quince (15) días corridos de efectuada la solicitud.

Si el afiliado no concurriere a la citación se reservarán las actuaciones hasta que el mismo comparezca.

Si el afiliado diere cumplimiento a la citación o se presentara posteriormente, en primer lugar se lo efectuará un psicodiagnóstico completo; el informe deberá contener en sus conclusiones las aptitudes del afiliado para capacitarse en la realización de tareas acordes con su minusvalía psicofísica. Asimismo si la comisión médica lo considerare oportuno podrá solicitar la colaboración de médicos especialistas en la afección que padezca el afiliado.

Si con los antecedentes aportados por el afiliado y la revisión practicada al mismo por los médicos éstos no estuvieran en condiciones de dictaminar, la comisión médica deberá en ese



mismo momento: a) Indicar los estudios diagnósticos necesarios que deben practicarse al afiliado; b) Concertar con los profesionales que los efectuarán el lugar, fecha y hora en que el afiliado deberá concurrir a practicarse los mismos; c) Extender las órdenes correspondientes; d) Entregar dichas órdenes al afiliado con las indicaciones pertinentes; e) Fijar nueva fecha y hora, para una segunda revisión del afiliado, y f) Dejar constancia de lo actuado en un acta que suscribirá el afiliado y los médicos designados por los interesados, si concurrieran.

Los estudios complementarios serán gratuitos para el afiliado y a cargo de la comisión médica, al igual que los de traslado del afiliado para practicarse los estudios complementarios y asistir a las citaciones de la comisión médica, cuando estuviera imposibilitado de movilizarse por sus propios medios. Estos gastos se financiarán conforme a los estipulados en el artículo 51. El afiliado podrá realizar los estudios solicitados y los que considero pertinentes para aportar a la comisión médica, con los profesionales que él designó, pero a su costa. Ello no lo releva de la obligación de practicárselos conforme las indicaciones de la comisión médica.

Si el afiliado no concurriera ante la comisión médica a la segunda revisión o lo hiciere sin los estudios complementarios solicitados por la misma se reservarán las actuaciones hasta que se presente nuevamente con dichos estudios, en cuyo caso se le fijará nueva fecha de revisión dentro de los diez (10) días corridos siguientes.

Si el afiliado concurriera ante la comisión médica con los estudios complementarios solicitados, la comisión médica dentro de los diez (10) días siguientes, deberá emitir dictamen considerando verificados, o no los requisitos establecidos en el inciso a) del artículo 48, conforme las normas a que se refiere el artículo 52. Este dictamen deberá ser notificado dentro de los tres (3) días corridos al afiliado, a la administradora a la cual el afiliado se encuentra incorporado, a la compañía de seguros vida con la cual la administradora hubiera contratado el seguro previsto en el artículo 99 o a la ANSES en los casos del artículo 91 *in fine*.

En el supuesto de considerar verificados en el afiliado dichos requisitos por parte de la comisión médica, el trabajador tendrá derecho al retiro transitorio por invalidez a partir de la fecha en que se declare la incapacidad. En este caso el dictamen deberá indicar el tratamiento de rehabilitación psicofísica y de capacitación laboral que deberá seguir el afiliado. Dichos tratamientos serán gratuitos para el afiliado y si éste se negare a cumplirlos en forma regular,

percibirá el setenta por ciento (70 %) del haber de este retiro.

En caso de existir tratamientos médicos curativos de probada eficacia para la curación de la o las afecciones invalidantes del afiliado, la comisión médica los prescribirá. Si el afiliado se negare a someterse a ellos o no los concluyera sin causa justificada, será suspendido en la percepción del retiro transitorio por invalidez. Estos tratamientos también serán gratuitos para el afiliado.

Si la comisión médica no emitiera dictamen en el plazo estipulado, el afiliado tendrá derecho al retiro transitorio por invalidez hasta tanto se pronuncie la comisión médica.

El afiliado, la administradora a la cual se encuentre incorporado, la compañía de seguros vida con la cual la administradora hubiera contratado el seguro previsto en el artículo 99 y la ANSES, podrán designar un médico para estar presentes y participar durante los actos que realice la comisión médica para evaluar la incapacidad del afiliado. Los honorarios que los mismos irroguen serán a cargo de los proponentes. Estos profesionales tendrán derecho a ser oídos por la comisión médica, presentar los estudios diagnósticos realizados a su costa y una síntesis de sus dichos será volcada en las actas que se labren, las que deberán ser suscrita por ellos, haciéndose responsables de sus dichos y opiniones, pero no podrán plantear incidencias en la tramitación del expediente.

La comisión médica informará toda actuación realizada a la administradora en la cual estuviera incorporado el afiliado, a su aseguradora y a la ANSES.

### 3. Actuación ante la comisión médica central.

Los dictámenes que emitan las comisiones médicas serán recurribles ante una comisión médica central por: a) El afiliado; b) La administradora a la cual el afiliado se encuentre incorporado; c) La compañía de seguros de vida con la cual la administradora hubiera contratado el seguro establecido en el artículo 99; d) La ANSES. Bastará para ello con hacer una presentación dentro de los cinco (5) días de notificado el dictamen consignando que se apela la resolución notificada.

En cuanto a las modalidades y plazos para la actuación de esta instancia, rige íntegramente lo dispuesto en el procedimiento establecido para las comisiones médicas, fijándose un plazo de 48 horas desde la finalización del plazo de apelación, para que la comisión médica remita las actuaciones a la comisión médica central.

#### *4. Procedimiento ante la Cámara Nacional de Seguridad Social*

Las resoluciones de la comisión médica central serán recurribles; por ante la Cámara Nacional de Seguridad Social por las personas indicadas en el punto 3 del presente artículo y con las modalidades en él establecidas.

La comisión médica central elevará las actuaciones a la Cámara dentro de las 48 horas de concluido el plazo para interponer la apelación.

La Cámara deberá expedirse dentro de los cuarenta y cinco (45) días de recibidas las actuaciones por la comisión médica el siguiente procedimiento: a) Inmediatamente de recibidas las actuaciones, dará vista por diez (10) días al cuerpo médico forense para que dé su opinión sobre el grado de invalidez del afiliado en los términos del inciso a) del artículo 48, y conforme las normas a que se refiere el artículo 52; b) En casos excepcionales y suficientemente justificados el cuerpo médico forense podrá someter a nueva revisión médica al afiliado y solicitarle nuevos estudios complementarios, los que deberán concluirse en diez (10) días; c) Del dictamen del cuerpo médico forense se dará vista al recurrente y al afiliado por el término de cinco (5), días para que aleguen sobre el mérito de las actuaciones y pruebas producidas; d) Vencido dicho plazo, la Cámara dictará sentencia dentro de los diez (10) días siguientes.

Los horarios y gastos que irrogue la apelación ante la Cámara Nacional de Seguridad Social serán soportados por el recurrente vencido.

#### *5. Efecto de las apelaciones*

Las apelaciones en estos procedimientos serán con efecto devolutivo.

#### *6. Fondo para tratamientos de rehabilitación psicofísica y capacitación laboral.*

Créase un fondo para tratamiento de rehabilitación psicofísica laboral constituido por los recursos que a tal efecto determine el Poder Ejecutivo nacional, y el treinta por ciento (30 %) del haber de retiro transitorio por invalidez que se les descontará a los afiliados que no cumplan regularmente los tratamientos de rehabilitación o capacitación laboral prescritos por la comisión médica.

Este fondo será administrado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y destinado exclusivamente para organizar los programas para implementar los tratamientos prescritos por las comisiones médicas.

Sin perjuicio de ello las compañías de seguros de vida podrán, con autorización de la comisión

médica correspondiente, sustituir o complementar el tratamiento indicado con otro u otros a su exclusivo cargo.

#### *Dictamen definitivo por invalidez*

Art. 50. -. Los profesionales e institutos que llevan adelante los tratamientos de rehabilitación psicofísica y capacitación laboral, deberán informar, en los plazos que establezcan las normas reglamentarias, la evolución del afiliado a las comisiones, médicas.

Cuando la comisión médica conforme los informes recibidos, considere rehabilitado al afiliado, procederá a citar al afiliado a través de la administradora y emitirá un dictamen definitivo revocando el derecho a retiro transitorio por invalidez. Transcurridos tres (3) años desde la fecha del dictamen transitorio, la comisión médica deberá citar al afiliado a través de la administradora, y procederá a la emisión del dictamen definitivo de invalidez que ratifique el derecho al retiro definitivo por invalidez o lo deje sin efecto en un todo de acuerdo con los requisitos establecidos en el inciso a) del artículo 48 y conforme las normas a que se refiere el artículo 52. Este plazo podrá prorrogarse excepcionalmente por dos (2) años más si la comisión médica considerare que en dicho plazo se podrá rehabilitar al afiliado.

El dictamen definitivo será recurrible por las mismas personas y con las mismas modalidades y plazos que las establecidas para el dictamen transitorio

#### *Comisiones médicas. Integración y financiamiento*

Art. 51.. Las comisiones médicas y la comisión médica central estarán integradas por tres (3) médicos que serán designados por concurso público de oposición y antecedentes por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Contarán, con la colaboración de personal profesional, técnico y administrativo necesario.

Los gastos que demande el funcionamiento de las mencionadas comisiones serán financiados por las administradoras en conjunto, en la proporción que corresponda según el número de afiliados que soliciten retiro por invalidez en cada una de ellas. Las normas reglamentarias determinarán los procedimientos aplicables a tal fin.

*Normas de evaluación, calificación y cuantificación del grado de invalidez*

Art. 52. -. Las normas de evaluación, calificación y cuantificación del grado de invalidez a que se refiere el artículo 48 inciso a) estarán contenidas las en el decreto reglamentario de la presente ley.

Las normas deberán contener: a) Pruebas y estudios diagnósticos que deban practicarse a las personas, conforme las afecciones denunciadas o detectadas; b) El grado de invalidez por cada una de las afecciones diagnosticadas; c) El procedimiento de compatibilización de los mismos a fin de determinar el grado de invalidez psicofísica de la persona; d) Los coeficientes de ponderación del grado de validez psicofísica conforme el nivel de educación formal que tengan las personas; e) Los coeficientes de ponderación del grado de invalidez psicofísica conforme la edad de las personas. De la combinación de los factores de los incisos c), d) y e) deberá surgir el grado de invalidez de las personas.

La autoridad de aplicación convocará a una comisión honoraria para la preparación de las normas de evaluación, calificación y cuantificación del grado de invalidez, invitando a integrarla al decano del cuerpo médico forense, al presidente de la Academia Nacional de Medicina y a los representantes de las universidades públicas o privadas del país. Esta comisión honoraria será convocada por el secretario de Seguridad Social de la Nación, quien la presidirá dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley y deberá expedirse dentro de los seis (6) meses de constituida.

*Pensión por fallecimiento. Derechohabientes*

Art 53- En caso de muerte del jubilado, del beneficiario de Retiro por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán de pensión los siguientes parientes del causante:

- a) La viuda;
- b) El viudo;
- c) La conviviente;
- d) El conviviente
- e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos hasta los dieciocho (18) años de edad.

La limitación a la edad establecida en el inciso e) no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la

fecha en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.

Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concurre en aquél un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular. La autoridad de aplicación podrá establecer pautas objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.

En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá que el o la causante se hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente interiores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando exista descendencia reconocida por ambas convivientes.

El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiera sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación personal o al divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.

*Transmisión hereditaria*

Art. 54- En caso de no existir derechohabientes, según la enumeración efectuada en el artículo precedente, se abonará el saldo de la cuenta de capitalización individual a los herederos del causante declarados judicialmente.

### Capítulo III

#### Aportes e imposiciones voluntarias

*Aportes*

Art. 55- Los aportes personales obligatorios con destino al Régimen de Capitalización establecidos en el artículo 39, una vez transferidos conforme al procedimiento indicado en el inciso b) del artículo 36 de la presente ley, serán acreditados en las respectivas cuentas de capitalización individual de cada afiliado.

*Imposiciones voluntarias*

Art. 56- Con el fin de incrementar el haber de jubilación ordinaria o de anticipar la fecha de su

percepción, conforme lo establece el artículo 110, el afiliado podrá efectuar imposiciones voluntarias en su cuenta de capitalización individual. A opción del afiliado estas imposiciones podrán ser ingresadas a través del SUSS una vez que las normas reglamentarias establezcan los respectivos procedimientos, o bien en forma directa en la administradora.

#### *Depósitos convenidos*

Art. 57- Los depósitos convenidos consisten en importes de carácter único o periódico, que cualquier persona física o jurídica convenga con el afiliado depositar en su respectiva cuenta de capitalización individual. Estos depósitos tendrán la misma finalidad que la descripta para las imposiciones voluntarias y podrán ingresarse a la administradora en forma similar.

Los depósitos convenidos deberán realizarse mediante contrato por escrito que será remitido a la administradora en la que se encuentre incorporado el afiliado con una anticipación de treinta (30) días a la fecha en que deba efectuarse el único o primer depósito.

#### *Registro de las imposiciones voluntarias y depósitos convenidos*

Art. 58- Las cuotas representativas de las imposiciones voluntarias y depósitos convenidos, si bien integran la cuenta de capitalización individual, no serán consideradas en la determinación del saldo de la misma a los efectos del cálculo del capital complementario señalado en el artículo 92.

### Capítulo IV

#### Administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones

##### *Objeto*

Art. 59-. Las administradores tendrán como objeto único y exclusivo:

- Administrar un fondo que se denominará fondo de jubilaciones y pensiones;
- Otorgar las prestaciones y beneficios que establece la presente ley.

Cada administradora podrá administrar solamente un fondo de jubilaciones y pensiones, debiendo llevar su propia contabilidad separada de la del respectivo fondo.

Las administradoras no podrán formular ofertas complementarias fuera de su objeto, ni podrán acordar sorteos, premios u otras formas que

implicaren un medio de captación indebido de afiliaciones.

#### *Inhabilitaciones.*

Art. 60. - No podrán ser directores, administradores, gerentes ni síndicos de una administradora:

- Los afectados por las habilidades e incompatibilidades establecidas en los artículos 264 y 286 de la Ley de Sociedades, ni los inhabilitados por aplicación del inciso 5 del artículo 41 de la ley 21.526;
- Los que por decisión firme de autoridad competente hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el gobierno, administración y control de entidades financieras o compañías de seguros;
- Los que hayan sido condenados por delitos cometidos con ánimo de lucro o por delitos contra la propiedad o la fe pública o por delitos comunes, excluidos los delitos culposos con penas privativas de libertad o inhabilitación, mientras no haya transcurrido otro tiempo igual al doble de la condena y los que se encuentren sometidos a prisión preventiva por esos mismos delitos, hasta su sobreseimiento definitivos; los inhabilitados para el uso de las cuentas corrientes bancarias y el libramiento de cheques, hasta un año después de su rehabilitación; los que hayan sido sancionados como directores, administradores o gerentes de una sociedad declarada en quiebra, mientras dure su inhabilitación.

#### *Denominación*

Art 61- La denominación social de las administradoras deberá incluir la frase "Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones" o la sigla "AFJP", quedando vedado consignar en la misma: a) Nombres de personas físicas existentes, b) Nombres o siglas de personas jurídicas existentes o que hubieren existido en el lapso de cinco (5) años anteriores a la vigencia de la presente ley, c) Nombres de entidades extranjeras que actúen en ramas financieras, aseguradoras, de administración de fondos u otras similares, d) Nombres de fantasía que pudieran inducir a equívocos respecto de la responsabilidad patrimonial o administrativa de la entidad. En los casos de apartados c) y d), corresponderá a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y

Pensiones resolver, en función de las normas reglamentarias que se dicten, sobre la procedencia de la denominación que se pretende asignar a una administradora.

*Requisitos para la autorización. Procedimiento*

Art 62. -. Las administradoras de fondos de Jubilaciones y Pensiones y autorizadas a administrar fondos de jubilaciones y pensiones y otorgar los beneficios y servicios que establece esta ley, cuando reúnan las siguientes condiciones y se ajusten al procedimiento que en el presente artículo se estatuyen:

1. Condiciones:

- a) Se hayan constituido bajo las formas jurídicas mencionadas en el artículo 40;
- b) Demuestren la integración total del capital mínimo a que se refiere el artículo 63 y del encaje a que se refiere el artículo 89;
- c) Se verifique que sus directores, administradores, gerentes y síndicos no se encuentren inhabilitados conforme a lo normado por el artículo 60 de esta ley y éstos hayan presentado un detalle completo de su patrimonio personal;
- d) Se acredite el cumplimiento o de los niveles de idoneidad técnica para la conducción y administración, empresaria, de la calidad de organización para el cumplimiento de su objetivo, existencia de un ámbito físico para el desarrollo de sus actividades, sistema de comercialización, y toda otra información que demuestre la viabilidad económico-financiera del proyecto.

2. Procedimiento:

Cuando se presentara ante la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones una solicitud de autorización, ésta se limitará a verificar si la documentación acompañada acredita los requisitos exigidos en los incisos a) al d) del apartado 1, así como también habrá de obtener los informes de los organismos pertinentes a fin de verificar lo prescripto en el inciso c) del apartado de referencia, debiendo dichos datos ser proporcionados dentro de los quince (15) días de haber sido requeridos.

Dentro de los treinta (30) días de presentada la solicitud y producidos los informes mencionados precedentemente, el superintendente deberá dictar una resolución fundada, dando curso al pedido o denegando el mismo.

La resolución que denegara la autorización contendrá una relación completa, precisa y

circunstanciada de todos los requisitos que se consideran no cumplimentados con la documentación acompañada y/o con los informes producidos. La solicitante podrá elevar nuevo pedido de autorización adjuntando nueva documentación que acredite los requisitos no probados y/o sustituyendo los directores, administradores, gerentes o síndicos inhabilitados.

En este supuesto regirán el procedimiento indicado en el segundo párrafo del apartado 2.

El superintendente no podrá denegar la autorización solicitada, si ello no obedeciere a la falta de acreditación de los requisitos exigidos por esta ley y las restantes condiciones que fijaren las normas reglamentarias.

*Capital mínimo*

Art. 63. -. El capital mínimo necesario para la constitución de una administradora será de tres millones de pesos (\$ 3.000.000) el cual deberá encontrarse suscrito e integrado en efectivo, al momento de la constitución. El capital mínimo exigido podrá ser modificado por resolución de la autoridad de contralor de acuerdo con el procedimiento que establezcan las normas reglamentarias.

Todo capital inicial superior al mínimo, deberá integrarse dentro del plazo establecido en la Ley de Sociedades Comerciales.

Si el capital mínimo exigido de la administradora se redujere por cualquier causa, deberá ser reintegrado totalmente dentro del plazo de tres (3) meses de producido el hecho. En caso contrario la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones procederá a revocar la autorización para funcionar y la liquidación de la administradora.

La reintegración del capital mínimo deberá ser efectuada por la administradora, en el plazo señalado sin necesidad de intimación o notificación previa por parte de la autoridad de control.

Además del capital mínimo exigido, la administradora deberá constituir el encaje establecido en el artículo 89

*Publicidad*

Art. 64.. Las administradoras sólo podrán realizar publicidad a partir de la fecha que a tal efecto establezcan las normas reglamentarias y siempre que haya sido dictada la resolución que autorice su funcionamiento como administradora de fondos de jubilaciones y pensiones.

Toda publicidad o promoción por parte de las administradoras deberá estar de acuerdo con las normas generales que la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones fija a tal efecto. La información deberá ser veraz y oportuna, y no inducir a equívocos ni confusiones, ya sea en cuanto a las características patrimoniales de la administradora o a los fines, fundamentos y beneficios del sistema

#### *Información al público.*

Art. 65- Las administradoras deberán mantener en sus oficinas, en un lugar de fácil acceso al público, la siguiente información escrita y actualizada:

1. Antecedentes de la institución, indicando el nombre y apellido de los directores, administradores, gerentes y síndicos.
2. Balance general del último ejercicio, estados de resultados y toda otra información contable que determine la autoridad de aplicación.
3. Valor del fondo de jubilaciones y pensiones, del fondo de fluctuación a que se refiere el artículo 87 y del encaje.
4. Valor de la cuota del fondo de jubilaciones y pensiones.
5. Esquema e importe de las comisiones vigentes.
6. Composición de la cartera de inversiones del fondo de jubilaciones y pensiones y nombre de las cajas de valores y bancos donde se encuentren depositados los títulos, y de la compañía de seguros vida con la que hubiera contratado el seguro referido en artículo 99 de esta ley.

Esta información deberá ser actualizada mensualmente, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, o citando cualquier acontecimiento externo e interno pueda alterar en forma significativa el contenido de la información a disposición del público.

#### *Información al afiliado o beneficiario*

Art. 66- La administradora deberá enviar periódicamente a cada uno de sus afiliados o beneficiarios, a su domicilio y al menos cada cuatro (4) meses, la siguiente información referente a la composición del saldo de su cuenta de capitalización individual:

1. Número de cuotas registradas al inicio del período que se informa.
2. Tipo de movimiento, fecha e importe en cuotas. Cuando el movimiento se refiera al débito por comisiones se deberá discriminar

en su importe el costo imputable a la prima del seguro por invalidez y fallecimiento del resto de los conceptos que forman parte de la comisión. A tal efecto las normas reglamentarias establecerán los procedimientos para tal discriminación.

3. Saldo de la respectiva cuenta en cuotas.
4. Valor de la cuota al momento de cada movimiento.
5. Variación porcentual del valor de la cuota para, cada uno de los meses comprendidos en el período de información.
6. Rentabilidad del fondo.
7. Rentabilidad promedio del sistema y comisión promedio del sistema.

Esta comunicación podrá suspenderse para todo afiliado que no registra movimientos por aportes, imposiciones voluntarias o depósito convenidos en su cuenta durante el último período que deba ser informado. No obstante ello, la administradora que suspenda el envío de esta información, deberá comunicar al afiliado al menos una (1) vez al año el estado de su cuenta. Las normas reglamentarias podrán disponer la reducción de los plazos de información al afiliado.

#### *Comisiones*

Art. 67. -. La administración tendrá derecho a una retribución mediante el cobro de comisiones, las que serán debitadas de las respectivas cuentas de capitalización individual.

Las comisiones serán el único ingreso de la administradora por cuenta de sus afiliados y beneficiarios, debiendo contemplar el financiamiento de la totalidad de los servicios, obligaciones y beneficios por los que en definitiva resulte responsable, en favor de los afiliados y beneficiarios a ella incorporados, conforme lo prescribe esta ley o sus normas reglamentarias.

El importe de las comisiones será establecido libremente por cada administradora. Su aplicación será con carácter uniforme para todos sus afiliados o beneficiarios, salvo las situaciones que esta ley o sus normas reglamentarias prevean.

#### *Régimen de comisiones*

Art. 68- El régimen de comisiones que cada administradora fije se ajustará a las siguientes pautas:

- a) Sólo podrán estar sujetos al cobro de comisiones: la acreditación de los aportes, la acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos; y el pago de los retiros

que se practiquen bajo la modalidad de retiro programado;

- b) La comisión por la acreditación de los aportes obligatorios sólo podrá establecerse como un porcentaje de la base imponible que le dio origen, como una suma fija por operación o como una combinación de ambos. No se aplicará esta comisión sobre los importes que en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9º, excedan el máximo fijado en el primer párrafo del mismo artículo;
- c) Las comisiones por la acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos podrán establecerse sobre la base de un porcentaje sobre los valores involucrados, una suma fija por operación, o una combinación de ambos;
- d) Las comisiones por el pago de los retiros programados podrán establecerse como un porcentaje mensual sobre el saldo de la cuenta de capitalización individual del beneficiario, como una suma fija por operación o como una combinación de ambos.

#### *Bonificación de las comisiones*

Art. 69. Las administradoras que así lo estimen conveniente podrán introducir un esquema de bonificación a las comisiones establecidas en los incisos b) y d) del artículo 68, el que no podrá admitir discriminaciones para los afiliados o beneficiarios que se encuentren comprendidos en una misma categoría. La definición de estas categorías de afiliados o beneficiarios sólo podrá ser efectuada en atención a la cantidad de meses que registren aportes o retiros en la correspondiente administradora. Las normas reglamentarias establecerán el procedimiento para la determinación de las respectivas categorías.

El importe de la bonificación deberá establecerse como un porcentaje de quita sobre el esquema de comisiones vigente, debiendo ser aplicado en forma simultánea al cobro de las respectivas comisiones. El importe bonificado quedará acreditado en la respectiva cuenta de capitalización individual del afiliado o beneficiario según corresponda.

#### *Vigencia del régimen de comisiones*

Art. 70-. El régimen de comisiones determinado por cada administradora deberá ser informado a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones en la forma que señalen las normas reglamentarias, y sus

modificaciones entrarán en vigencia noventa (90) días después de su aprobación

#### *Liquidación de una administradora*

Art. 71. -. La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones procederá a la liquidación de una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones cuando se verifique cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) El capital de la administradora se redujere a un importe inferior al mínimo establecido en el artículo 63, y no se hubiere reintegrado totalmente el mismo dentro del plazo establecido;
- b) Se verifique dentro de un año calendario, déficit de encaje en más de dos (2) oportunidades, A los fines de este cómputo no se tendrá en cuenta la generación de déficit como consecuencia del proceso establecido por el artículo 90;
- c) No hubiere cubierto la rentabilidad mínima establecida en el artículo 86 o recompuesto el encaje afectado dentro de los plazos fijados en el artículo 90;
- d) La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones hubiera verificado cualquier otro hecho de los que tengan previsto como sanción tal consecuencia;
- e) Hubiera entrado la administradora en estado de cesación de pagos, cualquiera sea la causa y la naturaleza de las obligaciones que afecte.

El Estado concurrirá como acreedor en el proceso de liquidación de una administradora, por los pagos que hubiere realizado en virtud del cumplimiento de la garantía de rentabilidad mínima establecida en el artículo 90.

#### *Procedimiento de liquidación*

Art. 72- Dentro de las 72 horas hábiles de llegado a conocimiento de la Superintendencia de Administradoras de Jubilaciones y Pensiones cualquiera de los hechos enunciados en el artículo precedente que afecten a una administradora, el superintendente deberá:

- a) Dictar resolución revocando la autorización para operar en la administración de un fondo de jubilaciones y pensiones a la administradora incurso en los supuestos indicados en el artículo anterior. Esta resolución implicará la disolución por pérdida de objeto de la administradora, y conlleva la caducidad de todos los derechos de la

administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, de sus directores, representantes, gerentes y síndicos y restantes organismos de dirección, administración y fiscalización, a administrar el fondo. La resolución será comunicada fehacientemente a la administradora y a todas las entidades bancarias autorizadas por la ley 21.526 y cajas de valores donde estuvieren depositados el fondo de jubilaciones y pensiones y el fondo transitorio, debiéndose requerir a tal fin la colaboración a que estarán obligados el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores;

- b) Sustituirla en la administración del fondo de jubilaciones y pensiones que administra, de su fondo transitorio y de cualquier otro bien que perteneciera al fondo, para lo cual designará a los funcionarios de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que transitoriamente ejercerán la administración, tomando posesión de las dependencias de la administradora, y comunicando su designación conforme lo establecido en el inciso anterior y al director, representante, síndico, gerente o cualquier miembro de los organismos de dirección, administración y control que fuere hallado. Si al personal designado por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones se le negare el ingreso y el cumplimiento de sus funciones, podrá solicitar el inmediato y debido auxilio de la fuerza pública a fin de garantizar que no se sustraiga o destruya documentación o información de la administradora, requiriendo la pertinente orden de allanamiento al juez competente, si por cuestiones de celeridad no lo hubiera podido hacer con anterioridad a la diligencia;
- c) Poner en conocimiento todo lo actuado al juez nacional en lo comercial, o juez federal con competencia en lo comercial según la jurisdicción correspondiente al domicilio de la administradora solicitándole:

1. Decrete la liquidación de la administradora y la designación de un interventor liquidador de la misma.
2. Trabe embargo sobre todos los bienes de la administradora
3. Si se diera el supuesto indicado en el apartado siguiente deberá solicitar también se decrete la inhibición general de los bienes de los directores, representantes, síndicos,

gerentes y de todo otro integrante de los organismos de dirección, administración y control de la administradora.

- d) Si hubiere indicios de haberse cometido un ilícito deberá denunciarlo ante juez federal con competencia en lo penal de la jurisdicción del domicilio de la administradora;
- e) En los cuarenta y cinco días hábiles siguientes, prorrogables por resolución fundada por otros cuarenta y cinco días más, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones continuará administrando el fondo de jubilaciones y pensiones pudiendo contratar para colaborar en la administración, personal temporario, inclusive de la propia administradora liquidada. Asimismo deberá:
1. Determinar el importe que sea necesario para efectivizar las garantías establecidas en el capítulo XII de este título.
  2. La comisión que perciba en este período serán aplicables a la recomposición del fondo y al pago de los insumos indispensables para la administración del fondo.
  3. Si efectuado el procedimiento indicado en los apartados anteriores; y no se hubiera recompuesto el fondo, la superintendencia solicitará a la Secretaría de Hacienda que, en mérito a la garantía prevista en el capítulo XII, remita el importe faltante para cubrir estos objetivos, el que deberá ser enviado dentro de los cinco días.
  4. Efectivizada la garantía, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones intimará a todos los afiliados, incorporados a la administradora en liquidación llora que pasen a otra en el término de noventa días, bajo apercibimiento de proceder en la forma indicada en el segundo párrafo del artículo 43, notificando tal resolución al empleador de cada afiliado. El derecho de traspaso de los afiliados quedará suspendido hasta la recomposición del fondo al nivel de rentabilidad mínima El decreto, reglamentario de la presente ley fijará el procedimiento de traspaso de los afiliados autónomos.



Vencido el plazo establecido en el inciso e) de este artículo cesa la intervención de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, salvo para garantizar el traspaso efectivo de las cuentas de los afiliados a la nueva administradora que hayan elegido y para representar al Estado nacional en el proceso de liquidación de la administradora.

El Estado nacional, por los aportes efectuados en virtud de la garantía efectivizada, tendrá en la liquidación de la administradora igual preferencia que los acreedores del concurso.

Las resoluciones que durante este proceso dicte la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones serán recurribles, con efecto devolutivo, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial o la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en lo comercial, según sea el domicilio de la administradora en Capital Federal o en provincias, respectivamente. Si la liquidación de una administradora se debiera a hechos ilícitos cometidos por sus directivos, representantes gerentes, síndicos, y en general los integrantes de los organismos de dirección, administración y fiscalización, quienes lo hayan cometido o consentido responderán por las deudas de la administradora con sus bienes personales.

#### *Absorción*

Art. 73- La disolución de dos a más administradoras que se fusionan para constituir una nueva o la disolución de una o más administradoras por absorción de otra, deberá ser autorizada por la autoridad de contralor, dando cumplimiento a los requisitos que las normas reglamentarias establezcan para estos casos.

### Capítulo V

#### Inversiones

##### *Criterio general. Inversiones permitidas*

Art. 74.- El activo del fondo de jubilaciones y pensiones se invertirá de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los límites fijados por esta ley y las normas reglamentarias. Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones podrán invertir el activo del fondo administrado en:

- a) Títulos públicos, emitidos por la Nación a través de la Secretaría de Hacienda o el Banco Central de la República Argentina

hasta el cincuenta por ciento (50 %) del total del activo del fondo;

- b) Títulos valores emitidos por las provincias, municipalidades, entes autárquicos del Estado nacional y provincial, empresas del Estado nacionales, provinciales o municipales, hasta el treinta por ciento (30 %);
  - c) Obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores representativos de deuda con vencimiento a más de dos (2) años de plazo, emitidos por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles en el país y sucursales de sociedades extranjeras, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el cuarenta por ciento (40%);
  - d) Obligaciones negociables, debentures u otros títulos valores de deuda con vencimiento a menos de dos (2) años de plazo, emitidos por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles constituidas en el país y sucursales de sociedades extranjeras, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores hasta el veinte por ciento (20 %);
  - e) Obligaciones negociables convertibles emitidas por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles constituidas en el país y sucursales de sociedades extranjeras, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el cuarenta por ciento (40 %);
  - f) Obligaciones negociables convertibles emitidas por empresas públicas privatizadas, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el veinte por ciento (20 %);
  - g) Depósitos a plazo fijo en entidades financieras regidas por la ley 21.526, hasta el treinta por ciento (30 %) Podrá aumentarse al cuarenta por ciento (40 %) en la medida que el excedente se destine a créditos o inversiones en economías regionales.
  - h) Acciones de sociedades anónimas nacionales, mixtas o privadas, cuya oferta pública esté autorizada por la Comisión Nacional de Valores, hasta el cincuenta por ciento (50 %).
- La operatoria en acciones incluye a los futuros y opciones sobre estos títulos valores, con las limitaciones que al respecto establezcan las normas reglamentarias;
- i) Acciones de empresas públicas privatizadas autorizadas a la oferta pública por la

Comisión Nacional de Valores, hasta el veinte por ciento (20%);

- j) Cuotaspertes de fondos comunes de inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores, de capital abierto o cerrado, hasta un veinte por ciento (20%);
- k) Títulos valores emitidos por Estados extranjeros u organismos internacionales, hasta un diez por ciento (10%);
- l) Títulos valores emitidos por sociedades extranjeras admitidos a la cotización en mercados que la Comisión Nacional de Valores determine, hasta el diez por ciento (10 %);
- m) Contratos que se negocien en los mercados de futuros y opciones sujetos al contralor y supervisión oficial y en las condiciones y sectores que ésta establezca y reglamente, hasta el diez por ciento (10 %);
- n) Cédulas hipotecarias, letras hipotecarias y otros títulos valores que cuenten con garantía hipotecaria o cuyos servicios se hallen garantizados por participaciones en créditos con garantía hipotecaria autorizados a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el cuarenta por ciento (40 %);
- ñ) Títulos valores representativos de participaciones en fondos de inversión directa, de carácter fiduciario y singular, con oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores, hasta un diez por ciento (10 %).
- o) Obras públicas de interés nacional o regional de infraestructuras y servicios públicos, de utilización de mano de obra intensiva o que promuevan el desarrollo de actividades productivas a largo plazo, tengan asegurada suficientemente la restitución y como mínimo las garantías de intangibilidad y rentabilidad prevista en el artículo 40. En estos casos estarán a cargo de la AFJP que cree el Banco de la Nación Argentina, hasta un treinta por ciento (30 %);
- p) Financiamiento de viviendas nuevas garantizados por entidades financieras a través de la emisión de certificados de depósitos con fines constructivos y a tasa variable durante la etapa de construcción y de títulos, cédulas o letras hipotecarias una vez finalizadas las mismas, hasta un veinte por ciento (20 %);
- q) Préstamos personales de corto, mediano y largo plazo a favor de los trabajadores y beneficiarios del sistema a cargo de la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones del Banco de la Nación Argentina con los criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, hasta el diez por ciento (10 %).

Las inversiones señaladas en los incisos b) al ñ) estarán sujetas a los requisitos y condiciones establecidas en el artículo 76.

Las normas reglamentarias no podrán fijar límites mínimos para las inversiones señaladas en este artículo.

Corresponderá conjuntamente a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la República Argentina y a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones la fijación de límites máximos para las inversiones incluidas en los incisos a) al n), siempre que resulten inferiores a los porcentajes establecidos en el presente artículo

#### *Prohibiciones*

Art. 75- El activo del fondo de jubilaciones y pensiones no podrá ser invertido en:

- a) Acciones de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones;
- b) Acciones de compañías de seguros;
- c) Acciones de sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, ya sean comunes o directo, de carácter fiduciario y singular;
- d) Acciones de sociedades calificadoras de riesgo;
- e) Títulos valores emitidos por la contratante, controladas o vinculadas a la respectiva administradora, ya sea directamente o por su integración dentro de un grupo económico sujeto a un control común;
- f) Acciones preferidas;
- g) Acciones de voto múltiple.

En ningún caso podrán las administradoras realizar operaciones de caución bursátil o extrabursátil con los títulos valores que conformen el activo del fondo de jubilaciones y pensiones, ni operaciones financieras que requieran la constitución de prendas o gravámenes sobre el activo del fondo.

#### *Limitaciones.*

Art. 76. –

- a) Las inversiones en obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores representativos de deuda correspondientes a emisores argentinos, estarán sujetos a las siguientes limitaciones:

1. En ningún caso la suma de las inversiones en los títulos enumerados en los incisos d), e) y f) del artículo 74 correspondientes a una sola sociedad emisora, podrá

- superar la proporción que sobre la suma total de las inversiones del fondo en dichos conceptos y/o la proporción que sobre el pasivo instrumentado en los referidos títulos por dicha sociedad y/o la proporción que sobre el activo total del fondo, establezcan las normas reglamentarias.
2. En ningún caso la suma de las inversiones en los títulos enumerados en los incisos c), d), e) y f) del artículo 74 podrá superar el cuarenta por ciento (40 %) del activo del fondo.
- b) Las inversiones en acciones correspondientes a emisores argentinos estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
1. En ningún caso la suma de las inversiones realizadas en acciones de acuerdo con lo establecido en los incisos h) e i) del artículo 74 correspondientes a una sola sociedad emisora, podrá superar la proporción que sobre la suma total de las inversiones del fondo en dichos conceptos y/o la proporción que sobre el capital social de la emisora y/o la proporción que sobre el activo total de fondo establezcan las normas reglamentarias.
  2. En ningún caso la suma de las inversiones realizadas en acciones de acuerdo con lo establecido en los incisos h) e i) del artículo 74, podrá superar el cincuenta por ciento (50 %) del activo del fondo.
  3. Las limitaciones a que se refieren los incisos anteriores podrán excederse transitoriamente, en los casos que determinen las normas reglamentarias, debiendo restablecerse los límites correspondientes en los plazos que fije la Comisión Nacional de Valores;
- c) Las inversiones en títulos valores correspondientes a emisores extranjeros estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
1. En ningún caso la inversión en títulos valores de acuerdo con lo establecido en el inciso l) del artículo 74 correspondiente a una sola emisora podrá superar la proporción que sobre el total de las inversiones del fondo en títulos valores de emisores extranjeros y/o la proporción que sobre el capital de cada sociedad o el pasivo instrumentado en títulos valores por la misma y/o la proporción que sobre el activo total del fondo, establezcan las normas reglamentarias.
  2. En ningún caso la inversión en títulos valores de acuerdo con lo establecido en el inciso k) del artículo 74 correspondiente a un solo emisor podrá superar la proporción que sobre el total de las inversiones del fondo en títulos valores de emisores extranjeros, establezcan las normas reglamentarias.
  3. En ningún caso la suma de las inversiones establecidas en los incisos k) y l) del artículo 74 podrá superar el diez por ciento (10 %) del activo total del fondo.
- d) Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
- En ningún caso las inversiones en cuotapartes de un fondo común de inversión establecidas en el inciso j) del artículo 74 podrán superar la proporción que sobre el total de las inversiones efectuadas por el fondo en este concepto y/o la proporción que sobre el patrimonio del fondo común de inversiones, establezcan las normas reglamentarias;
- e) En ningún caso las inversiones establecidas en el inciso g) del artículo 74 depositadas en una sola entidad financiera podrán superar la proporción que sobre el total de la inversión efectuada en depósitos a plazo fijo por el fondo, establezcan las normas reglamentarias;
- f) En ningún caso las inversiones realizadas en una sociedad nacional o extranjera habilitarán para ejercer más del cinco por ciento (5 %) del derecho de voto, en toda clase de asambleas, cualquiera sea la tenencia respectiva;
- g) En ningún caso las inversiones establecidas en los incisos n) y p) del artículo 74 correspondientes a una sola sociedad emisora, podrá superar la proporción que sobre la suma total de las inversiones del fondo en dichos conceptos y/o la proporción que sobre el pasivo instrumentado en los referidos títulos por dicha emisora y/o la proporción que sobre el activo total del fondo establezcan las normas reglamentarias;
- h) En ningún caso las inversiones en cuotapartes de un fondo de inversión directa

establecidas en el inciso ñ) del artículo 74, podrá superar la proporción que sobre el total de las inversiones efectuadas por el fondo en este concepto y/o la proporción que sobre el patrimonio el fondo de inversión directa, establezcan las normas reglamentarias.

#### *Fondos transitorios. Cuentas corrientes*

Art. 77- El activo del fondo, en cuanto no deba ser inmediatamente aplicado según lo establecido en el artículo 74 y las condiciones y situaciones especiales que fijen las normas reglamentarias, será depositado en entidades bancarias en cuentas destinadas exclusivamente al fondo, en las que deberán depositarse la totalidad de los aportes correspondientes al régimen de capitalización de los afiliados, el producto de las inversiones, los ingresos por transferencias de otras administradoras y las transferencias del encaje.

De dichas cuentas sólo podrán efectuarse extracciones destinadas a la realización de inversiones para el fondo, y al pago de las prestaciones de las comisiones, transferencias, y trasposos que establece la presente ley.

Las cuentas serán mantenidas en entidades financieras bancarias autorizadas por la ley 21.526 y calificadas para recibir esta clase de depósitos por el Banco Central de la República Argentina.

El mencionado banco podrá delegar en sociedades inscritas en el Registro de Sociedades Calificadoras de Riesgo previsto en el artículo 5° del decreto 656/92, la calificación descrita en el párrafo precedente, dictando las normas correspondientes a dicha calificación.

#### *Requisitos de los títulos y de los mercados*

Art. 78. - Todos los títulos valores, públicos o privados, que puedan ser objeto de inversión por parte de los fondos de jubilaciones y pensiones, deben estar autorizados para la oferta a pública y ser transados en mercados secundarios transparentes, que brinden diariamente información veraz y precisa sobre el curso de las cotizaciones en forma pública y accesible al público en general.

La Comisión Nacional de Valores determinará los mercados que reúnen los requisitos enunciados en este artículo.

#### *Calificaciones de riesgo*

Art. 79. -. Las inversiones enunciadas en el artículo 74 incisos b), g) y k) deberán estar previamente calificadas por el Banco Central de la

República Argentina como susceptibles de ser adquiridas con los recursos de los fondos de jubilaciones y pensiones.

A los efectos de la calificación el Banco Central de la República Argentina dictará la reglamentación correspondiente, la que atenderá a las garantías, plazo, responsabilidad patrimonial de las entidades emisoras, condiciones de los mercados mundiales en cuanto a la libertad de cambios y todo otro requisito que tienda a resguardar la seguridad y aceptable rentabilidad de las inversiones.

El Banco Central de la República Argentina podrá delegar en sociedades inscritas en el Registro de Sociedades Calificadoras de Riesgo previsto en el artículo 5° del decreto 656/92, la calificación descrita en los párrafos precedentes.

Los títulos valores privados enunciados en los incisos c), d), e), f), h), j), l) y n) del artículo 74 deberán haber sido objeto de calificación previa por sociedades inscritas en el Registro de Sociedades Calificadoras de Riesgo previsto en el artículo 5° del decreto 656/92.

La Comisión Nacional de Valores dictará las normas regulatorias de la actividad clasificadora prevista en esta ley en concordancia con lo establecido en el decreto 656/92.

Las normas reglamentarias deberán atender a las condiciones de garantía de los títulos, no solamente en relación a aquellas garantías especiales que pudieran contener sino también a las que responden a la organización y administración de la sociedad, la existencia de accionistas mayoritarios, enunciación de su política de inversiones y distribución de utilidades y una adecuada apertura del capital.

En el caso de los fondos comunes de inversión se tendrá especialmente en cuenta el grado de diversificación de riesgo de su cartera, así como las características especiales del fondo en cuanto a su política de inversiones.

En el caso de fondos de inversión directa se tendrá en cuenta la naturaleza y demás características de los proyectos de inversión, que a través de los mismos se encaren, así como también la solvencia técnica y económica de sus operadores y todo otro elemento relevante para evaluar el riesgo del mismo.

Las calificaciones efectuadas por las sociedades calificadoras de riesgo, serán presentadas a la Comisión Nacional de Valores para su aprobación, si ello es exigido por las normas reglamentarias, de acuerdo con las disposiciones que al respecto en ellas se incluyan.

Las inversiones establecidas en los incisos f) e i) del artículo 74 no requerirán de calificación de riesgo durante el período comprendido entre la

efectiva privatización de la empresa y la fecha de presentación de los estados contables correspondientes al primer cierre de ejercicio de la nueva sociedad. La reglamentación establecerá las normas a las cuales las carteras de los fondos de jubilaciones y pensiones deban ajustarse, una vez que las sociedades sean calificadas.

La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones determinará que grado de calificación podrá acceder a integrar inversiones de los fondos de jubilaciones y pensiones.

#### *Control de las inversiones*

Art. 80. -. El control de las inversiones realizadas por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones corresponderá a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

#### *Inversiones. Custodia. Enajenación y entrega de títulos*

Art. 81- Los títulos representativos de las inversiones del fondo de jubilaciones y pensiones y del encaje deberán ser mantenidos en todo momento en un depósito cuyo titular podrá ser una caja de valores autorizada por la Comisión Nacional de Valores, o una de las entidades bancarias que el Banco Central de la República Argentina y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones determinen.

Mensualmente, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones informará al depositario el monto mínimo que cada administradora deberá mantener en custodia.

La administradora que no cumpliera con estas disposiciones será pasible de las sanciones establecidas en esta ley y en sus normas reglamentarias. La entidad depositaria será responsable por cualquier retiro de títulos depositados en custodia si con ello deja de cumplirse con la obligación establecida en el presente artículo.

Las comisiones de custodia serán libremente fijadas entre las partes. A los fines de la validez de la enajenación o cesión de los títulos de propiedad del fondo, la misma deberá ser efectuada mediante la entrega del título debidamente endosado en su caso, y cuando fuere nominativo no endosable o escritural, con la respectiva notificación al emisor.

## CAPITULO VI

### Fondo de jubilaciones y pensiones

#### *Fondo de jubilaciones y pensiones*

Art. 82. - El fondo de Jubilaciones y pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la administradora y que pertenece a los afiliados. La administradora no tiene derecho de propiedad alguno sobre él. Los bienes y derechos que componen el patrimonio del fondo de jubilaciones y pensiones serán inembargables y estarán sólo destinados a generar las prestaciones de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

#### *Integración*

Art. 83. -. El fondo de jubilaciones y pensiones se constituirá por:

- a) La integración de los aportes destinados al Régimen de Capitalización, imposiciones voluntarias y depósitos convenidos;
- b) La integración de los fondos correspondientes a los afiliados que hayan ejercido la opción de traspaso desde otra administradora;
- c) La integración de los capitales complementarios y de recomposición establecidos en los artículos 92 y 94;
- d) La rentabilidad correspondiente a las inversiones efectuadas de acuerdo con las disposiciones del capítulo V del presente título;
- e) Las transferencias de fondos provenientes del encaje en las condiciones establecidas en el artículo 90;
- f) Las transferencias de recursos provenientes del fondo de fluctuación de acuerdo con lo previsto en los artículos 88 y 90;
- g) Las integraciones del Estado nacional en las condiciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 124

#### *Deducciones*

Art. 84.-. Se deducirán del patrimonio del fondo los siguientes conceptos:

- a) Las sumas correspondientes al pago de las comisiones a la administradora;
- b) La transferencia de fondos a las compañías de seguro de retiro correspondientes a los afiliados que opten por la modalidad de renta vitalicia previsional;

- c) El pago de las prestaciones que se rijan por las modalidades de los incisos b) y c) del artículo 100;
- d) El pago de las sumas correspondientes a la transmisión hereditaria conforme a lo previsto por el artículo 54 de esta ley;
- e) Las transferencias de los fondos correspondientes a los afiliados que hayan ejercido la opción de traspaso hacia otra administradora;
- f) Las sumas correspondientes a la parte del saldo de las cuentas de capitalización individual que deban ser transferidas al SUSS en virtud de lo establecido en los artículos 126

#### *Cuotas*

Art. 85. – Los derechos de copropiedad de cada uno de los afiliados o beneficiarios sobre el fondo de jubilaciones y pensiones respectivo serán representados por cuotas de igual valor y características. El valor de las citadas cuotas se determinará en forma diaria sobre la base de la valoración establecida por esta ley y sus normas reglamentarias, de las inversiones representativas del respectivo fondo de jubilaciones y pensiones. Al iniciar su funcionamiento una administradora, deberá definir el valor inicial de la cuota del fondo de jubilaciones y pensiones que administre, el que se corresponderá a un múltiplo entero de diez pesos (\$ 10).

El valor promedio para un mes calendario de la cuota de un fondo se determinará dividiendo la suma del valor de la cuota de cada día del respectivo mes por el número de días del mes

#### *Rentabilidad.*

Art. 86- Se define como rentabilidad del fondo al porcentaje de variación durante los últimos doce (12) meses del valor promedio de su respectiva cuota. El cálculo de este índice y todos los que de él deriven se realizará mensualmente.

La rentabilidad promedio del sistema se determinará calculando el promedio ponderado de la rentabilidad de cada fondo según el mecanismo que establezcan las normas reglamentarias. Las administradoras serán responsables de que la rentabilidad del respectivo fondo no sea inferior a la rentabilidad mínima del sistema. Esta responsabilidad se determinará en forma mensual.

Se define como rentabilidad mínima del sistema al setenta por ciento (70 %) de la rentabilidad promedio del sistema, o a la rentabilidad

promedio del sistema menos dos (2) puntos porcentuales, de ambas la que fuese menor.

Los requisitos de rentabilidad mínima no serán de aplicación a las administradoras que cuenten con menos de doce (12) meses de funcionamiento.

#### *Fondo de fluctuación*

Art. 87- Con el objeto de garantizar la rentabilidad mínima a que se refiere el artículo anterior, existirá para cada fondo de jubilaciones y pensiones un fondo de fluctuación que será parte integrante de aquél.

#### *Integración y aplicación del fondo de fluctuación*

Art. 88.-. El fondo de fluctuación se constituirá en forma mensual y siempre que la rentabilidad del fondo fuese positiva. Este se integrará con todo exceso de la rentabilidad del fondo sobre la rentabilidad promedio del sistema incrementada en un treinta por ciento (30 % ), o la rentabilidad promedio del sistema incrementada en dos (2) puntos porcentuales, de ambas la que fuese mayor. El fondo de fluctuación estará expresado en cuotas del respectivo fondo de jubilaciones y pensiones y su saldo sólo tendrá los siguientes destinos;

- a) Cubrir la diferencia entre la rentabilidad mínima del sistema definida en el artículo 86 y la rentabilidad del fondo, en caso de que esta última resultare menor;
- b) Incrementar, en la oportunidad que la administradora así lo considere conveniente, la rentabilidad del fondo en un mes determinado, siempre que se verifiquen las siguientes condiciones:
  1. Luego de la afectación del fondo de fluctuación, el saldo de éste deberá como mínimo representar el tres por ciento (3%) del importe del fondo de jubilaciones y pensiones.
  2. No se podrá en un mes dado desafectar más del diez por ciento (10 % ) del correspondiente fondo de fluctuación.
- c) Acreditar obligatoriamente como cuotas adicionales en las cuentas de capitalización individual de los afiliados, según el procedimiento que establezcan las normas reglamentarias, los fondos acumulados que superen por más de dos (2) años el cinco por ciento (5 %) del valor del fondo de jubilaciones y pensiones;
- d) Imputar al fondo de jubilaciones y pensiones el saldo total del fondo de fluctuación a la fecha de liquidación o disolución de la administradora.

### *Encaje*

Art. 89.- Las administradoras deberán integrar y mantener en todo momento, un activo equivalente por lo menos al dos por ciento (2 %) del fondo de jubilaciones y pensiones respectivo, el cual se denominará encaje. Este encaje nunca podrá ser inferior a tres millones de pesos (\$3.000.000) y tendrá por objeto responder a los requisitos de rentabilidades mínimas a que se refiere el artículo 86.

El cálculo del encaje se efectuará en forma semanal teniendo en cuenta el valor promedio del fondo durante los quince (15) días corridos anteriores a la fecha de cálculo.

El monto del encaje deberá ser invertido en los mismos instrumentos autorizados para el fondo y con iguales limitaciones. El encaje es inembargable.

Todo déficit del encaje no originado en el proceso de aplicación establecido en el artículo 90, se registrará por las normas y plazos de integración, penalidades y reclamos que a tal efecto establezcan las normas reglamentarias.

### *Garantía de la rentabilidad mínima*

Art. 90.- Cuando la rentabilidad del fondo fuere en un mes dado inferior a la rentabilidad mínima del sistema y esta diferencia no pudiere ser cubierta con el respectivo fondo de fluctuación, la administradora deberá aplicar dentro del plazo de diez (10) días de notificada por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones los recursos de encaje que sean necesarios a tal efecto. Si aplicados totalmente los recursos del encaje, no se pudiere completar la deficiencia de rentabilidad del fondo, el Estado complementará la diferencia.

Se disolverá de pleno derecho, la administradora que no hubiere cubierto la rentabilidad mínima del sistema o recompuesto el encaje dentro de los quince (15) días siguientes al de su afectación, debiendo liquidarse conforme lo establece el artículo 71.

## Capítulo VII

### Financiamiento de las prestaciones

#### *Financiamiento*

Art. 91 – Las prestaciones de jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento establecidas en esta ley para el régimen de capitalización se financiarán con el saldo de la

cuenta de capitalización individual del afiliado, conforme al artículo 27 de esta ley.

Respecto de la jubilación ordinaria y de la pensión por fallecimiento que de ella se derive, el saldo de la cuenta de capitalización individual estará constituido por el capital acumulado.

Respecto del retiro por invalidez y de la pensión por fallecimiento del afiliado en actividad, el saldo de la cuenta de capitalización individual estará constituido por el capital acumulado más el capital complementario que deba integrar la administradora según lo establecido en los artículos 92 y 93.

#### *Capital complementario*

Art. 92- A los efectos del retiro definitivo por invalidez y de la pensión por fallecimiento del afiliado en actividad, el capital complementario estará dado por la diferencia entre: 1) el capital técnico necesario determinado conforme al artículo 93, y 2) el capital acumulado en la cuenta de capitalización individual del afiliado, a la fecha en que se ejecute el dictamen definitivo de invalidez o fecha de fallecimiento, según la prestación que corresponda. Cuando la mencionada diferencia arroje un valor negativo, el capital complementario será nulo.

#### *Capital técnico necesario*

Art. 93.- El capital técnico necesario se determinará conforme a las siguientes pautas:

- a) A los efectos del retiro definitivo por invalidez, como el valor actual esperado de las prestaciones de referencia del causante y de sus beneficiarios a partir de la fecha en que se ejecute el dictamen definitivo de invalidez y hasta la extinción del derecho a pensión de cada uno de los beneficiarios acreditados una vez deducidas las prestaciones a cargo del sistema de reparto mencionados en el artículo 27;
- b) A los efectos de la pensión por fallecimiento del afiliado en actividad, como el valor actual esperado de las prestaciones de referencia de los beneficiarios de pensión a partir de la fecha de fallecimiento del causante y hasta la extinción del derecho a pensión de cada uno de los beneficiarios acreditados, una vez deducidas las prestaciones a cargo del sistema de reparto mencionadas en el artículo 27;

El capital técnico necesario se calculará según las bases técnicas que establezcan conjuntamente la Superintendencia de Administradoras de Fondos

de Jubilaciones y Pensiones y la Superintendencia de Seguros de la Nación y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97 y 98

*Capital de recomposición.*

Art. 94.- Se define como capital de recomposición al monto representativo de los aportes con destino al régimen de capitalización, que el afiliado con derecho a retiro transitorio por invalidez hubiera acumulado en su cuenta durante el período de percepción de la prestación en forma transitoria. Las normas reglamentarias determinarán la forma de cálculo del correspondiente capital.

*Responsabilidad y obligaciones*

Art. 95 - La administradora será exclusivamente responsable y estará obligada a:

- a) El pago del retiro transitorio por invalidez a los afiliados declarados inválidos una vez deducidas las prestaciones a cargo del sistema de reparto del artículo 27 mediante el dictamen transitorio, siempre que:
  1. Los afiliados se encuentren efectuando regularmente sus aportes, de conformidad con lo que determinen las normas reglamentarias.
  2. Los afiliados que, según lo dispongan las normas reglamentarias, estuvieran cumpliendo en forma irregular con su obligación de aportar pero conservarán sus derechos;
- b) La integración del correspondiente capital complementario para los afiliados en actividad que generen pensiones por fallecimiento en las condiciones que establezcan los apartados 1 y 2 del inciso a).

*Otras obligaciones de la administradora*

Art. 96. -. La administradora estará también obligada frente a los afiliados comprendidos en el inciso a) del artículo precedente por los siguientes conceptos:

- a) La integración del correspondiente capital complementario cuando adquieren el derecho a percibir el retiro definitivo por invalidez, conforme al dictamen definitivo;
- b) La integración del correspondiente capital complementario cuando con motivo de su muerte generen pensiones por fallecimiento;
- c) La integración del capital de recomposición, cuando no adquieren el derecho a retiro

definitivo por invalidez, conforme al dictamen definitivo.

Una vez cumplidas por parte de la administradora las obligaciones del inciso b) del artículo 95 e incisos a) y b) de este artículo, no se podrán acreditar nuevos derechohabientes para los efectos del cálculo del capital complementario, sin perjuicio de que éstos mantengan su calidad de beneficiarios de pensión. La obligación establecida en el inciso c) deberá ser cumplida en la fecha en que el dictamen definitivo que rechaza la invalidez quede firme o bien al concluir el plazo que establezcan las normas reglamentarias.

*Ingreso base. Prestación de referencia del causante. Prestación del causante*

Art. 97 - Se entenderá por ingreso base el valor representativo del promedio mensual de las remuneraciones y/o rentas imponibles declaradas en los cinco (5) años anteriores al mes en que ocurra el fallecimiento o se declare la invalidez transitoria de un afiliado. No se tendrán en cuenta en el cálculo precedente los importes correspondientes al sueldo anual complementario ni los importes que en virtud de las normas establecidas en el segundo párrafo del artículo 9º excedan el máximo fijado en el primer párrafo del mismo artículo. Las normas reglamentarias establecerán el procedimiento de cálculo del ingreso base, el que una vez determinado deberá expresarse en cuotas del respectivo fondo de jubilaciones y pensiones, tomando el valor de la misma correspondiente al último día del mes anterior a la fecha del fallecimiento o de declaración de la invalidez transitoria.

A efectos del cálculo del capital técnico necesario establecido en el artículo 93 y del pago del retiro transitorio por invalidez la prestación de referencia del causante o el haber de la prestación establecido en el inciso a) del artículo 28, será equivalente a:

- a) El setenta por ciento (70 %) del ingreso base, en el caso de los afiliados que se encuadren en el apartado 1 del inciso a) del artículo 95 que fallezcan o tengan derecho a percibir retiro transitorio por invalidez;
- b) El cincuenta por ciento (50 %) del ingreso base, en el caso de los afiliados que se encuadren en el apartado 2 del inciso a) del artículo 95, que fallezcan o tengan derecho a percibir retiro transitorio por invalidez.



*Prestación de referencia de los beneficiarios de pensión  
Haber de las pensiones por fallecimiento.*

Art. 98- Serán de aplicación para la determinación de las prestaciones de referencia de los beneficiarios de pensión y del haber de las pensiones por fallecimiento, los porcentajes que en el presente artículo se detallan, los que se aplicarán de acuerdo con las siguientes normas:

1. Para la determinación de las prestaciones de referencia de los beneficiarios de pensión, establecidas en el artículo 93, los porcentajes se aplicarán sobre la prestación de referencia del causante determinada en el artículo 97.
2. Para la determinación del haber de las pensiones por fallecimiento del afiliado en actividad, establecidas en el artículo 27, los porcentajes se aplicarán sobre la prestación de referencia del causante determinada en el artículo 97.
3. Para la determinación del haber de las pensiones por fallecimiento del beneficiario, establecidas en el segundo párrafo del artículo 27, los porcentajes se aplicarán sobre el importe de la prestación que se encontraba percibiendo el causante.

Los porcentajes a que se hace referencia serán:

- a) El setenta por ciento (70 %) para la viuda, viudo o conviviente, no existiendo hijos con derecho a pensión;
- b) El cincuenta por ciento (50 %) para la viuda, viudo o conviviente, cuando existan hijos con derecho a pensión;
- c) El veinte por ciento (20 %) para cada hijo.

Además de los porcentajes enunciados se deberán tener en cuenta las siguientes pautas:

1. Si no hubiere viuda, viudo o conviviente con derecho a pensión, el porcentaje de haber de la pensión del o los hijos establecido en el inciso c) se incrementará distribuyéndose por partes iguales el porcentaje fijado en el inciso b);
2. La suma de las pensiones de todos los beneficiarios no podrá exceder al ciento por ciento (100 %) de la prestación del causante. En caso de que así ocurriera, la pensión de cada uno de los beneficiarios deberá recalcularse, manteniéndose las mismas proporciones que les correspondieran de acuerdo con los porcentajes antes señalados.

*- Seguro colectivo de invalidez y fallecimiento*

Art. 99- Con el fin de garantizar el financiamiento íntegro de las obligaciones establecidas en los

artículos 95 y 96, cada administradora deberá contratar a través de las compañías de seguros definidas en el artículo 175 una única póliza de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, mediante una licitación cuyas bases deberán publicarse en uno de los diarios de mayor circulación en el país y del domicilio de la administradora, pudiendo ésta optar por cualquiera de las propuestas que se ajusten a las mencionadas bases.

El seguro colectivo contratado no exime en forma alguna a la administradora de las responsabilidades y obligaciones establecidas en los artículos 95 y 96.

La Superintendencia de Administradoras de Fondos Jubilaciones y Pensiones y la Superintendencia de Seguros de la Nación, dictaran en conjunto las pautas mínimas a las que deberá ajustarse la mencionada póliza de seguro.

En caso de quiebra o disolución de la administradora y mientras dure el proceso de liquidación, los débitos que se practiquen a las respectivas cuentas de capitalización individual, por el concepto de comisiones según lo establecido en el artículo 67, se destinarán en primer término al pago de la prima de la póliza de seguro que establece el primer párrafo de este artículo y serán inembargables en la parte que corresponda a estos pagos. Además, subsistirá la obligación de la compañía de seguros de financiar los retiros transitorios por invalidez y los respectivos capitales complementarios o de recomposición, a la administradora en quiebra disolución o proceso de liquidación o a la administradora a la que los afiliados o beneficiarios involucrados se incorporen.

Los fondos que la administradora en quiebra, en disolución o en liquidación reciba por estos conceptos serán inembargables y no se incorporarán a la masa de acreedores.

## Capítulo VIII

### Modalidad de las prestaciones

*Jubilación ordinaria y retiro definitivo por invalidez*

Art. 100- Los afiliados que cumplan los requisitos para la jubilación ordinaria y los beneficiarios declarados inválidos mediante dictamen definitivo de invalidez, podrán disponer del saldo de su cuenta de capitalización individual a fin de acceder a su respectiva jubilación o retiro por invalidez, según corresponda, de acuerdo con las modalidades que se detallan en los incisos siguientes:

- a) Renta vitalicia previsional;
- b) Retiro programado;
- c) Retiro fraccionario.

La administradora verificará el cumplimiento de los requisitos, reconocerá la prestación y emitirá el correspondiente certificado.

#### *Renta vitalicia previsional*

Art. 101.- La renta vitalicia previsional es aquella modalidad de jubilación o retiro definitivo por invalidez que contrata un afiliado con una compañía de seguros de retiro, de acuerdo con las siguientes pautas:

- a) El contrato será suscrito en forma directa por el afiliado con la compañía de seguros de retiro de su elección, conforme a los procedimientos que establezcan las normas reglamentarias. Una vez notificada la administradora por el afiliado y la correspondiente compañía, quedará obligada a traspasar a ésta los fondos de la cuenta de capitalización individual del afiliado que correspondan, siendo obligación de la administradora el control de los requisitos establecidos en el inciso c);
- b) A partir de la celebración del contrato de renta vitalicia previsional la compañía de seguros de retiro será única responsable y estará obligada al pago de la prestación correspondiente al beneficiario desde el momento en que suscriba el contrato y hasta su fallecimiento, y a partir de éste al pago de las eventuales pensiones por fallecimiento de los derechohabientes del causante al momento en que se suscribió el contrato. El haber de las pensiones se fijará en función de los porcentajes establecidos en el artículo 98, los que se aplicarán sobre el haber de la prestación del causante;
- c) Para el cálculo del importe de la prestación a ser percibida bajo la modalidad de renta vitalicia previsional, deberá considerarse el total del saldo de la cuenta de capitalización del afiliado, salvo que éste opte por contratar una prestación no inferior al setenta por ciento (70 %) de la respectiva base jubilatoria ni al importe equivalente a tres (3) veces la máxima prestación básica universal. En tal circunstancia el afiliado, una vez pagada la prima correspondiente, podrá disponer libremente del saldo excedente que quedare en la cuenta de capitalización, el que no podrá exceder en quinientas (500) veces el importe de la máxima prestación básica universal, en el mes de cálculo;

- d) Se entenderá por base jubilatoria el valor representativo del promedio mensual de las remuneraciones y/o rentas imponibles declaradas en los cinco (5) años anteriores al mes en que un afiliado opte por la prestación correspondiente. Las normas reglamentarias establecerán el procedimiento de cálculo del mencionado importe.

#### *Retiro programado*

Art. 102. -. El retiro programado es aquella modalidad de jubilación o retiro definitivo por invalidez que acuerda el afiliado con una administradora, de conformidad con las siguientes pautas:

- a) La cantidad de fondos a ser retirada mensualmente de la cuenta de capitalización individual, se fijará en un importe de poder adquisitivo constante durante el año y resultará de relacionar el saldo efectivo de la cuenta del afiliado a cada año, con el valor actuarial necesario para financiar las correspondientes prestaciones. El afiliado podrá optar por retirar una suma inferior a la que surja del cálculo mencionado anteriormente;
- b) La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones determinará la forma de cálculo y bases técnicas para la determinación del valor actuarial necesario, el que deberá contemplar en virtud de los derechohabientes del afiliado definido en el artículo 53, el pago de las eventuales pensiones por fallecimiento que se pudieran generar. A tal efecto el haber de las pensiones se fijará en función de los porcentajes establecidos en el artículo 98, los que se aplicarán sobre el haber de la prestación del causante;
- c) El afiliado que, en el momento de ejercer la modalidad de retiro programado, registre un saldo tal en su cuenta de capitalización individual que le permita financiar una prestación no inferior al setenta (70%) de la respectiva base jubilatoria definida en el inciso d) del artículo 101 y a tres (3) veces el importe de la máxima prestación básica universal, podrá disponer libremente del saldo excedente, el que no podrá superar a quinientas (500) veces el importe de la máxima prestación básica universal, en el mes de cálculo.

*Retiro fraccionado*

Art. 103. – El retiro fraccionado es aquella modalidad de jubilación o retiro definitivo por invalidez que acuerda el afiliado con una administradora de conformidad con las siguientes pautas:

- a) Sólo podrán optar por esta modalidad los afiliados cuyo haber inicial de la prestación, calculado según la modalidad establecida en el inciso b) del artículo 100, resulte inferior al cincuenta (50%) por ciento del equivalente a la máxima prestación básica universal;
- b) La cantidad de fondos a retirar mensualmente de la cuenta de capitalización individual, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del haber correspondiente a la máxima prestación básica universal vigente al momento de cada retiro;
- c) La modalidad de retiro fraccionario se extinguirá cuando ocurra uno de los siguientes eventos:
  1. Cuando se agote el saldo de la cuenta de capitalización individual.
  2. Cuando se produzca el fallecimiento del beneficiario, oportunidad en la cual el saldo remanente de la cuenta será entregado a los derechohabientes del causante;
- d) Los retiros fraccionarios no estarán sujetos a comisiones por parte de la administradora.

*Retiro transitorio por invalidez*

Art. 104. – Los afiliados declarado inválidos comprendidos en el inciso a) del artículo 95 percibirán el retiro transitorio por invalidez, el que será financiado por la administradora y se ajustará a lo dispuesto en el artículo 97.

Los afiliados que, habiendo sido declarados inválidos, no se encuentran comprendidos en los apartados 1 y 2 del inciso a) del artículo 95 tendrán derecho a recibir el retiro transitorio por invalidez, según la modalidad de retiros programados, no estando ésta alcanzada por las comisiones establecidas en el inciso d) del artículo 68, o bien podrán optar en caso de cumplir los requisitos establecidos en el inciso a) del artículo 103 por la modalidad establecida en dicho artículo.

*Pensión por fallecimiento del afiliado en actividad o del beneficiario de jubilación o retiro por invalidez bajo la modalidad de retiro programado*

Art. 105- Los derechohabientes de pensión por fallecimiento del afiliado en actividad o del

beneficiario de jubilación o retiro por invalidez bajo la modalidad de retiro programado, podrán disponer del saldo de la respectiva cuenta de capitalización individual del causante con el objeto de constituir sus haberes de pensión. La administradora verificará el cumplimiento de dichos requisitos, reconocerá las prestaciones y emitirá los correspondientes certificados.

Las modalidades para hacer efectivas las pensiones serán una renta vitalicia previsional o un retiro programado. Mientras no se haya ejercido opción, los beneficiarios quedarán sujetos a la modalidad de retiro programado.

1. La renta vitalicia previsional es aquella modalidad de pensión que los beneficiarios de común acuerdo contratan con una compañía de seguros de retiro, en la que ésta se obliga al pago de las correspondientes prestaciones, desde el momento en que se suscribe el contrato y hasta sus respectivos fallecimientos o cesación del derecho a pensión para los hijos.

Al optar por esta modalidad, el haber de las prestaciones que resulten deberán guardar entre ellas las mismas proporciones que las establecidas en el artículo 98.

El contrato de renta vitalicia será suscrito en forma directa por los beneficiarios con la compañía de seguros de retiro de su elección, conforme a las normas y procedimientos que a tal efecto se establezcan. Una vez notificada la administradora por la correspondiente compañía, quedará obligada a traspasar a ésta los fondos de la cuenta de capitalización individual del causante.

2. El retiro programado es aquella modalidad de pensión que obtienen los beneficiarios con cargo al saldo de la cuenta de capitalización individual del causante.

La cantidad de fondos a ser retirada mensualmente de la cuenta de capitalización individual se fijará en un importe de poder adquisitivo constante durante el año, y resultará de relacionar el saldo efectivo de la cuenta del causante a cada año con el valor actuarial necesario para financiar las correspondientes prestaciones.

La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones determinará la forma de cálculo y bases técnicas para la determinación del valor actuarial necesario, el que deberá contemplar, en virtud de los derechohabientes definidos en el artículo 53, el pago de los correspondientes haberes de las prestaciones, los que deberán guardar entre sí las mismas proporciones que las establecidas en el artículo 98.

En caso de no existir beneficiarios de pensión por fallecimiento, el saldo remanente de la cuenta de capitalización individual se abonará a los herederos del causante declarados judicialmente.

*- Pensión por fallecimiento de un beneficiario de jubilación o retiro por invalidez bajo la modalidad de renta vitalicia previsional*

Art. 106- Producido el fallecimiento de un beneficiario de jubilación o retiro por invalidez bajo la modalidad de renta vitalicia previsional, los derechohabientes deberán comunicar el fallecimiento del causante a la compañía de seguros de retiro que estuviera abonando la respectiva prestación, con el fin de que éste comience el pago de las pensiones por fallecimiento que correspondan.

*Pensión por fallecimiento de un beneficiario de retiro transitorio por invalidez:*

Art. 107- Producido el fallecimiento de un beneficiario de retiro transitorio por invalidez, la administradora pondrá a disposición de los derechohabientes el saldo de la cuenta de capitalización individual del causante y, en caso de corresponder en virtud de lo establecido el inciso b) del artículo 96, el correspondiente capital complementario.

Las modalidades para el otorgamiento de las prestaciones de pensión son las mismas que las establecidas en el artículo 105

*Otras características*

Art. 108- Los contratos de renta vitalicia previsional establecidos en los artículos 101 y 105 deberán ajustarse a las pautas mínimas que dicten en forma conjunta la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

Dichas reglas deberán contemplar, entre otros aspectos los inherentes al tipo de rentas, expectativa de vida de los beneficiarios y el interés técnico. Las rentas vitalicias previsionales tendrán el carácter de irrevocables.

Todo beneficiario de jubilación o retiro definitivo por invalidez que se encuentre percibiendo su respectiva prestación bajo la modalidad establecida en el inciso b) del artículo 100 podrá optar por cambiar a la modalidad establecida en el inciso a) del mismo artículo.

Las normas reglamentarias establecerán los correspondientes procedimientos a seguir en tal circunstancia.

Las disposiciones del párrafo anterior serán de aplicación para los beneficiarios de pensión por fallecimiento en la medida que manifiesten entre sí común acuerdo por el cambio de modalidad.

*Ajuste por incorporación de derechohabientes*

Art. 109- Si una vez integrado por parte de la administradora el correspondiente capital complementario y constituido de esta forma el saldo de la cuenta de capitalización individual de un afiliado fallecido, se presentare una persona que tenga derecho a percibir pensión por fallecimiento y cuya calidad de causahabiente no se hubiere acreditado oportunamente, la administradora procederá a verificar su calidad de tal y, comprobada ésta deberá incluirla como beneficiaria de pensión.

Asimismo, si una vez iniciado el pago de las pensiones se presentare un derechohabiente cuya calidad de tal no se hubiere acreditado oportunamente, las pensiones por fallecimiento que se hubieren determinado inicialmente deberán recalcularse, con el objeto de que se incluyan todos los beneficiarios. En estos casos, las nuevas pensiones que resulten serán determinadas en función del saldo remanente de la cuenta individual del causante, o de las reservas matemáticas que mantengan las compañías de seguro de retiro en las formas que determinen las normas reglamentarias. Para ello deberán liquidarse nuevamente según la modalidad que corresponda, a la fecha en que el nuevo derechohabiente reclame la prestación. Los derechos de los nuevos beneficiarios no son retroactivos.

## Capítulo IX

### Jubilación anticipada y postergada

#### *Jubilación anticipada*

Art. 110- Los afiliados pertenecientes al régimen de capitalización podrán jubilarse antes de cumplir la edad establecida en el artículo 47, si reúnen los siguientes requisitos:

- a) Tener derecho a una jubilación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) de la respectiva base jubilatoria, a la que se refiere el inciso d) del artículo 101;
- b) Tener derecho a una jubilación igual o mayor a dos (2) veces el importe equivalente a la máxima prestación básica universal.

El afiliado que opte por jubilarse en forma anticipada no tendrá derecho a las prestaciones

previstas en el régimen de reparto hasta que cumpla con los respectivos requisitos.

#### *Jubilación postergada*

Art. 111.- Todo afiliado que, de común acuerdo con su empleador si desarrolla actividad en relación de dependencia, decida permanecer en actividad con posterioridad al cumplimiento de la edad establecida para acceder a la jubilación ordinaria podrá:

- a) Postergar el inicio de la percepción de su jubilación ordinaria. En tal caso se diferirá hasta que cese en su actividad el pago de las prestaciones correspondientes al régimen de reparto; asimismo se suspenderán las obligaciones de las administradoras en lo referente a retiro por invalidez y pensión por fallecimiento del afiliado en actividad, y se mantendrá la obligación de declaración e ingreso de los aportes y contribuciones previsionales, establecidos en el artículo 11;
- b) Acceder a la prestación de jubilación ordinaria. En tal caso se postergará hasta que cese en su actividad el pago de las prestaciones del régimen de reparto que pudieran corresponder y se mantendrá la obligación de declaración e ingreso de los aportes y contribuciones previsionales destinados al financiamiento del régimen de reparto, según lo establecido en el artículo 18.

### Capítulo X

#### Tratamiento impositivo

##### *Tratamiento impositivo de los aportes y contribuciones obligatorias*

Art. 112. – La porción de la remuneración y renta destinada al pago de los aportes previsionales establecidos en el artículo 11, correspondientes a los trabajadores comprendidos en el SIJP, será deducible de la base imponible a considerar por los respectivos sujetos en el impuesto a las ganancias.

Las contribuciones previsionales establecidas en el artículo 11, a cargo de los empleadores constituirán, para ellos, un gasto deducible en el impuesto a las ganancias.

##### *Tratamiento de las imposiciones voluntarias y depósitos convenidos*

Art 113- Las imposiciones voluntarias que realice cada afiliado con destino al régimen de

capitalización serán deducibles la respectiva base del impuesto a las ganancias.

Los depósitos convenidos con destino al régimen de capitalización no constituyen remuneración para ningún efecto legal y no se considerarán renta del afiliado a los efectos tributarios. Los depósitos convenidos a que se refiere el artículo 57 de la presente ley constituyen para quien los efectúen un gasto deducible para el impuesto a las ganancias

##### *Tratamiento de la renta del fondo.*

Art. 114- Los incrementos que experimenten las cuotas de los fondos de jubilaciones y pensiones no constituirán renta a los efectos del impuesto a las ganancias.

##### *Tratamiento de las prestaciones.*

Art. 115- Las jubilaciones, retiros por invalidez, pensiones por fallecimiento y demás prestaciones otorgadas conforme a esta ley estarán sujetas en cuanto corresponda al impuesto a las ganancias.

##### *Tratamiento de las comisiones de la administradora*

Art. 116- Las comisiones a las que tiene derecho la administradora están exentas del impuesto al valor agregado.

La parte de las comisiones destinadas al pago de las obligaciones establecidas en el artículo 99 de esta ley, no constituirá retribución para la administradora a los efectos impositivos.

### Capítulo XI

#### Organismo de supervisión y control:

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones

##### *Creación. Misión. Tipo jurídico*

Art. 117- Créase la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

El control de todas las administradoras de fondos de Jubilaciones y pensiones será ejercido por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, con las funciones y atribuciones establecidas en la presente ley y su decreto reglamentario. La misión de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones es supervisar el estricto cumplimiento, por parte de las entidades vinculadas a la operación del régimen de capitalización, de esta ley y de las normas

reglamentarias que en su consecuencia se dicten; procurar prevenir sus eventuales incumplimientos y actuar con rapidez y eficiencia cuando estos incumplimientos se verifiquen, en salvaguarda exclusiva y excluyente de los intereses de las personas incorporadas al SIJP como aportantes o beneficiarios al régimen de capitalización procurando que la efectivización de la garantía estatal sea lo menos onerosa posible al erario público.

La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones es una entidad autárquica con autonomía funcional y financiera en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

*Deberes de la Superintendencia de Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.*

Art. 118. - Son deberes de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones:

- a) Ejercer las funciones que esta ley y su decreto reglamentario asigna a la autoridad de control;
- b) Dictar las resoluciones de carácter general y particular en los casos previstos en esta ley, su decreto reglamentario y las que sean necesarias para su aplicación;
- c) Fiscalizar juntamente con la ANSES el procedimiento de incorporación previsto en el artículo 130 de esta ley, y las posteriores incorporaciones y traspasos que decidan las personas incorporadas al SIJP, en cuanto a los principios establecidos en los artículos 41, 42 y 43 segunda parte;
- d) Autorizar el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones conforme lo prescripto en el artículo 62 de la presente ley, y llevar un registro de estas entidades;
- e) Considerar los planes de publicidad y promoción que presenten las administradoras, conforme lo normado por el artículo 64;
- f) Fiscalizar la correcta y oportuna imputación de los aportes en las cuentas de capitalización individual de los afiliados;
- g) Recibir las denuncias de los afiliados para las que registrará en lo pertinente lo establecido en artículo 13, inciso a) apartado 3. Cuando de la denuncia efectuada se pudiera sospechar que se están evadiendo aportes y/o contribuciones previsionales deberá remitirse copia de la denuncia a la ANSES dentro de los cinco días siguientes;

- h) Fiscalizar el cumplimiento de los deberes de información al público y a los afiliados o beneficiarios, conforme lo prescripto por los artículos 65, 66 y restantes disposiciones de esta ley;
- i) Verificar mediante inspecciones cuya frecuencia mínima determinará el decreto reglamentario, la exactitud y veracidad de la información que las administradoras deben brindar conforme lo normado por los artículos 65, 66 y restantes disposiciones de esta ley;
- j) Fiscalizar el cumplimiento del régimen de comisiones fijado por cada administradora y considerar las modificaciones que al mismo soliciten introducirles las administradoras de acuerdo al procedimiento fijado en el artículo 70;
- k) Proceder a la liquidación de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones en los supuestos del artículo 72 de esta ley;
- l) Fiscalizar las inversiones de los recursos de los fondos de jubilaciones y pensiones y la composición de la cartera de inversiones;
- ll) Dictar las resoluciones referidas al tipo, medio y periodicidad de la información que las administradoras deberán suministrar a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones;
- m) Fiscalizar las habilitaciones de los directores, síndicos, representantes y gerentes que en tal carácter se incorporen a las administradoras, conforme lo normado por el artículo 60 de esta ley, llevando un registro de antecedentes personales actualizado de los directores, síndicos, representantes y gerentes de las administradoras;
- n) Fiscalizar la constitución y mantenimiento del capital de la entidad;
- ñ) Determinar la rentabilidad y comisión promedio del sistema y fiscalizar la rentabilidad obtenida por cada administradora;
- o) Fiscalizar la constitución, el mantenimiento, la operación y la aplicación del fondo de fluctuaciones y del encaje, así como también la inversión de los recursos correspondientes al fondo de fluctuaciones y al encaje;
- p) Fiscalizar la contratación del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento por parte de las administradoras en la forma prescripta por el artículo 99 y establecer, en forma conjunta con la Superintendencia de Seguros de la Nación, las normas que regulen el contrato de seguro colectivo de

- invalidez y fallecimiento, así como también las que amparen la modalidad de renta vitalicia previsual y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que emanen de los mencionados contratos;
- q) Fiscalizar el funcionamiento de las administradoras y el otorgamiento de las prestaciones a sus afiliados, velando por el fiel cumplimiento de esta ley, su reglamentación y las normas que en su consecuencia se dicten;
- r) Recaudar los fondos a que se refiere el artículo 122 y disponer de ellos;
- rr) Imponer a las administradoras las sanciones previstas cuando no cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias, conforme el siguiente procedimiento:
1. Se labrará acta circunstanciada del incumplimiento verificado por la autoridad de control.
  2. Se dará traslado de la misma por 30 días a la administradora para que efectúe su descargo y produzca las pruebas que estime necesarias para avalar el mismo.
  3. Vencido dicho plazo el superintendente de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones dictará resolución fundada, absolviendo a la administradora o aplicando la sanción si correspondiera.
  4. La resolución que aplique una sanción a una administradora será recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, o ante al juez Federal con competencia en lo Comercial, según sea el domicilio de la administradora en la Capital Federal o en el interior del país, dentro de los 15 días de notificada.
  5. En caso de que la sanción fuera de multa, el recurso sólo será admisible si, junto con la primera presentación ante el órgano judicial se acreditara el depósito del importe de la multa a la orden del Tribunal o Juzgado. La autoridad de control llevará un registro de las sanciones aplicadas;
- s) Labrar acta de toda inspección que realice en una administradora o ante un tercero con quien ésta opere, cuya copia será entregada a la persona física o jurídica respecto de la cual se realizó la inspección;
- t) Imponer sanciones a las administradoras mediante resolución fundada cuando no cumplan con las disposiciones legales o reglamentarias;

- u) Publicar, en forma trimestral, una memoria que contendrá la información global y estadística que establezca el decreto reglamentario, referida a la evolución del régimen de capitalización, las autorizaciones otorgadas para funcionar como administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, las autorizaciones a administradoras revocadas, las sanciones aplicadas, y la indicación, referida a cada administradora, de: capital social, nómina de directores, representantes, gerentes y síndicos, número de afiliados incorporados a cada una, esquema de comisiones, valor del fondo de jubilaciones y pensiones, encaje, composición de las inversiones de cada fondo y toda otra información que establezcan las normas reglamentarias.

*Facultades de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.*

Art. 119- Para el Cumplimiento de sus deberes, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

- a) Ejercer las funciones que esta ley y su decreto reglamentario asigna a la autoridad de control;
- b) Dictar las resoluciones de carácter general y particular en los casos previstos en esta ley, su decreto reglamentario y las que sean necesarias para su aplicación;
- c) Adoptar las resoluciones necesarias para hacer efectiva la fiscalización respecto de cada administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, tomar las medidas y aplicar las sanciones previstas en esta ley y sus normas reglamentarias;
- d) Examinar todos los elementos atinentes a las operaciones de las administradoras y en especial requerir la exhibición general de los libros de comercio y documentación complementaria, así como de su correspondencia, hacer compulsas, arquezos y verificaciones, tanto referidos a la administradora como al fondo de jubilaciones y pensiones que administra. Las administradoras están obligadas a mantener en el domicilio de su sede central o sucursales a disposición de la Superintendencia, todos los elementos relacionados con sus operaciones y los del fondo que administran;
- e) Requerir otras informaciones que juzgue necesarias para ejercer sus funciones. La Superintendencia puede requerirles declaraciones juradas sobre hechos o datos

determinados. Las obligaciones que surgen de este inciso y del anterior comprenden a los directores, síndicos, representantes y gerentes de las administradoras y de las entidades con las que esté vinculada con motivo de la administración del fondo;

- f) Requerir a toda persona física o jurídica las informaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de su misión aun cuando estén sujetas al control de otros organismos estatales, nacionales, provinciales o municipales, conforme las leyes específicas, y a exhibir sus libros de comercio y documentación complementaria a inspectores de la Superintendencia cuando ello sea necesario para determinar su situación frente al régimen de esta ley o bien establecer las condiciones en que operan con una administradora autorizada, no pudiéndosele oponer a la autoridad de control el deber de secreto o confidencialidad de la información;
- g) Asistir a las asambleas de las administradoras;
- h) Requerir órdenes de allanamientos y el debido e inmediato auxilio de la fuerza pública, para el ejercicio de sus funciones; secuestrar los documentos e información contenida por cualquier medio para el cumplimiento de sus tareas de fiscalización; iniciar acciones judiciales y actuar en cualquier clase de juicios como actor o demandado, en juicio criminal como querellante y designar apoderados a estos efectos;
- i) Dictar su propio reglamento interno, determinar su estructura organizativa y el régimen de atribución de funciones a sus funcionarios;
- j) Nombrar, contratar, promover, separar y sancionar a su personal y adoptar las demás medidas internas que correspondan a su funcionamiento;
- k) Tendrá total facultad para el manejo de su patrimonio y para dictar su reglamento de compras y contrataciones.

#### *Secreto de las actuaciones*

Art. 120- Las actuaciones cumplidas en el ejercicio de control previsto en esta ley, son confidenciales. También son confidenciales los datos que no estén destinados a la publicidad y las declaraciones juradas presentadas. Los funcionarios y empleados están obligados a conservar fuera del desempeño de sus funciones el secreto de las actuaciones. Su incumplimiento será considerado como falta grave

#### *Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Estructura.*

Art. 121- La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones estará a cargo de un funcionario designado por el Poder Ejecutivo nacional con el título de superintendente de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.

La Superintendencia estará dotada con la cantidad de funcionarios y empleados técnico-administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

No podrán integrar la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones los inhabilitados conforme el artículo 60 de esta ley, sin perjuicio de las normas de incompatibilidad vigentes. Tampoco podrán tener interés alguno en administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, salvo el propio como afiliado al SIJP, ni en las calificadoras de riesgo.

Las remuneraciones y beneficios que perciba el superintendente, los funcionarios y los empleados técnico-administrativos de la Superintendencia no serán inferiores al promedio de las remuneraciones y beneficios que perciban los directores, gerentes, personal superior y empleados del 50 % de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que mejor remuneren a su personal, conforme las equivalencias por categorías que determine por resolución la Superintendencia.

#### *Financiamiento de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.*

Art. 122. - Los gastos que demande el funcionamiento de la Superintendencia serán financiados con:

- a) Aportes de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Estos aportes se determinarán como un porcentaje a ser aplicado sobre el importe mensual que en concepto de aportes obligatorios perciban las respectivas administradoras;
- b) La restitución de gastos con destino a las comisiones médicas que prevé el artículo 51 de la presente, conforme el procedimiento que determinen las normas reglamentarias;
- c) Las multas aplicadas conforme a esta ley y sus normas reglamentarias;
- d) Los bienes inmuebles, muebles y equipamiento técnico adecuado que deberá proveerle para su funcionamiento el Estado nacional. El presupuesto de la



Superintendencia no integrará el presupuesto nacional.

#### *Responsabilidad del superintendente*

Art. 123- El superintendente será penalmente responsable por las acciones y omisiones indebidas en que incurriere en el ejercicio de sus obligaciones y deberes.

Todo funcionario de la Superintendencia que en violación de los deberes a su cargo causare un perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones o a una administradora de las mismas, será penalmente responsable por dicho perjuicio.

### Capítulo XII

#### Garantías del Estado

##### *Garantías.*

Art. 124- El Estado garantizará a los afiliados al SIJP pertenecientes al régimen de capitalización:

- a) El cumplimiento de la garantía de rentabilidad mínima, sobre los fondos que los afiliados o beneficiarios mantuvieran invertidos, cuando una administradora, agotados los mecanismos previstos en la ley, no pudiera cumplir con la mencionada obligación. Esta garantía se mantendrá vigente durante el período en el cual los afiliados o beneficiarios se traspasen a una nueva administradora de acuerdo con lo establecido en el artículo 72;
- b) La integración en las cuentas de capitalización individual de los correspondientes capitales complementarios y de recomposición, así como también el pago de todo retiro transitorio por invalidez, en el caso de quiebra de una administradora e incumplimiento de la compañía de seguros vida;
- c) El pago de las jubilaciones, retiros por invalidez y pensiones por fallecimiento de los beneficiarios que hubieren optado por la modalidad de renta vitalicia previsional, en caso que por declaración de quiebra o liquidación por insolvencia, las compañías de seguros de retiro no dieran cumplimiento a las obligaciones emanadas de los contratos celebrados con los afiliados en las condiciones establecidas por esta ley. Esta circunstancia deberá ser certificada en forma conjunta por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. La garantía a que se refiere este

inciso será aplicable únicamente a las prestaciones que se hubieren financiado con fondos provenientes del régimen de capitalización y el monto máximo a garantizar mensualmente correspondiente al haber de la prestación de cada beneficiario será igual al importe dado por cinco (5) veces el equivalente a la máxima prestación básica universal.

#### *Haber mínimo garantizado*

Art. 125. - El Estado nacional garantiza el otorgamiento de haberes mínimos a los afiliados del SIJP que:

- a) Acrediten los requisitos establecidos en los incisos a) y b) y c) del artículo 19;
- b) Computen un haber total previsional al momento de acogerse a las prestaciones inferior a tres veces y dos tercios ( $3 \frac{2}{3}$ ) el aporte medio previsional obligatorio al que se refiere el artículo 21. Se define como haber total previsional a la suma de las siguientes prestaciones:
  1. Prestación básica universal, conforme lo establece el artículo 20.
  2. Prestación compensatoria, conforme lo establece el artículo 24.
  3. Jubilación ordinaria, conforme lo establece el artículo 47, determinándose su haber según la modalidad establecida en el inciso b) del artículo 100 o la prestación adicional por permanencia prevista en el artículo 30.
- c) Manifiesten en forma expresa su voluntad de acogerse a esta garantía.

A los efectos de la mencionada garantía, el importe de la prestación básica universal correspondiente al afiliado se incrementará en la cantidad necesaria para que, adicionada al importe de la prestación compensatoria, resulte un haber igual a tres veces y dos tercios ( $3 \frac{2}{3}$ ) el aporte medio previsional obligatorio.

El haber que otorgue el régimen previsional público como suma de la prestación básica universal más la prestación compensatoria, si la hubiere, no será inferior en ningún caso al cuarenta por ciento (40 %) del salario medio de la economía establecido por la ANSES, este indicador deberá ser de carácter oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Los afiliados que optaren por la aplicación de la garantía establecida en el presente artículo, percibirán su prestación en forma directa por el SUSS.

*Garantía de la prestación adicional por permanencia*

Art 126- El Estado garantiza a los afiliados que hubieran ejercido la opción del artículo 30 la percepción de la prestación adicional por permanencia

*Naturaleza de los créditos*

Art. 127 - En los casos en que la garantía estatal hubiere operado, el Estado concurrirá en la quiebra de la compañía de seguros de retiro por el monto pagado y con privilegio general del mismo grado que los afiliados asegurados de acuerdo con el inciso a) del artículo 54 de la ley 20.091.

El crédito de los afiliados asegurados por la porción no garantizada por el Estado gozará del mismo privilegio enunciado en el párrafo anterior.

Los créditos de las administradoras contra una compañía de seguros vida, que se originen en el contrato de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, gozarán de privilegio general de acuerdo con lo establecido en el artículo 270 de la Ley de Concursos.

## Capítulo XIII

Disposiciones transitorias del régimen de capitalización

Gradualismo de edad jubilación ordinaria

Art. 128- A los efectos de cumplimentar el requisito de edad establecido en el artículo 47 para acceder a la jubilación ordinaria, se aplicará la siguiente escala:

Hombres			Mujeres		
Desde el año	Relación de dependencia	Autónomos	Relación de dependencia	Autónomos	
1994	62	65	57	60	
1996	63	65	58	60	
1998	64	65	59	60	
2001	65	65	60	60	
2003	65	65	60	60	
2005	65	65	60	60	
2007	65	65	60	60	
2009	65	65	60	60	
2011	65	65	60	60	

## Título IV

## Vigencia

*Vigencia*

Art. 129- Las disposiciones del presente libro entrarán en vigor en la fecha que fije el Poder

Ejecutivo, la que no podrá ser establecida en el plazo menor a nueve (9) meses, ni mayor a dieciocho (18) meses, contados a partir de la promulgación de esta ley.

Hasta la fecha aludida en el párrafo anterior, continuarán aplicándose las disposiciones legales vigentes hasta ese momento, con las modificaciones introducidas por la presente ley.

*Proceso de incorporación*

Art. 130- Las normas reglamentarias deberán prever los procedimientos, plazos y modalidades que hagan factible la incorporación a este régimen de las personas que a la fecha de su entrada en vigor quedaren comprendidas en el mismo, así como los de quienes ejerzan la opción a que se refiere el artículo 30.

*Financiamiento de la Superintendencia*

Art. 131- Los gastos que demanda el cumplimiento de las funciones de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones durante el período que transcurra entre la promulgación de la presente y la fecha de entrada en vigor de este libro, se incluirán en un presupuesto transitorio y serán financiados con recursos provenientes de la ANSES.

## TITULO V

## Penalidades

## Capítulo I

Delitos contra la integración de los fondos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

*Infracciones al deber de información*

Art.132- Será reprimido con prisión de 15 días a un año el empleador que, estando obligado por las disposiciones de esta ley, no diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en los incisos a), b) e), o i) del artículo 12 y del artículo 43, segunda parte de la presente. El delito se configurará cuando el obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los treinta (30) días de notificada la intimación respectiva en su domicilio real o en el asiento de sus negocios.

*Infracción al deber de actuación como agente de retención o percepción, al deber de depósito y evasión de aportes y contribuciones*

Art. 133- Las infracciones del empleador establecidas en el acápite, serán reprimidas conforme lo prescrito por la ley 23.771, sus modificaciones y sustituciones y el Código Penal.

## Capítulo II

Delitos contra la adecuada imputación de los depósitos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones

*Omisión de transferencia de depósitos*

Art. 134 - Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el depositario de los aportes y contribuciones que estuviera obligado por esta ley a transferirlos a los administradores de los regímenes del SIJP y no transfiera total o parcialmente los mismos, en los plazos establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias.

## Capítulo III

Delitos contra la libertad de elección de AFJP

Art. 135- Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que por imposición de requisitos no contemplados en la presente ley y sus normas reglamentarias para la incorporación o traspaso a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones o valiéndose de cualquier otro medio, no admitiera la incorporación a una administradora o el traspaso a otra de un trabajador obligatoria o voluntariamente incorporado al SIJP. La misma pena sufrirá quien incorporar a un trabajador a una AFJP sin contar con la pertinente solicitud suscrita por el mismo o lo diera de baja de su registro de afiliados sin observar los requisitos de la presente ley y sus normas reglamentarias. Igual pena sufrirá quien, empleado medios publicitarios o denominaciones engañosas, o falseando o induciendo error sobre las prestaciones del SIJP o de una determinada administradora, o efectuando promesas de prestaciones complementarias inexistentes o prohibidas por esta ley o sus normas reglamentarias, o mediante promesas de pagos en efectivo o de cualquier otro bien que no sean las prestaciones contempladas en esta ley, o mediante abuso de confianza, o de firma en blanco, o valiéndose de cualquier otro abuso, ardid o engaño, limitara de

cualquier modo el derecho de elección del trabajador a elegir libremente la administradora de fondos jubilaciones y pensiones a que desee incorporarse.

Será reprimido con prisión de 1 a 4 años, el que engañare a un trabajador que en forma obligatoria deba incorporarse al SIJP, adhiriendo a un servicio que no sea establecido en la presente ley o vendiéndole cualquier otro servicio o producto.

## Capítulo IV

Delitos contra el deber de información

Art. 136- Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el obligado por esta ley a suministrar la información que una AFJP deba brindar al público, al afiliado, a la Administración Nacional de Seguridad Social y a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, conforme las prescripciones de los artículos 65 y 66 de esta ley, y de toda otra disposición emanada de la misma, de su decreto reglamentario, de las resoluciones generales o particulares de los organismos de contralor, que omitiera hacerlo oportunamente. El delito se configurará cuando el obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los 5 días de notificada la intimación respectiva en su domicilio legal.

*Información falsa*

Art. 137.- Será reprimido con prisión de 3 a 8 años de prisión el obligado por esta ley a suministrar la información que una AFJP deba brindar al público, al afiliado, a la Administración Nacional de la Seguridad Social y a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, conforme las prescripciones de los artículos 65 y 66 de esta ley, y de toda otra disposición emanada de la misma, de su decreto reglamentario, de las resoluciones generales o particulares de los organismos de contralor, que brindara información falsa o engañosa con el propósito de aparentar una situación patrimonial económica o financiera superior a la real, tanto de la administradora como del fondo que administra.

## Capítulo V

Delitos contra un fondo de jubilaciones y pensiones  
Calificaciones. Perjuicio

Art. 138 -. Será reprimido con prisión de 4 a 10 años el responsable de la calificación de entidades financieras bancarias o de títulos valores y depósitos a plazo fijo, que por inobservancia los deberes a su cargo, función o empleo, efectuare una calificación incorrecta causando perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones, incluido su fondo transitorio y de fluctuaciones.

*Autorizaciones, determinaciones, aprobaciones. Perjuicio.*

Art. 139- Será reprimido con prisión de 4 a 10 años el responsable de:

- a) Autorizar a la oferta pública o admitir su cotización en mercados de títulos valores que puedan ser objeto de inversión por parte de los fondos de jubilaciones y pensiones;
- b) Autorizar fondos comunes de inversiones que puedan ser objeto de inversión por parte de los fondos de jubilaciones y pensiones;
- c) Determinar los mercados que reúnan los requisitos enunciados en el artículo 78 de esta ley;
- d) Aprobar las calificaciones efectuadas por las sociedades calificadoras de riesgo a que se refiere el artículo 79 de esta ley;
- e) Autorizar cajas de valores y bancos para el depósito y custodia de inversiones de fondos de jubilaciones y pensiones que, por inobservancia los deberes a su cargo, función o empleo, emanados de las leyes, decretos o normas reglamentarias a las que deba ajustar su actividad, efectuare una autorización, admisión, determinación o aprobación indebida, causando perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones, incluidos los fondos transitorios y de fluctuaciones.

*Inversiones. Depósito, custodia y control. Perjuicio*

Art. 140 - Será reprimido con prisión de 4 a 10 años el responsable de efectuar las inversiones de un fondo de jubilaciones y pensiones, incluido los fondos transitorios y de fluctuaciones, o de depositarlos y custodiarlos, que por inobservancia de los deberes a su cargo, función o empleo, emanados de las leyes, decretos o normas reglamentarias, a las que deba ajustar su actividad, llevare a cabo las inversiones, depósitos

o custodia de un modo indebido, causando perjuicio a un fondo.

La misma pena se aplicará al responsable del control de las inversiones, depósitos o custodia, que por inobservancia de los deberes a su cargo, función o empleo, emanados de las leyes, decretos o normas reglamentarias a las que deba ajustar a su actividad, efectuare el control indebidamente, causando perjuicio al fondo.

*Figuras agravadas. Perjuicio a un fondo en beneficio propio o de un tercero.*

Art. 141 – Será reprimido con prisión de 5 a 15 años quien, incurriendo en los ilícitos tipificados en este capítulo, causare un perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones procurando un beneficio indebido para si o para un tercero

## Capítulo VI

Delitos por incumplimiento de las prestaciones.  
Incumplimiento de las prestaciones previsionales

Art. 142 - Será reprimido con prisión de 4 a 10 años el obligado al cumplimiento de las prestaciones previsionales establecidas en esta ley que no efectivizara en forma oportuna e íntegra las prestaciones previsionales a las que se encuentre obligado, a quien resulte beneficiario de las mismas. El delito se configurará cuanto el obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los cinco días de notificada la intimación respectiva en su domicilio real en el asiento de sus negocios.

## Capítulo VII

Disposiciones comunes a los capítulos I a VI de este título

*Aplicación del Código Penal y leyes penales específicas*

Art. 143- Las disposiciones del presente Título serán aplicables siempre que la conducta no estuviese prevista con una pena mayor en el Código Penal u otras leyes penales.

*Personas de existencia ideal*

Art. 144- Cuando el delito se hubiera cometido a través de una persona de existencia ideal, pública o privada, la pena de prisión se aplicará a los funcionarios públicos, directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes, que hubiesen intervenido en el hecho, o que por

imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo hubiesen dado lugar a que el hecho se produjera.

#### *Funcionarios públicos*

Art. 145-. Las escalas penales se incrementarán en un tercio del mínimo y del máximo para el funcionario público que participe de los delitos previstos en la presente ley cuando lo haga en el ejercicio de sus funciones.

#### *Inhabilitación a funcionarios públicos, escribanos y contadores*

Art. 146-Los funcionarios públicos, escribanos, contadores públicos que violación las normas de actuación de su cargo o profesión, a sabiendas informen, den fe, autoricen o certifiquen actos jurídicos, balances, cuadros contables o documentación, para la comisión de los delitos previstos en este título, serán sancionados con la pena que corresponda al delito en que han participado y con inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.

#### *Sanciones. Modalidad del deber de denuncia*

Art. 147- El procedimiento para la aplicación de una sanción a imponer por los organismos de control pertinentes, no estará supeditado a la previa denuncia penal, ni será suspendido por la tramitación de la correspondiente causa penal.

Cuando la autoridad de control pertinente, de oficio o a instancia de un particular, tomare conocimiento de la presunta comisión de un delito previsto por este Título, lo comunicará de inmediato al juez competente, solicitando las medidas judiciales de urgencia, en caso que lo estimare necesario para garantizar el éxito de la investigación. En el plazo de treinta días elevará un informe adjuntando los elementos probatorios que obraren en su poder y las conclusiones técnicas a las que hubiera arribado.

En los supuestos de denuncias formuladas directamente ante el juez, sin perjuicio de las medidas de urgencia, correrá vista por treinta días a la autoridad de control a los fines dispuestos en el párrafo anterior.

#### *Caución real*

Art. 148- En todos los casos de los delitos previstos en esta ley en que procediera la excarcelación o la eximición de prisión, éstas se concederán bajo caución real, la que, cuando exista perjuicio a un fondo de jubilaciones y

pensiones, o a un afiliado, deberá guardar correlación y tener presente el monto en que, en principio, apareciere damnificado un fondo de jubilaciones o el afiliado con derecho a una prestación previsional.

#### *Juez competente*

Art. 149- Será competente la justicia federal para entender en los procesos por delitos tipificados en el presente Título.

En la Capital Federal será competente la justicia nacional en lo penal económico.

#### *Sanciones..*

Art 150 –La pena de prisión establecida por esta ley y las accesorias en su caso, serán impuestas sin perjuicio de las sanciones que están autorizadas a aplicar los organismos de control.

### Capítulo VIII

#### Otras sanciones

#### *Administración Nacional de la Seguridad Social*

Art. 151-. Sin perjuicio de las penas de prisión establecidas en este Título la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará a los empleados infractores las multas establecidas en la ley 17.250, según su resolución 748/92 y con los procedimientos en ella establecidos.

#### *Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.*

Art. 152- Sin perjuicio de las penas de prisión establecidas en este Título la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones aplicará a las administradoras en caso de incumplimiento de sus obligaciones emanadas de esta ley y sus normas reglamentarias, las siguientes sanciones:

- a) Apercibimiento, por una sola vez a cada administradora y si la falta o incumplimiento fuera leve y no causara perjuicio;
- b) Multa, que se calculará en base a múltiplos de AMPO, siendo la mínima el múltiplo de 100 AMPO y la máxima de 100.000 AMPO. El importe máximo de la multa podrá elevarse hasta cinco veces el monto del perjuicio causado por el accionar ilícito al fondo de jubilaciones y pensiones, si fuera mayor. El monto de la multa se graduará conforme la gravedad de la falta. Los directores, administradores, síndicos y gerentes serán

solidariamente responsables de las multas impuestas a las administradoras cuando con sus actos u omisiones hubieran dado lugar a que el hecho se produjera;

- c) Inhabilitación para el ejercicio de la dirección, administración, gerencia o sindicatura de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones en forma permanente o transitoria;
- d) Revocación de la autorización para funcionar de la administradora.

La sanción será recurrible ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la Capital Federal o ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia penal del interior del país, según fuese el domicilio de la administradora.

En caso de multa, la sanción será recurrible previo depósito de la multa a la orden del tribunal o juzgado.

#### *Banco Central de la República Argentina*

Art. 153- Sin perjuicio de las penas de prisión establecidas en este Título el Banco Central de la República Argentina aplicará a las entidades financieras por él autorizadas, en caso de incumplimiento de sus obligaciones emanadas de esta ley y sus normas reglamentarias las sanciones previstas en la ley 21.526 con los procedimientos que ella establece.

#### *Comisión Nacional de Valores*

Art. 154- Sin perjuicio de las penas de prisión establecidas en este Título la Comisión Nacional de Valores aplicará a las personas físicas o jurídicas que, en cualquier carácter intervengan en la oferta pública de títulos valores en caso de incumplimiento de sus obligaciones emanadas de esta ley y sus normas reglamentarias, y de las específicas a las que deben adecuar su desenvolvimiento, las sanciones previstas en la ley 17.811 con los procedimientos que ella establece. Sustitúyese el inciso b) del artículo 10 de la ley 17.811, por el siguiente:

- b) Multa de mil (1.000) a cinco millones (5.000.000) de pesos, la que podrá elevarse hasta cinco veces el monto del beneficio obtenido o del perjuicio evitado como consecuencia del accionar ilícito, si fuera mayor.

#### *Superintendencia de Seguros de la Nación*

Art.155- Sin perjuicio de las penas de prisión establecidas en este título la Superintendencia de Seguros de la Nación aplicará a las compañías de

seguro, en caso de incumplimiento de sus obligaciones emanadas de esta ley y sus normas reglamentarias las sanciones previstas en la ley 20.091 con los procedimientos que ella establece.

Sustitúyese el primer párrafo de la segunda parte del artículo 31 (indisponibilidad de las inversiones) de la ley 20.091, por el siguiente:

hasta tanto sean cumplidas las medidas de regularización y saneamiento, la autoridad de control establecerá sobre las inversiones, las medidas previstas en el artículo 86 de esta ley.

Sustitúyese el inciso c) del artículo 58 de la ley 20.091 por el siguiente:

- c) Multa desde el 0,01 por ciento hasta el 0,1 por ciento del total de primas y recargos devengados -neto de anulaciones- en el ejercicio económico anterior que no podrá ser inferior al 0,5 por ciento del capital mínimo requerido.

Sustitúyese el segundo y tercer párrafo del artículo 86 de la ley 20.091 por el siguiente:

Cuando la resolución disponga la suspensión o la revocación de la autorización para operar en seguros, el tribunal de alzada dispondrá, a pedido de la Superintendencia de Seguros de la Nación la administración e intervención judicial del asegurador, que no recaerá en la autoridad de control.

La Superintendencia de Seguros de la Nación podrá disponer sin audiencia de parte, la prohibición a la entidad aseguradora de realizar, respecto de sus inversiones, cualquier acto de disposición o los de administración que específicamente indique y de celebrar nuevos contratos de seguros en los siguientes casos:

- a) Situación prevista en el artículo 31 de la ley 20.091, según el texto modificado por la presente ley;
- b) Disminución de la capacidad económica o financiera, o manifiesta desproporción entre ésta y los riesgos retenidos o déficit en cobertura de los compromisos asumidos con los asegurados;
- c) Infracción a las normas sobre egresos e ingresos de fondos y sobre depósito en custodia de títulos públicos de renta y títulos valores en general;
- d) Falta de presentación por el asegurador de los estados contables de publicidad, de

situación patrimonial, o de compromisos exigibles y siniestros liquidados a pagar en los plazos reglamentarios;

- e) Irregularidades en la constitución o actuación de los órganos de administración y fiscalización o de las asambleas;
- f) Irregularidades en la administración o contabilidad que impidan conocer la situación patrimonial de la entidad;
- g) Dificultad de liquidez que haya determinado demora o incumplimiento de sus pagos.

Para hacer efectivas estas medidas, la Superintendencia de Seguros de la Nación ordenará su toma de razón a las entidades públicas –nacionales, provinciales o municipales– o privadas que estime pertinentes.

Las medidas podrán levantarse para cumplir obligaciones con asegurados, para reinversión del bien de que se trate –en cuyo caso, subsistirán sobre el que entre en su reemplazo– o, cuando se compruebe que el asegurador se halla en condiciones normales de funcionamiento.

Los recursos administrativos o judiciales que se interpongan contra la resolución que disponga alguna de estas medidas serán al solo efecto devolutivo.

Agrégase a continuación del primer párrafo del artículo 87 de la ley 20.091 lo siguiente:

Aun cuando no estén firmes.

## LIBRO II

### DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

#### TITULO I

##### Disposiciones complementarias

##### *Aplicación supletoria*

Art. 156- Las disposiciones de las leyes 18.037 (t.o. 1976) y 18.038 (t.o.1980), y sus complementarias que no se opongan ni sean incompatibles con las de esta ley, continuarán aplicándose supletoriamente en los supuestos no previstos en la presente, de acuerdo con las normas que sobre el particular dictará la autoridad de aplicación.

##### *Regímenes especiales*

Art. 157- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que, en el término de un año a partir de la publicación de esta ley, proponga un listado de

actividades que, por implicar riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro de su capacidad laboral, o por configurar situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos particulares. Hasta que el poder Ejecutivo nacional haga uso de la facultad mencionada y el Congreso de la Nación haya dictado la ley respectiva, continúan vigentes las disposiciones de la ley 24.175 y prorrogados los plazos allí establecidos. Asimismo continúan vigente las normas contenidas en el decreto 1.021/74.

Los trabajadores comprendidos en dichos regímenes especiales tendrán derecho a percibir el beneficio ordinario cualquiera sea el régimen por el cual hayan optado, acreditando una edad y un número de años de aporte inferiores en ambos regímenes en no más de diez años a los requeridos para acceder a la jubilación ordinaria por el régimen general.

Los empleadores estarán obligados a efectuar un depósito adicional en la cuenta de capitalización individual del afiliado de hasta un cinco por ciento (5 %) del salario, a fin de permitir una mayor acumulación de fondos en menor tiempo. Este depósito será asimilable a un depósito convenido.

La determinación de las actividades comprendidas en regímenes especiales deberá encontrarse debidamente justificada, basándose en estudios técnicos cuando ello se considere necesario.

#### TITULO II

##### Disposiciones transitorias. Vigencia

##### *Modificación de la ley 18.037 (t.o 1976).*

Art. 158- Modifícase la ley 18.037 (t.o. 1976), en la forma que a continuación se indica:

1. Agrégase al artículo 13 el siguiente párrafo:

Establécese el monto máximo de la remuneración sujeto a aportes y contribuciones, en sesenta (60) veces el valor del aporte medio previsional obligatorio (AMPO) definido en el artículo 21 de la ley N° ... (la presente), el que se estimará en la forma indicada en el artículo 160 de la citada ley.

2. Fijáanse las edades previstas en el inciso a) del artículo 28 en sesenta y dos (62) años para los varones y cincuenta y siete (57) para las mujeres.

3. Fijáse en veintidós (22) años el mínimo de servicios con aportes establecido en el artículo 28 inciso b)

4. Fijase en sesenta y siete (67) años la edad prevista en el inciso a) del artículo 31.

5. Sustitúyense los incisos 1, 2 y 3 del artículo 49 por los siguientes:

1. Si todos los servicios computados fueren en relación de dependencia, se promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante el período de diez (10) años inmediatamente anteriores a la cesación en el servicio. A fin de practicar la actualización prevista en el párrafo anterior, la ANSES reglamentará la aplicación del índice salarial a utilizar. Este índice deberá ser de carácter oficial, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En caso de jubilación por invalidez, si el afiliado no acredita un mínimo de diez (10) años de servicios, se promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante todo el tiempo computado.

2. Al promedio obtenido de acuerdo con el inciso anterior se aplicará uno de los siguientes porcentajes:

- a) Setenta por ciento (70 %), si al momento de cesar en la actividad el afiliado no excediera la edad mínima requerida por la presente ley para obtener jubilación ordinaria;
- b) Setenta y ocho por ciento (78 %), si a ese momento el afiliado excediera en un (1) año dicha edad;
- c) Ochenta por ciento (80 %), si a ese momento el afiliado excediera en dos (2) años dicha edad;
- d) Ochenta y dos por ciento (82 %), si a ese momento el afiliado excediera en tres (3) años dicha edad. Los incrementos de porcentajes previstos precedentemente no serán aplicables en el caso de reajuste del haber o transformación de la prestación del jubilado que continúe en la actividad o volviere a la misma.

3. Si se computaren sucesiva o simultáneamente servicios en relación de dependencia y autónomos, el haber se establecerá sumando el que resulte para los servicios en relación de dependencia y el correspondiente a los servicios autónomos, ambos en proporción al tiempo computado para cada clase de servicios con relación al mínimo requerido para obtener jubilación ordinaria.

6. Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 55 por el siguiente:

El haber máximo de las jubilaciones otorgadas conforme a esta ley será el vigente a la fecha de la promulgación de la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. A partir de esta fecha dicho máximo se registrará de acuerdo con el artículo 160 de dicha ley.

*Modifícase la ley 18.038 (t.o. 1980)*

Art. 159- Modifícase la ley 18.038 (t.o.1980), en la forma que a continuación se indica:

- a) Fíjase en veintidós (22) años el mínimo de servicios con aportes establecido en el artículo 16, inciso b);
- b) En el artículo 37 sustitúyese la expresión "setenta por ciento (70 %)", por "sesenta por ciento (60 %)"

*Movilidad de las prestaciones*

Art. 160- A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente, la movilidad de los prestaciones, se efectuará en la forma indicada en el artículo 32. Hasta la fecha de vigencia del Libro I de esta ley, se estimará el valor del AMPO en función de la información que brinde la Contribución Unica de la Seguridad Social (CUSS).

El Estado nacional garantiza el cumplimiento de los derechos previsionales adquiridos con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

La movilidad de los haberes de las prestaciones otorgadas o a otorgar por aplicación de leyes anteriores a la presente, que tengan una fórmula de movilidad distinta a la del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, continuará practicándose de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley.

*Ley aplicable a situaciones especiales*

Art. 161- El derecho de los trabajadores autónomos regidos por la ley 18.038 (t.o. 1980) y sus modificatorias, que a la fecha de entrada en vigor de la presente fueran acreedores a esa prestación de conformidad con las disposiciones de la citada ley, se regirá por las normas de la misma, aunque a dicha fecha no hubieran solicitado la prestación.

El derecho a pensión de los causahabientes de los afiliados que a la fecha de entrada en vigor de esta ley fueren titulares de jubilación o tuvieran derecho a ella de conformidad con las leyes vigentes a esa fecha, se regirá por dichas leyes.



*Vigencia de las leyes 21.074 y 24.013*

Art. 162- Esta ley no importa modificación de las disposiciones de las leyes números 21.074 y 24.013.

*Recomposición real de haberes*

Art. 163- A partir del mes siguiente al de la promulgación de esta ley y de la ley de privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., los haberes de las prestaciones otorgadas o a otorgarse por aplicación de leyes previsionales anteriores a la presente, serán recompuestos por la Secretaría de Seguridad Social hasta alcanzar en todos los casos los porcentajes de movilidad legalmente establecidos por las mismas.

Quedan excluidas de tal recomposición las prestaciones cuya movilidad está sujeta a un procedimiento distinto al del sistema integrado de jubilaciones y pensiones.

*Forma de recomposición de los haberes*

Art. 164- La recomposición se efectuará aplicando las normas con sujeción a las cuales se otorgó u otorgue la prestación.

*Derogación de la ley 23.604*

Art. 165- Derógase la ley 23.604. Lo dispuesto precedentemente no es aplicable en los casos en que en la fecha de entrada en vigor de la presente, el interesado hubiera ejercido en forma expresa ante el organismo previsional competente, el derecho acordado por la ley citada.

*Aplicación de los bonos de consolidación de deudas previsionales*

Art. 166- Los tenedores de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales, incluyendo los a emitirse en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, podrán cancelar a la par las obligaciones vencidas al 30 de junio de 1992 en concepto de cargas sociales, aportes o contribuciones que se calculen sobre la nómina salarial que se hallaren a cargo del tenedor y que se adeuden al Sistema Unico de Seguridad Social o a las obras sociales del sector público.

*Ratificación del decreto 2.741/91.*

Art. 167- Ratifícase el decreto 2.741, del 26 de diciembre de 1991

*Derogación de las leyes 18.037 y 18.038, sus complementarias y modificatorias.*

Art. 168- Deróganse las leyes 18.037 y 18.038, sus complementarias y modificatorias, con excepción del artículo 82 y los artículos 80 y 81 que se sustituyen por el siguiente texto:

(Artículos 80 y 81, ley 18.037): Las cajas reconocedoras de servicios deberán transferir a la caja del organismos otorgante de la prestación, los aportes previsionales, contribuciones patronales y las sustitutivas de estas últimas si las hubiera. Deben considerarse incluidos en la transferencia que se establece por la presente, los cargos que adeude el beneficiario, correspondientes a los servicios reconocidos, a afectos de su amortización ante la caja otorgante. La transferencia deberá efectuarse en moneda de curso legal en forma mensual y de acuerdo al procedimiento que se determine en la reglamentación. Será organismo otorgante de la prestación cualquiera de los comprendidos en el sistema de reciprocidad, en cuyo régimen se acredite haber prestado mayor cantidad de años de servicio con aporte. En el caso de que existiese igual cantidad de años de servicio con aportes el afiliado podrá optar por el organismo otorgado. Queda derogada la ley 18.038, sus complementarias y modificatorias, todo con la salvedad de lo que disponen los artículos 129, 156 y 160 de la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

**Libro III****Consejo Nacional, de Previsión Social***Creación y misión*

Art. 169- Créase el Consejo Nacional de Previsión Social, el que tendrá por misión asegurar la participación de los trabajadores, empresarios y beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en el desarrollo, supervisión y perfeccionamiento de dicho sistema.

*Deberes.*

Art. 170- Son deberes del Consejo Nacional de Previsión Social:

- a) Evaluar el cumplimiento de los objetivos de la fiscalización y regulación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones;
- b) Evaluar el desarrollo del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
- c) Considerar las iniciativas y proyectos que le sometan los sectores que representa;
- d) Proponer a las autoridades competentes normas tendientes a corregir desvíos del sistema y mejorar su funcionamiento;
- e) Todo otro cometido vinculado al cumplimiento de su misión.

#### *Atribuciones y facultades*

Art. 171- Para el cumplimiento de sus deberes, el Consejo Nacional de Previsión Social tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

- a) Requerir de los organismos de control del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones toda información que considere conveniente para el cumplimiento de su misión;
- b) Denunciar ante las autoridades competentes todo incumplimiento de los deberes a su cargo por parte de los funcionarios y organismos de control del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
- c) Efectuar por sí o por intermedio de terceros, con sujeción a las normas de contratación vigentes para el sector público, los estudios técnicos tendientes a determinar la evolución del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
- d) Toda otra vinculada o que resulte necesaria para el cumplimiento de su misión y deberes.

#### *Integración*

Art. 172- El Consejo Nacional de Previsión Social estará integrado por tres (3) representantes de los trabajadores, tres (3) representantes de los empleadores y tres (3) representantes de los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con los procedimientos que la reglamentación determine.

El Consejo será presidido por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, actuando como vicepresidente el secretario de Seguridad Social.

#### *Gastos de funcionamiento*

Art. 173- La Administración Nacional de la Seguridad Social pondrá a disposición del Consejo el personal que éste requiera para el cumplimiento de los cometidos asignados en el presente libro.

Los demás gastos que irroque la constitución y funcionamiento del consejo serán imputados a "Rentas generales".

#### Libro IV

#### Compañías de seguros

#### Capítulo I

#### Compañías de seguros vida

#### *Seguro colectivo de invalidez y fallecimiento*

Art. 174- Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 95 y 96, las administradoras deberán en virtud de lo establecido en el artículo 99 contratar un seguro colectivo de invalidez y fallecimiento para sus afiliados.

La suma asegurada en esta contratación se determinará conforme a lo establecido en los artículos 91, 92, 93, 94, 97 y 98 y en las normas reglamentarias que a tal efecto se dicten.

#### *Entidades autorizadas*

Art. 175- El seguro referido en el artículo anterior estará destinado a cubrir en su totalidad el pago de las obligaciones de la administradora y sólo podrá ser suscrito por compañías aseguradoras que limiten en forma exclusiva su objeto a los seguros de personas incluidos en el capítulo III de la ley 17.418. Estas entidades aseguradoras no podrán contratar los seguros previstos en el capítulo II del presente libro.

Estas compañías deberán ser autorizadas en forma expresa por la Superintendencia de Seguros de la Nación, su razón social deberá contener necesariamente la expresión seguros vida, y estarán sujetas a las disposiciones de la ley 20.091.

## Capítulo II

### Seguro de retiro

#### *Seguro de retiro*

Art. 176- Se denomina seguro de retiro a toda cobertura sobre la vida que establezca, para el caso de supervivencia de las personas a partir de la fecha de retiro, el pago periódico de una renta vitalicia, y para el caso de muerte del asegurado anterior a dicha fecha, el pago total del fondo de las primas a los beneficiarios indicados en la póliza o a sus derechohabientes. La modalidad de renta vitalicia a que se refieren el artículo 101 y el apartado 1 del artículo 105 y denominada renta vitalicia previsional queda comprendida dentro de la cobertura prevista en el presente artículo.

#### *Entidades autorizadas*

Art. 177- El seguro referido en el artículo anterior sólo podrá ser celebrado por entidades aseguradoras que limiten en forma exclusiva su objeto a esta cobertura.

Podrán operar en otros seguros de personas pero sólo como complementarios de las coberturas de seguros de retiro.

Deberán estar autorizadas en forma expresa por la Superintendencia de Seguros de la Nación y su razón social deberá contener necesariamente la expresión seguros de retiro. Tales entidades y los contratos que constituyen su objeto están sujetos a las disposiciones de las leyes 20.091 y 17.418 en tanto no resulten modificadas en la presente.

#### *Empresas en funcionamiento*

Art. 178- Las entidades ya autorizadas para operar en el seguro de retiro a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme la resolución general 19.106 de la Superintendencia de Seguros de la Nación conservarán la autorización conferida con los alcances con que les fue otorgada, que se considerará extendida a las modalidades contempladas en el presente capítulo y normas reglamentarias.

## Capítulo III

### Disposiciones comunes

#### *Incumplimientos y sanciones*

Art. 179- Ante el incumplimiento de cualquiera de las exigencias a las que se encuentran sometidas las empresas de seguros a las que se

refiere el presente libro, la Superintendencia de Seguros de la Nación podrá ordenar a la entidad de que se trate que se abstenga de celebrar nuevos contratos y emplazarla para que en el término de treinta (30) días regularice su situación.

De subsistir la observación al cabo de ese tiempo, la Superintendencia de Seguros de la Nación ordenará a la entidad que licite públicamente, dentro del plazo improrrogable de quince (15) días la cesión total de la cartera.

La Superintendencia de Seguros de la Nación fiscalizará el proceso de cesión y la adjudicación no podrá exceder de treinta (30) días a partir del llamado a licitación.

Si la entidad no acatara la orden de cesión o si ésta fuera infructuosa, la Superintendencia de Seguros de la Nación ordenará que se abone a los asegurados con derecho a percepción de rentas al ciento por ciento (100 %) de la reserva matemática y a los que no se encuentren en tal situación, como mínimo, el ciento por ciento (100 %) del valor de rescate, todo ello dentro del plazo y en las condiciones que fije. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la liquidación forzosa de la entidad aseguradora. En tal caso, dichos asegurados serán acreedores con privilegio especial sobre el producido de los bienes que integren las reservas y con la prelación resultante del orden anteriormente enunciado.

#### *Inembargabilidad.*

Art. 180- Los bienes de las entidades de seguros vida y de retiro serán inembargables en la medida de los compromisos de cualquier índole que tengan con sus asegurados. Esta norma no será de aplicación en caso de tratarse de embargos dispuestos en favor de asegurados en ejercicio de sus derechos derivados del contrato de seguro, y los dispuestos por la Superintendencia de Seguros de la Nación en ejercicio de las facultades conferidas por la ley 20.091.

#### *Aprobación de planes*

Art. 181- La Superintendencia de Seguros de la Nación establecerá un sistema de aprobación automática de los planes de los seguros previstos en el presente libro a cuyos efectos definirá previamente las pautas mínimas que deberán satisfacer las bases técnicas y demás elementos técnicos-contractuales de los planes presentados así como también las restantes condiciones que debe satisfacer el asegurador para acogerse al sistema de referencia. Para el caso de los seguros contemplados en los artículos 99, 101 y apartado

1 del artículo 105, las pautas mínimas a las que deberán sujetarse estos contratos serán dictadas en conjunto con la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

#### *Tratamiento impositivo*

Art. 182- Las entidades de seguros de retiro y de seguros de vida estarán sujetas al mismo tratamiento impositivo de las administradoras en las operaciones que tengan relación con la administración de inversiones correspondientes a obligaciones con sus asegurados, a sus cobranzas de primas y al pago de beneficios.

En el cálculo de la base imponible del impuesto previsto en la ley 23.760 en su título I, no serán computados aquellos activos que respondan a la inversión de los compromisos técnicos con los asegurados.

Los valores de rescate que perciba el asegurado no estarán sujetos al impuesto a las ganancias en la medida que se apliquen a la Contratación de otro seguro de retiro.

## LIBRO V

### Prestaciones no contributivas

#### *Edades para la obtención de prestaciones no contributivas*

Art. 183- Fíjense las siguientes edades para la obtención de las prestaciones no contributivas previstas en las normas legales que a continuación se indican, con la salvedad de lo que dispone el artículo siguiente:

Ley	Edad
13.337, artículo 2º inciso a)	70 años
13.478, artículo 9º. modificado por ley 20.267	70 años
22.430, artículo 1º	70 años
23.891, artículo 4º	60 años
24.018, artículo 3º	65 años

#### *Escala de edades*

Art. 184- Las edades establecidas en el artículo anterior se aplicarán de acuerdo con la siguiente escala:

Edades que se incrementan de			
Desde el año			
	60 a 70 años	60 a 65 años	50 a 60 años
1993	67	62	52
1994	68	63	54
1997	69	64	57
2001	70	65	60

#### *Leyes 16.516 y 20.733: Requisito de edad*

Art. 185- Para tener derecho a la prestación no contributiva establecida por las leyes números 16.516 y 20.733, es condición haber cumplido la edad de sesenta (60) años.

Sólo se podrá obtener una prestación fundada en las leyes citadas, aunque el titular hubiera sido acreedor a más de un premio de los previstos por dichas leyes.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes es aplicable a las personas que obtuvieren uno de los premios aludidos en las leyes mencionadas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente.

#### *Extensión a derechohabientes*

Art. 186- En los supuestos en que las leyes de prestaciones no contributivas prevean que en caso de fallecimiento del titular, el derecho acordado se extenderá a los derechohabientes que enumeren, el haber de la prestación de éstos se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98

#### *Financiamiento de prestaciones no contributivas*

Art. 187 - A partir de la promulgación de la presente ley, el pago de las prestaciones no contributivas, acordadas o a acordar, se atenderá con fondos de "Rentas generales".

## LIBRO VI

### Normas sobre el financiamiento

Art. 188- En la medida en que aumente la recaudación de los recursos de la seguridad social el Poder Ejecutivo queda facultado para disminuir proporcionalmente la incidencia tributaria sobre el costo laboral, preservando un adecuado financiamiento del sistema previsional.

Art. 189- Cuando el aumento de los fondos que le corresponden a la Nación, conforme al artículo

3º, inciso a), de la ley 23.548 lo permitiera, Poder Ejecutivo podrá disponer, en la proporción que represente dicho aumento, que el importe abonado en concepto de contribución a cargo del empleador establecida por el artículo 9º de la ley 18.037, t.o 1976 y su modificación, se deduzca total o parcialmente de los mismos.

Art. 190- Anualmente, de manera conjunta con la remisión al Honorable Congreso de la Nación del presupuesto general de la administración nacional el Poder Ejecutivo enviará un informe detallado de la situación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Dicho informe deberá incluir el estado financiero del régimen previsional público, desagregado en las diversas prestaciones que lo componen, así como la situación del régimen de capitalización y de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Asimismo, en el caso del régimen público deberán incluirse las proyecciones financieras de por lo menos cinco ejercicios presupuestarios

Art. 191- A los efectos de la interpretación de la presente ley, debe estarse a lo siguiente:

- a) Las normas que no fueran expresamente derogadas mantiene su plena vigencia;
- b) Cumplida la condición establecida en el artículo 129 de la presente ley, las referencias que la legislación vigente haga a las leyes 18.037 y 18.038, en cuanto al concepto de remuneración a aportes o contribuciones vinculadas a dicho conceptos, debe entenderse como hechas, en lo pertinente, a lo prescripto en los artículos 6º y 11 de la presente;
- c) Las referencias que la legislación vigente haga al concepto haberes de las prestaciones previsionales, deben entenderse como hechas a la sumatoria total de los haberes que el beneficiario perciba tanto del régimen de reparto cuanto del régimen de capitalización;
- d) Con la salvedad de lo prescripto en el artículo 129, esta ley entrará en vigencia al momento de su promulgación, con excepción, de los artículos 158, 159 y 165, que entrarán a regir a los sesenta días de la promulgación.

Art. 192 - Modifícase la Ley de Concurso (ley 19.551), t.o.1984, en la siguiente forma:

1.Sustituyese el primer párrafo del inciso 8, del artículo 11, por el siguiente:

8.Acompañar la documentación que acredita el pago de las remuneraciones y el cumplimiento de las disposiciones

sobre recursos de la seguridad social del personal en la relación de dependencia, actualizado al momento de la presentación.

2. Incorporarse como segundo párrafo del inciso 8 del artículo 11 el siguiente:

El cumplimiento de las disposiciones sobre recursos de la seguridad social deberá ajustarse a las modalidades y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo en la pertinente reglamentación.

Art.193- Los trabajadores que hubiesen prestado servicio bajo dependencia un empleador acogido a las disposiciones del artículo 12 y concordantes de la ley 24.013, podrán acreditar los años trabajados con los mismos en los términos del inciso c) del artículo 19 de la presente ley.

Art.194.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Alberto R. Pierri

*Esther H. Pereyra Armadía*

*de Perez Pardo*

Secretaria de la C. De DD.

## ACLARACION

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación corresponde al mensaje y proyecto de ley 1.560 del Poder Ejecutivo de fecha 25 de agosto de 1992.

**Sr. Presidente** (Menem).- En consideración en general el dictamen de mayoría.

**Sr. San Millán** .- Señor presidente: voy a exponer los fundamentos del dictamen de mayoría por el que se aconseja la aprobación de este proyecto de ley tal cual ha sido remitido por la Honorable Cámara de Diputados.

Cambios estructurales se vienen dando en nuestro país. Las leyes fundacionales de reforma del Estado, de emergencia económica y la ley de convertibilidad, entre otras, fueron hitos en un camino cuyo transitar encaró con valentía este gobierno: el camino del abandono de una situación de inercia hiperinflacionaria, desmantelamiento económico y crisis social.

Aquellas leyes fueron iniciativas creadoras y transformadoras. Este proyecto también es producto de un espíritu innovador que busca dar respuestas definitivas a las profundas crisis del sistema previsional.

Señor presidente: las sociedades que no avanzan, retroceden. Como legisladores de la Nación tenemos la responsabilidad de crear la estructura normativa adecuada para que nuestra sociedad se desarrolle. Y el desarrollo no sólo se mide por las cifras del producto bruto interno sino también -y básicamente- por la calidad de vida que esas cifras representan.

Una sociedad que no protege la vejez y la contingencia de la invalidez no está desarrollada; es una sociedad que sufre de una palmaria injusticia. Proteger es brindar los medios necesarios para que, en este caso, aquellos que trabajaron toda la vida o los que quedaron incapacitados para hacerlo, puedan seguir manteniendo una vida digna.

Hoy más que nunca al tratar este proyecto estamos escuchando los clamores de nuestros mayores y sentimos una gran preocupación por las futuras generaciones. Señor presidente, a nadie le cabe ninguna duda sobre la incapacidad de dar respuesta que tiene el sistema vigente. Algunos sostienen que la solución a esta cuestión pasa por efectuar cambios dentro del mismo. Esta idea, más que solución, agravaría claramente el ya trágico estado del sistema previsional.

En efecto, el actual sistema guarda en su propia dinámica los mecanismos que lo hacen

profundamente deficitario e inequitativo. La idea central en que este se apoya —como todos sabemos— consiste en que las personas en edad activa que hoy trabajan financian los haberes jubilatorios o de pensión de la población pasiva. Como consecuencia de la disociación que existe entre los aportes realizados por un individuo a lo largo de su vida activa y los beneficios otorgados, se genera una incapacidad del sistema para generar los recursos necesarios y para dar cumplimiento a las obligaciones que emanan de la propia ley. Esta establece un haber jubilatorio que oscila entre el 70 y el 82 por ciento (dependiendo de la edad de retiro) de un salario de referencia que se determina tomando los tres años más favorables de los últimos diez de aporte.

Los recursos generados por el sistema resultan totalmente insuficientes, a tal punto que se calcula que si se remunerara a los pasivos sólo con lo que se recauda con los aportes de los activos, los haberes serían en promedio un 26 por ciento más bajos.

Es por ello que recurrir a fuentes externas de financiación o a la emisión monetaria para cubrir su déficit crónicos fue una práctica continua y creciente que no hizo más que llevar a una situación de colapso. En la actualidad aproximadamente un 25 por ciento de las erogaciones del régimen previsional, necesita financiarse con recursos fiscales, imponiendo a la sociedad una carga muy elevada que se suma a la ya fuerte incidencia de los aportes y contribuciones sobre la masa salarial. Aun así, dado el importante número de beneficiarios que han demandado contra el Estado reclamando el pago de haberes de ley, el gobierno en un hecho que no reconoce precedentes en la historia en 1991, consolidó la millonaria deuda de los jubilados y pensionados, y asumió su responsabilidad ante ella, siendo firme su intención de sanear esta dolorosa situación mediante el producido de la privatización de YPF.

Pero, a pesar de ello, esto no constituyó una solución al problema de fondo ya que, aun así, para cumplir con los porcentajes establecidos legalmente se sigue causando un gran impacto en las finanzas públicas, pues no se puede obviar la entrada de ingresos provenientes de impuestos de afectación específica.

Queda claro entonces que no podemos mantener esta situación que nos condena indeterminadamente a un déficit imposible de superar, a no ser que produzcamos un cambio estructural. Esta mezcla de financiación del sistema mediante aportes de trabajadores activos, partidas especiales del presupuesto nacional, emisión

monetaria y la afectación de recursos impositivos es una de las características del estado de emergencia en el que se viene desenvolviendo desde hace años este sistema.

Por otro lado, la evasión —que ha alcanzado niveles superiores al 30 por ciento de las recaudaciones— es otro factor que contribuye a disminuir su tasa de sostenimiento (relación aportes-beneficiarios). El régimen de reparto vigente crea fuertes estímulos para eludir el pago, y la evasión se encuentra naturalmente alentada en el sistema que nos rige, desde que el monto del beneficio jubilatorio no depende del total de los aportes realizados por el individuo sino sólo de aquellos correspondientes a un reducido número de años próximos al momento de su jubilación.

Por lo tanto, existe un gran incentivo a evadir o aportar montos menores, excepto durante los tres últimos años, para que se los tome en cuenta para determinar el haber jubilatorio.

Por otra parte, el exceso de años de aporte tampoco incide sobre los beneficios. Los trabajadores jóvenes, entonces, no perciben la importancia de efectuar la totalidad de las imposiciones legales. Cada peso no aportado es considerado como una ganancia desde el punto de vista del aportante.

Así, este particular sistema de repartos resulta absolutamente inconsistente en el tiempo, puesto que para sobrevivir requiere una tasa de sostenimiento —como dije, es la relación aportes/beneficiarios— creciente o, por lo menos, constante.

Toda esta crisis, que cada vez fue más envolvente, llevó a que en los últimos quince años se ensayaran distintas alternativas de solución. Primero, la incorporación de conceptos no previsionales en el financiamiento del sistema, tales como gravamen al pulso telefónico, el impuesto a los combustibles, etcétera. Segundo, la no actualización de los haberes jubilatorios de acuerdo con lo dispuesto por las leyes, lo que generó una montaña de juicios contra el Estado. Tercero, la concesión de varias moratorias y planes de facilidades de pago para reducir las deudas por evasión. Cuarto, el aumento de los años de aporte efectivo para obtener el beneficio previsional. Quinto, el aumento de los controles burocráticos para limitar la concesión de beneficios de todo tipo. Sexto, la afectación de más recursos impositivos —parte del IVA, y ganancias, impuesto a la riqueza, etcétera— para financiar el déficit previsional.

Todo llevó a que en la práctica el sistema nacional de previsión social, se haya convertido en una gigantesca aspiradora de fondos que pasó de representar el 3,3 por ciento del producto bruto interno en 1977, al 7,1 por ciento en 1992. En 1975, el haber jubilatorio medio en pesos de 1991 era de 372,80 y el total de gastos previsionales equivalía, al 3,2 por ciento del producto bruto interno. En 1991, con un haber promedio de 189,60 representó el 6,2 por ciento del producto bruto interno. Es decir que gastando casi el doble se pagó la mitad de los haberes de hace dieciocho años.

Corregir las inocultables falencias del régimen vigente, sólo se logrará con un profundo y estructural cambio del mismo.

No podemos mezclar el vino nuevo en odres viejos. Debemos darle un nuevo cuerpo a este sistema. No podemos cometer el error de cambiar algo para que nada cambie.

¿Acaso el logro de un sistema equitativo, solidario y eficaz es imposible? Creo que no. La solución no pasa por continuar con este sistema que se convirtió en fuente permanente de frustración. Estamos en presencia de una crisis profunda que no admite modificaciones parciales.

Nuestra preocupación por brindar una solución normativa adecuada no admite demoras ni parches. ¿Cuál es entonces nuestra propuesta? Ella, señor presidente, no hace más que hacer posible, hacer realidad, los principios inocultables y fundantes de cualquier sistema previsional que cumple su misión como tal.

Este nuevo sistema difiere del actual en rasgos esenciales. En efecto, el proyecto de ley previsional que hoy tenemos en consideración en este recinto establece la opción de permanecer en un régimen de reparto o adherir a uno de capitalización.

Este último, en un sentido riguroso, no es de capitalización pura sino más bien tiene un carácter mixto, al combinar la percepción de una prestación a cargo del Estado con los aportes capitalizados en una cuenta individual, que serán el resultado del ahorro realizado en los años de trabajo productivo.

Este sistema hace eco de las tendencias que se perfilan a nivel mundial, de establecer regímenes previsionales de características mixtas. Por un lado, pretende asegurar un nivel de prestación mínima a toda la población mediante un sistema de reparto, financiado con contribuciones obligatorias. Por otro, a partir de ese piso y bajo un sistema de capitalización, los individuos acceden a ingresos adicionales en función de los aportes realizados que se capitalizan en una

cuenta individual o bajo un sistema de reparto de los individuos también acceden a ingresos adicionales a través de la prestación adicional por permanencia.

Del mismo modo, este proyecto se nutre de un conjunto de principios y atribuciones necesarias y apropiadas para erigirse en una instancia superadora del actualmente vigente. Si bien recoge todo un afán modernizador, no deja de lado principios esenciales muy arraigados en materia previsional.

Uno de esos principios, señor presidente, es la equidad. El actual sistema previsional no enarbola ni en su letra, ni en su espíritu, ni en los hechos la realización de este principio.

Conocido es por todos, por haber sido objeto de acalorados debates en el seno del gobierno y de la propia sociedad, la extraordinaria profusión de beneficios otorgados en condiciones excesivamente benévolas que se han producido en los últimos años.

Los regímenes especiales y diferenciales —las llamadas jubilaciones de privilegio— posibilitaron el acceso a prestaciones mayores con menores requisitos o exigencias.

Con respecto a las pensiones cada vez se fue ampliando más la nómina de familiares con derecho a percibirlos, reduciéndose la tasa de sostenimiento por el aumento de los beneficios sin un correlativo aumento de los aportes.

Las pensiones graciabiles —aquellas que se otorgaban sin contrapartida alguna, para atender a individuos en situación de desproporción extrema— proliferaron en forma abusiva. Y ni hablar del curioso crecimiento de las jubilaciones por invalidez, que alcanzó su pico más elevado en años de intensa actividad electoral. En 1987 crecieron un 18 por ciento; en 1988, un 17 por ciento; y en 1989, un 20 por ciento. Estos porcentajes ubican a nuestro país, junto con Uruguay, encabezando las estadísticas mundiales en materia de jubilaciones por invalidez.

Menos reparos, en cambio, ha provocado una situación que es también inequitativa, y se presenta incluso en condiciones de "estricto" cumplimiento de la ley. En efecto, la legislación establece un número mínimo de años de aporte que dan derecho a la obtención del beneficio y determina el monto del haber en función de los ingresos percibidos en los años inmediatos anteriores a la obtención del mismo. De esta manera, el sistema otorga igual beneficio a individuos que aportaban montos muy diferentes durante sus años de actividad.



Señor presidente: si la equidad está fuera del sistema actual, la solidaridad, en los hechos, está muy desdibujada.

Si bien en el modelo de reparto la solidaridad es posible, ella no se encuentra garantizada de manera automática, siendo prueba de ello las situaciones de privilegio a las que me he referido hace instantes.

Este proyecto de ley de reforma previsional combina los principios de capitalización y de reparto, pretendiendo alcanzar la si tesis adecuada entre la solidaridad presenté en el régimen de reparto y la equidad propia de los regímenes de capitalización.

Por un lado, trata, de ofrecer ciertos beneficios mínimos uniformes con criterio redistributivo, pero por el otro respeta el ahorro del esfuerzo individual materializado en el aporte previsional del trabajador.

Señor presidente, debemos acabar con el sistema previsional quebrado e incapaz de asistir con justicia y eficiencia a sus beneficiarios. Y no debemos confundirnos, este sistema no sólo es injusto e ineficiente sino que tampoco es solidario y premia la evasión de aportes privando de importantes fondos a los sectores de menores ingresos.

En el sistema que se propone se establece la posibilidad de optar por la capitalización individual, en la que evadir resulta irracional. No sería lógico que siendo la jubilación el resultado de años de aportes se busque evadir los mismos ya que ello redundaría en el propio perjuicio del aportante y futuro jubilado.

Además, en el régimen que se propicia es claro el mayor control que cada individuo realiza respecto a la evolución de su fondo, aspecto que también desalienta la evasión.

Si hay algo que diferencia al sistema que se propugna del que actualmente nos rige es la tangibilidad y transparencia que ofrece el primero. El afiliado que optare por el sistema de capitalización sabrá en todo momento cuánto tiene en su cuenta individual, cuánto está acumulado y en qué se invierte su dinero. Es decir que cada individuo conoce su situación presente y puede prever el nivel de remuneración que percibirá en su vida pasiva.

Por eso resulta inconsistente el argumento de quienes sostienen que ingresamos en un sistema impredecible. Yo digo, entonces, ¿caso es predecible el actual sistema? Sería interesante preguntarle a nuestros abuelos si de haber sabido el resultado final hubieran aportado con alguna esperanza. Da la sensación, y la experiencia lo ha demostrado suficientemente, que cuando se aporta al sistema de reparto vigente se lo hace a

un gran pozo negro, en donde nadie puede vislumbrar cuál será su suerte.

El panorama que el sistema actual ofrece tanto a aportantes y contribuyentes como a beneficiarios es altamente confuso, siendo permanente causa de frustración de expectativas.

Promete a los beneficiarios una remuneración que se ubica entre un 70 y un 82 por ciento de la que se obtiene en actividad, en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, y contempla un mecanismo de ajuste o movilidad, de acuerdo a la evolución del nivel general de las remuneraciones. Sin embargo, mediante complicados mecanismos de cómputo y actualización se determinan haberes que en realidad distan mucho del 70 u 82 por ciento del salario al cual aspira la persona que se incorpora al sector pasivo.

A partir del momento mismo en que el individuo abandona la actividad; su nivel de remuneración se reduce a menos de la mitad, situación que tiende a agravarse con el transcurso del tiempo, debido a la caída de la tasa de sostenimiento por factores demográficos y económicos.

El aumento permanente de la expectativa de vida promedio de la población, acompañado con una baja tasa de natalidad, genera un crecimiento de los pagos previsionales que deben ser soportados por un número proporcionalmente menor de trabajadores activos. La tasa de sostenimiento que viabiliza el régimen de reparto no debería ser inferior a cuatro trabajadores activos por cada pasivo. Sin embargo, en la actualidad, la relación comentada es de 1,6 activos por jubilado para el caso de personal en relación de dependencia y de tan sólo 0,8 para los trabajadores autónomos. ¿Cómo pretender entonces que un sistema que promete beneficios que no resisten los cálculos económicos financieros más elementales sea creíble?

Todo sistema previsional que no posibilita que los trabajadores se formen expectativas claras acerca de los beneficios que generarán sus aportes está condenado a fracasar.

Señor presidente: otra característica de este nuevo sistema es que permite recuperar el ahorro como una de las fuentes más genuinas de financiamiento de la inversión.

Dentro del régimen de la capitalización, los aportes de cada trabajador se van acumulando en una cuenta individual y se incrementan en la rentabilidad que se obtenga mediante la colocación de los fondos respectivos. El haber resul-

tante guarda una relación directa con los montos aportados y con el número de años de aporte. El hecho importante es que el esfuerzo individual realizado por cada trabajador, tanto en montos como en años de aporte, es la base de la diferenciación del haber que obtendrán distintas personas.

Cada aportante se convierte en un hacedor de su propio futuro, siendo la jubilación el premio al esfuerzo del ahorro durante años de trabajo productivo.

De esta forma, los fondos de pensión perfilan constituirse en una herramienta fundamental para el desarrollo de la economía en su conjunto, al revitalizar el mercado de capitales con ahorros a largo plazo, necesarios para financiar proyectos de inversión.

La repercusión de esta reforma desborda el tema previsional exclusivamente para hacer sentir su impacto en el desarrollo económico del país. Suplantaremos de esta manera un escenario vicioso, en donde el aporte del trabajador no sólo no se destinaba a la inversión sino que se perdía muchas veces por manejos demagógicos, por un círculo virtuoso donde el ahorro de toda una vida de trabajo se canaliza hacia la inversión, que permite a su vez generar más fuentes de trabajo, aumentándose la masa de trabajadores activos y por ende de aportantes.

Pero además, señor presidente, el nuevo sistema propuesto tiene otras ventajas, reconoce otros principios, que no estaban previstos en el anterior.

Al lado del esencial papel que le toca al Estado en la problemática previsional por mandato constitucional, y dado sus profundas repercusiones sociales, este proyecto contiene disposiciones que implican otorgar a los individuos un margen de libertad en la toma de decisiones que conciernen a su futuro como pasivos. Podrán optar por el sistema de reparto o el de capitalización.

Dentro de este último, se respeta la libre elección de la administradora que más lo satisfaga, a la par que se reconoce el derecho de cambiar de administradora hasta dos veces por año.

El aportante también es libre de ampliar su fondo y, por lo tanto, sus posibilidades futuras de ingresos, mediante aportes voluntarios. Incluso, estando en condiciones de acceder a la jubilación, el individuo podrá optar por la modalidad en que desee percibir sus haberes, sea bajo la forma de adquisición de una renta vitalicia o de retiros programados en función del saldo de su cuenta individual.

Decíamos, señor presidente, que al lado del esencial papel que debe desempeñar el Estado en la problemática previsional, se daba un margen de libertad en la toma de decisiones de los individuos como beneficiarios del sistema. Pero también se establece en este proyecto la posibilidad de que la iniciativa privada participe en la gestión del mismo.

Una extrema simplificación de este tema es afirmar que permitir la gestión privada en la administración de los fondos previsionales implica una renuncia del Estado a su rol fundamental en resguardo de los beneficios de la seguridad social. Debemos romper las dependencias intelectuales que hacen pensar que la sociedad civil, a través de las empresas, sindicatos, cooperativas o cualquier otra forma permitida por la ley, no pueda ni deba participar en la gestión de los intereses públicos en el marco de reglas de juego fijadas por el Estado, garante definitivo de la prestación de ciertos bienes públicos.

No hay contradicción entre aquéllos y la gestión privada, como no hay contradicción entre Estado y sociedad. Hay algunos bienes públicos que pueden estar abiertos a la gestión de la iniciativa particular, que de esta forma colabora en lograr resultados eficientes para la comunidad. Gestión privada y gestión estatal colaborando para un solo objetivo.

La previsión social no pierde el status de institución de naturaleza pública por el hecho de que alguna de las instancias administrativas sean delegadas en organizaciones privadas o mixtas.

Queremos un Estado para la comunidad, no un Estado para los intereses de algunos burócratas que quieren proteger su ineficiencia, mediocridad e ineptitud a través de la torre construida con el argumento de que el Estado renuncia a su misión por permitir la gestión privada en las políticas públicas.

¿Acaso el Estado está cumpliendo su misión de garantizar una jubilación digna a través del sistema vigente? ¿Acaso el Estado, en su función legislativa genera el marco adecuado para que sean alcanzados los principios básicos de la seguridad social? La respuesta es un rotundo no, señor presidente.

Y como ya lo dije antes, esto es producto de la propia dinámica del actual sistema, de su propia esencia.

No es posible seguir trasladando el problema hacia adelante, mediante propuestas que son más de lo mismo.

Estamos construyendo un Estado eficiente y eficaz, un Estado que da respuestas; en definitiva, un Estado que tiende al bien común. Ese es su rol, ésa es su misión y ésa es, señor presidente, su razón de ser.

Con esta propuesta de reforma al actual sistema previsional, el Estado será nuevamente en los hechos, el garante de la seguridad social. Estará en el centro de la escena, ya que no sólo fijará las reglas de juego y controlará a las administradoras de fondos de pensión, sino que también será un prestador más de beneficios jubilatorios, dado el carácter mixto de la nueva organización previsional.

La ley desarrolla una cuidadosa red de controles y garantías por parte del Estado nacional, es decir, toda una trama de seguridad que da un sólido respaldo al sistema.

En el caso del régimen de reparto, el Estado garantiza el pago de las prestaciones básicas compensatorias, por invalidez y fallecimiento.

Para el régimen de capitalización, en caso de que una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones haya agotado sus posibilidades de cubrir la rentabilidad mínima, el Estado garantiza que la misma sea reconocida en las cuentas individuales de los afiliados de esa administradora.

Además, para el hipotético caso de que quiebre una administradora, el afiliado de ningún modo pierde los fondos depositados, desde el momento en que los mismos son de propiedad de los individuos y se encuentran separados del patrimonio de la administradora. Estas sociedades, si bien pueden efectuar colocaciones financieras —las cuales están determinadas y limitadas en la propia ley— no pueden apropiarse de los fondos.

Si quiebra una administradora, sencillamente los fondos serán transferidos a otra administradora a elección del aportante, preservándose la integridad de las sumas acumuladas y garantizándose la continuidad del sistema.

Por otra parte, existe un fuerte control del Estado a través del Consejo Nacional de Previsión Social y de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

A esta altura de mi exposición quiero plantear la necesidad de que este proyecto sea aprobado sin modificaciones. En efecto, ¿podemos darnos el lujo de efectuarle modificaciones que implicarían una vuelta a la Cámara de Diputados, con una demora que en este caso sería muy costosa ante las perspectivas de este sistema?

Creemos que el proyecto es perfectible, que hay puntos que pueden ser explicitados para que no

se presten a malas interpretaciones. Por vía reglamentaria o bien a través de un futuro proyecto ampliatorio es factible perfeccionarlo.

Sin embargo, debemos corregir inocultables falencias que determinan bajos niveles de remuneración para el sector pasivo, falta de trato equitativo, endeudamiento y falta de transparencia y confiabilidad. Esto no admite demoras. Perfeccionar no significa dejar de hacer, no significa inmovilidad o aplazamiento. Podemos sólo perfeccionar algo a partir de un sistema apto. Debemos primero remover este estado de cosas que no admite más dilaciones.

No podemos dejar de sancionar una herramienta fundamental e imprescindible. Demorarnos en corregir el despilfarro, la ineficiencia, la falta de transparencia, la inequidad en modificar un sistema cuya propia dinámica hace imposible dar cumplimiento a lo que él determina, no se condice con nuestro compromiso de dar respuestas urgentes a un problema terminal.

Debemos dejar de lado las especulaciones de corto plazo y los rencores del pasado. Debemos ser conscientes de los costos que trae aparejado el retraso en la sanción de este proyecto. El pueblo argentino nos mira con expectativa, con fe. Debemos actuar con decisión y convicción.

Se ha debatido mucho sobre este proyecto de ley que estamos tratando. Hubo marchas y contramarchas, opiniones inconciliables y coincidentes. No podía ser de otra manera; vivimos en democracia y estamos ante un proyecto de vital importancia.

No podemos ni debemos seguir siendo observadores de esta crisis; debemos ser actores; no es tiempo de postergaciones, que en última instancia no tienen sentido cuando se trata de reparar y reconstruir, de empezar a transitar el camino de renovación de un sistema previsional caduco.

Ni exceso de retórica ni de voluntarismos ni posiciones mezquinas permitirán superar las dificultades y afrontar el futuro con justificada confianza.

Señor presidente: he intentado expresar no sólo los problemas que aquejan al actual sistema y que es lo que este proyecto de ley pretende revertir, sino también la necesidad de su sanción. Debemos acabar con la tremenda ironía de un sistema que promete lo que no puede cumplir.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco de la bancada radical.

**Sr. León.** - Señor presidente: entramos a considerar un proyecto de ley que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados y que, para la concepción de nuestro partido, no interpreta nuestros compromisos históricos. En nuestra opinión, también está bastante lejos de interpretar el criterio de los valores básicos del pensamiento social de los argentinos.

La sanción de Diputados muestra que, para que el plan de convertibilidad subsista "en muletas", se sigue escuchando a los intereses creados de afuera con más sensibilidad que a las dramáticas circunstancias que están viviendo actualmente millones de argentinos.

Hay una clásica definición de la guerra, que dice que es una forma de hacer política con métodos distintos. Tal vez, tomando esto como una posibilidad de revertir el concepto, habría que pensar que es muy difícil ir a un combate sin objetivos determinados. Es muy difícil ir a una guerra sin definir qué es lo que se busca, a quién hay que derrotar, qué es lo que tenemos que movilizar y cuáles son las extrañas fuerzas que aparecen como enemigas de nuestra búsqueda.

El proyecto que tratamos es muy trascendente porque no solamente tiene efectos sobre el presente sino que plantea exigencias para el porvenir. A nuestro criterio, el proyecto está montado sobre una circunstancia que no busca custodiar los valores básicos solidarios. Por el contrario, los personajes y los intereses que han estado apareciendo en el diseño y en la remisión de este proyecto nos crean interrogantes sobre si realmente ha de servir para la arrugada sociedad de nuestros viejos o para que algunos hagan un importante negocio financiero. Cuando el otro día se condecoraba al presidente del Citibank éste reclamaba con apuro que el Senado votara favorablemente la sanción de Diputados. Nosotros tenemos la madurez suficiente como para comprender que así es la política, que éstas son sus leyes. Pero los partícipes de este *lobbying* tan tradicional ante el Parlamento tienen que comprender también que nuestra tarea no es la de servir intereses particulares sino la de descubrir un mecanismo que le sirva realmente a la Nación, que saque del campo de la frustración este problema de los jubilados argentinos.

No voy a relatar la historia de nuestras cajas de jubilaciones y de nuestros jubilados. Es una historia larga. Cuando las cajas se formaron, había una relación de cuatro a uno entre activos y pasivos. Muchos aspectos del desarrollo del país, se financiaron con fondos de las cajas de jubilaciones.

Recuerdo que cuando era un muchacho que estudiaba en Buenos Aires, venía frecuentemente a ver las sesiones de la Cámara de Diputados. El doctor Degreef, presidente entonces de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, informaba todos los años el proyecto de presupuesto de la Nación. En los presupuestos de esa época los fondos de las cajas eran usados como recursos genuinos para desarrollar y servir al país. Muchas de las obras que se hicieron en ese entonces tuvieron este origen.

Las cajas se fueron achicando. Surgieron inconvenientes, en parte por la flexibilidad del propio sistema, en parte por abusos, en parte por la inflación. Distintos gobiernos sancionaron leyes para solucionar los déficit de las cajas. El último intento en este sentido fue el del gobierno radical, durante el cual incluso votamos impuestos a los combustibles y a los pulsos telefónicos para ver si podíamos suavizar el desfase de las cajas y custodiar lo que nosotros queremos.

Últimamente, se trató de buscar recursos fuera de lo que tendrían que ser los ingresos naturales producidos por los aportes, tanto del sector patronal como de los trabajadores. Incluso el ministro Cavallo, en agosto del año pasado, firmó un pacto fiscal con las provincias que mostró un federalismo muy generoso, porque abarcó la posibilidad de que las provincias colaboraran con un ingreso trascendente e importante para las cajas.

Algunos dudan de que haya entrado todo. En las declaraciones de un funcionario se reconoció que algunos fondos había sido destinados a otros ministerios. Después, de comprobó que, en efecto, habían ido a otra parte. El funcionario informó que en el pacto fiscal se decía que los fondos irían a las cajas previsionales y serían destinados para otras circunstancias que surgieran, es decir, lo que se llama gastos operativos. Por lo tanto, se había previsto la idea de que podían ser utilizados para otros fines.

Pero creo que todo eso va quedando atrás. En este momento tenemos a los jubilados en la calle. Existe un petitorio avalado por un millón de firmas, por el que se pide que no se sancione este proyecto. Por lo tanto, creo que debemos buscar un equilibrio con criterio nacional. ¿Debemos hacer caso al millón de jubilados que está en la calle o a los financistas extranjeros? Considero que debemos buscar un equilibrio exacto a los efectos de proceder de la mejor manera. Podría ser que algunos de los jubilados que integran ese millón de personas al que me referí,

aconsejados por la desesperación, estuvieran equivocados; y también puede ocurrir que algunos otros sectores aconsejados por el entusiasmo de un negocio, pretendan también que nosotros no podamos encontrar el equilibrio tan deseado.

**Sr. Vaca.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. León.** — Con mucho gusto.

**Sr. Presidente** (Menem). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Vaca.** — En principio, no sé si los financistas externos también han firmado algún petitorio. Pero me parece que la comparación o la elección que nos propone el señor senador es extrema.

Evidentemente, existe un petitorio firmado por un conjunto importante de jubilados, pero podríamos presuponer también que el hecho de que los otros dos millones y medio de jubilados no hayan firmado significaría que podrían estar respaldando la modificación del sistema.

Por otra parte, no solamente están comprometidos en este proceso de cambio que estamos proponiendo los jubilados actuales, sino que asimismo lo están los futuros jubilados, que también deberían ser consultados.

En ese sentido, me parece que quien mejor expresa a la totalidad de la población es la representatividad política, que es la que establece la Constitución. Considero que más importante que las posibles colecciones de firmas que se hayan hecho es la representatividad política que a través de las diversas fuerzas políticas se expresan en el Congreso de la Nación.

**Sr. Presidente** (Menem). - Prosigue el señor senador por el Chaco.

**Sr. Genoud.** — Que para la reforma constitucional se tenga en cuenta el criterio que ha expresado el señor senador Vaca. Lo digo por lo del plebiscito.

**Sr. Presidente** (Menem). — Señor senador por Mendoza: no está en uso de la palabra; le ruego que respete al orador.

Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. León.** — Justamente, yo me estaba refiriendo a lo importante que es lograr un equilibrio.

Está bien; no firmaron los tres millones de jubilados, pero aquí, sobre mi banca, tengo un pedido de la Confederación General de Jubilados, Retirados y Pensionistas del país que descalifica vigorosamente este proyecto. Y tengo las palabras de sectores del trabajo como la del señor Lorenzo Miguel, que en una solicitada de la CGT descalificó este proyecto denunciando que es un gran negocio del sistema financiero.

Obran en mi poder unas declaraciones al respecto. En una solicitada que se publicó el 23 de febrero de 1993 las "62 Organizaciones" hablan de impedir que el sistema previsional se transforme en otro gran negocio de los grupos privilegiados. Esto también lo firman Ubaldini, Miguel y otros dirigentes.

Yo no quería entrar en estos detalles, sino buscar un razonamiento que sirviera para expresar lo que pensamos los radicales de este proyecto respecto del cual nuestro partido está actuando con especial coherencia: el comité nacional tomó una posición; los señores diputados realizaron un debate jerarquizado; existe una propuesta en la Cámara baja y otra aquí, en el Senado, de nuestro compañero de bloque el señor senador de la Rúa.

Evidentemente, lo que queremos no es ganar un concurso de patriotismo sino lograr un acierto — el mejor — en la búsqueda de un mecanismo que sirva al beneficio de estas reservas nuestras que todos respetamos. Digo esto porque hoy allí están nuestros padres y nuestros hermanos y, mañana, quizás estén nuestros hijos, y todos ellos merecen lo mejor.

Este es un drama que a todos nos perturba. Estoy seguro de que ningún senador, de que nadie aquí presente dejará de estar sensibilizado por este problema. Incluso es admirable la manera en que todos los miércoles estos hombres y mujeres vienen a darnos lecciones de vigor y convencimiento en la lucha por las causas en las que ellos creen.

Esta iniciativa debe ser bien estudiada; y es difícil hacerlo. Tiene muchos aspectos técnicos, muchas cuestiones numéricas, y los números se mueven con gran flexibilidad; a veces van para un lado, a veces van para el otro. Tanto es así que debemos ser muy serenos en la consideración de este tema. Incluso, el propio gobierno ha anunciado la necesidad de una rectificación. Esto quiere decir, según parece, que todavía no se han creado las bases para la reconstrucción del sistema de seguridad que nosotros queremos pero con reparos, porque de alguna forma custodia el equilibrio de los ingresos del que se jubila y, además, está cargado de un importante matiz de solidaridad.

Me parece que aquí puede haber algunos apurados. Y al que veo más apurado es al ministro

Cavallo. No sé si esto tiene que ver con el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional en el artículo 14 de uno de los convenios sobre facilidades extendidas. De no ser así, podríamos esperar quince días y asumir el compromiso de buscar entre todos una ley que no responda a un criterio donde quedan tantos jubilados afuera sino una iniciativa que sirva al conjunto de la sociedad.

Días pasados debatimos en este mismo recinto sobre la posibilidad del consenso para la reforma constitucional. También sería formidable lograr el consenso para una reforma previsional que toca y abre la puerta de muchos sectores argentinos.

Recién votamos una ley de defensa del consumidor aceptando la necesidad de realizar modificaciones, pero esta ley ya depende de nosotros; el Senado podría hacerlo. Lo cierto es que ahora estamos anunciando remiendos antes de votar. En consecuencia, se trata de una iniciativa que también tiene problemas.

Considero que en la sanción de este tipo de leyes tenemos que custodiar la significación nacional de este tipo de cobertura.

Fíjense que miembros de algún sector, y lo digo porque considero que debo hacerlo, pero no quiero molestar a nadie —hay fotografías y recortes de diarios que prueban lo que estoy diciendo—, han pedido al presidente de la Nación que vete la garantía sancionada por Diputados por la que se instituye el fondo en cuestión en el Banco de la Nación Argentina.

Ahora bien, de lo que se trata aquí es de que se otorgue una garantía a través del Banco de la Nación a quienes depositen sus ahorros en dicha entidad, y resulta que aparecen bancos extranjeros solicitando que se vete lo que nosotros hemos decidido con relación a nuestro Banco de la Nación. En el caso de que el presidente lo vete estaría conspirando contra el banco de los argentinos y quedando bien con los bancos de afuera. Por eso digo que sería saludable que en este tema custodiáramos el sentir nacional. Al fin y al cabo estamos trabajando con una materia prima que son nuestros abuelos, los viejos nuestros.

Este proyecto de reforma previsional fue muy modificado en la Cámara de Diputados; hubo largos debates y muchas modificaciones. Inclusive, se hicieron *lobbies* de intereses.

En este Congreso se han presentado papeles con muchas firmas. Si se hiciera una consulta popular, de acuerdo con nuestro criterio, esta variante previsional sería rechazada en forma casi multitudinaria. Entonces nuestro bloque no está, como dice el ministro Cavallo, haciendo

oposición por el mero hecho de hacerla. Nosotros andamos por la calle y hablamos con la gente; y si de cada diez argentinos nueve están en contra de este proyecto, creemos que tenemos derecho a estar aquí y manifestar las dudas que tenemos sobre el tema.

Hay algunos funcionarios de la Nación y de las provincias que creen que los legisladores estamos aquí para votar las leyes que ellos quieren. Pero estamos en este recinto para sancionar los proyectos que, de acuerdo con nuestro humilde saber y entender, pueden ser útiles a nuestras ideas políticas y, fundamentalmente, al conjunto de la sociedad.

Muchas veces este Senado ha votado en función del interés de la Nación y, en alguna medida, han quedado atrás los partidos. El problema que se presenta es que se intenta justificar el apuro y ciertos aspectos de esta iniciativa para defender, según mi criterio, un modelo económico que se ha transformado hoy en la Argentina en una especie de olla a presión, con grave riesgo para el trabajo y la producción.

Y el radicalismo es un partido que escucha estas necesidades; somos legisladores nacionales que representamos a provincias cuyas economías regionales andan bastante mal. Me refería al modelo económico porque en comisión algunos hombres comentaron que era muy importante este proyecto para cerrar el plan de convertibilidad dado que significará una capacidad de financiamiento realmente importante.

Los números nadie los tiene; pero más ó menos —según se dice— estarían en los 2.400 millones de dólares anuales. Dependerá de cómo funcione el sistema y cómo responda la gente.

El problema aquí consiste en que nosotros no estamos de acuerdo con este modelo. Entonces, si este proyecto sirve para el modelo y además carga sobre algunos aspectos de la legislación que en el mundo está mostrado que está casi agotada, no podemos estar de acuerdo. El único caso que ha quedado en pie es el de Chile, que es una nación con alrededor de trece millones de habitantes en la que existen entre tres millones y cuatro millones de habitantes marginados. Pero, sin embargo, Chile nos ha comprado El Chocón —que antes decían que iban a bombardear— con plata de sus fondos de pensión. Honestamente, a mí no me haría gracia que el ahorro de los argentinos por vía de algún fondo de pensión fuera invertido fuera del país cuando tenemos

importantes necesidades de inversión aquí adentro. Tal vez habría que hacer notar este problema, porque en el proyecto de ley parece que con el dinero nuestro se puede ir a cualquier lado. Creo que sería saludable que quedara aclarado o reglamentado en alguna medida que aunque sean empresas ligadas a sectores extranjeros —hay bancos muy importantes de nuestro país y otros del exterior que se han interesado en esta cuestión— los dineros que significan ahorro argentino y que tanto necesitamos no se deben ir del país.

Estoy un tanto apurado porque quiero dejar la mitad de mi tiempo para que lo utilice el señor senador Cendoya.

Nosotros, los radicales, tenemos una clara conciencia respecto de este tema. No estamos para nada de acuerdo. Hemos elaborado un despacho en el que hablamos de la falta de claridad técnica, por ejemplo, en la definición del AMPO —Aporte Medio Previsional Obligatorio— como patrón de medida. Además, hemos dicho que con el pretexto de controlar a los fondos de pensión se introducen normas draconianas para la interactividad aseguradora, aunque ella sea ajena a estas prestaciones.

Por otra parte, encontramos que las empresas intermediarias se aseguran una comisión libre aun cuando efectúen inversiones inconvenientes. Fíjense qué cosa particular. Un fondo de pensión puede hacer una inversión muy mala, pero sigue cobrando el mismo interés, o sea el equivalente al famoso *spread* bancario.

Recientemente he leído un artículo en el diario "La Nación", que fue tomado del diario norteamericano "The Wall Street Journal", que manifiesta que la seguridad financiera de millones de jubilados de los Estados Unidos pelagra a causa de las insuficientes contribuciones de las corporaciones, el Estado y las municipalidades a los fondos de pensión y de los cálculos excesivamente optimistas sobre la rentabilidad de sus inversiones.

La lectura que se puede hacer de este comentario es que algún fondo de pensión tuvo en cuenta una tasa del 10 por ciento y ahora resulta que está en el 6 por ciento, por lo cual comenzó a perder dinero.

Ese artículo dice asimismo que el déficit de los fondos de pensión de algunas de las principales compañías de los Estados Unidos seguirá creciendo si no se toman medidas y que, según la agencia gubernamental que se ocupa del tema de las compañías quebradas, el déficit asciende a 59 mil millones de dólares. Por otra parte, en un recuadro que tiene la nota de ese diario se dice

que en busca de inversiones más rentables algunos fondos de pensión están invirtiendo en los mercados emergentes del Tercer Mundo y otros comprando gran cantidad de bonos basura, de alto rendimiento y riesgo.

Tengo aquí también un diario de San Pablo, donde hay una tremenda denuncia sobre algunos fondos de pensión que han comprado acciones de empresas fundidas, razón por la cual hay detenidos.

Con esto quiero decir que debemos ser cuidadosos en todo lo que hagamos. Ya que la mayoría cree tener la seguridad de que este proyecto se va a aprobar y yo, por supuesto, respeto las decisiones, quiero decir que habrá que tratar de que el manejo de este tema sea lo más prudente posible. Lo propio deberá ser la estructura de control, proteica y compleja. Si no actuamos de esta forma, podrá parecer que no vamos a controlar bien.

El miembro informante de la mayoría ya explicó que el proyecto tiene dos variantes: una de capitalización y otra de reparto. Entre ellas habría una transición que es uno de los interrogantes que creo que tenemos todos los senadores. Concretamente me refiero a cuánto va a costar al país y a las cajas la eliminación de uno de los aportantes en los tiempos de la transición.

Sé que algunos sectores gubernamentales creen que los montos no van a ser tan altos porque los ingresos que entrarían como consecuencia del primer pacto fiscal, del año pasado rondarían los 1.720 millones de dólares; pero como ustedes recordarán este pacto fiscal — si no me equivoco— termina en 1995. Entonces, éste es un problema importantísimo.

Una de las preguntas que más me interesa es la referida a los números. En todo caso, primero debatiremos en general y luego podremos conversar sobre los números porque es algo que realmente no está claro. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, senador Britos, en una publicación dio determinadas cifras. Por su parte, el señor Shulthess dio otras en la Cámara de Diputados. Y hace poco se dieron cifras más bajas, pero en todos los casos se trata de miles y miles de millones de dólares.

Entonces, si por un lado estamos tratando de cerrar nuestras cuentas, no sea cosa que por el otro estemos abriendo una tremenda puerta.

Voy a hablar un poco de lo que dice de este proyecto el Consejo Federal de Previsión Social y todas las cajas de previsión social de cada una

de las provincias, donde hay mayoría de gente que representa al partido oficial.

Con respecto a una de esas notas una publicación periodística dice: "Todo el proyecto oficial se estructura en torno de una unidad abstracta: el AMPO (aporte medio previsional obligatorio), pero cuando se estudia el AMPO 'todo lo anterior pierde significación y el proyecto todo suena a disparate', se burla el Consejo del texto que defiende con uñas y dientes Domingo Cavallo. Esta curiosa unidad —que resulta ser el aporte promedio de los que pasan al régimen de capitalización— tiene la particular característica de provocar una permanente e indefinida modificación de su valor, aunque exista la más absoluta de las estabildades. Esto es así porque en el primer valor del AMPO se determinan las cotas máxima y mínima de la base imponible. Como al hacerlo se modifican las condiciones (los que pagaban por debajo de la mínima tendrán que pagar más y los que pagaban por sobre la máxima pagarán menos), también se cambia el valor del AMPO, con lo que obtienen nuevas cotas. Si son mayores que las primeras todos los que aportaban por ellas tendrán que pagar más. Nuevamente el AMPO resultará mayor y el proceso seguirá indefinidamente, describiendo un valor siempre creciente".

Con esto dejo así establecidas algunas de nuestras preocupaciones como radicales respecto de este proyecto de ley. Tengo un informe de asesores de nuestro bloque que realmente es preocupante. En todo caso, pido que luego se incluya en el Diario de Sesiones, cosa que nunca hago ya que no soy amigo de hacerlo, pero en esta oportunidad lo solicito para no hacer perder más tiempo a la Cámara.

Los senadores de la Rúa y Cendoya se van a referir luego a temas más concretos de este proyecto de ley, en el campo jurídico y en el económico. Al comienzo manifesté que tanto el doctor Illia como el doctor Alfonsín intentaron mejorar el funcionamiento del sistema, pero no pudieron. De todas maneras, tampoco me hizo feliz que cuando se privatizaron los teléfonos, la interventora no peleara para que el impuesto que tenían los pulsos telefónicos, cuya recaudación iba a llegar al servicio de los jubilados, permaneciera en la estructura de precios de las empresas telefónicas.

También decía que tenemos un enfoque distinto, porque no creemos mucho en la generosidad del capitalismo. Por lo menos en esto estoy de acuerdo con Perón. Días atrás el obispo de Resistencia, Chaco, calificó a este proyecto de ley

como de "capitalismo salvaje". Lo que yo sé es que con estos modelos estamos avanzando en la pobreza y creo que esto debe tener una consideración. Nuestros jubilados tienen que ganar más. Hay un proyecto que nuestros diputados presentaron, por el que se creaban las condiciones -sin querer hacer ninguna deformación del sistema- para que nuestros jubilados pudieran ganar más.

En el último pacto fiscal el ministro de Economía dijo a los gobernadores: yo fundo a los productores de sus provincias si no me lo aceptan. Porque si no aceptaban el pacto no bajaban el impuesto de sellos y a los ingresos brutos. Pero ahora existe la posibilidad de que los institutos provinciales de los jubilados pasen al área de alguna de estas cajas. Esto es algo que tenemos que cuidar mucho porque hace un poco a nuestro terruño. Y uso este término porque este proyecto, tal como viene, deja totalmente sin cobertura a una cantidad que oscila entre 280 y 320 mil argentinos que trabajan en áreas rurales, lo que contribuirá a agravar más la crisis de las economías regionales. Podemos decir que hoy están a la intemperie; aunque la obra social que los atiende -ISSARA- trabaja bastante bien. De todas maneras, habrá que buscar la forma para que los incluyamos aquí.

Para terminar, señor presidente, diré que nuestro bloque tiene posición tomada sobre este tema.

Voy a leer unas declaraciones del señor Llach, que es una especie de viceministro, ¿no es así? Y dice: "Reduciendo la evasión fiscal se puede financiar la reforma previsional". Eso estaría de acuerdo, de alguna manera, con el proyecto que presentaron los legisladores de nuestro partido en la Cámara de Diputados, tratando de buscar en el país los resortes para mejorar los ingresos del sector de los jubilados.

Tal vez hubiera sido mejor cargar las tintas respecto de cómo evitar la evasión, que aparecer cediendo ante algunas pretensiones, tanto por parte del ámbito internacional como del sistema financiero local.

Ya se sabe que todas las centrales de los bancos han pedido esto y, en algunos casos, ha habido reclamos. Es la primera vez en la historia del país que el presidente de la asociación que nuclea a los bancos extranjeros, que aquí representa al Banco de Nueva York, va a esa ciudad a representar los intereses argentinos. En una palabra, nosotros creemos que el tema debe ser remitido a comisión, que hay que anular este proyecto, que hay que volver al sistema de reparto, que debemos hacer volar la imaginación para lograr, realmente, algo permanente.



No estoy adscripto, ni lo está nuestro bloque, a la posición de que lo que está, está bien, porque todos sabemos que está mal. Hay muchos culpables; o casi todos lo son. En realidad, no podemos, tirar la piedra ya que, si no hicimos, hemos dejado hacer. De todas maneras, se trata de un tema que, realmente, merece ser estudiado a fondo.

Alguien dijo que esto solamente podía conseguirse con la inflación cero. Aquí, en la Argentina, en este momento nadie cree, absolutamente nadie, que la inflación del mes pasado fue cero.

Creo que hay que hacer una reforma muy previsible. Los abogados dicen que el mejor contrato es aquel lo más previsible posible en relación al marco de los compromisos que se contraen.

El que discutimos es un proyecto que, realmente, debe ser muy bien estudiado...

**Sr. Branda.** ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. León.** — En un minuto termino..

**Sr. Branda.** — Ocurre que no entendí un concepto, y quisiera que me lo aclarara.

**Sr. León.** Le concedo la interrupción, señor senador, con la autorización de la Presidencia.

**Sr. Presidente (Menem).** — Ruego a los señores senadores dirigirse a la Presidencia.

**Sr. Branda.** — Perdón, señor presidente. Solicito una interrupción al señor senador por el Chaco.

**Sr. Presidente (Menem).** — Ha sido concedido. Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Branda.** — De acuerdo con sus palabras, entiendo que usted admite que el sistema está en crisis, que no sabe cuál es realmente la solución para salir de ella. Asimismo, expresó que le parece que el proyecto del oficialismo —en su concepto y en el del radicalismo— no aporta ningún tipo de solución y que solamente encaja en un modelo económico.

**Sr. León.** — Todos estamos de acuerdo.

Nosotros tomamos un camino y este proyecto que cuenta con dictamen de mayoría tiene otro sentido.

No quiero quitar tiempo a la Cámara, pero pensamos que, en primer término, el proyecto no mejora la situación de los jubilados, no da garantías. ¿Qué puede ocurrir con un individuo al que durante treinta años le sacan sus ahorros, y al cabo de ese tiempo, no sabe qué ocurre?

Quien maneja los fondos siempre sabe dónde invierte y cuánto gana. ¿Por qué no propendemos a que los propios dueños de los fondos participen en el manejo de ellos? Esta es una vieja actitud y aspiración nuestra.

El peronismo y el radicalismo hablaban de nacionalizar los servicios. Siempre hablamos de nacionalizar, de participar los usuarios y técnicos de la empresa en su propio manejo. Acá sería importantísimo que los jubilados manejasen un poco sus propios fondos.

Hace cuatro días el ministro Cavallo dijo que el que no vota este proyecto de ley no merece ser político, no merece tener representaciones ni merece gobernar el país. Se está volviendo totalitario el ministro o, por lo menos, caprichoso.

Quiero decir que los radicales vamos a votar contra esta iniciativa porque creemos que así estamos defendiendo a nuestra Nación y a nuestra gente. Preferimos, en este caso, perder una votación y defender a nuestro país, en lugar de ganarla haciéndonos socios así de los factores de nuestra decadencia y de nuestra dependencia. Si estudiamos los últimos años de la historia argentina veremos que, nombres más o nombres menos, muchos de los grandes culpables de la decadencia argentina aparecen ahora a cargo de las empresas privatizadas, cuando ya se hartaron de ganar dinero a costa del Estado nacional. ¿Ahora pretenden darnos lecciones de patriotismo?

No estamos para nada de acuerdo con este proyecto de ley. Entre la disyuntiva de apoyar a los que piden que se vete al Banco de la Nación o al millón de personas que solicitaron la anulación de este proyecto, nuestro voto estará a favor de la gente. Pensamos que ese millón de personas vale más que el señor que ha pedido que votemos algo en contra del Banco de la Nación.

Hay muchos otros senadores de mi bloque que van a hacer uso de la palabra. Si yo tuviera poder de convencimiento, pediría que no votemos esta iniciativa y que vuelva a comisión para seguir con su estudio. El propio miembro informante -ya sabe cómo lo respeto al señor senador San Millán- ha dicho que van a venir proyectos de modificación. Entonces, ¿por qué no esperamos diez días más y tratamos todo junto, modificando lo que es necesario?

A nosotros no nos asusta el tema de la capitalización. Pero así como está planteada en este proyecto, sí nos asusta.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, bloque autonomista.

**Sr. Romero Feris.** — Señor presidente, señores senadores: hoy estamos considerando un proyecto que tiene una tremenda y fundamental importancia. Por eso, en la reunión de presidentes de bloque de ayer, propuse que sería conveniente postergar por unos días el análisis y tratamiento de esta iniciativa, con el objeto de ponernos de acuerdo en algunas cuestiones fundamentales que pueden contribuir a su mejoramiento, de modo que podamos sancionar así un texto que contemple las aspiraciones de todos los sectores.

Aquí se ha reconocido que vendrán proyectos que modificarán esta iniciativa. Es decir que se está aceptando que ella tiene profundos defectos y que es necesario analizarla en profundidad y concienzudamente, con un estudio realmente trascendente, para luego considerarla.

No puedo dejar de señalar con aflicción, en nombre de mi bloque, que al tratar este proyecto de ley de reforma previsional nos hallamos ante una situación que supone una grave alteración de las reglas que corresponden a una sana formación y sanción de las leyes. Frente a la decisión que se ha tomado en el sentido de tratarlo en el día de la fecha, adelanto que mi posición —y también la del senador por Corrientes del bloque liberal, Aguirre Lanari, quien me pidió que hablara en su nombre porque tuvo que viajar por razones de urgencia a su provincia— es que vuelva a comisión. Porque resulta paradójico que se le esté exigiendo a este Congreso de la Nación su funcionamiento por medio de una campaña de acción pública cuando en realidad se está requiriendo que prescinda de cumplir su cometido específico, que es el análisis de cada asunto antes de proceder al debate. Es de la discusión de donde surge el perfeccionamiento de las normas que llegarán a la categoría de leyes de la Nación. Marginar a la Cámara de esta labor conduce a obtener una caricatura de ley, cualquiera sea su contenido.

Todos sabemos, señor presidente, puesto que es un hecho público y notorio, que también ha señalado el miembro informante, que no hay posibilidades de introducirle enmiendas a este proyecto. Sin duda, es una iniciativa altamente compleja, difícil en su mayor parte técnica, que merece un análisis para el cual hemos recurrido, por supuesto, al asesoramiento de nuestros especialistas. No es en absoluto fácil interpretar este proyecto.

En cierta manera, se ha dispuesto un tratamiento a libro cerrado, a pesar de que exista un dictamen de comisión. En efecto, por diversos motivos no

se aceptan enmiendas: porque en Diputados fue difícil sacarlo, porque aquí podría demorarse, etcétera. Pero, si legislamos con responsabilidad, es importante analizarlo al máximo para incorporarle las mejoras que, evidentemente, necesita.

Por otra parte, se dice que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya está preparando un proyecto de enmiendas, un proyecto corrector, con el cual, evidentemente, se está tratando de eliminar los defectos que, sin lugar a dudas, se han reconocido en esta iniciativa.

Me pregunto, entonces, y hago extensiva la pregunta a los integrantes del bloque oficialista, ¿por qué motivo no podemos corregir este proyecto tratando conjuntamente las correcciones que están elaborándose? Porque los inconvenientes que podrían presentarse en la otra Cámara debido a su composición se van a presentar igualmente tanto cuando venga el proyecto corrector o cuando mejoremos el que estamos tratando ahora.

-Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Conrado H. Storani.

**Sr. Romero Feris.** — Si se teme no reunir ulteriormente el quórum necesario en la Cámara de Diputados, ¿qué podemos hacer con respecto a este proyecto si no le incorporamos las mejoras que todos deseamos? Y en este aspecto, estoy de acuerdo en que respecto del agregado de normas complementarias, el Poder Ejecutivo no va a vacilar en darles carácter de ley por el repetido camino de los decretos de necesidad y urgencia, inconstitucional remedio y constante modo de legislar del actual gobierno. Asimismo, rechazo...

**Sr. Molina.** —¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Romero Feris.** - Sí, señor senador.

**Sr. Molina.** — Me es grato escuchar al señor senador por Corrientes que se preocupa por los decretos de necesidad y urgencia. En el año 1986, cuando se produce la crisis del sistema, se hace evidente que el mismo ya no funciona y se dicta, precisamente, un decreto de necesidad y urgencia que fue el 2.196, si la memoria no me falla. Se trató de un hecho muy conocido y originó un sinnúmero de juicios. A través de este decreto se paralizaron los pagos a los jubilados porque, simplemente, el sistema estaba agotado, y no por culpa del gobierno de entonces sino por los diversos acontecimientos que se producían desde hacía tiempo. El sistema, en sí

mismo, se desfinancia porque recién se comienza a aportar a partir de los treinta y cinco años.

Entonces, como digo, se origina el decreto de necesidad y urgencia al que me refiero y algunos equipos, en el país, comienzan a estudiar la forma para solucionar el tema de los aportes a las cajas de jubilación.

Así, se creó el impuesto a los combustibles y ésa fue una de las causas por las que YPF dio pérdidas. Fue un gran componente impositivo para YPF. Luego, se creó el impuesto a los pulsos telefónicos.

Finalmente, cuando se consideró que estas empresas debían privatizarse debido al déficit que arrojaban, pasamos a ocuparnos del diez por ciento del impuesto a las ganancias. Por último, ya en una situación más extrema, le sacamos el quince por ciento a la coparticipación.

Me preocupa que el señor senador por Corrientes —y lo digo con toda sinceridad— crea que su bloque o su partido encontrará la propuesta adecuada después del 3 de octubre.

Digo esto porque desde 1986 a la fecha han pasado siete años y todavía estamos sin esa propuesta.

Nosotros encontramos ésta, que es similar a la de Chile, a la de México y a la del Brasil y Perú: se trata, de un sistema de capitalización con una prestación básica. Esta es la propuesta que hace el justicialismo. Pero le reitero que salvo la propuesta que ha formulado el señor senador de la Rúa, nosotros no hemos podido conocer, para enriquecernos, el aporte que el señor senador por Corrientes dice que encontraremos después del 3 de octubre.

Finalizo con estas palabras y lo hago preocupado porque, si bien su aporte podría ser interesante, tal vez lo podríamos haber tenido hace tres años, por ejemplo, y haber trabajado en esto durante todo este tiempo. Pero llevamos ya siete años desde 1986 y no se me ocurre en qué forma podría beneficiarnos demorar la consideración de este asunto durante diez días.

**Sr. Presidente** (Storani). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Romero Feris.** — Creía que iba a ser una interrupción, y no un discurso el que iba a pronunciar el presidente del bloque oficialista, no obstante lo cual le digo a mi amigo el senador Molina que en 1986, en declaraciones que hice en aquel entonces, efectué mis observaciones y propuestas sobre este tema, pero no era legislador entonces, sino gobernador de mi provincia.

Por otra parte, obran en este Senado algunos proyectos que he presentado referidos al régimen

previsional. Pero ocurre que a veces no se tratan en el tiempo debido ni con la celeridad que las circunstancias exigen.

Además, quiero señalarle al señor senador Molina que a lo largo de mi exposición tengo puntualizadas, por el trabajo de los asesores, no solamente las críticas sino también las propuestas acerca de toda esta cuestión. En todo este tiempo hemos formulado la propuesta; yo no tengo la culpa de que el senador Molina no la conozca.

Continúo, señor presidente. Asimismo rechazo las presiones generadas desde el Poder Ejecutivo instando a las entidades e instituciones intermedias a efectuar lo propio sobre este Congreso Nacional como una suerte de intimación a que el Poder Legislativo "trabaje" —así, entre comillas— en desmedro de la auténtica labor que los legisladores realizan.

Pero agrava más la situación todavía el hecho de que ello se vuelque para la sanción de una ley a mi criterio defectuosa —insisto—, de éxito dudoso en la manera en que se busca su sanción, pero que se presenta a la opinión pública y al mundo empresario en particular como la panacea que corregirá profundos males de nuestro sistema previsional a la vez que será fuente de una gran masa de capitales que financiarán la inversión a riesgo.

En este aspecto, señor presidente, quiero agregar algo más: Yo no dije: "Después del 3 de octubre"; dije que era necesario estudiar en profundidad el tema e introducirle las modificaciones necesarias para su mejora. Entonces, no establecí una fecha concreta.

Continúo. No puedo dejar pasar por alto las expresiones del señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, doctor Cavallo, que el pasado 8 de julio durante las IV Jornadas Bancarias organizadas por la Asociación de Bancos de la República Argentina se dirigió a empresarios y bancarios requiriéndoles apoyo para instar al Congreso Nacional a sancionar este proyecto de ley, pues dijo: "Vamos a dejar las cosas muy bien para que funcione un sistema competitivo".

Esto no tiene otra lectura que un adelanto explícito de un veto sobre el artículo 40, que introduce la garantía bancaria del Banco de la Nación Argentina.

También sorprende que el señor ministro haya condicionado públicamente la reducción de los aportes patronales con destino al régimen previsional a la sanción de este proyecto de ley

por cuanto, como es de suponer, en función de los números de la recaudación ya pudo haberlo hecho.

Se advierte que esta iniciativa ha motivado un general rechazo de aquellos que ya se hallan en situación de pasividad y que tienen muy serias dudas sobre su futuro. Tampoco es aceptado por aquellos próximos a jubilarse, que ven elevar de inmediato la edad requerida y la cantidad de años de aportes efectivos. Los restantes mantienen un desconocimiento generalizado del sistema, de sus ventajas y sus desventajas.

Finalmente, las futuras sociedades administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones se hallan dubitativas respecto del éxito de este proyecto. ¿Acaso procura el gobierno un nuevo golpe de efecto con sentido electoral como el de las recientes declaraciones de inflación cero? Pocos han creído esta última cifra, diferente de las que arrojaron los institutos privados especialistas en el tema; diferencia que enjugará en algún mes en el futuro cuando las cifras ya hayan perdido su valor específico.

Se vaticina que a través de este proyecto de ley se conformará un gran mercado de capitales que se canalizará en inversiones de riesgo, con lo que se afirmará y potenciará el crecimiento económico.

Pero en materia de pronósticos, señor presidente, hay que recordar que no constituyen el fuerte, a mi criterio —es totalmente personal lo que estoy diciendo— del gabinete económico. Añadamos a las desafortunadas cifras de la balanza del comercio exterior, por ejemplo, las proyecciones realizadas por el señor ministro Cavallo para justificar, ante este recinto, su negociación de la deuda externa con los bancos comerciales, según las cuales la tasa de interés a largo plazo, que entonces era del 7,90 por ciento anual tendería a subir, por lo cual se apresuraba a cerrar dicho convenio. Recuerdo que el ministro vino en aquella oportunidad al Salón Rosado y allí formulé algunas preguntas que no le parecieron bien; pero después los hechos me dieron la razón. Recordamos que se enfatizó que era igual el descuento explícito del 35 por ciento que el que se lograría con los Bonos Par, por la menor tasa. Así, a sólo un año y medio, la tasa mencionada ha caído a menos del 6 por ciento anual, con lo cual el Plan Brady tendrá para la Argentina un sobre costo, que pudo haberse ahorrado, del orden de los 500 millones de dólares anuales.

Se preguntará qué vinculación existe entre estos comentarios y la propuesta de reforma de la ley previsional. Señalo que estos puntos de conexión son muchos pues no hay sectores estancos en el plano de la economía, así como tampoco este

tipo de medidas pueden dejar de tener consecuencias en el plano social. El país transita un momento de muy delicado equilibrio en el que ha alcanzado la estabilidad desde el punto de vista del valor interno de la moneda. Se trata de una estabilidad deseada, por supuesto, y asumida por todos, producto del sacrificio generalizado de toda la gente y sostenida con la misma constancia por ella, pero también a todas luces provisoria y endeble.

El respaldo de la circulación monetaria, con más los depósitos de los bancos en el Banco Central, es decir, de la base monetaria, con reservas en oro y divisas, incluidos los títulos públicos de dicho Banco Central, sumado al equilibrio de las cuentas públicas a costa de una presión fiscal que ahoga a los sectores de la producción primaria, son condición necesaria para el mantenimiento del valor de la moneda, pero están muy lejos de ser también condición suficiente.

El país ha sido colocado dependiente de una corriente de capitales y una vez agotado el proceso de privatizaciones y disminuida la prima de riesgo-país, quedaremos sujetos a que factores exógenos —cualquiera sea la causa externa y sobre la cual careceríamos de influencia y participación— detengan la corriente o la amengüen a cantidades insuficientes para cubrir las necesidades anuales que hoy están en los diez mil millones de dólares, y que crecerán del mismo modo que aumenta en progresión geométrica el endeudamiento privado externo.

Entonces, si se fuera seguir equiparando. — como pareciera instarse desde la cúpula del gobierno— a la estabilidad con la convertibilidad igualitaria del peso con el dólar, en lugar de separar estos conceptos como recíprocamente respaldatorios, pero independientes por sí mismos, estamos colocando todo este enorme esfuerzo de ajuste en situación de regresar a sus comienzos.

Por eso se abre el interrogante respecto de un plan de previsión social, que más debiera llamarse de ahorro obligatorio individual respecto de sus inmediatos resultados sobre los ahorros del trabajador. Adviértase que de la forma en que está concebido recaen sobre él, sobre sus ahorros, todos los riesgos futuros en cuanto lo puedan condenar al fracaso. Desde el principio hasta el momento del retiro sus cuentas estarán sujetas a todas las contingencias del mercado financiero, a fenómenos políticos con consecuencias degradantes sobre ellas, a crisis mundiales

como ocurriera con las subas del petróleo en la década del 70 y, en general, a todo proceso inflacionario o depreciatorio de los ahorros de los cuales nuestra historia económica reciente puede dar vastísimos ejemplos: conversión de los depósitos fijos en moneda extranjera a moneda argentina; canje compulsivo de títulos públicos y depósitos en moneda nacional a plazo fijo por bonos externos, consolidación y cancelación de deudas a tasas reducidas, etcétera.

Se halla muy inmediato el recuerdo del daño producido por los dos saltos hiperinflacionarios vividos entre junio y agosto de 1989 y entre enero y marzo de 1990 como para que la gente salga a colocar, digamos alegremente, sus dineros a plazos de veinte ó treinta años o todavía más. Lamentablemente, esto es así, y desearíamos que no lo fuera. Por esto todos estos cambios que encierran propuestas a largo plazo deben requerir una gran dosis de prudencia, particularmente para la implementación y transición, virtud esta que la propuesta que estamos analizando desconoce.

Señor presidente: adelanto que considero necesaria y urgente una modificación del sistema actual de seguridad social. El vigente ha perdido su condición original de sistema de capitalización y ha devenido en los hechos como un sistema de reparto, que además ha dejado de ser solventado por los aportes personales de los trabajadores y por las contribuciones de los empleados, para ser costeadado además con la imposición, directa o indirecta, de los bienes y consumos de la población.

Al pretender conformar un nuevo sistema de previsión social no debemos prescindir de la historia de lo sucedido en nuestro país; de cómo un modelo que llegó a ser fuertemente superavitario en la década del 50, por influencia de la incorporación masiva de mediados de la década anterior como resultado de la incipiente industrialización del país y de las extensiones de los regímenes previsionales, terminó colocando sus excedentes en bonos de la Tesorería con rendimientos fijos que se licuaron en la década del 70. O sea que aquel régimen previsional pasó entonces a constituir la fuente de financiamiento de un estado benefactor y pródigo en subsidios, pero que finalizó sin poder atender las propias obligaciones con sus aportantes.

No bastaron el incremento de los aportes, tanto personales como del empleador, ni la derivación de impuestos específicos a los consumos como lo fueron a los combustibles, a los pulsos telefónicos o al consumo de gas para mantener el sistema, por cuanto a la vez que crecía el número de los beneficios y su duración en razón de la

mayor expectativa de vida decrecía en forma progresiva el número de cotizantes, sea por reducción del trabajo en relación de dependencia como por el incremento de la evasión, especialmente en el sector denominado de los trabajadores autónomos.

Hemos llegado entonces, a través de distintas experiencias, a este sistema actual de financiación de un régimen de reparto, conformado por una contribución del trabajador y del empleador calculada sobre el monto de la remuneración y sobre una base fijada por las autoridades para los trabajadores autónomos con más lo que produce el sistema impositivo nacional a través de la cesión a la previsión social de un 15 por ciento de la recaudación de los impuestos coparticipables, de 2 puntos del impuesto al valor agregado, del producido del impuesto a los bienes no incorporados al proceso económico y de una porción del impuestos a las ganancias.

Debemos destacar aquí el tremendo esfuerzo solidario que han realizado y realizan las provincias —esto es importante tenerlo en cuenta— al ceder tan gran parte de sus ingresos, no menor a los 300 millones de pesos mensuales, según la última recaudación de agosto; fondos que se revierten principalmente sobre la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, por ser el sitio de residencia mayoritaria de los jubilados y pensionados del sistema nacional.

Por este camino se ha alcanzado el equilibrio de las cuentas previsionales, incluso hay un superávit manifiesto, pero lamentablemente el mismo no se ha destinado por entero a satisfacer las necesidades de la clase pasiva, incluso más allá de la aplicación irrestricta de las normas legales, por cuanto éstas nunca pudieron prever el hecho de la sobrevaluación de nuestra moneda, que de este modo convierte en sumas irrisorias, desde el punto de vista del poder adquisitivo, el monto de los beneficios acordados. Previsión social es mucho más que una simple cuenta actuarial, pues detrás de ella se esconde un ser humano, el principal motivo de toda nuestra acción y de toda nuestra actividad política.

Amparado en la lectura de una cláusula ambigua del anterior pacto de gobernadores —repetido camino para presionar al Congreso— se han derivado fondos a cubrir deficiencias financieras de la Tesorería nacional. Pero lo cierto es que hoy el sistema aparece como superavitario lo que piensa incluso incrementarse a raíz de las nuevas disposiciones de orden impositivo, dictadas al margen del Poder Legislativo, que posi-

bilitarán aumentar la recaudación en tanto que permanecerán congelados los beneficios acordados.

Es en este marco y con las connotaciones históricas apuntadas que se presenta este nuevo sistema que se autodenomina Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, destinado a cubrir las contingencias de la vejez, invalidez y muerte y que se integrará con el sistema único de seguridad social.

El sistema se manifiesta como mixto por estar integrado por un régimen previsional estatal que instituye un sistema de reparto, y por un régimen basado en la capitalización individual, que se titula régimen de capitalización.

Inspirado —como aquí se ha dicho— en el sistema chileno de capitalización implantado en noviembre de 1980 por el decreto ley 3500, aún cuando sin la obligatoriedad absoluta que aquél establece, el proyecto que examinamos continúa atado al concepto o variable "remuneración", "sueldo" o "salario" para determinar la cuantía de los aportes personales y patronales para todos los trabajadores en relación de dependencia, a pesar de que se desentenderá de ellos para la determinación de los beneficios, que pasarán a depender de una unidad de cuenta denominada "AMPO" o del saldo capitalizado de una cuenta de ahorro.

A mi juicio, señor presidente, se desperdicia aquí una ocasión inmejorable para disminuir el denominado costo salarial argentino, lo que se lograría desvinculando al haber jubilatorio futuro de la contribución del empleador en función del monto del sueldo o retribución del trabajador porque, señor presidente, ¿qué es, en definitiva, un sistema previsional sino un pacto solidario intrageneracional e intergeneracional, por el cual una sociedad con un profundo sentido ético se abstiene —expresado en términos económicos— de realizar consumos presentes para transferir ese poder adquisitivo a otros integrantes de su generación que por razones de ancianidad, invalidez, viudez u orfandad no puedan ganárselo, sin descuidar el traspaso hacia el futuro, resguardando su posibilidad de conservar el nivel de vida alcanzado?

Un doble camino servía de ruta a estas transferencias. Por un lado, el mayor costo de la producción que significa la absorción de la contribución patronal provoca, por tanto, la reducción de la capacidad adquisitiva de bienes por parte del trabajador y, por el otro, por la disminución del ingreso neto del mismo por la retención de un porcentual de su haber con destino a este sistema solidario.

No es sencillo pero sí posible evaluar a cuánto asciende el verdadero costo del sistema previsional vigente, considerado desde el punto de vista de la incidencia en la estructura del gasto, pero estando decidido prescindir del concepto nominal del sueldo o salario para la determinación del beneficio, se pueden igualar los totales de los montos a pagar con los montos a percibir por la aplicación de un tributo que, ampliando la base, sustituya los aportes patronales. De este modo, se puede lograr una auténtica disminución del denominado costo argentino, que halla su antecedente en los convenios de corresponsabilidad gremial del sector agropecuario.

Entiendo que es destacable que han existido varios intentos en lograr una absorción de esta naturaleza, como lo fuera a fines de los 70 el traspaso al impuesto al valor agregado o posteriormente el llamado Impuesto al Excedente Primario de Empresas; pero padecieron defectos en su concepción que los tornaran totalmente inaplicables.

Hoy puede y debe replantearse el debate, de manera de desvincular los conceptos de la seguridad social de los montos de los salarios, sustituyéndolos por sistemas de mejor fiscalización y de igual incidencia en el costo final de los productos.

A su momento, será la sociedad toda la que se pronunciará sobre el nivel de costo que significa la seguridad social, puesto que tomará conocimiento explícito del porcentaje del precio que paga por ella, lo que es decir a cuánto asciende su privación en aras del sistema solidario.

Por otra parte, convengo en la obligatoriedad del ahorro individual traducido en una cantidad que se deduzca de la retribución. Ahora bien, estimo que aquella debe ser a su vez un monto fijo, creciente en función de la edad del trabajador, facultándose a destinar los importes del primer tercio de su vida laboral, contada a partir de la edad fijada por la ley, a la adquisición o construcción de la vivienda propia.

Se cumpliría así el precepto constitucional que establece el artículo 14 bis, de la Constitución Nacional en cuanto declara el derecho de todo habitante a acceder a la vivienda digna.

Estas ideas no han podido ser materia de debate en el seno de las comisiones, ni tampoco lo será, seguramente, en este debate como dije al comienzo, señor presidente habida cuenta de la negativa a aceptar modificaciones; pero es mi deber dejarlas planteadas y manifestar que esta es una ocasión desaprovechada de replantear el costo laboral dentro del sistema previsional

desde el punto de vista conceptual, y no como un accesorio a la mejora de la recaudación previsional, que no puedo dejar de reconocer y elogiar. En este aspecto de alguna manera estoy, diciendo al señor senador Molina que iba a efectuar algunas propuestas, de acuerdo con sus manifestaciones en el sentido de que él nunca había escuchado iniciativa alguna sobre este tema.

Señor presidente: reitero mi posición favorable a la instauración de un sistema mixto de previsión social. He sido, soy y seré partidario de la iniciativa privada, que ha demostrado a lo largo de toda la historia ser más eficiente y beneficiosa para la comunidad, con ventajas respecto del manejo público de los negocios, pero no de privatizar todo lo que se encuentre en el camino. Sin embargo, estos planteos deben ser considerados a la luz de los preceptos de la seguridad social, que se sustentan en la solidaridad y en la equidad.

Por ello, todo sistema que se proponga debe respetar integralmente ciertos derechos -por la propia naturaleza humana se sufren riesgos en la vejez, la muerte o la invalidez, careciendo de los medios para afrontar las desventuras- a través de un pacto solidario con los congéneres que conforme a principios éticos les transfieren parte de sus ingresos, con el contralor y supervisión del Estado, que ha otorgado carácter constitucional irrenunciable a la previsión social.

Por esto, entiendo que el proyecto en revisión es una propuesta perfectible y lo ratifico, puede y debe ser un punto de partida necesario para implementar un auténtico sistema mixto, el cual debe ajustarse a las características propias de nuestro país, cuyas vivencias registran las consecuencias devastadoras de los dos picos hiperinflacionarios recientes y condicionan gran parte de sus actitudes en los fenómenos económicos.

En la forma en que se ha presentado a este Senado, sin apoyatura técnica -que demuestre la factibilidad económico-financiera del régimen que se pretende imponer, debo señalar que el proyecto adolece de diversos defectos cuyas principales características y consecuencias negativas paso a precisar brevemente para culminar mi exposición.

En primer lugar, no hay mención concreta a la situación actual de la clase pasiva, que asciende a 3.400.000 personas, aproximadamente, en el sistema nacional. Por el contrario, pareciera que aquellos quedan marginados de una propuesta y reducidos a sus niveles actuales de retribución, que no concuerdan, pese a las manifestaciones oficiales en tal sentido, con los beneficios que las leyes les acordaron.

Por otra parte, aun para aquellos casos en que sea exacto aquello debe primar entonces el principio de solidaridad que corrija ese valor y lo incremente al punto necesario para una vida digna, una vida con bienestar.

En segundo lugar, no se contemplan las particulares situaciones de los trabajadores agropecuarios que se movilizan con las cosechas y cuyo número no es inferior a los 300 mil individuos. Esto supone dejar sin amparo a similar número de familias, por lo que debe instrumentarse y sancionarse conjuntamente un régimen especial para atender estas situaciones que acabo de mencionar.

En tercer término, la distribución de los futuros fondos a generar por el sistema que se sancionaría no permitirá alcanzar una adecuada atención de las necesidades que la seguridad social debe tomar a su cargo. De este modo no se cumplirá el compromiso solidario entre los integrantes de una generación entre sí y con respecto a las venideras.

Considero, en cuarto término, que de producirse el anunciado veto de la garantía que el Banco de la Nación Argentina otorgaría a sus ahorristas se colocaría a estos en una situación de debilidad y de impotencia frente a los acontecimientos que puedan suceder.

La falta de garantías de una rentabilidad cualquiera, por mínima que sea ella, por parte de las administradoras de los fondos de jubilaciones y de pensiones, puede derivar en un serio obstáculo para un acceso optativo al sistema.

Por otra parte, no me cabe duda alguna, señor presidente, de que los futuros consorcios empresarios, o de la naturaleza que la ley permite, no habrán de tener dificultades en superar por contactos, por tecnología y por vinculaciones las rentabilidades que obtenga el Banco de la Nación Argentina, cuya eficiencia, si bien es loable, siempre estará sujeta a las restricciones de las empresas públicas.

En quinto lugar, el proyecto coloca en situación desventajosa a los beneficiarios de menor edad en el período de percepción de los beneficios. Mayor deterioro será para el caso de una viuda con varios huérfanos de corta edad. Falta entonces hallar el equilibrio compensador y solidario para dar a cada uno de estos casos según su necesidad y no según el saldo de la cuenta del causante de la desventura.

En sexto término, si bien pareciera que los impuestos coparticipables que detallé estarían

compensando hoy la disminución futura de la recaudación, no deben sobreestimarse los resultados del ahorro que se piensa generar, por cuanto una parte importante de los mismos deberá derivarse al sector público para financiar la transición.

Algunos estudios colocan -definido un escenario de crecimiento del 3 por ciento anual- que el sector público no podría desafectar los impuestos destinados a su financiación hasta el año 2030 y otros llevan esta fecha a no menos del año 2050.

Como séptima observación -y última- el sistema integrado aparece como oneroso en conjunto, si tenemos en cuenta que la sumatoria de los costos de las administradoras de los fondos de jubilaciones y pensiones, con más los correspondientes a los seguros de vida que se instituyen, se suman a los actuales costos de recaudación y fiscalización de los contribuyentes, que han de incrementarse notoriamente ante el necesario aumento del número de cotizantes.

No aparece definido si existirá una distribución de ese costo o si será absorbido por el régimen de reparto, en detrimento de los que opten por este sistema y de los actualmente en pasividad.

Existen otros aspectos puntuales en el articulado relativos a situaciones de invalidez y de pensión que también son corregibles, habida cuenta de que hubo omisiones nacidas de las reformas introducidas al proyecto original en su tratamiento por la Cámara de Diputados. De igual manera hay situaciones como las de los trabajadores en estado de subocupación que, por su reducido ingreso, prácticamente no tendrán ningún tipo de integración al sistema; lo propio sucede respecto de extranjeros que estén ya radicados en nuestro país pero que no alcancen los años de aporte exigidos. De la misma manera, quedan desprotegidos en caso de invalidez; en caso de muerte, sus viudas y sus huérfanos carecerán de toda protección.

Son situaciones que, como dijera anteriormente, exigen su resolución legal, puesto que el agregado de la Cámara baja en este sentido no está suficientemente definido.

Señor presidente: realmente deploro que un proyecto de tanta significación institucional reciba este tratamiento, que he calificado al comienzo como virtualmente "a libro cerrado". No se ha dado participación a los bloques provinciales en los trabajos de comisión que se hayan realizado.

Por los motivos que he desarrollado durante esta exposición, solicito que el proyecto, como ya anticipé, sea remitido a las comisiones a las que oportunamente fue girado, a las que deberán

agregarse las de Asuntos Constitucionales, de Economía y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, como solicité en ocasión del ingreso del proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Romero Feris.** — Sí, cómo no.

**Sr. Presidente** (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Con el permiso de la Presidencia y la gentileza del señor senador cuyo discurso bien fundado he estado escuchando con atención, quiero aclarar que no sólo los bloques provinciales no han tenido una verdadera participación en los debates realizados en comisión, tal como acaba de señalar el señor senador por Corrientes.

En realidad, tampoco los senadores de la Unión Cívica Radical hemos podido participar de tales inexistentes debates. Se hicieron algunas reuniones y otras, a las que concurrimos los legisladores del radicalismo, se vieron frustradas. No hubo un verdadero tratamiento del tema, salvo en una ocasión cuando asistió un funcionario.

Por otra parte, el dictamen que se elaboró surgió de una reunión que se realizó en forma simultánea con la sesión que estaba celebrando el Senado para tratar el tema de la reforma constitucional y la reelección presidencial. Algunos legisladores estábamos absorbidos en el recinto por ese debate y consecuentemente no pudimos asistir a ese importante encuentro. Es cierto que podríamos haber hecho una objeción formal pero no quisimos plantearla para no entorpecer con formalismos lo que en definitiva eran posiciones incambiables; es decir, la favorable de la mayoría y la nuestra de rechazo al dictamen del oficialismo y en favor de nuestra propuesta alternativa.

Quise aclarar cuál había sido la posición de los senadores de la Unión Cívica Radical y advierto en este sentido que hay coincidencias con la queja que acaba de formular el señor senador por Corrientes en cuanto a lo sucedido con los bloques provinciales.

**Sr. Presidente** (Storani). - Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Corrientes.



**Sr. Romero Feris.** — Terminó, señor presidente. Considero que es esta Cámara quien debe introducir las reformas para que, como muy bien dijo el señor ministro Cavallo en su oportunidad, el sistema quede "muy bien" para el conjunto de la sociedad. En efecto, es en el Congreso de la Nación donde se expresan los representantes del pueblo y de las provincias; y debe respetarse su voluntad, aunque se difiera con algunas de las opiniones vertidas por algunos de sus integrantes. En definitiva, se olvida el sistema republicano. Se olvida la división de poderes. Se olvida que está el Congreso de la Nación para elucidar en profundidad estos temas, que son trascendentes, fundamentales y nos preocupan a todos.

**Sr. Presidente** (Storani). Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Bravo.** — Señor presidente: participo de este debate en el que consideramos el proyecto de ley sobre reforma del sistema nacional de previsión social, que viene en revisión de la Cámara de Diputados.

Con gran certeza se han expresado otros señores senadores en el sentido de postergar la consideración de este proyecto hasta después del acto eleccionario del 3 de octubre. Ello es así, porque acordar la presentación de otros proyectos que contengan las modificaciones que habría que introducirle a éste —con el único motivo de evitar su vuelta a la Cámara de Diputados—, está poniendo de relieve una técnica sobre la cual, al menos nosotros, debemos llamar la atención.

Concretamente, a este proyecto se le deben introducir todas las modificaciones que sean necesarias, dejando así un texto claro que evite las incoherencias originadas en la amplitud de algunas de sus figuras, penalidades excesivas, superposición de sanciones, equiparación de penalidades entre las figuras de origen doloso y las de origen culposo, incremento de las penas en el caso de que el autor fuera funcionario público, exclusión de la libertad bajo caución y correlación entre el monto del perjuicio y la fianza.

Esta enumeración, al solo título de ejemplo, pone de manifiesto la inconveniencia del tratamiento de este proyecto de ley, y también la urgencia del Poder Ejecutivo que impulsa su consideración.

El Senado debe ser custodio de la seguridad jurídica que las normas que sanciona deben brindar a la comunidad. Aprobar entonces este proyecto, dejando que las modificaciones se hagan por vía del decreto reglamentario o bien por otra ley aclaratoria o complementaria, no hará más que contribuir al generalizado sentir de la falta de seguridad jurídica, que embarga no sólo a los argentinos sino que también preocupa a

aquellos que, desde afuera, quieren invertir en nuestro país.

Nuevamente debo decir en este recinto que el apresuramiento hará cometer errores al gobierno nacional.

Para evitarlos es conveniente no tratar este proyecto y dejar que las comisiones logren desandar el camino para que pueda llegarse a un texto que no deje flancos ni para el veto del Poder Ejecutivo, ni para las modificaciones por la vía espuria del decreto reglamentario o por una nueva ley aclaratoria.

Cualesquiera de estas vías no son de depurada técnica legislativa. Actuar en consecuencia con esta propuesta será dar un signo positivo a la ciudadanía, que verá con qué seriedad trabaja el Senado.

Mucho me preocupa este aspecto porque el proyecto de ley tiene significados trascendentes. Uno para la actual clase pasiva. ¿Mejora su condición? Otro para los futuros miembros de esta clase. ¿Perdurará el sistema sin crisis de financiamiento?

La seguridad social ha sido una de las banderas del Partido Bloquista, levantada hace casi 80 años. La Constitución de San Juan de 1927 refleja, acabadamente, los principios de la seguridad social y jurídica. Estas, nuestras banderas y doctrinas, unidas a la realidad del sistema de previsión — que sin lugar a dudas está en crisis — nos obligan a ser cautos, a estar seguros de nuestra posición al sostener la necesaria adecuación de la ley a estos tiempos, pero todo ello en resguardo de estos principios de justicia social cuyo fundamento es la solidaridad entre los hombres.

No es nuestro deseo que esta solidaridad — componente imprescindible del sistema previsional — alumbre mal o con serias deficiencias.

Sostenemos esto porque nos preocupan algunos precedentes reconocidos por las mismas autoridades económicas del gobierno nacional.

Para recomponer la situación económico-financiera, fuertemente deficitaria del régimen vigente, se sancionaron leyes que hoy, debemos decirlo, no se cumplen.

Es el caso del porcentaje establecido en la ley 23.696 de los ingresos originados en las privatizaciones; que es del 30 por ciento, y el de la precoparticipación federal de la ley 24.130, que es del 15 por ciento.

Estos fondos han sido desviados a los tesoros provinciales de aquellas provincias que han suscripto el Pacto Fiscal.

Si bien como representantes de las provincias en el Congreso Nacional nos preocupa la situación de sus tesoros también nos inquieta esta desviación, reveladora de la no existencia de recursos genuinos para atender el sistema.

Peor aún será, si debemos computar que el traspaso al futuro sistema privado le significará a las arcas del tesoro nacional una suma de tres mil millones de pesos.

Para la Secretaría de Ingresos Públicos esta cifra debería recuperarse con mayores ingresos por vía impositiva que serán el resultado de, primero, el aumento del número de los obligados a contribuir —caso del blanqueo de los autónomos— y, segundo, de un mayor nivel de producción.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador Juan Carlos Oyarzún.

**Sr. Bravo.** — No dudaríamos en suscribir este pensamiento oficial, en tanto y en cuanto podamos conocer hoy que este tremendo sacrificio tendrá resultados en el futuro.

Si debemos actualizar el sistema de reparto, que está basado en la relación entre los aportes del trabajador activo y los haberes que recibe el jubilado, esa actualización no debería significar la renuncia a los principios de la solidaridad, unida al esfuerzo de todos los argentinos que son los que aportan los tres mil millones de pesos, a un negocio de riesgo individual. Aun en la instancia de considerar como único objetivo la creación de un mercado de capitales.

Tampoco negamos que esto sea necesario. Pero sí creemos que lo es sincerarse al elegir los caminos para el logro del objetivo buscado.

Por ello, no debemos permitir que en aras de sostener este proyecto se sacrifique a los actuales trabajadores pasivos y, encima, no se brinde ninguna seguridad a los futuros integrantes de esta clase.

Tengamos presente que legislamos para el futuro de la inmensa mayoría de los argentinos. Si hoy permitimos el origen de una ley con los señalados errores, sujeta a otras vías y normativas para su pensado mejoramiento, estaremos dando una prueba acabada de la incomprensión de la realidad que es necesario y debemos modificar.

Finalmente, señor presidente, reitero la posición expresada en la reunión de presidentes de bloque en el sentido de postergar la consideración de este proyecto hasta después del 3 de octubre.

**Sr. Presidente** (Oyarzún). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital, bloque radical.

**Sr. de la Rúa.** - Señor presidente: la suerte está echada. Ya está resuelto por la mayoría llevar adelante este proyecto de ley.

A nosotros lo que nos preocupa es la situación de los jubilados argentinos. Esta iniciativa no resuelve, no contempla la situación de los jubilados. El objetivo declarado es crear un mercado de capitales y, en todo caso, regular el problema de las jubilaciones futuras siguiendo más o menos el sistema chileno.

Debo decir ante todo que el actual régimen previsional precisa modificaciones profundas e importantes. Está en crisis, una larga crisis que viene de arrastre por el reiterado problema de haber usado los fondos previsionales para otros destinos. Así se los fue vaciando sucesivamente y se ha llegado a este cuadro de frustración para nuestros mayores, que ven que los aportes que hicieron durante toda una vida de trabajo no les son reconocidos en haberes dignos.

El proyecto original del Poder Ejecutivo —sobre el que el presidente de la Nación dijo que no había que tocarle ni una coma— sufrió muchas modificaciones en el camino. Es una lástima que no haya existido más amplitud para el diálogo, a fin de que un asunto que compromete a varias generaciones de argentinos sea el resultado del raciocinio, del análisis y del consenso.

El presidente habló de no modificar ni una coma; sin embargo, más que una coma fue modificada. Se han modificado párrafos enteros y, en algunos casos, se ha atenuado el excesivo rigor del proyecto original, absolutamente derivado de las administradoras de fondos de pensión privados. Se ha incorporado la opción para permanecer en un sistema estatal o entrar al sistema privado. Se ha incorporado también algo que en la iniciativa presentada por mí era muy importante: el reconocimiento de los aportes que han venido efectuando quienes todavía no son jubilados.

Es preciso recordar aquí los estremecedores anuncios que se hicieron en un principio cuando se daban por perdidos todos los aportes realizados hasta el momento de la sanción de la ley. Ahora, en cambio, se toma algo incluido en aquel proyecto: se establece un coeficiente fijo de aportes para el cómputo del haber de cese; esto por lo menos ha traído un alivio.

Estamos en discrepancia con este proyecto de ley porque no resuelve el problema de los actuales jubilados y aleja para ellos la esperanza de una mejora. Para financiar el nuevo sistema se toman aportes que hoy corresponden al actual. Hay un problema de financiamiento que será cubierto quién sabe cómo. Yo leo con atención ese inciso que se refiere a Rentas Generales. ¿Tomará créditos el Tesoro? ¿emitirá bonos? ¿tomará en préstamo de las administradoras de fondos de pensión los recursos de que disponga pagando comisión? Un sistema que tiene que buscar financiamiento aleja la esperanza de un aumento en el monto de los haberes que los jubilados perciben. Se dice que contribuirá al incremento de la recaudación previsional; esto es lo que se miraba como la base para un aumento de la jubilación, ahora será, en todo caso, el medio para financiar el déficit.

En ese sentido, preocupan declaraciones hechas en la IX Convención de ADEBA por las autoridades oficiales, y que fueran publicadas en los diarios del martes 24 de agosto de 1993, a través de las cuales se manifestó la intención de reducir a la mitad los aportes previsionales. Si esto ocurriera, ¿cuál será la situación del sistema actual? Nosotros creemos que la necesidad de adecuar la actual legislación a los nuevos tiempos, pero sin renunciar a los principios solidarios vigentes en la mayor parte del mundo.

El problema más afligente de la seguridad social en el mundo es la crisis de financiamiento. Todos los países afrontan, en mayor o menor medida, la insuficiencia de recursos para hacer frente a la creciente demanda de prestaciones para cubrir los riesgos que plantean contingencias como la vejez, el desempleo, la enfermedad y la muerte. Con excepción de Chile, casi ningún país acudió a un sistema de capitalización individual para resolver esos problemas; y ninguno de los organismos internacionales con competencia en la materia recomendó dicha alternativa.

Quiero citar a la Asociación Internacional de la Seguridad Social, que rechazó expresamente los sistemas de capitalización individual o completa. En la 5° Reunión Regional Americana realizada en 1991, en Canadá, se señaló que la crisis económica que afecta a la mayoría de los países ha hecho que muchos economistas ajenos a la temática de la seguridad social hayan visto en ella un medio efectivo de obtener rápidamente una importante fuente de ahorro para financiar planes de reconversión o el déficit fiscal.

También se dijo que un ejemplo concreto de tal estado de cosas lo constituye el hecho de que se postulen hoy regímenes financieros de ahorro

individual capitalizados o de capitalización completa, cuya inviabilidad económica en el largo plazo ha sido rigurosamente demostrada hace más de cuarenta años.

Con respecto a este tema mucho se ha hablado desde el gobierno de la situación económica financiera deficitaria del actual sistema de reparto. No debemos olvidar que varias administraciones usaron sus fondos genuinos para fines no específicos. Se trata de un sistema que ya en 1993 fue recibido por nuestro gobierno en profunda crisis. Nuestro gobierno buscó su recapitalización y el aporte de fondos adicionales a través del impuesto a los pulsos telefónicos y a los combustibles, este último lamentablemente derogado después, contribuyendo al desfinanciamiento del sistema. En una evidente transferencia de ingresos, se suprimió el impuesto a los pulsos telefónicos para permitir que las empresas concesionarias aumentaran sus tarifas.

En este tiempo hemos visto en forma reiterada el incumplimiento de leyes en la materia por parte del gobierno nacional. Recordemos el veto a la adjudicación para el sistema previsional de las acciones telefónicas o de los fondos provenientes del acuerdo fiscal con las provincias, que debían destinarse al aumento jubilatorio y que el gobierno ha reconocido luego de una denuncia del senador Oraldo Britos que tuvieron otro destino.

Todo este tema tan importante abrió un amplio debate en nuestra sociedad y ha sido motivo de mucho estudio por parte de los legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical.

Hace un tiempo nosotros propusimos una sesión especial de la Cámara de Diputados que, por unanimidad, recomendó que se estudiara el modo de otorgar un aumento de emergencia para los jubilados. Esto desató las iras del gobierno, que lo calificó, como todo reclamo para el sector, como demagógico. Pero no era así, en proyectos concretos hemos señalado la posibilidad de pagos mayores que los actuales con recursos genuinos, señalando su fuente. Sobre esto no es posible hacer demagogia, porque se trata del respeto a nuestros mayores.

Uno de nuestros proyectos demostraba que se podía solventar un ingreso mínimo entre 280 pesos y 300 pesos mensuales utilizando para este fin los aranceles de importación, que habían crecido notablemente con el aumento de las importaciones en el país.

Hay una cuestión de vital importancia a ser considerada en este proyecto. Se trata de la des-

financiación de la transición, es decir, el efecto que producirá el trasvasamiento de los aportes de los trabajadores al sistema privado de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Al carecer de estos fondos el sistema público no sólo no podrá aumentar los actuales haberes, sino que nadie podrá garantizar su permanencia y podrá haber una eventual cesación de pagos para sus beneficiarios al no existir en el proyecto oficial un cálculo efectivo de factibilidad económica y financiera que permita al menos mantener los actuales ingresos.

A manera de ejemplo, debo señalar que la Secretaría de Seguridad Social, el 2 de septiembre de este año reconoció por medio de su titular, en la reunión de comisión, un desfinanciamiento mínimo promedio de siete millones de pesos.

Aquí tenemos nosotros una preocupación central. ¿Cómo se financiará el déficit? ¿Qué endeudamiento interno generará? ¿Cómo se superará en el tiempo? ¿A quién se transferirá el peso de la nueva deuda interna que se genere? Esta es una cuestión que no tiene respuesta.

¿El objetivo es crear un sistema jubilatorio sólido o generar ahora un mercado de capitales que se precisa para dinamizar la economía? Los recursos no salen de la nada, no aparecen del aire. Se trata de los mismos recursos que ahora están, que van al sistema estatal de reparto o a ser administrados por las compañías administradoras de fondos de pensión. ¿Cuál es el motivo de la transferencia, con la que se originan mayores gastos con motivo del pago de comisiones?

El gobierno ha dicho muchas veces que no se ofrecía una alternativa, y la alternativa estaba en encontrar entre todos la solución de consenso. Se reunieron un millón de firmas de jubilados, pero el hecho cayó en una completa indiferencia. El proyecto tenía que seguir adelante así, pese a las advertencias de riesgo, que incluso llegan desde los Estados Unidos, por la posible crisis de los fondos de pensión. Allí inversiones en inmuebles, que parecían seguras con la caída de los precios inmobiliarios, han puesto a los fondos en peligrosa situación.

Hace poco tiempo estábamos en Chile con el señor senador Cafiero y leíamos las notas de los diarios acerca de cómo están cayendo las altas cotizaciones que los títulos tuvieron en un primer momento. Evidentemente, cuando un sistema es nuevo, recibe un gran caudal de fondos, pero cuando empieza a ser necesario pagar las prestaciones ahí llega la hora de la verdad. Está claro que las administradoras van percibiendo su comisión, pero a los futuros jubilados les queda la

expectativa o el interrogante de cómo estarán las cosas al final del camino.

Aunque aquí se privatiza el sistema, el Estado finalmente estará siempre atrás con la responsabilidad latente.

Es por eso que hay que oír la voz del pueblo, que quiere que el Estado mantenga su responsabilidad en materia de seguridad social. De allí que nuestra propuesta se basa en mantener un sistema de reparto, saneándolo. Esto está previsto por ley. Fue una iniciativa radical que el 30 por ciento de todas las privatizaciones se destinase al sistema previsional. Entonces, es necesario hacer el esfuerzo en cada presupuesto anual para aportar fondos y recomponer dicho sistema. La única forma será estableciendo una administración autónoma intangible de los recursos previsionales para que no pueda repetirse la experiencia de utilizarlos para otros fines.

El otro paso indispensable es mejorar la recaudación previsional.

En el proyecto que presenté en la Cámara de Diputados hace unos dieciocho meses, con anterioridad al proyecto del Ejecutivo, se establecía el cruzamiento de la fiscalización de los aportes previsionales con la Dirección General Impositiva.

Se ha dado un buen paso al reunir en la Secretaría de Ingresos Públicos tanto la recaudación impositiva como la recaudación previsional.

Es necesario combatir la evasión fiscal y tender a reducirla. Es claro que uno de los mayores problemas de esta evasión se presenta en el sector de los trabajadores autónomos porque no se han creado los alicientes o incentivos para que se inscriban y aporten. En la juventud nadie piensa en el retiro, por ello los sistemas son compulsivos y obligatorios.

Es necesario crear un incentivo. Al respecto, he visto como posibilidad dar a los aportantes alguna cobertura asistencial en materia de salud, de manera que al mismo tiempo que se atienda un servicio social básico de salud aporten al sistema capitalizando su jubilación futura.

El proyecto que presenté —similar en sus lineamientos al que posteriormente presentó el bloque de diputados radicales y que nuestra bancada ha hecho propio— se llama "de solidaridad recíproca generacional". Una generación financia a otra su retiro pero el que se retira también ha estado aportando para construir el sistema y unos a otros contribuyen a la seguridad del retiro en la edad mayor.

Y hablo de solidaridad recíproca generacional teniendo en cuenta no sólo a los futuros jubi-

lados sino, fundamentalmente, a los actuales jubilados y pensionados. Para que esto sea posible es necesario mantener el sistema de reparto en el que las actuales generaciones aportan los fondos con que se solventan los actuales beneficios. Para ello, el proyecto prevé aportes obligatorios a partir de los dieciocho años. De este modo, el estado mantiene el principio de previsión social, garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, a través de una comisión administradora de fondos previsionales —ente público no estatal—. También mantiene el carácter integral irrenunciable, manejándose los fondos con completa autonomía.

Por otra parte, incluí una norma especial para llamar a la cooperación del sector privado, dando la posibilidad de que entidades intermedias controlen los fondos y la evasión, de forma de evitar deformaciones o debilidades por las que la burocracia permitió la caída de la recaudación previsional.

Un punto esencial de mi proyecto era el respeto a los derechos adquiridos en anteriores legislaciones, manteniendo para los actuales jubilados el 70 y el 82 por ciento para determinar el monto a percibir, de acuerdo con la ley, al momento del cese del servicio. Y obrando con sensatez, en una actitud contraria a toda demagogia, marcaba el aumento gradual de la edad de cese, llevándola a 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Pero en forma gradual, de manera que progresivamente, cuanto menos tiempo le faltara a alguien para jubilarse, más corto sería el plazo en que obtendría la jubilación. Y hacia atrás se prolongaba un poco más hasta llegar a la coincidencia completa.

El proyecto dispone la certificación y actualización de los aportes realizados por los beneficiarios; crea el Documento Nacional Previsional del trabajador y del empleador; establece la contribución patronal en el 16 por ciento; y determina que el aporte del trabajador en relación de dependencia sea del 11 por ciento de su ingreso, y el del trabajador autónomo del 16 por ciento. Asimismo establece un coeficiente fijo de aportes para el cómputo del haber de cese: a mayor cantidad de años de aporte, mayor será el beneficio jubilatorio.

Este es el incentivo: el sistema de reparto se combina con la capitalización, porque el que más aporta más percibe y aquí se pone justicia distributiva en el sistema. El coeficiente será de 2,381 por ciento para las mujeres, y de 2,127 por ciento para los hombres, por cada año ingresado efectivamente al sistema. Así, quien haya aportado veinte años tendrá un haber de cálculo

de 42,54 en el caso de los hombres, sobre los últimos diez años del haber de cese. Para aquel que haya aportado cuarenta años, el cálculo se hará sobre la base del 85,02 por ciento. En mi proyecto se requiere un mínimo de veinte años de aportes efectivamente ingresado al sistema para acceder al beneficio ordinario.

Por su carácter principal, pero no excluyente, se permite y se regula en la ley el acceso del trabajador que lo desee, para aportar en forma voluntaria y complementaria en entidades privadas. Es el sistema que rige en la mayor parte de los países desarrollados. Hay un sistema estatal mínimo de reparto. Y luego, una jubilación voluntaria y complementaria en la que el Estado tiene la responsabilidad de controlar las inversiones y que no se convierta luego este sistema en una frustración.

También nuestro proyecto prevé algo que no he encontrado en el oficial. Me refiero a las asignaciones complementarias y preferenciales por situaciones particulares: edad avanzada y/o carencia de familiares asistentes. Es una experiencia que vi en Israel, donde no se uniforma todo como si las situaciones fueran idénticas, sino que se tienen en cuenta determinadas circunstancias particulares como la enfermedad, la extrema edad, la soledad, etcétera, a fin de que la asistencia sea más efectiva y oportuna.

Por otra parte, mi proyecto contiene una iniciativa que sueño un día pueda ser realidad. Se trata de la creación de un sistema solidario de asistencia a cargo de organizaciones de voluntarios convenientemente preparados para brindar asesoramiento, asistencia y acompañamiento a los mayores. Esto es una experiencia que también he visto en Israel, en donde grupos de voluntarios, muchos de ellos jubilados, con buena salud, trabajan para ayudar a aquellos que están necesitados de apoyo, de compañía o de ayuda. Esto da fuerza a este sentido solidario, íntimo, que debe tener todo sistema jubilatorio.

Finalmente, el proyecto de mi autoría dispone la participación de los jubilados en las decisiones y en el control del sistema, lo cual es de fundamental importancia para lograr que los recursos no se desvíen.

Señor presidente: se han dado muchas opiniones sobre esto; y la principal es la de los propios jubilados y la de la sociedad misma, que considera que es importante la iniciativa privada pero que en materia previsional tiene que estar presente la responsabilidad primaria del Estado. Sobre el sistema que se adopta, hay un estudio

muy importante elaborado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires que demuestra los problemas del proyecto.

También se ha expedido el Consejo Federal de Previsión Social; y hay otros trabajos que fueron remitidos a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, como los presentados por la Confederación de Jubilados y Pensionados y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con claro contenido crítico.

Señor presidente: ésta es la situación en la que estamos: una ley fundamental -porque compromete a varias generaciones y recoge una crisis que ha transitado por varios gobiernos- es resuelta compulsivamente por una decisión oficial que impone un criterio en vez de buscar un consenso, cuando todos teníamos la disposición de encontrar respuestas a un problema que las precisaba.

En el país no se pueden resolver las cosas que van más allá de los gobiernos y vienen desde más atrás de ellos diciendo que a esto no hay que cambiarle ni una coma. Hay que lograr que prevalezca la racionalidad y que los temas puedan ser discutidos.

Ya ven que, en cuanto a aquello de lo que no se podía tocar ni una coma, desde decimos a nosotros que no ofrecíamos alternativas, muchas cosas se fueron recogiendo, explícita o implícitamente, de los proyectos que habíamos presentado.

De aquel sistema totalmente privatizado, obligatorio y compulsivo, cuando se advirtió que no se puede obligar a nadie a invertir en una entidad privada, aunque el Estado la controle, se fue al sistema optativo, dejando el sistema público, pero creando esta enorme complicación del financiamiento del actual sistema que aleja a los actuales jubilados de la esperanza de una mejora en sus haberes. Y hubo otras cosas más que se fueron corrigiendo en un trabajo bastante apurado en la Cámara de Diputados, con una sanción que reconoce errores, los más diversos, y que los señores senadores de la mayoría conocen. Se quiere sancionar un proyecto con errores, con la esperanza de corregirlos después en una ley complementaria; ése no es el modo de legislar en un asunto que compromete a tanta gente. Hay que legislar con seriedad, buscando las mejores soluciones y mirando la experiencia universal.

La urgencia no reside en resolver el problema de los actuales jubilados. La urgencia radica en crear un mercado de capitales, tema que se podía haber resuelto de otro modo.

El país precisa capitales; necesitamos movilizar la economía, ir de la estabilidad al crecimiento. Pero

los jubilados no pueden ser la variable de ajuste de la estabilidad ni del crecimiento. El país que no respeta a sus mayores se olvida de su futuro o lo descuida.

Por eso, en el momento se reiteran los fundamentos de nuestra disidencia, que hemos presentado por escrito al firmar el dictamen en minoría, dejo expresado, señor presidente, que hubiéramos querido otra solución para el problema de los jubilados, una solución más justa que mantuviera la responsabilidad del Estado y que no incurriera en los errores y riesgos que presenta el proyecto en consideración.

**Sr. Presidente** (Oyarzún). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Avelín.** — Señor presidente: con toda honestidad creo que se comete un gran error si se aprueba este proyecto de ley. Un error que quizá nosotros no vemos en su justa dimensión si lo proyectamos en el tiempo. Pero lo verán los futuros jubilados, nuestros hijos, nuestros nietos.

Un tremendo error, señor presidente, porque, indudablemente, si se respetara el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, creo que podríamos brindar toda la fuerza y llegar a una solución adecuada.

Creo en mi país y en mi pueblo. Creo en los hombres de Estado y en los funcionarios.

Si algo anduvo mal, podemos corregirlo. No son mejores las multinacionales ni los grandes monopolios; ellos no tienen patria ni sensibilidad ni la fuerza generosa que tienen los hombres de Estado y los que manejan las instituciones. Podrán equivocarse muchas veces como se han equivocado en el régimen previsional, pero indudablemente creemos que hay fuerza patriótica, sensibilidad, transparencia y también puede haber honradez para manejar los dineros del pueblo.

Quiero leer el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en la parte pertinente: "... El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable...". Se trata de una función del Estado y él no puede marginarse de la responsabilidad del manejo previsional. Sigue diciendo la norma constitucional: "... En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con

autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna".

Este artículo hay que respetarlo; hay que ponerlo a funcionar para que de esa manera realmente tengamos la convicción de lo que podemos hacer para resolver este problema.

Además, es fundamental que escuchemos a los jubilados. Acá no se los ha escuchado, a pesar de que constituyen la parte primordial y la columna principal de la cuestión previsional.

Voy a leer la nómina del Plenario Permanente de Organizaciones de Jubilados, que está compuesto por los siguientes centros e instituciones: Centro Nacional de Jubilados y Pensionados ATE; Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina; Confederación Republicana Representativa de Jubilados y Pensionados de la República Argentina; Asociación de Centros de Jubilados y Pensionados Ferroviarios; C.T.E.R.A.; Centro de Jubilados y Pensionados de Vialidad Nacional; Comisión de jubilados A.P.A.; Comisión Nacional de Señaleros Jubilados y Pensionados; Unión Federal de Docentes Jubilados y Pensionados de la República Argentina; Centro de Jubilados de Dragado y Balizamiento; A.P.D.F.A.; Centro de Jubilados A.P.M.; A.J.E.P.R.O.C.; Comisión de Jubilados del Sindicato Gráfico; Federación de Jubilados y Pensionados Avellaneda; Movimiento Nacional de Trabajadores Jubilados; Centro de Jubilados de Aduana; Centro de Jubilados y Pensionados del Consejo Federal de Inversiones; Intercentros y Jubilados de la Administración Pública Nacional; FOETRA Sindicato Buenos Aires; Consejo Consultivo Nacional; Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Argentina; ATILRA; SUTEN; Centro de Jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires; Círculo de Jubilados Obreros de la Industria del Calzado; Subsecretaría de Jubilados A.J.B.; A.P.T.A.

Son veintisiete centros e instituciones que han dicho su palabra y quieren ser escuchados; todo el plenario ha ratificado su oposición a la llamada reforma, que equivale a la liquidación del sistema jubilatorio. El actual sistema de reparto debe ser reordenado y manejado por el Estado nacional porque no son mejores las confederaciones, los monopolios y tampoco las empresas multinacionales. Son tanto o más delincuentes

que los que realmente pueden manejar en forma irregular desde el Estado el dinero de la gente.

Habrá que corregir el sistema; habrá que tomar hombres honestos, patriotas, con responsabilidad y con conciencia.

El proyecto aprobado en Diputados tiene gruesos errores que han sido analizados fundadamente por el Consejo Federal de Previsión Social, organismo conformado por los titulares de las cajas provinciales de jubilaciones. Ellos han afirmado que la reforma es un disparate.

El propio ministro Cavallo reconoció que está dispuesto a retocar la ley por vía de los decretos reglamentarios, una vez que sea sancionada. Esta es una irresponsabilidad del ministro Cavallo. No podemos tener un ministro irresponsable que quiera apurar el camino y el "caballo", aconsejando y ordenando al Congreso lo que tenemos que hacer.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social reconoció que uno de los artículos del proyecto dice exactamente lo contrario de lo que se pretende; me refiero al artículo 30, que establece que los menores de cuarenta y cinco años podrán optar por el régimen de reparto a cargo del Estado. El ministro Rodríguez afirmó que lo que se pretende es exactamente lo contrario.

Hay que tener en cuenta que esta ley, si se sanciona, va a afectar a más de tres millones y medio de jubilados, con el agregado de otros novecientos mil jubilados de los ámbitos municipales y provinciales que van a pasar al sistema nacional.

Consideramos que es una falta de seriedad por las fallas apuntadas.

No podemos crear aquí el festival de las privatizaciones. Tengamos cuidado. No podemos privatizar el Estado nacional. No podemos privatizar la cultura argentina. Esto es grave para el país, para nuestra identidad, para nuestro patrimonio cultural, para nuestra responsabilidad patriótica. Hace falta únicamente que privaticemos la Casa Rosada, y con ello ya tendremos entregado todo el patrimonio económico, cultural y moral de la República.

Observemos lo que dice un hombre que es una expresión auténtica del peronismo, Britos, en una carta dirigida a todos los señores senadores. Dice allí: "Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de informarle los motivos que me han llevado a discrepar con el proyecto de ley del Poder Ejecutivo referente a la Reforma Previsional.

"Para tomar esta decisión desde hace muchos meses he venido consultando con el sector más desprotegido de nuestra sociedad, que son los jubilados, los que reconocen que este grave problema viene de arrastre de las distintas administraciones que han gobernado al país, y que sólo nuestro gobierno ha decidido encararlo buscando una solución definitiva mediante la incorporación de un régimen de capitalización privado (que personalmente no comparto [esto lo dice Britos: 'que personalmente no comparto'] y que de última hubiera preferido que fuera el propio Estado el que lo administrara)."

Por supuesto, no podemos regalarles tantos millones de dólares a las empresas privadas. Continúo leyendo la carta de Britos: "Si bien durante nuestra gestión se han incrementado las recaudaciones y se ha reducido la evasión, sumándose aportes importantes con el 15 % de la coparticipación federal, lo que demuestra que el Estado ejerciendo sus funciones con responsabilidad (fíjense lo que dice ahora) puede cumplir perfectamente con lo que la Constitución Nacional nos indica y no terminar, como se pretende, con la solidaridad social.

"El punto más importante que como peronistas debemos sostener hoy es, como cuando Perón decía que la jubilación era un derecho y no un privilegio, que la solidaridad no se privatiza, aun cuando esto sea difícil de sostener ante los equipos técnicos que sólo argumentan con sentido económico, dejando de lado lo social, sin perjuicio de las razones que técnica o científicamente llevan a nuestros ministros a seguir sosteniendo una verdad que no tiene sentido ante la falta de expectativa de vida y desprotección que tienen nuestros ancianos.

"Por todo esto a continuación expongo mis argumentos que pretenden expresar a los que sólo al final de sus vidas sienten en carne propia la indolencia y falta de amor de los que estamos en la función pública."

Como señalé, esto fue escrito por un senador de la Nación, un fiel exponente del peronismo, de la doctrina peronista, que es solidaria con los desprotegidos, con los jubilados, con los que no tienen nada, con los marginados de la patria. Y resulta que ahora queremos privatizar algo que la Constitución manda que sea regulado por el Estado nacional.

En conclusión, el Estado nacional no puede marginarse de la responsabilidad previsional. No puede privatizar los hospitales públicos, que deben estar al servicio del dolor, de la enfermedad y de la larga caravana de los desprotegidos. No podemos, repito, hacer una

festival de privatizaciones. Terminemos con esto. Terminemos con que no sirva el Estado. Terminemos con que no sirven las instituciones. Todavía hay patriotas aquí, hay reservas morales, hay fuerzas morales. Sintamos el clamor de la patria y pongámonos a trabajar por la patria y por nuestros derechos. Las empresas internacionales, los grandes monopolios, no van a venir a ser generosos con nosotros ni serán tan patriotas como para darnos posibilidades.

¿Qué va a pasar de aquí a treinta o cuarenta años con lo que están aportando los obreros? No sabemos si esas empresas quebrarán, si se van a ir del país después de hacer sus negocios, destruyendo nuestras esperanzas. Por eso, me opongo terminantemente a que se privatice este régimen de previsión. Esto debe estar en manos del Estado nacional porque es el único garante de todas las posibilidades. Escuchemos a los viejos, a la experiencia, a los que han sufrido en carne propia el dolor, las postergaciones y las frustraciones. Los viejos de la patria deben ser escuchados, y aquí no se los ha escuchado. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

**Sr. Presidente** (Oyarzún). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca, del bloque justicialista.

**Sr. Fadel.** — Señor presidente: durante este último tiempo, como simple ciudadano, estuve asistiendo en forma activa a debates donde se formularon propuestas respecto del sistema previsional en mi provincia y en provincias vecinas.

Ante las verdades a medias que se expresan, he tomado como propia la preocupación de los jubilados. Así he podido observar que las verdades a medias movilizan a ese millón de jubilados -incluidos los diez mil jubilados de mi provincia- a pensar que el régimen previsional que se encuentra vigente es un sistema de reparto solidario y equitativo.

Nada más lejos de la realidad. Esto se advierte cuando comenzamos a analizar este sistema previsional, que es un sistema de reparto. Y cuando consideramos los niveles de ingreso llegamos a observar, por ejemplo —y lo doy como una posición extrema—, que en las cajas de jubilación de mi provincia existe una distribución extremadamente inequitativa y, por consiguiente, casi podríamos decir, nada solidaria.

En las provincias como la mía y otras vecinas, con estructuras económicas similares, observamos que los aportes patronales que hace el estado a las cajas de previsión se distribuyen entre un treinta por ciento de los jubilados, mientras



que al setenta por ciento restante no se le podrá efectuar el reintegro a lo largo de su vida pasiva. Dicho en otras palabras, todos los recursos provenientes del Estado van a manos de unos pocos privilegiados; y esto no se dice.

Si a esto agregamos que estos recursos de los estados provinciales provienen de impuestos que, básicamente, pagamos todos en forma uniforme, la situación se agrava más todavía y vemos más claramente la inequidad de este sistema de reparto que está vigente actualmente en el país.

De él podríamos decir que tiene tres graves inconvenientes. Uno de ellos es la rigidez ante los cambios demográficos. Hemos tenido un envejecimiento demográfico notable en las últimas décadas, a tal punto que se dice que la participación de los mayores de sesenta y cinco años pasó del cuatro por ciento a cerca del nueve por ciento. Así, cuando un sistema de reparto tiene fundamentada su esencia en la relación activo-pasivo, podemos observar que es vital hacerlo flexible a los cambios demográficos.

En segundo término, el sistema vigente permite la evasión. Esto es claro y los esfuerzos que se están haciendo para reducir esa evasión son totalmente insuficientes.

En tercer lugar -ya lo dije muy al pasar hace un momento-, este sistema de reparto, tal cual está concebido y considerando que, en esencia, trata de ser solidario en la distribución, considerando los aportes que se realizan a lo largo de la vida útil produce efectos que se agravan cuando tomamos decisiones como, por ejemplo, considerar los tres mejores años y hacemos del sistema en sí mismo un mecanismo inviable.

Entonces, es así que la mayoría de los países subdesarrollados tiene sistema de reparto —especialmente los de Latinoamérica—, con niveles de cobertura profesionales cuando los países desarrollados ya han adoptado los sistemas mixtos, en los cuales hacen pivotear la solidaridad en un mecanismo de reparto y la equidad en uno de capitalización.

Es así que se ha llegado a la elaboración de este proyecto de ley que hoy estamos considerando, en el cual están contempladas las variables determinantes que hacen a los modelos previsionales en función del logro del objetivo de atender las contingencias de la invalidez, la vejez y la muerte, pero sin dejar de observar que tales objetivos deben lograrse atendiendo a los principios básicos de la solidaridad y la equidad.

Este sistema actual, al que podemos caracterizar como mixto, central, público y con un régimen financiero de reparto, va a distribuir en forma solidaria los aportes que provengan de las

contribuciones patronales y aquellos aportes que sean de origen fiscal. Y digo que será en forma solidaria porque va a distribuirlos no en función de las responsabilidades que se tuvieron a lo largo de la vida útil y, por consiguiente, de los niveles de remuneración, sino simplemente considerando los años de aporte.

Por otro lado, vamos a transferir la responsabilidad de elegir, de optar dónde colocar los aportes personales de los trabajadores. Esto quiere decir que se podrá optar por un sistema de capitalización privado, estatal o bien por un sistema de reparto puro.

Considero que es totalmente justo y equitativo que los recursos fiscales, así como también las contribuciones patronales, sean distribuidos en función de los años sin considerar los niveles de remuneración, y que la diferencia surja de la capacidad de ahorro que pueda tener cada uno de los trabajadores durante su vida laboral.

Este sistema que estamos considerando hoy no tan sólo brinda solidaridad y equidad sino que también nos permite hablar de tangibilidad; una tangibilidad que, por supuesto, va a generar una mayor credibilidad en el sistema. Y cuando hablo de tangibilidad quiero hacer referencia a un concepto que considero muy importante en este proyecto de ley. Voy a hacer una afirmación: estamos desestatizando el control de la evasión. Y digo esto porque, como lo señalé hace un momento, le estamos transfiriendo al trabajador la posibilidad de optar, la posibilidad de seguir de cerca y controlar sus ahorros. De esa manera podrá ver un poco más claro un futuro en cuanto a lo que será su vida pasiva y los ahorros de los que podrá disponer llegado ese momento.

Por otra parte, quiero manifestar que comparto la preocupación de muchos señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra en cuanto a la etapa de transición. En ese sentido, quiero decirles que aquí hay tres alternativas: una, es no hacer nada con este sistema totalmente agotado, acabado, poco solidario e inequitativo, con lo que persistirán los traumas que estamos viviendo y se agudizará, año a año, el desfinanciamiento del sistema.

La segunda opción es *aggiornar*, acomodar y ajustar el sistema de reparto actual, tal como lo propusieron algunos de los señores senadores que me precedieron en el uso de la palabra. A ellos les digo con total seguridad que vamos a tener una transición mucho más traumática que la que se dará con el actual sistema. Y digo que

será mucho más traumática porque en ese caso vamos a tener que atender el problema demográfico y extender la cantidad de años suficientes, no en forma gradual sino abrupta, con los costos sociales que ello implicará. Además, la evasión fiscal persistirá y será poco efectivo su control.

Cabe señalar que el actual sistema es poco solidario e inequitativo en la distribución de los recursos de que se dispone.

También quiero manifestar que no comparto algunas de las cifras que se manejaron con respecto a la etapa de transición. Se habló de siete mil millones y se apuntaron otras cifras. Si bien los números no serán exactos, seguramente no vamos a coincidir, pero sí debemos tratar de aproximarnos al déficit que esta transición implicará y a la forma de financiación. La transición llevará diez años de acumulación de déficit. Es decir que allá por el 2004 estaremos hablando de un déficit acumulado del orden de los 3.700 millones de dólares. Esto surge de una prueba de escritorio realizada en función de varias hipótesis, las que por supuesto han sido tomadas y evaluadas con total prudencia. A modo de ejemplo, les diría que el corte de la edad, en cuanto a la conveniencia de optar por el régimen de capitalización o quedarse en el reparto puro, se ha previsto a los 47 años. Pero en esa misma prueba de escritorio se puede observar que el corte estaría mucho más abajo, en los 40 o 42 años. De manera que se ha tomado una importante masa de recursos que transferiría el sistema central público al sistema complementario de capitalización y es lo que nos estaría dando este déficit del orden de los 3.700 millones al cabo de la primera década. A partir de allí habría un punto de inflexión, y aparecería un superávit que cubriría el déficit anterior al llegar aproximadamente al final de la segunda década.

Por supuesto que no será una transición fácil, pero existen mecanismos financieros, que no voy a profundizar para no extenderme demasiado, que se han tenido en cuenta. Al respecto existen bastantes trabajos.

Antes de concluir mi exposición, deseo señalar que este proyecto que hoy estamos tratando elimina los tres grandes inconvenientes que tiene el sistema de reparto actualmente vigente, porque no tenemos que atender los problemas demográficos —es decir, el envejecimiento poblacional—, el tema de la evasión tendría un control mejor y más fácil por ese concepto que me permití expresar acerca de desestatizar el control de la evasión, el modelo en sí mismo, si bien es mixto, es puro en el caso del de reparto y

puro, también, en el de capitalización. De manera que estaríamos cumpliendo con los principios de solidaridad y equidad en la distribución de los recursos destinados a la previsión social.

También quiero decirles a los señores senadores de la oposición que no tenemos que continuar trabajando en función de esos fantasmas de las multinacionales, de los monopolios. Acá se están dando las garantías para un mercado en el cual puedan competir las administradoras. Se está abriendo una administradora del Banco de la Nación y también se le está permitiendo al trabajador quedarse en un sistema de reparto puro. Estamos trabajando con la única verdad, que es la realidad que hoy están viviendo los jubilados, y esa realidad que podemos proyectar si continuamos con el actual sistema.

Además, quiero decirles a los amigos de la oposición que realmente este proyecto de ley, que hoy seguramente aprobaremos, es sin lugar a dudas un gran negocio, como dijeron ellos; pero es un gran negocio para el país, es un gran negocio para nosotros, quienes vamos a jubilarnos el día de mañana, y es realmente una solución para el sistema previsional argentino en el marco de las profundas transformaciones que se están llevando adelante en el país.

Por supuesto, por el cambio profundo que significa esta ley, va a tener las resistencias naturales del ser humano a los cambios —no pretendemos que todos estén de acuerdo. Estamos seguros de que representará una importante solución para el país en su conjunto y para los jubilados en especial.

**Sr. Presidente** (Oyarzún). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Cendoya.** — Señor presidente, señores senadores: comparto expresamente la posición del señor senador preopinante en cuanto a que este tema debiera superar las discrepancias meramente partidarias dado que por su trascendencia compromete a toda la sociedad, no sólo en su composición actual sino también en la futura.

Nosotros hemos procurado postergar el tratamiento de esta cuestión en función de que no apreciamos la urgente necesidad de su sanción, sobre todo si se tiene en cuenta que en el mismo proyecto, que ya cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados, se establece expresamente que este sistema va a ser establecido en un plazo que va de los nueve a los dieciocho meses. Es decir, tenemos nueve meses en los que, seguramente, podríamos mejorar la iniciativa.

Nosotros tenemos discrepancias fundamentales. En primer lugar, en razón de que la Constitución Nacional establece que el sistema de seguridad social es una responsabilidad indelegable del Estado creemos que solamente puede hablarse de un régimen de capitalización con carácter complementario y opcional sin perjuicio de que, dentro del régimen constitucional, pueda establecerse la capitalización obligatoria de las reservas y que ellas puedan servir a la formación de un mercado de capitales. Entonces, la sola posibilidad de que esta ley genere una discordancia entre el texto constitucional y las normas que ella consagra abre la posibilidad de numerosos conflictos que seguramente se van a presentar y que tensionarán a la sociedad por su volumen e intensidad.

Discrepamos también porque consideramos que este proyecto no responde a una decisión autónoma del país. No me preocupa que hayamos asumido compromisos con el Fondo Monetario Internacional para sancionar una norma como la que estamos tratando. El FMI, organismo al que pertenecemos, es un auditor de las finanzas internacionales y la experiencia, desde su creación hasta ahora, indica que los países que se alejan de su seno no son, precisamente, los que tienen mejor organizadas sus finanzas. Pero creemos que al margen de esos convenios internacionales que podamos haber suscrito, se aprecia por parte de representantes de países y de banqueros extranjeros una injerencia que compromete, de alguna manera, la dignidad nacional. En este sentido, las posiciones del actual y del anterior embajador de los Estados Unidos revelan la intromisión inaceptable de un país extranjero en una decisión que corresponde autónomamente al país. Además, hay que tener en cuenta que ellos propician un sistema que no tiene antecedentes en sus propios países de origen, donde seguramente mantienen la seguridad social dentro de la responsabilidad principal del Estado.

También discrepamos en cuanto a la filosofía del proyecto, por cuanto apreciamos acá una tensión entre dos principios, muy distantes unos de otros. Desde luego que ninguno de éstos se da en forma pura sino en forma matizada o variada, que es la de considerar a la seguridad social como un aspecto absolutamente vinculado a la responsabilidad individual, como una vieja reminiscencia de esa moral luterana con la cual inicia su espíritu el capitalismo moderno, sobre la base de que cada hombre debe formar su ahorro con su trabajo para prever las contingencias de la vida, entre las cuales la vejez es precisamente la

más segura. O aquel otro principio moderno, que tiene algunos siglos de vigencia, que es el de la solidaridad social, que establece que ningún hombre puede ser feliz mientras otros a su lado no lo sean, lo que ha ido creando la idea del Estado benefactor que hoy se encuentra totalmente en crisis, justamente por problemas de financiamiento, de voluntarismo y de mal manejo de las estructuras del estado de bienestar.

Antes de entrar en el proyecto quiero hacer una evaluación del mismo en función de quienes son los principales sostenedores del sistema, que son precisamente los banqueros nacionales y extranjeros, que tienen legítimos intereses en este tema. Estos últimos porque fundamentalmente este sistema puede generar un mercado de capitales que sirva para que el Estado pueda atender problemas de financiamiento internacional, de déficit de la balanza de pagos, etcétera. Los banqueros privados encuentran en esto un buen negocio y tienen todos ellos el santo derecho de propiciar sus negocios de forma que no vulneren las leyes argentinas.

Dentro de esta tensión, buscando antecedentes, me encontré con uno bastante inopinado, que es la posición de la Iglesia sobre este punto. En un comentario el gran intelectual argentino Carlos Floria hace referencia, precisamente, a los peligros que ofrecen todos estos sistemas que aparecen, de algún modo, como salvadores de una situación, pero que en realidad tienen que ser objeto de un prudente análisis. La Iglesia ha hecho importantes contribuciones a la economía, no solamente a través de sus encíclicas sino mediante doctrinas, como la de la subsidiariedad del Estado, que incorpora un valor muy importante en cuanto a la descentralización y manejo de las estructuras económicas. Pero esto requiere -decía Floria- eliminar simplificaciones, y citaba el caso del Papa Juan Pablo II, quien supo de las consecuencias de la confusión de planos y perspectivas en que incurrió buena parte de la crítica a sus mensajes en México, durante su visita en 1990, a raíz de sus observaciones sobre el comportamiento y las consecuencias de los sistemas, entre ellos el capitalista, sobreviviente y razonablemente exitoso, luego del fracaso del socialismo real.

La revista inglesa "The Economist" decía en un editorial contemporáneo respecto de la visita a México de Juan Pablo II: no es la "mano invisible", que elogiara hace siglos nuestro Adam Smith, el verdadero problema, sino "the visible hands", es decir, las manos visibles, que aquí y allá producen consecuencias que no conmueven

demasiado a los liberalistas, pero que preocuparían a un liberal consistente.

Decía Carlos Floria que distingue en su posición aquellos que están preocupados solamente por el liberalismo económico de los liberalistas auténticos que tienen una visión más genérica del problema...

**Sr. Alasino.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Presidente** (Oyarzún). — ¿Le concede la interrupción, señor senador?

**Sr. Cendoya.** — Con mucho gusto.

**Sr. Alasino.** — Antes de que entre usted en el análisis del proyecto me gustaría hacer unas consideraciones generales sobre los puntos de partida de su exposición, que ha sido la expuesta por la Unión Cívica Radical. Nosotros no creemos de manera alguna que se vulnere el principio o el derecho plasmado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Se dice que la seguridad debe ser irrenunciable y obligatoria; y esto entronca con la última parte de su exposición, señor senador, cuando dice que esa exacerbación del individualismo ha hecho caer en este sistema, que resulta totalmente injusto frente a un sistema anterior en donde la solidaridad atendía mucho mejor toda la cuestión.

**Sr. Cendoya.** — ¿Me permite una interrupción a mi interrupción, señor senador?

**Sr. Alasino.** Cómo no, señor senador.

**Sr. Presidente** (Oyarzún). — La Presidencia solicita a los señores senadores que se dirijan a ella.

Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Cendoya.** — Simplemente, he apelado a la necesidad de obrar con prudencia en este asunto. Incluso, ya analizaré problemas referidos al proyecto en consideración y seguramente se planteará algún debate.

Yo creo que el fundamento constitucional está afectado; usted cree que no. Algún constitucionalista americano decía que la Constitución es la que dicen los jueces que es. Y yo reclamo, simplemente, prudencia en el tema ...

**Sr. Alasino.** — Está bien, los jueces finalmente dirán. Esa es una conclusión. Pero quiero dar otra que se explica a mitad del proyecto. Y, como se explica a mitad de camino, se puede concluir erradamente respecto de lo que usted dice.

Las administradoras privadas tienen dos formas de garantizar que el ahorro del jubilado no vaya a terminar en una quiebra y, de alguna manera, disperso. Se trata del famoso fondo de fluctuación y de ese encaje de los tres millones de dólares, aparentemente, que tienen que poner.

En la eventualidad de que la administradora le haga un mal negocio al jubilado y le pierda los ahorros, ello no implicará la pérdida de todo el ahorro que el jubilado realizó a través de su trabajo personal; aquí se hace trizas el principio liberal, porque entra a tallar el Estado. Y lo que nadie dice es que si los dos resguardos, tanto el fondo de fluctuación como el encaje, no son suficientes para cubrir el mal negocio de una administradora que perjudicó al jubilado, allí aparece la superintendencia pagando al jubilado sus ahorros. Y de esta manera creo que por lo menos a los liberales les va a resultar muy difícil explicar cómo este sistema que instrumenta este gobierno, finalmente, depende del Estado, de la seguridad y del ahorro público.

Entonces, por un lado, está lo que dirán los jueces de la Constitución y, por otro —esto hay que decirlo con todas las letras— nosotros creemos que se establece un sistema; pero también creemos que, finalmente, en este tema responde el Estado.

Perdone la interrupción, señor senador, pero he escuchado lo que han dicho otros señores senadores y creo que, en honor a la verdad, se dice la mitad de lo que es el sistema y no se habla de la totalidad.

Cuando se pone al liberalismo por delante se olvida este elemento. Entiendo que será un gran problema para los liberales decir que esta iniciativa es de cabo a rabo liberal.

**Sr. Cendoya.** — No me preocupa de los liberalistas pero sí la de los liberales. El liberalismo corresponde a un modo de ver la realidad que se ha impuesto en el mundo moderno y del cual es imposible prescindir.

Julián Marías dijo que no se podía imaginar a un hombre moderno que no fuera liberal, con las distintas connotaciones que reviste esa palabra, ya que en cada país significa algo diferente.

Deseo puntualizar que este proyecto ha sido para mí objeto de una preocupación especial, ya que lo leí durante diez días en unas vacaciones. Por eso creo que la preocupación del ministro de Economía es exagerada; entiendo que no tiene tiempo para una lectura total, por su vastedad, Considero que este proyecto responde a la autoridad intelectual del secretario de Seguridad Social, que está presente en esta reunión y que constituye una verdadera autoridad en la materia, a tal punto que resultaría difícil tratar este

tema sin concurrir a la consulta de todas las obras que tiene publicadas sobre esta materia.

Nuestra obligación es hacer la crítica al proyecto. En tal sentido, basta leer cualquier publicación sobre este tema para advertir que los propios sostenedores del régimen son los que critican esta iniciativa. Son los propios banqueros los que tienen la justa preocupación de que esta norma resulte sancionada.

Según la opinión de quienes están en favor de un sistema de capitalización, lo que se propone en este proyecto, según ellos, resulta inviable. En efecto, tengo conmigo un informe de la subgerencia de Planeamiento del Banco Río, que fue distribuido entre varios señores senadores. Allí, se dice que en su estado actual el proyecto no sólo no soluciona el problema de fondo del sistema previsional sino que también corre el riesgo de agravarlo.

Solicito la inserción de este trabajo. En él encontramos un gráfico que mide el impacto fiscal de la reforma, comparando la propuesta original con el texto que se aprobó en la Cámara de Diputados.

Es evidente que la propuesta original reconoce la autoría intelectual del secretario de Seguridad Social. En ella se partía de un déficit cercano a los dos mil millones de pesos, que se iba reduciendo rápidamente por el aumento de la cantidad de personas interesadas en jubilarse; a partir del año 2030 esta propuesta original preveía un resultado superavitario.

En cambio, conforme al ejercicio que realiza la subgerencia de Planeamiento del principal banco del país, tomando como base el texto aprobado en Diputados, se parte de un déficit de cero para culminar con el terrible déficit fiscal de cerca de seis mil millones de pesos en el año 2050 y de ocho mil millones de pesos en el año 2060. Esto es algo muy preocupante.

Otro banquero también se queja del sistema. En un artículo aparecido en una revista especializada se dice que el proyecto aprobado en Diputados contiene una dosis de irresponsabilidad de parte de los legisladores. El entrevistado sostiene que se han introducido una serie de modificaciones en la propuesta original que no han sido lo suficientemente analizadas, dándose paso al juego político y, si se quiere, a una actitud demagógica ya que no se han tenido presentes las consecuencias que tales cambios van a producir.

Se sigue diciendo en esa nota de la revista que hay varios aspectos muy controvertidos; por ejemplo, la disminución de la edad jubilatoria de las mujeres, la inclusión del beneficio a los maridos

viudos y la garantía a la AFJP estatal, lo que constituye sin duda el principal error de la reforma:

Estos son argumentos de los propios sectores interesados en la aprobación de un sistema de capitalización.

Se continúa expresando en el texto a que estoy haciendo referencia que, más allá de algunas teorías que afirman que aun con estas innovaciones al proyecto original la reforma cierra macroeconómicamente, constituye un grave error conceptual pretender mantener sobre el sistema de capitalización garantías que ya afectaron gravemente al sistema de reparto. De esta forma, se condiciona la reforma y si bien todavía no queda totalmente invalidada, puede verse afectada la participación de las entidades privadas más serias que son claves para que un sistema de capitalización tenga éxito.

Estas son prevenciones que realizan los propios sostenedores de un sistema de capitalización. Si el banquero al que me he referido leyera además el Título V del proyecto, relacionado con las figuras penales incorporadas en la norma, seguramente se borraría definitivamente de este negocio..

**Sr. Alasino.** — ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Cendoya.** — Sí.

**Sr. Presidente** (Oyarzún). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Alasino.** — Lo que ha preocupado profundamente a los bancos es la posibilidad de que el Banco de la Nación también pueda tener su administradora de fondos.

Hay dos temas que son castigados por esa acusación manifiestamente liberal. En primer lugar, ¿qué garantiza que el Banco de la Nación Argentina no les va a dar a sus jubilados una garantía mínima que no vaya más allá de las cajas de ahorro que actualmente tienen? Además, ¿cómo no les va a molestar a los bancos, si las administradoras tienen la obligación de destinar un 20 por ciento a préstamos para las economías regionales y a préstamos a corto, mediano y largo plazo a los trabajadores?

No sé cuál será el resultado de esto, pero por lo menos se intenta establecer diferencias con los otros bancos, orientando los recursos que los jubilados tienen en ellos como ahorro y que constituyen el ahorro interno del país. Tengo anotadas algunas otras críticas, aún más duras, de la Asociación de Bancos, pero resulta curioso que estas dos cosas sean las que más le molestan. Ustedes y yo vamos a coincidir en que en este punto hicieron bien los diputados.

**Sr. Presidente** (Oyarzún). — Señor senador por Córdoba: su tiempo ha terminado.

**Sr. Cendoya.** — Señor presidente: yo rogaría...

**Sr. Presidente** (Oyarzún). — El Reglamento otorga treinta minutos para cada exposición. En todo caso, le vamos a otorgar diez minutos más.

**Sr. Cendoya.** — Creo que con diez minutos no voy a llegar, de manera que voy a apelar a la sensibilidad de los señores senadores porque es un tema que me preocupa.

La garantía del Estado —y sobre esto se queja también un importante banco nacional— es doble con respecto a los que aporten al sistema privado que administre el Banco de la Nación, porque no solamente les da la garantía en pesos, a través de la tasa de interés que paga el Banco de la Nación en caja de ahorro, sino que además les da la garantía de la estabilidad cambiaria por el tiempo que dure este sistema, que desde luego comprenderá a varias generaciones. Entonces, si se me permite la chanza, este sistema del Banco de la Nación garantiza la estabilidad cambiaria a.C., que no significa "antes de Cristo" sino "antes de Cavallo". Es una garantía que consideran peligrosa para la estabilidad del sistema. Pero no me animo a suscribir esa opinión porque creo, de cualquier manera, que el Estado va a estar siempre detrás del sistema de previsión social, cualesquiera fueren las normas que se dicten. Esto es una verdad elemental, porque el Estado no puede descuidar este fenómeno de la seguridad social.

Lo que sucede es que el proyecto ha sido tan cambiado que resulta irreconocible y de poca viabilidad práctica. Este proyecto nació con un reconocimiento de una garantía estatal limitada a la prestación básica universal. Los menores de cuarenta y cinco años pasaban al nuevo régimen de capitalización y perdían los aportes realizados, lo que generó una gran crítica porque significaba una confiscación de los aportes. Por ello, se creó la prestación complementaria. Después se le introdujeron en Diputados modificaciones relativas a la participación del Estado a través del Banco de la Nación o, como proponía el doctor Cafiero, a través de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Además, el Poder Ejecutivo se comprometió a no vetar el proyecto. No sé si ustedes recuerdan esto. Hubo, en efecto, un compromiso asumido públicamente de no vetar la ley, pero fue asumido con relación a un proyecto que, en este momento, nadie puede siquiera identificar.

Después se modificó la situación de las mujeres, por presión de los legisladores, estableciéndose

un sistema de discriminación en favor del sexo femenino, para el cual se redujo la edad a los efectos de obtener los beneficios jubilatorios. Luego, se creó este sistema de opción del artículo 30, que transforma todo el sistema y, según estudios que tengo aquí y que solicito sean insertados, lo hace inviable porque funcionan sobre la base de una unidad de medida que se crea para el régimen de capitalización pero se aplica al sistema de reparto, lo que crea muchas tensiones.

Por otra parte, es lógico pensar que ante el manejo de las inversiones por parte de un banco que registra un historial centenario de seriedad, como el Banco de la Nación Argentina, y tiene además garantías adicionales, seguramente la gente va a pensar un poco antes de confiar sus ahorros a una entidad privada, sobre todo cuando la historia financiera del país no es la más ejemplar. Como ejemplo de esto podemos decir que con doscientos bancos, quince mil millones de dólares le costaron al país las garantías prestadas por el Estado para los depósitos bancarios.

Además, se plantea un tema no resuelto, a mi criterio, sobre el cual no he encontrado ninguna explicación lógica: me refiero al desfinanciamiento existente, porque a partir de su entrada en vigencia, todos los aportes personales pasan inmediatamente al sector privado. Y el Estado se priva del once por ciento de los aportes de los trabajadores.

Si se desfinancia el sistema, el Estado puede tomar los fondos —el proyecto habla del cincuenta por ciento de las inversiones del sistema de capitalización—, pero me parece que eso genera una inconsecuencia lógica. Esto me hace acordar a los pececitos de oro del coronel Aureliano Buendía, quien fundía monedas de oro para hacer pececitos de colores, que luego vendía por monedas de oro; y con ello, volvía a hacer pececitos de colores, pero se trataba de un círculo vicioso en el cual se iba desprendiendo de parte del metal que se destinaba a la fundición.

En nuestro caso, el Estado tendrá que recurrir al mercado de capitales que él mismo crea, para refinanciar el sistema, pero recibirá depósitos menguados, que ya los tiene en un ciento por ciento, previa deducción de las comisiones que deben pagar los fondos de capitalización.

Creo que esta reforma reconoce —en cuanto a sistema de capitalización— un solo antecedente

parcialmente exitoso, que es el caso chileno, donde el sistema ha funcionado correctamente durante los primeros diez años, aunque se ha producido una gran evasión. En este momento, de los cinco millones de afiliados que creo que tiene el sistema chileno, dos millones no pagan, y esto genera un problema de consistencia en el largo plazo, que es donde fracasan generalmente estos sistemas.

Esta también es la historia argentina. Aquí, la transformación del sistema de capitalización, del sistema de reparto, ha sido más virtual que real. El Estado comenzó con las cajas de jubilaciones a principios de siglo. Con anterioridad al primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, había cincuenta mil afiliados que pertenecían a la caja del Estado y a la de los ferroviarios. Posteriormente, en el gobierno de Yrigoyen se incorporaron fundamentalmente los sectores de servicios, llegando los afiliados a cuatrocientos cincuenta mil personas. El sistema alcanza su máxima dimensión en la época del gobierno peronista, con las cajas de jubilación de empleados de comercio y de industria, llegando los afiliados a los dos millones trescientos mil.

Existe un excelente trabajo, que voy a pedir que se incorpore al Diario de Sesiones, perteneciente a una entidad de investigación que maneja la Unión Industrial, realizado por Cetrángolo y Machinea, donde se expresan cifras importantes; por ejemplo, que el sistema llegó a tener en su época de incorporación diez afiliados en actividad por cada jubilado, con lo cual produjo generosos excedentes que fueron utilizados en grandes planes de obras públicas. Sin embargo, sobrevinieron diversas circunstancias y esos excedentes no fueron devueltos al sistema en forma equitativa, porque se tomaban bonos del Tesoro al cuatro por ciento de interés anual cuando la inflación estaba entre el quince y el veinte por ciento, en algunos años.

Este sistema de apropiación de fondos culmina en el año 1970 cuando el Estado, que hacía años que no pagaba los aportes patronales, les da a las cajas un bono a diez años sin indexación. Imaginen ustedes la situación considerando la inflación que sobrevino en la década del 70, en la que el sistema terminó por convertirse totalmente en un sistema de reparto. A esto hay que agregar, como lo señalaba el señor senador por Catamarca, las consecuencias demográficas debidas a la prolongación del período de vida. En la época en que se crearon estas cajas el promedio de vida era de cincuenta y dos años, y hoy es de setenta.

Y leí también en un informe estadístico que las mujeres mayores de sesenta y cinco años tienen hoy, en la Argentina, una expectativa de vida de ochenta y dos años, y los hombres, de sesenta y pico de años, con lo cual la reducción de la edad de las mujeres frente a los hombres no parece razonable. En algunos países tienen una mayor edad, un requisito mayor de jubilación, precisamente en función de su mayor expectativa de vida, que supera los siete años.

Nadie puede sostener la necesidad de esta urgente reforma. Además, el sistema de jubilaciones móviles está fundado en que las prestaciones no eran consistentes porque toman los tres años para fundar el promedio del haber jubilatorio. No es consistente en función de que debe tomarse un cúmulo mucho mayor de años.

Este proyecto de ley presenta problemas muy graves. Incluso, yo decía que el ministro seguramente no debió haberlo leído, porque es imposible hacerlo sin cantidad de tiempo y un espacio físico tremendos a efectos de analizar los antecedentes. Fíjense ustedes que modifica el Código de Procedimientos Penal, el Código Penal, la Ley de Concursos, la Ley de Empleo, la estructura orgánica de la Superintendencia de Seguros, etcétera. Por otra parte, cada artículo remite a una ley en particular, por lo que se necesitaría un mostrador de diez kilómetros de largo para poder realizar las consultas pertinentes. Señalo que a mi juicio el sistema no registra consistencia suficiente como para dar semejante salto en el vacío y que, en muchos aspectos, este proyecto de ley aparece como inviable. Hay un ente de previsión social —el Consejo Federal de Previsión— que lo cuestiona seriamente. También lo han hecho en el seno de la comisión asesores del doctor Cafiero, en particular con respecto a la fijación del módulo de ajuste AMPO. No es un módulo consistente porque depende de variaciones que lo hacen viable. En cambio, en todos los regímenes de previsión del mundo se prefiere tomar módulos más consistentes como el haber de los salarios, o temas más específicos.

Agradezco profundamente la amabilidad del cuerpo al permitirme continuar con mi exposición.

El proyecto de ley tiene también aporías insalvables, por ejemplo en el régimen penal.

Por ello creo que se trata de una iniciativa que requiere de la participación de un gran equipo interdisciplinario: contadores, abogados, médicos, econométricos, estadísticos, actuarios.

Pero aquí parece que se invirtieron los papeles, porque cuando leo este texto me parece que la parte penal la hubiera redactado un contador y que los cálculos actuariales los hubieran hecho los abogados ya que hay situaciones verdaderamente incomprensibles.

Obra en mi poder un trabajo sobre el tema de la represión penal. En seis capítulos del título V se llega a límites tremendos. En lo personal, siendo un capitalista interesado en mantener un fondo de previsión social, me preguntaría qué actitud seguir si pensara que por errores que pudieran cometer mis administradores fuera condenado a quince o veinte años de prisión. Se trata de penas en que la realización culposa excede absolutamente la posibilidad de que alguien con seriedad pueda dejar de preocuparse ante una amenaza penal de semejante calibre; y todos sabemos que las amenazas no sirven, al igual que tampoco sirven las sanciones penales. Lo único que resulta útil son las normas previsoras puesto que el delito una vez cometido ya no tiene solución.

**Sr. Branda.** — ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Cendoya.** - Si., señor senador.

**Sr. Presidente** (Oyarzún). — Le recuerdo al señor senador por Córdoba qué le restan cuatro minutos para completar su exposición.

Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Branda.** - Le agradezco, señor senador.

Es cierto: nosotros lo hemos visto. Creo que de alguna forma es una decisión política el llevar esto adelante. Y hay errores de este proyecto de ley que deberán ser tratados oportunamente.

En privado hemos conversado sobre el tema con el señor senador y creo que es cierto. Considero que el conjunto de leyes que a su vez contempla este proyecto de reforma previsional impulsado por el oficialismo es para dejar también adentro una serie de medidas económicas. Y esto usted lo sabe bien.

Evidentemente tiene razón, señor senador, con respecto a algunos aspectos desde el punto de vista penal. Creo que se ha querido evitar la excarcelación, es decir, un problema de tipo procesal. Habría que requerir a las provincias que adhieran a este sistema para evitar la excarcelación de quienes cometen el delito. Creo que en esto usted va a estar de acuerdo.

**Sr. Cendoya.** — He conversado también sobre este tema con el presidente, de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que es un jurista formado en Córdoba.

Tuve la suerte de tener como maestros nada menos que a Sebastián Soler y a Ricardo Núñez,

quienes nos enseñaron que el Código Penal es un orden sistemático sobre el cual no pueden injertarse tantas cosas que conformen una desfiguración del sistema y que le hagan perder coherencia.

No voy a enumerar las relaciones y las penas desproporcionadas, penas gigantescas para figuras aparentemente culposas, la equiparación de penalidades para las conductas dolosas y culposas, la violación a normas de participación criminal, la nueva violación al principio de inocencia y al régimen de cauciones. Se establece un régimen de cauciones que es tan severo que vincula la caución al monto supuesto de un delito todavía no probado, cuando en realidad la caución se fija en un proceso simplemente para asegurar la presencia del procesado cuando el juez así lo requiera.

Por último, el proyecto contiene un artículo que me parece sencillamente fabuloso. Me refiero al artículo 143, que es tan frondoso..

**Sr. Presidente** (Oyarzún). — Señor senador: su tiempo ha concluido.

**Sr. Cendoya.** — Ya termino, señor presidente.

Dicho artículo establece que se aplicarán las penas previstas en el proyecto siempre que las del Código Penal no sean mayores, renunciando así a un principio de humanización que tiene más de dos siglos de existencia y que comienza con el marqués de Beccaría, quien indicó una tendencia para todos los tiempos con relación a la ultraactividad y retroactividad de la ley penal más benigna. Creo que esto constituye una creación absurda e impropia de figurar siquiera en un texto legislativo.

Esperemos, señor presidente, y con esto finalizo mi exposición, que en los nueve meses que faltan como mínimo para que este régimen pueda entrar en vigencia, o los dieciocho, que es el plazo máximo, podamos corregir las deficiencias que comprometen seriamente la tranquilidad de todos los argentinos.

**Sr. Presidente** (Oyarzún). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

**Sr. Solana.** - Voy a ser breve en mi exposición, señor presidente, más que nada con la intención de definir el sentido del voto que vamos a prestar con relación al dictamen en mayoría que se encuentra a consideración del cuerpo.

Es indudable que el proyecto de reforma del sistema previsional compromete a las actuales y futuras generaciones de argentinos. Por lo tanto,



es nuestra obligación analizarlo en toda su dimensión como se lo está haciendo en esta sesión. Estamos asistiendo a un análisis profundo del tema, abordándolo desde distintos puntos de vista.

No voy a entrar en los detalles ni me voy a internar en los vericuetos de las disposiciones contenidas en su articulado. Pero deseo dar una impresión general sobre lo que constituye el fondo de este asunto. Es por eso que he escuchado con atención la exposición de todos los señores senadores que me precedieron.

Es indudable que el sistema previsional vigente ha fracasado; está prácticamente quebrado. Ha sumido a más de tres millones de beneficiarios en una situación de verdadero pauperismo. No hay duda de que se ha perdido la fe en el Estado como organismo regulador y ente de aplicación del sistema. Y ello se ha debido a muchas vicisitudes de tipo económico y financiero que han sido detalladas también en esta sesión: las sucesivas formas en que se han debido ir cubriendo, a través de regulaciones impositivas y financieras, déficit permanentes del sistema jubilatorio, para llegar a la situación actual en que la gran mayoría de los beneficiarios se encuentra en una situación de extrema necesidad.

No es mi intención, en este momento, culpar a nadie de lo que pasó en nuestro país con el sistema, pero todos sabemos bien cuáles fueron las causas de este gran fracaso. En algunos casos, factores económicos, financieros, y en otros, políticos, llevaron al vaciamiento permanente de los recursos que estaban destinados al pago de los beneficios jubilatorios y las pensiones.

No quiero hablar del pasado pues nuestra función es legislar para el futuro, pero no olvidarnos de él es la única manera de munirnos de experiencia. Es necesario, entonces, e imperioso establecer una reforma a nuestro actual sistema previsional. Y el proyecto que estamos tratando así lo hace.

Deseo señalar que he escuchado con atención la enunciación de algunos proyectos alternativos, pero me parece que todas constituyen proposiciones teóricas acerca de distintos modelos de sistemas, que deben necesariamente ser llevados a la práctica para ver, en el curso de su desarrollo, cuál es la conclusión efectiva a la que puede arribarse.

Aquí, en este proyecto se opta por un modelo, un modelo que no es originario del proyecto, que se ha tomado de distintos sistemas legislativos, algunos de los cuales han sido reconocidos como eficaces, como por ejemplo, el que rige en la República de Chile, y que se acaba de señalar. Se propone así un régimen previsional público

fundamentado en el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado, que se financiarán a través de un sistema de reparto —que en adelante se llamará régimen de reparto— y de un régimen previsional basado en la capitalización individual —que en adelante se llamará régimen de capitalización—. Ambos conformarán un mecanismo moderno que se concretará en un sistema integrado de jubilaciones y pensiones que cubrirá las contingencias de vejez, invalidez y muerte y que se integrará al sistema único de seguridad social.

Se han hecho una serie de críticas tanto a la financiación de este proyecto como a los peligros aleatorios de que en el futuro pueda existir un riesgo para las prestaciones. He recogido dos o tres consideraciones que me parecen útiles porque, entre ellas, se ha señalado por ejemplo la conveniencia de que los recursos que se administran se inviertan en el país. De manera que el sistema no sería tan malo. Lo que se quiere es que se modifique y aplique un sistema de inversiones para no caer en lo que se ha señalado que ocurre en algún país limítrofe. Por ejemplo, se han aconsejado medidas para asegurar una buena administración. O sea que, en general, pareciera que las objeciones parciales que en algún momento se han hecho atienden más a la inversión de los fondos y a la forma en que deberán administrarse que al modelo que se ha elegido para el cambio del sistema previsional.

Se calcula que el sistema privado, representado por las administradoras de los fondos de jubilación y de pensión, recaudarían por año, al comienzo de la implementación del sistema, unos 4.000 millones de pesos en concepto de aportes, cifra que irá en aumento a medida que crezca la confianza en el régimen y se perfeccionen los sistemas de control y de recaudación. Tan sólo este punto permite destacar la necesidad de que reflexionemos sobre la necesidad de una ley complementaria que se encargue de la reglamentación del proyecto que estamos tratando.

A mi juicio, dicha reglamentación no sólo cumplirá esa función específica sino que, además, deberá proveer y dar solución a los temas que me preocupan y que, a título de ejemplo, voy a mencionar.

Primero: costo de la transición y financiación del trasvasamiento de los aportes de los trabajadores al sistema privado de las administradoras de los fondos de jubilación y de pensión, que se

calcula en un monto aproximado de 7.000 millones de pesos.

Segundo: prever la posibilidad de aumentar el capital mínimo de las administradoras de los fondos de jubilación y de pensión con el objeto de tender a una mayor garantía de las mismas, a la vez que evitar una circunstancia muy común en aquellos países que aplican el sistema que estamos considerando. Esta característica es la proliferación desmedida de pequeñas entidades abocadas al negocio, que en algunos casos, como en los Estados Unidos de América, con los planes de pensión llegan a tener menos de mil beneficiarios, lo cual trae aparejado un mayor costo del sistema para los adheridos.

Tercero: manifestación expresa y precisa por parte del Estado nacional de la forma en que se instrumentará la garantía de los derechos previsionales adquiridos con anterioridad.

Cuarto: determinación del organismo recaudador, debido a que el artículo 36 del proyecto otorga a la ANSES las facultades de recaudación de ingresos pero el decreto que transfiere las funciones de recaudación previsional a la Dirección General Impositiva contradice la mayoría de los diez incisos del mencionado artículo. Por lo tanto, se debe precisar cuál será el organismo recaudador.

Nace con esto un nuevo sistema previsional en la República Argentina, con la esperanza de que la jubilación signifique un premio a una vida de trabajo productivo y, también, para que sirva a los fines de acrecentar el mercado de capitales, que multiplicará las posibilidades de financiar las inversiones que el país necesita para su crecimiento. Esto es un hecho que subyace en todo el mecanismo del modelo y que no se puede desconocer. Además, creo que en este momento constituye una necesidad importante para el desarrollo nacional. Por eso estimo que es necesario que el nuevo régimen previsional sea lo más claro, seguro, estable y ecuaníme posible.

Estas son las manifestaciones que deseo hacer y que van a fundamentar la determinación de nuestro voto, en la intención de que se concrete algo que se ha formulado como manifestación expresa por parte del bloque de la mayoría, en la necesidad de una ley que aclare y corrija las disposiciones que son materia de dudas o de fundadas objeciones.

**Sr. Presidente** (Oyarzún). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza, bloque justicialista.

**Sr. Bordón.** - Señor presidente: voy a tratar de ser lo más breve posible para no reiterar temas ya planteados. Simplemente en este asunto voy a traer un testimonio propio y uno ajeno.

Cuando se terminaba de aprobar o se estaba en el trámite de aprobación de este tema en la Cámara de Diputados hace ya un tiempo publicábamos un artículo llamado "Reforma previsional: explicar, dialogar y solucionar. La diferencia entre lo esencial y lo accesorio". Comentábamos ahí una cita de Lester Thurow, en su obra *La guerra del siglo XXI, Head to head* en la que él decía que "...en los países pobres rurales ...los niños son el sistema de jubilaciones de la ancianidad. Hace dos décadas, cuando yo trabajaba en Pakistán, un campesino me explicó por qué necesitaba tener diecisiete hijos. En primer lugar, de hecho tendría sólo nueve, pues ocho morirían antes que él. Segundo, en realidad, sólo tendría tres, pues otros seis serían demasiado pobres para cuidarlo en su ancianidad. Tercero, en realidad, tendría sólo uno, pues dos de los que dispusieran de bienestar suficiente para cuidarle, serían mezquinos y egoístas y rehusarían hacerse cargo. En consecuencia — terminaba la cita—, si no deseaba pasar hambre en su ancianidad, necesitaba por lo menos diecisiete hijos".

Decíamos en aquel momento que en otras economías los sistemas pueden ser mucho más sofisticados. Pero lo esencial sigue siendo lo mismo. Cualquiera sea el método utilizado, la calidad de vida de los jubilados depende en una importante medida de la cantidad y productividad de los trabajadores activos. Si éstos toman decisiones equivocadas y su sistema productivo no funciona, las jubilaciones serán bajas e insuficientes. Las acciones que eventualmente puedan tener las administradoras privadas de fondos valdrán poco en el sistema de capitalización y los recursos estatales para el sistema de reparto tampoco serán suficientes. No hay nada mágico —decíamos—, ni en uno ni en otro sistema, que asegure un buen nivel de jubilaciones. Desde Pakistán hasta la Argentina finalmente todos dependemos de la productividad de nuestros hijos y de nuestra propia productividad.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Defensa Nacional, senador Eduardo P. Vaca.

**Sr. Bordón.** — Por supuesto que esto no implica no entender que los sistemas son también importantes. Un mal sistema puede desperdiciar los réditos de una economía eficiente. Sobre eso hemos estado discutiendo en la Argentina desde

hace más de un año. Creo que dos son los aspectos claves, los sustanciales, más allá de las discusiones, del proyecto que estamos debatiendo. El primero es la existencia de un sistema mixto, con una parte de capitalización individual y con una base de reparto. El principio de la capitalización individual permite vincular el esfuerzo propio con el beneficio futuro, aumentando la responsabilidad individual y fomentando la sana práctica del ahorro. Esto, a su vez, promueve el blanqueo salarial y evita o tiende a evitar el fraude previsional. Esto no sólo depende de la capacidad del Estado para detectar al evasor sino del propio interés del aportante para evitar la evasión y, de esta manera, no sólo fortalecer el sistema de capitalización sino también favorecer y robustecer el aspecto solidario en cuanto a la cantidad de recursos para el sistema de reparto.

Por otra parte, la base solidaria de este sistema de reparto asegura un mínimo de jubilación, sea cual fuere la situación personal del aportante y por lo tanto, constituye un ingrediente fundamental para mejorar la distribución del ingreso. Creo que en este proyecto la combinación de ambos principios, constituye una buena muestra de cómo se pueden utilizar mecanismos de mercado, esto es de capitalización individual, junto con un sistema de transferencias estatales para conseguir eficiencia y equidad. Este es el primer punto.

El segundo aspecto clave —decíamos ya hace varios meses— es la obligatoriedad del ahorro para todos los trabajadores activos. Y en esto se diferencia claramente de otros sistemas.

La teoría de la imprevisión y el sentido común no proveen, ambos, de una buena base para justificar esta obligatoriedad. Es razonable que el Estado obligue a los particulares a ahorrar una parte de sus ingresos para asegurar los años de su vejez. Caso contrario, será el mismo Estado quien deberá hacerse cargo de la imprevisión.

Creo, realmente, que el resto de los temas, que son muy importantes y que han sido y seguirán siendo parte del debate, constituyen lo accesorio. Tanto las propuestas de administradoras privadas, que en su origen eran exclusivamente de fondos, como la correcta actuación de la Cámara de Diputados construyendo este tipo de sistema mixto, de garantías y de alternativas estatales que, creo, han dado un equilibrio que realmente respaldamos y asumimos como propio.

Por eso, en este marco del proyecto que nos llega para su estudio y aceptando que el debate no está resuelto, lo que queríamos rescatar de este mucho más extenso artículo es que, en definitiva, junto con el fortalecimiento de este sistema, en gran

parte todo dependerá de la vigorización y de la productividad de nuestra economía.

Sin embargo, si bien eso es cierto, en cuanto al diseño del sistema que pretendemos debemos tener cuidado en pensar en la Argentina del futuro y no en los países subdesarrollados de veinte años atrás, sobre los cuales reflexionaba y alertaba Lester Thurow.

Esto podría ser una reflexión sobre nuestra realidad de país y, a partir de una reflexión sobre un país amigo y hermano que tiene muchas dificultades, podríamos decir que en realidad no es esto lo que pasa en las naciones más desarrolladas. Porque uno podría encontrar que funcionan sistemas de reparto y que los sistemas de capitalización que son privados no funcionan con obligatoriedad. Sin embargo, para algunos países podríamos decir que eso es verdad, pero habría dos reflexiones para realizar. La primera, es que las jubilaciones son relativamente bajas en relación al salario que percibe el conjunto de la población y que, en los casos en que hay muchos sectores de bajos ingresos, como en el nuestro y, en general, en los países hermanos de Latinoamérica, sería muy difícil que alguien se preocupara por adherir a su familia a un sistema de capitalización privado no obligatorio.

Si imitáramos aquellos sistemas, podríamos tener para una población como la nuestra una jubilación básica de muy bajo nivel y sin capacidad para otorgar el sustento hacia el futuro.

En cuanto al segundo aspecto, quiero decir que no lo tenía pensado pero, en la mañana de hoy, mientras revisaba ciertos papeles que algunos amigos me habían acercado, encontré un trabajo de la OIT, publicado en el Boletín de Actualidad Sociolaboral, números 3 y 4 de 1991 y que solicito sea insertado en el Diario de Sesiones, aunque leeré textualmente algunos de sus párrafos. Allí se nos muestra que en las naciones más altamente desarrolladas se ha iniciado el mismo debate que hemos abierto sobre la realidad de nuestro país, más allá de las posturas que hayamos tomado. Allí decía textualmente: "¿Qué va a suceder con los planes de pensiones?"

Estamos hablando de Francia. Dice el artículo:

"La publicación por el gobierno, el 24 de abril de 1991, de un documento para debate sobre las pensiones abrió el esperado debate sobre la reforma de los planes de pensiones en Francia.

Dicho documento propone con cautela varias hipótesis de trabajo para los próximos años. Establece la posición del gobierno en la elección que más pronto o más tarde habrá que hacer entre los sistemas 'distributivos' de pensiones, amenazados por los sistemas que compiten con ellos hasta el punto de hacerlos desaparecer, y los sistemas de 'capitalización' de las pensiones. Incluso durante su fase preparatoria, el documento ha suscitado gran interés entre los dirigentes políticos y sindicales. Durante varios meses antes de la publicación, la controversia entre los defensores de uno u otro sistema ocupó el primer plano político.

'Distribución' frente a 'capitalización'. El sistema distributivo —que rige tanto las pensiones básicas de la seguridad social como los programas complementarios— se basa en el principio de 'solidaridad' entre las diferentes generaciones". En esto hay algo en común con lo que está estudiando en este momento el Senado.

Continúa diciendo el artículo: "...Este sistema, en el que las pensiones son financiadas por las aportaciones de los asalariados, fue viable hasta que el elevado nivel de desempleo, el descenso de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida presagiaron diferencias entre los ingresos y los gastos que en un futuro relativamente próximo harán difícil la aplicación del principio de solidaridad". Aquí no se dice que no es necesario, sino que lo hacen difícil por el cambio de la realidad.

Prosigo con la lectura: "... En efecto, según las previsiones demográficas y económicas, en Francia, en el año 2040, sólo cotizarán 1,7-1,3 personas por cada jubilado, mientras que en 1970 la cifra correspondiente fue de 3 y en 1991 más de 2,1. ¿Qué sucederá con el principio de solidaridad a largo plazo si no puede variarse la tendencia?

Las ideologías políticas excluyen las soluciones racionales. Si bien los partidos políticos de izquierda y los sindicatos se han comprometido tradicionalmente con el principio de solidaridad —fue lo que hicimos los partidos populares en la Argentina—, empiezan a advertir que éste ya no puede aplicarse hasta el punto de tener que aumentar regularmente las cotizaciones para permitir a los jubilados futuros percibir una pensión acorde con sus expectativas legítimas, basadas en las cotizaciones que han abonado durante toda su vida de trabajo.

Otro sistema —la pensión de capitalización—, según el cual cada trabajador responde de la financiación de su propia pensión, es muy atractivo para los empleadores y los partidos de derechas.

Sin embargo, no opinan lo mismo los defensores del principio de solidaridad, pues temen que pueda conducir a un sistema de pensiones de "dos niveles", en el que los que perciben rentas bajas y, por tanto, tienen pocas posibilidades de ahorrar sean doblemente penalizados".

Aquí volvemos a coincidir con los sectores de la solidaridad preocupados por la forma exclusiva de la capitalización.

Continúo con la lectura de este artículo, que es de 1991: "...Según el primer ministro, Rocard, este sistema 'tendría consecuencias inaceptables tanto respecto a la igualdad entre las generaciones como a la igualdad entre los miembros de la misma generación'". Aquí coincidimos con él en la preocupación manifestada.

Sigue diciendo: "...El enfoque dual. Sin llegar a conclusión alguna, Rocard ha sugerido la posibilidad de utilizar las pensiones basadas en la capitalización para complementar las pensiones del sistema distributivo. Este enfoque, sin embargo, tendría que ir acompañado por reformas que pongan al día el pacto de solidaridad entre las diferentes generaciones".

Creo que de alguna manera y sin haber imaginado este debate —debo confesarlo—, esto es lo que el proyecto que viene de Diputados nos ha propuesto como filosofía.

El tema que se está debatiendo debe tomar en cuenta la nueva realidad mundial y hay un hecho que es cierto: el período de inactividad está aumentando.

El documento mencionado expresa, con relación a un país que no es tan distinto al nuestro: "Los procedimientos para que las pensiones puedan variar durante los años inactivos del jubilado. El número de años de jubilación se está acercando con rapidez al número de los años activos. Quizá no esté lejos el día en que a treinta años de trabajo sigan treinta de jubilación. Se está estudiando, por tanto, la mejora de las pensiones para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados y a la vez mantener la equidad entre la población activa y la jubilada".

Dice finalmente —y salteo—: "Los empleadores opinan que un enfoque hacia la capitalización de las pensiones debe estudiarse más a fondo, ya que 'aportaría a la economía francesa el ahorro a largo plazo necesario para la financiación de la inversión y la creación de puestos de trabajo'. Las compañías de seguro, que promueven el ahorro y los planes de jubilación,

están dispuestas a contribuir a este tipo de estudio y ya han anunciado 'propuestas innovadoras'"

Creo que aquí está marcado el orden en que debe analizarse el tema, pues están las tres cuestiones presentes en nuestro debate y nuestra propuesta. En primer lugar, está presente la realidad del empleo y la jubilación en este mundo nuevo. En segundo lugar, esta transformación no puede hacerse sin partir de alguna filosofía, y la nuestra procura armonizar la libertad con la solidaridad, la iniciativa individual con el compromiso con la comunidad, en su tiempo, en el venidero y también con relación a quienes nos han precedido con su esfuerzo y su trabajo. Por último, está presente la posibilidad de formar un mercado de capitales que, como decíamos al principio, haga que las jubilaciones dependan de la productividad de nuestra economía. Pensar en esta posibilidad es pensar en las jubilaciones como consecuencia del mejoramiento de la productividad de nuestra economía.

Quiero también decir algo que creo que se ha señalado ya. Este proyecto que nos llega de Diputados tiene una trascendencia histórica que deriva de que afecta a más de tres millones de jubilados y a más de doce millones de trabajadores, que serán los jubilados del futuro, y marca el destino de miles y miles de millones de dólares que deberán estar al servicio del crecimiento productivo argentino, en especial de la pequeña y mediana empresa, para que vuelva a gozar de condiciones competitivas. Por ello, hay que entender este proyecto como una integralidad. Así, el artículo 40, con sus garantías de rentabilidad, es inescindible del resto. Además, los artículos originales 168 y 169 del proyecto del Poder Ejecutivo nacional fueron modificados correctamente por los diputados, convirtiéndolos en los artículos 188 y 189. El primero establece que el Poder Ejecutivo nacional podrá disminuir la incidencia tributaria sobre el costo laboral —aportes patronales— en la medida en que aumenten los recursos de la seguridad social, lo que representa un avance contra la evasión previsional. Y el artículo 189 permite al Poder Ejecutivo nacional deducir total o parcialmente los aportes patronales de la parte de recursos coparticipados correspondiente a la Nación. Es decir que si se considera un artículo sin el otro, se pierde de vista la integralidad del proyecto, que en su conjunto responde a una filosofía.

Tenemos la convicción de que si en el futuro hubiese que modificar algún aspecto parcial de la ley que vamos a sancionar, ello deberá hacerse

por otra ley, con la misma legitimidad, la misma legalidad y el mismo sentido integral que subyacen en esta iniciativa, que es una de las más importantes de la última década de labor del Congreso de la Nación.

El artículo 163 permite la recomposición de los salarios de los jubilados que están actualmente en el sistema y no pensando en el futuro, lo cual me parece un avance realmente importante.

Por último, señor presidente, señores colegas, debo decir que desde la sanción de esta iniciativa hasta su puesta en vigencia nos va a quedar una tarea importante que es la reglamentación de la misma. En este período no sólo se efectuará la reglamentación —respetando obviamente en forma plena el espíritu y la letra de la ley— sino que también será un tiempo para organizarnos y encontrar —diría yo— acuerdos más amplios en la comunidad argentina y en el ámbito político sobre el sistema de superintendencia, supervisión y control

Aquí no se trata solamente de la tarea importantísima de supervisar un mercado de capitales donde la gente concurre libremente —me refiero, por ejemplo, a la Bolsa— a invertir algún consumo diferido por su propia y autónoma libertad; aquí se trata de miles de millones de dólares que constituyen un ahorro forzado a que la ley obliga a los trabajadores argentinos pensando en los jubilados de hoy y en ellos, que serán los jubilados del futuro. En consecuencia, tenemos que pensar en un período de seis meses a un año de gran trabajo por parte del Poder Ejecutivo nacional y de todos nosotros para garantizar un sistema de superintendencia y control que dé las máximas garantías en la defensa de estos recursos y que nos dé la máxima eficiencia.

No se debe concentrar la economía argentina sino que se debe lograr que ésta —además de nacionalizar el mercado de capitales haciendo más fuerte la economía argentina— se vuelque eficientemente hacia las pequeñas y medianas empresas argentinas para generar puestos de trabajo, lo cual constituye el gran desafío que nosotros tenemos en esta década.

Con este espíritu y con esta convicción debemos actuar después de este largo año de debate, sin duda insuficiente, como lo será cualquier debate sobre un tema de esta complejidad, que preocupaba ya a Lester Thurow cuando miraba el Paquistán de hace años, o que preocupa ahora a la nación que quizás sea hoy la más equilibrada monetariamente de Europa, Francia, que es la que ha retrocedido menos frente a los Estados Unidos y al Japón, desde el punto de

vista de algunas de las puntas tecnológicas. A ellos también les preocupa, igual que a nosotros, la resolución de este gran desafío, y saben que es un compromiso, una apuesta al futuro que se va a ir modificando del mismo modo como se modifique la realidad.

La importante tarea de la Cámara de Diputados posibilitó darnos una norma que creemos busca armonizar frente al desafío actual del mundo un sistema de reparto que constituye una base solidaria fundamental, sin la cual una comunidad no puede existir, y un sistema de capitalización mixto —ya que puede ser estatal o privado—, que es la iniciativa personal sin la cual ninguna comunidad libre y justa puede funcionar.

**Sr. Presidente** (Vaca). Corresponde que haga uso de la palabra el señor senador por el Chubut, de la Unión Cívica Radical.

Se me informa por Secretaría que el mencionado señor senador se está acercando al recinto; por ello, esta Presidencia ruega a los señores senadores que esperen unos instantes hasta que el señor senador por el Chubut pueda hacer uso de la palabra.

**Sr. Alasino.** — Si me permite, señor presidente, voy a hacer el relleno.

En este tema, se trata de seguir adelante. Los problemas actuales del sistema de jubilaciones y pensiones obedecen a una serie de causas que no son imputables a ningún gobierno. Este sistema se encuentra en una situación terminal que llevó al estado que hoy todos conocemos, aunque pasó en otros momentos por situaciones peores que las actuales. Basta recordar lo que sucedió en el gobierno anterior: cuando no se podían pagar los pleitos ganados por los jubilados, apareció un decreto por el que se impedía el pago de las sentencias; esto no era porque estaba mal sino porque el sistema no alcanzaba a recompensar ingresos para pagar las obligaciones de los jubilados.

Entonces, ¿qué hizo que este sistema decayera? Primero, la gran evasión de aportes; tenemos una estimación de aproximadamente el 30 por ciento. Segundo, debemos reconocer el bajo nivel de remuneraciones, que incide en los recursos del sistema. El endeudamiento del sistema previsional anterior, la falta de transparencia y confiabilidad en el actual sistema y el factor demográfico son otros puntos a tomar en consideración.

Voy a leer unos datos...

**Sr. Presidente** (Vaca). — Le ruego que sea breve.

**Sr. Alasino.** — Si, señor presidente; tengo diez minutos. Existe una relación de 1,58 entre activos

y pasivos. Cinco millones de activos tienen que pagar la jubilación de tres millones cien mil pasivos. Los aportes actuales son del 27 por ciento sobre el sueldo, por lo que se necesitarían tres veces más aportes por cada jubilado para cumplir con el famoso 82 por ciento móvil. Para aumentar esa relación, harían falta un millón novecientos mil más aportantes a fin de equilibrar el sistema. Estos son algunos elementos que establecen la necesidad de reformular el actual sistema.

Señor presidente: yo sé que este proyecto de ley tiene cosas buenas, cosas muy buenas y cosas no tan buenas, aunque perfectibles. Pero de lo que se trata es de empezar un sistema nuevo que, por lo menos, no se burle del trabajo de tantos hombres y mujeres argentinos que hoy no pueden cobrar ni siquiera el resultado de sus esfuerzos de toda la vida.

Como se trata de implantar un sistema que atienda esta realidad, a nuestro gobierno de nuevo le cabe la responsabilidad de avanzar en esa dirección. Evidentemente, a lo largo de este camino hemos modificado el proyecto una y mil veces. Pero vinimos aquí a establecer un sistema del que nadie puede decir que es una copia del chileno. Tampoco podrá decirse que la labor desarrollada por los diputados —que reconozco, y a quienes aplaudo— no hizo que al proyecto original se le impusiera un sello que, de alguna forma, determina la tonalidad de este sistema de jubilaciones argentino.

Quiero decir que este sistema, como decía el señor senador por Mendoza que me precedió en el uso de la palabra, si bien puede adolecer de fallas merece ser mirado íntegramente. O sea que no se puede separar una cosa de la otra, más allá de que por ahí el apuro del momento haya traído algunas distorsiones, como bien y con toda claridad señaló el señor senador por Córdoba. Pero de lo que se trata, y éste es el desafío de la Argentina de estos tiempos, es de avanzar en una dirección.

Este proyecto establece un sistema mixto y puro. Mixto porque atiende dos realidades y sin embargo cada una de ellas es un subsistema que nosotros suponemos se va a abastecer a sí mismo. Por otra parte, en todo caso en esta iniciativa —como siempre— se halla plasmado el espíritu de solidaridad tan caro al partido al que pertenezco.

En esto apunto a dos elementos importantes: primero, la garantía que el mismo Estado na-

cional le va a dar a sus jubilados con respecto a la rentabilidad de sus ahorros. Esta tan remanida y combatida administradora que va a formar el Banco de la Nación Argentina y que yo creo que es un logro y un acierto de los diputados porque además de garantizar —por lo menos le garantiza como mínimo la tasa de interés que devenguen los depósitos en caja de ahorro en la inversión que realice el jubilado— va a establecer también una especie de administradora "testigo"; así, las administradoras privadas que entren en competencia deberán mejorar la ganancia posible del jubilado o del aportante para tratar de captar sus ahorros. Según mi opinión, esto traduce una forma moderna de entender la solidaridad y de que el Estado custodie los derechos que todavía tiene la obligación de preservar.

Termino, señor presidente. El otro tema que creo define y perfila este modelo, que tiene distinciones sustanciales con los otros modelos que conocemos, es la garantía que permanentemente brindará al Estado, quien será el responsable final de que los jubilados cobren. Porque si las administradoras mal administran y el fondo no alcanza a cubrir los gastos, irá el Estado a pagar las jubilaciones.

Por lo que yo conozco, todo esto hace trizas la argumentación liberal o, por lo menos, la supuesta definición liberal para este sistema. Además, señor presidente, porque los argentinos tenemos derechos a imaginarnos nuevas formas de ahorro, y los peronistas desde siempre dijimos que el ahorro es la base del desarrollo y de la justicia en la Argentina. Y esta nueva forma de ahorro que los argentinos hemos imaginado es legítima, buena y viable.

Este proyecto de ley atiende dos vertientes: la de los jubilados y la del conjunto del ahorro y de la actividad industrial.

Nosotros imaginamos y es lo que proponemos a los argentinos, una nueva forma de ahorro porque sabemos que si no ahorramos no es posible que el país crezca. Y ésta es la forma que nuestro gobierno ha imaginado para este tema.

Finalmente, señor presidente, deseo señalar que en la situación en que le toca a este gobierno conducir el país, nos hubiera resultado mucho más fácil seguir postergando estos asuntos para después de las elecciones. Pero esto no es así. Tenemos la obligación de actuar en la dirección que la urgencia impone, más allá de que esto nos perjudique electoralmente o no. Tal vez, con todo derecho, exista un grupo importante de argentinos que esté disconforme por esta iniciativa, pero hemos tomado la decisión de dirigir al país en un sentido determinado, y hay

momentos en los que no podemos dudar ni admitir dilaciones.

La decisión de nuestro bloque de votar afirmativamente este proyecto de ley entronca con el desafío asumido por el gobierno justicialista de transformar a la Argentina.

**Sr. Presidente** (Vaca). — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Señor presidente: no es mi intención hacer un exhaustivo análisis de este proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados. Ya lo han hecho otros señores senadores integrantes del bloque que represento, pero sí deseo expresar algunos pensamientos para apoyar mi voto adverso al dictamen en mayoría.

Respeto además todas las opiniones que se han vertido en favor del proyecto contenido en dicho dictamen. Pero las palabras que acaba de pronunciar el señor senador por Entre Ríos, del bloque justicialista, me demuestran que estamos en posiciones verdaderamente irreconciliables. Los radicales no vamos a cambiar nuestro concepto, basado en el sistema solidario, para darle el apoyo a un sistema de capitalización obligatoria que pretende imponer el proyecto justicialista con sanción de la Cámara de Diputados.

Es natural que un tema como éste provoque un gran debate público, porque afecta a los jubilados argentinos, que representan el 9 por ciento de la población activa y se calcula que entre jubilados y pensionados abarcarían aproximadamente a tres millones de compatriotas.

Pero sería ilegítimo creer que solamente a ellos concierne e interesa la suerte de este proyecto de ley, puesto que tienen familiares, sensibles a los problemas que padecen y que son graves.

No se puede analizar el problema de los jubilados sin hacer una referencia necesaria a la pobreza, porque ellos son en su inmensa mayoría pobres, y pareciera que son cada vez más pobres, lo que se prueba no por las apreciaciones que yo pueda hacer, personalmente, sino por las estadísticas que nos hace conocer el INDEC, que es el organismo oficial.

Los radicales tenemos una filosofía que nos lleva a defender a los ancianos, a ese sector de la sociedad que ha dedicado toda su vida al trabajo y que cuando llega a la vejez tiene derecho a conservar la dignidad o un mínimo de vida digna. Este es el concepto moderno de lo que debemos considerar y aplicar para quienes están

en esa tercera edad, la edad del retiro y de la jubilación. En los tiempos que corren no se puede entender que los jubilados sean tratados como parias, como muertos civiles a los que la sociedad quiere ocultar y de los que hasta quiere desprenderse, o desentenderse de sus problemas. Los legisladores hemos visto cómo los jubilados tienen algo que decir. Ellos han venido a la plaza del Congreso —miles y miles— durante muchas semanas para intentar hacerse oír. Creo que no han sido escuchados debidamente; por lo menos en nuestra Cámara no han sido oídos. No conozco en detalle los avatares que pudo haber habido en la aprobación de este proyecto en la Cámara baja, pero sé que aquí, en las comisiones que estudiaron este proyecto, no los hemos escuchado. Al respecto debemos ser francos, aunque ello no significa que los legisladores no seamos sensibles. Así como los radicales hemos leído las cartas y comunicados que los jubilados nos han hecho llegar, lo mismo habrá ocurrido con los representantes del bloque de la mayoría y sus aliados, que están propiciando la aprobación de este nuevo sistema de capitalización obligatoria.

Por otra parte, señor presidente, sabemos que hay enormes "lobbies" que se mueven en favor de esta nueva proposición. ¿Por qué lo sabemos? Porque ellos han llegado hasta nosotros con todos los medios posibles, con revistas costosas, con artículos, con propaganda que nos muestra que los grupos que van a ser los beneficiarios de esta ley se han movilizizado para defenderla. Pienso que no cometen con eso ninguna ilegalidad. Están en su derecho de hacerlo. Pero también a nosotros nos interesa identificar a esos poderosos de la sociedad que están apoyando este proyecto venido en revisión.

¿Quiénes son esos sectores? Lo sabemos todos los legisladores, los hemos visto actuar. Tenemos que decirlo sin ambages, son gente vinculada con la banca, las compañías de seguros, la Bolsa de Comercio, la Comisión Nacional de Valores; es decir, el sector financiero del país. Ellos están defendiendo su propio negocio. Sería una ingenuidad de nuestra parte creer que se han convertido en los apóstoles de la causa de los jubilados. No es así. Por lo menos nuestro bloque no quiere cometer ese error.

Además, sabemos que ha habido fuertes presiones externas. Por ejemplo en la convención de ADEBA —Asociación de Bancos de la República Argentina— donde prestigiosos oradores de diversas partes del mundo exponen sus puntos de vista, he escuchado a algunos de ellos que

defendieron públicamente este sistema que se encuentra en estudio en el Senado.

Conocemos perfectamente que en el punto 14 de la Carta de Intención armada para lograr el crédito de facilidades extendidas, que fue un paso inexcusable para ingresar al Plan Brady, el gobierno se comprometió a implementar un sistema previsional sobre la base de un sistema de capitalización individual. Es decir que no podemos disociar la posición que defiende la mayoría de este compromiso que ha adquirido previamente el gobierno argentino a través de los negociadores del acuerdo de facilidades extendidas.

Debo decir que hay un déficit internacional del sistema de previsión social. Eso es cierto, y se ha mencionado aquí, pero una de las causas en las que se basa dicho déficit es la crisis económica que hay en el mundo, esta suerte de crisis que vive el capitalismo, el tan adorado capitalismo, el sistema de mercado a ultranza, que vemos que no encuentra salida para montones de problemas.

Otra de las causas es la universalización de la cobertura y un aumento de la expectativa de vida, lo que es algo positivo para los seres humanos pero negativo para el sistema previsional, como también lo es el bajo crecimiento demográfico de la población económicamente activa.

Pero si las mencionadas son las causas compartidas en el mundo, también hay causas específicas en la Argentina que nosotros no podemos ignorar. Por ejemplo, la caída de la participación de los salarios en la distribución de la renta. Este es un hecho innegable que tiene sus efectos negativos sobre el déficit financiero nacional del sistema de previsión.

También tenemos un aumento de la desocupación, del subempleo y de eso que se ha dado en llamar la "economía informal" que, en definitiva, tiene como consecuencia una evasión permanente de los aportes previsionales. Debo reconocer que el gobierno nacional ha hecho esfuerzos —y yo lo aplaudo en tal sentido— para limitar la evasión. Pero lo hizo en todos aquellos sectores registrables haciéndosele muy difícil poder desarrollar la misma tarea de inspección en quienes componen la denominada economía informal que desgraciadamente, por la crisis económica que vive el país, va en aumento y no en disminución.

Además, que en el mismo sector público se ha hecho una práctica el establecimiento de pagos no remunerativos —como se los denomina—, que tienen un propósito muy claro, que es el de



eludir contribuciones previsionales. Y eso aumenta también el déficit del sistema que hasta ahora tenemos en el país.

Es cierto que en determinados momentos también ha habido edades de retiros que no guardaban relación con la expectativa de vida que existe en la Argentina.

Otra de las causas propias es el exceso de moratorias que ha existido. Casi todos los gobiernos han establecido moratorias que han reducido necesariamente los aportes al sistema.

Un antecedente importante que no podría dejar de señalar en el análisis de los puntos por parte del bloque de la Unión Cívica Radical es que el actual gobierno suprimió una importante fuente de recursos, como era el impuesto a los pulsos telefónicos. Entonces hubo una enorme transferencia de ingresos del sistema de previsión, pero ¿a quién fue esa transferencia? Fue a las empresas adjudicatarias. Recuerdo muy bien, señores senadores, que aquí vino el entonces ministro Roberto Dromi y nos aseguró que la eliminación del impuesto iba a ser en beneficio de los usuarios. Pero no ha sido así. No sólo no ha sido así sino que todos conocemos que las únicas beneficiarias han sido las empresas adjudicatarias. Por eso tenemos uno de los servicios telefónicos más caros del mundo.

Me llamaba la atención la semana pasada, en que asistí a la Conferencia Interparlamentaria Mundial, en Camberra, un llamado a la Argentina, que el plazo mínimo de dos o tres minutos me salía 2,60 dólares. Es un precio irrisorio, si lo comparamos con las altísimas tarifas que tenemos que pagar en la Argentina.

No se puede captar que la crisis del sistema argentino obedezca a la ineficiencia del sistema de reparto. Este sistema tiene defectos. ¿Cómo no lo vamos a admitir?

Precisamente, son esas fallas las que queremos corregir. Pero no podemos aceptar, como aparece en la prédica de quienes propician y hacen propaganda activa en favor del sistema de capitalización, que todos los problemas que tiene el sistema previsional se deban a que el criterio de reparto es malo y que por eso hay que cambiarlo por el de la capitalización. Son estos mismos grupos los que impulsan lo que consideramos un verdadero retroceso, que se va a consumir con la sanción de esta nueva ley que seguramente se va a aprobar esta noche con el voto de la mayoría y sus aliados.

Pero el Estado está abandonando su responsabilidad, o gran parte de ella. Sé que ha habido posiciones optimistas. Incluso mi distinguido colega, el senador por Córdoba, en su brillante

alocución, ha pensado que el Estado no se va a desentender nunca de estas cuestiones. Quiero creer que es así. Pero también tengo que admitir que este sistema de desmantelamiento del actual régimen previsional nos lleva a la renuncia por parte del Estado de una responsabilidad que, a nuestro juicio, es verdaderamente indelegable en el campo de la seguridad social.

La Unión Cívica Radical no acepta que se pueda promover una reforma del régimen previsional vigente sin que el proyecto incluya una disposición expresa -que no la tiene- para reparar la angustiosa situación en que se encuentran ahora tres millones de jubilados en todo el país.

Es preciso establecer un sistema previsional que resguarde el razonable equilibrio que debe haber entre el aspecto financiero y una vejez decorosa. Además, reitero, el Estado debe asumir su responsabilidad, como claramente dijo, entre otros oradores, el señor senador Avelín, por la provincia de San Juan.

Las fórmulas de prestación privadas en forma alguna aseguran una solución para los actuales jubilados, ni tampoco ofrecen garantías a los más jóvenes de que algún día van a tener mejores prestaciones que las que actualmente abona el sistema de reparto, aún en pleno deterioro.

Por eso pensamos que el rol del Estado en este aspecto previsional es fundamental, además de irrenunciable.

Quiero efectuar, a grandes rasgos, algunas críticas al sistema propiciado por el dictamen de la mayoría. Y lo quiero hacer para fundar mi voto adverso, que es racional y de convicción.

Ya he dicho que la iniciativa no resuelve el problema de los actuales jubilados, pero también ella es parte de una necesidad macroeconómica, que se orienta a atender urgencias financieras del propio Estado, por encima de los intereses de los jubilados. Y de lo que se trata es de crear un mercado de capitales; esto lo han dicho todos. Lo han dicho los propios interesados en el negocio y el ministro de Economía.

No sé si este mercado de capitales va a llegar a cubrir la demanda que tiene el país de inversiones productivas. No lo sé ni estoy en condiciones de elaborar cálculos fidedignos. Pero seguramente va a ser un mercado muy importante de capitales en el país.

Ahora bien; este sistema no puede garantizar un haber mínimo para el futuro jubilado. Aquí se cita con insistencia el ejemplo de Chile, y es el único que se puede poner. Pero en Chile es un

sistema muy controvertido. No puedo aceptar que se lo muestre aquí como el sistema ideal, no discutido, al que todos los chilenos ven con beneplácito, porque no es así. Al contrario; en el país trasandino cada vez se intensifica más el debate en contra del sistema porque no otorgó los beneficios que se habían prometido.

Reconozco que es una cláusula beneficiosa la agregada por la Cámara de Diputados para que el Banco de la Nación sea un organismo receptor de los fondos de pensión. Pero, aun así, la incorporación del Banco de la Nación no subsana el desfinanciamiento de las cajas previsionales ni garantiza la rentabilidad del capital acumulado.

No aceptamos que las administradoras privadas logren el propósito, a través del juego de la ley, de entregar a las reglas del mercado toda la previsión social.

Hemos dicho que la seguridad social, es una obligación indelegable del Estado como lo señala el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el más moderno que tiene nuestra Constitución puesto que ha incorporado en la reforma de 1957 los derechos sociales. Se trata de la ley de las leyes y, si nosotros la dejamos de lado a través de una ley del Congreso, ésta entrará en pugna con la Constitución Nacional.

Hay otro aspecto, que es el del alto costo del nuevo sistema que se quiere instrumentar. Lo componen comisiones, gastos de publicidad, gastos de gestión, y nada hace creer que va a disminuir el costo actual del sistema previsional, sino todo lo contrario: puede llegar a aumentar considerablemente.

Las empresas que se van a dedicar a esta actividad tienen la rentabilidad asegurada, de manera que ellas pueden incrementar los costos sin mayor problema porque no son las que finalmente van a pagarlos; eso lo harán los afiliados al sistema previsional.

**Sr. Cendoya.** - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Sí, cómo no.

**Sr. Presidente** (Vaca). Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Cendoya.** — Como se ha señalado el ejemplo de Chile, quiero indicar que ese caso no resulta consistente en un largo espacio de tiempo. Sólo cuenta con diez años de antigüedad y sus resultados hasta el presente no son una prueba definitiva de la capacidad del sistema, la cual debe medirse en lapsos más prolongados.

Pero en este momento se están registrando algunas circunstancias preocupantes en el régimen chileno. Me refiero a la evasión, es decir,

a la gente que deja de pagar el sistema de capitalización.

Al respecto, cuento con una estadística que han realizado asesores de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí se puede ver que la fuerza de trabajo en Chile en 1990 llegaba a las 4.728.000 personas, los afiliados totalizaban 3.390.000 y los cotizantes sumaban 2.289.000.

Esto quiere decir que de los 4.728.000 trabajadores, una proporción muy importante está abandonando al pago de aportes al sistema de capitalización privada, lo cual va a conspirar en el mediano plazo contra la viabilidad del sistema.

Quería hacer esta aclaración, en el sentido de que en Chile el sistema ha funcionado en forma eficiente en materia de mercado de capitales..

**Sr. Branda.** — Nuestro proyecto es mejor que el de Chile.

**Sr. Presidente** (Vaca). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Agradezco la valiosa intervención del señor senador por Córdoba que viene a avalar las dudas que yo reflejaba en mi exposición acerca del acierto del sistema chileno. Son dudas que resultan del gran debate que existe en Chile y que no ha podido ser acallado, debido a la fuerza de la opinión pública adversa que propicia que los sectores afectados vuelvan al sistema anterior.

Quisiera entrar en detalles mayores acerca de cuál es la posición del radicalismo en este tema, pero para evitar reiteraciones voy a solicitar en este momento que se inserte en el Diario de Sesiones la Declaración de la Honorable Convención Nacional de la Unión Cívica Radical sobre la Reforma Previsional. Se trata de una buena síntesis de argumentos de algo más de una carilla, que hago mía al solicitar la inserción.

Quiero apoyar con todo entusiasmo el anexo al Orden del Día N° 486, que lleva mi firma y que se basa en el proyecto del entonces señor diputado de la Rúa y del diputado Juan Manuel Moure, que es un reconocido estudioso de estas cuestiones. También intervinieron el diputado Ricardo Vázquez y otros legisladores de nuestro partido. No quiero hacer una enumeración taxativa, pero sí quiero señalar, por un principio de honestidad intelectual, que el dictamen de minoría, no me pertenece. He apoyado la labor de otros que representa claramente mi pensamiento. La Unión Cívica Radical también se opone al proyecto oficial por sus rasgos de compulsividad. Se trata de un sistema de ahorro forzoso que

brinda a las administradoras de estos fondos de pensión un mercado seguro.

Además, es un sistema riesgoso para los aportantes, que van a estar siempre sujetos a la rentabilidad o falta de rentabilidad de las inversiones que hagan las administradoras, sin que éstas corran igual riesgo. El riesgo es de los que están aportando, y no de las empresas administradoras. El sistema que se propicia constituye una especie de hipoteca para el gobierno nacional, puesto que, siguiendo esta tesis de la responsabilidad que siempre tendría el gobierno, si el régimen de capitalización fracasa, aquél tendrá que salir en apoyo de los jubilados con el patrimonio público. En ese momento, el supuesto beneficio que traería la privatización desaparecería, porque, cualquiera sea el gobierno al que le toque vivir ese período de crisis del sistema, volverían el aporte y la responsabilidad estatales.

Finalmente, como ya lo he anticipado, este proyecto es inconstitucional, pues viola el artículo 14 bis, que fija la responsabilidad que tiene el Estado en esta materia.

Somos partidarios del sistema de reparto, que tiene fallas —es cierto—, pero para subsanarlas queremos despojarlo de los facilismos y de las inequidades que contiene. Ha habido actitudes demagógicas y excesos en su aplicación. Pero los estudios demuestran que ese sistema, bien aplicado y con un criterio riguroso de recaudación, puede funcionar perfectamente bien, contemplando la mejora de los haberes de los actuales jubilados.

Yo no digo que la propuesta alternativa de la Unión Cívica Radical sea perfecta, pero es un aporte muy serio para implementar, sin abandonar el sistema de reparto, una legislación que pueda sanearlo y hacerlo equitativo, para que su aplicación no genere déficit y para que sea bien administrado.

Pensamos que en el sistema jubilatorio tiene que haber tres niveles. En primer lugar, tiene que existir un aspecto asistencial, financiado por el Estado. Después, está el sistema jubilatorio propiamente dicho.. .

**Sr. Presidente** (Vaca). — Perdón, señor senador. Le queda un minuto.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — El tercer nivel es el de las jubilaciones complementarias y voluntarias, que funcionan en muchas partes del mundo, y también en la Argentina están funcionando desde hace algunos años.

En síntesis, señor presidente, para nosotros el proyecto oficial es regresivo. Hay una sucesión de períodos en la historia. Hubo un tiempo de conquistas sociales. Fueron conquistas que los

sectores desvalidos de la sociedad, los de menos recursos, los trabajadores, los jubilados, obtuvieron de ese factor de la economía que es el capital. Desgraciadamente, con proyectos como éste pasamos de la conquista a la reconquista. Los representantes del capital vuelven a avanzar, a recuperarle terreno a los trabajadores activos y pasivos. Pero, felizmente, el proceso no se cerrará. Son ciclos. Aunque se apruebe este proyecto, aunque se adopte este sistema, los sectores sociales volverán a luchar para obtener nuevas conquistas. Y, para nosotros, éstas no van a pasar nunca por este sistema de capitalización sino por el que propiciamos en nuestro proyecto, que es el de reparto con un saneamiento de su administración y una equidad en su financiamiento.

**Sr. Presidente** (Vaca). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires del Partido Justicialista.

**Sr. Cafiero.** — Señor presidente: más allá de los aspectos técnicos bastante complejos que tiene este extenso proyecto de ley —a los que no me voy a referir salvo puntualmente cuando consideremos en particular la iniciativa— hay en la sociedad argentina y también en su clase política ciertos debates pendientes que a veces no encuentran el ámbito donde desarrollarse, y que lo brindan ocasiones como la que presenta esta iniciativa que está a nuestra consideración.

Sin querer, al opinar sobre esta iniciativa, o bien nos manifestamos partidarios del estatismo, o bien del mercado; de la solidaridad o del egoísmo, o utilizamos el vituperio estatista o la sublimación neoliberal. Cualquier ángulo o enfoque que pueda de alguna manera catalogarse en el inventario de las ideologías modernas —si así se las puede llamar— está, en cierta forma, implícito o explícito en un debate como este, aunque no sea la intención de quienes me han precedido en el uso de la palabra, porque estamos todavía, frente a una asignatura pendiente que tiene la clase dirigente argentina con la sociedad.

La reforma económica que se ha puesto en marcha en el campo monetario y fiscal, la reforma del Estado y la del mercado, no tendrían sustento final si además no abordásemos este complicado y al mismo tiempo fundamental proceso que significa la revisión y reformulación del sistema de previsión social.

Si analizamos el cuadro que ofrece la situación económica del país, no vacilaría en afirmar que el proceso de estabilidad y reactivación económica puesto en marcha en los últimos dos o tres años no es suficiente para garantizar el nivel de crecimiento y equidad social que los argentinos podemos y tenemos el derecho de conquistar.

La Argentina, a pesar de todos los logros, sigue consumiendo más de lo que produce; sigue invirtiendo más de lo que ahorra pero menos de lo que necesita para crecer. Este es el nudo del asunto. Por eso no he querido transitar los niveles filosóficos del problema ni me he querido insertar en la mecánica del proyecto, aunque, vuelvo a decirlo, cuando tratemos en particular sus cláusulas voy a formular mis salvedades y objeciones.

He querido rescatar de este proyecto lo que me pareció esencial; lo que de alguna manera me definió por su aprobación, y es que vislumbro en esta iniciativa una tremenda posibilidad argentina. Hoy, señores senadores, el nivel de actividad y reactivación económica está sostenido fundamentalmente por aportes de capital externo de corto plazo, muchos de ellos de carácter especulativo. Bienvenidos. Pero también es cierto que han generado un clima de incertidumbre y, ciertamente, de vulnerabilidad en el funcionamiento del esquema.

He meditado sobre esta cuestión general que tal vez no ha sido expresamente consignada cuando analizamos el tema en sus aspectos particulares o específicos.

Hablar de autonomía y de independencia económica parecería un contrasentido; parecería querer refugiarse en el anacronismo, en viejas banderas nostálgicas que el mundo ha superado. Hoy, ante la transnacionalidad, en la cual están cifrados los actuales procesos evolutivos en el mundo, la creciente interdependencia global, el crecimiento transnacional de los mercados, afirmar que queremos y podemos reconquistar o resguardar el grado que nos es posible de autonomía económica, a muchos oídos sonará como una tremenda herejía, como un simple "voluntarismo populista" destinado a desvanecerse ante el primer soplo de la realidad.

Yo no pienso así, señor presidente. No pienso así no por mis convicciones políticas -que son las de la mayoría de este Senado- sino porque creo que este es un valor fundamental del futuro. Porque a pesar del proceso de interdependencia y transnacionalidad los mejores pensadores de la competitividad de las naciones, empezando por Porter, señalan que no es posible iniciar un proceso de competitividad nacional si no se cifra

en los valores y en las capacidades de las propias naciones.

La Nación es todavía el hogar donde no sólo vivimos sino donde también generamos la capacidad para poder competir en el mundo; y cuanto mayor grado de autonomía tengamos para definir esta competitividad con mayor ventaja nos reinsertaremos en este mundo competitivo en el que nos toca vivir. Al contrario del pensamiento neoliberal, es el pensamiento nacional el que tiene la cifra del futuro y del progreso argentino.

Entonces, viene esta pregunta: ¿cómo hacemos para asegurar ese grado de autonomía? ¿Cómo hacerlo frente a la masa enorme de capitales flotantes que existe en el mundo financiero que multiplica por lejos las cifras del comercio real, que se mueve a través de simples anotaciones electrónicas que se cruzan en segundos y que varían de un mercado a otro conforme las exigencias de un inmediatez rentístico que las hace ser extremadamente sensibles a las vibraciones de los mercados? En algún momento pudo —y ciertamente ha sido así— ayudar a un proceso de estabilidad y aún de reactivación económica, pero no es una fuente segura ni permanente de crecimiento genuino. Entonces, todo aquello que signifique reinstalar en la Argentina la cultura del ahorro nacional y fortificar esta base esencial en que debe afincarse el próximo proceso de crecimiento sostenido, para mí es un dato fundamental de la realidad.

Señor presidente, señores senadores: creo que entre el sistema de reparto y el de capitalización no hay duda de que éste tiene elementos mucho más dinámicos y certeros para engendrar y difundir esa cultura del ahorro.

Lo dicho me hace pensar en esta otra paradoja del mundo moderno. Y es que esta suerte de cultura posmoderna que privilegia lo rápido, lo fácil, el tiempo corto, la satisfacción inmediata, que vemos difundirse por los medios de comunicación que impregnan y modelan la cultura de hoy, también está en debate porque si no vencemos esta cultura de lo fácil será difícil engendrar la cultura de lo difícil, que es la cultura del ahorro, pues eso significa privarse del consumo. Por eso, este sistema que genera una cantidad millonaria de ahorristas que van a estar informados de sus ahorros y vigilando sus rendimientos, me ha movido a defender esta iniciativa porque me suena como algo trascendente para el futuro de todos nosotros; en fin, para el futuro de todos los argentinos.

Señor presidente, señores senadores: voy a tratar de ser lo más breve posible en un tema que es extremadamente complejo. El sistema de previsión social que estamos debatiendo servirá para satisfacer, simplemente, las necesidades de jubilaciones dignas para la clase pasiva de la población. Debe ser una pieza fundamental en el armazón de una política económica de crecimiento y equidad. Veamos.

El país ha conocido dos modelos de desarrollo. Desde 1880 a 1930 conoció el modelo del desarrollo "hacia afuera" y generado desde afuera. No necesito explicitarme demasiado; creo que soy suficientemente comprendido. Después se inició en los años treinta, y se profundizó durante los gobiernos peronistas, el crecimiento inverso: "hacia adentro" y "desde adentro". Porque fuimos nosotros los que hicimos ejercicio de nuestro derecho de autonomía e independencia para generar las bases de ese proceso. Pero también ese proceso se agotó nacional y mundialmente. Y hace quince años que tenemos un modelo de desarrollo. Seguimos viviendo en la inercia del modelo de crecimiento hacia adentro, pero todavía no hemos concebido un nuevo modelo sustentado en los logros estabilizadores de este gobierno. Digo esto porque sin estabilidad ni reforma del Estado ningún modelo funcionaría; pero todavía no está definido, tiene una carencia fundamental: ¿hacia dónde queremos crecer? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Si lo intentáramos hacia adentro y agotáramos la capacidad competitiva de la Nación Argentina, cerrando la economía y descuidando las exportaciones como factor dinámico del crecimiento, auguro que todas las conquistas que hemos logrado se evaporarían.

Se necesita un programa de crecimiento hacia afuera, un programa de desarrollo competitivo de la economía nacional. Pero, ¡jojo! "Hacia afuera" pero "desde adentro". Debemos recuperar nuestra capacidad autónoma de decisión, y no la tendremos sin ahorro nacional.

Por eso este sistema si bien no me enamora, me mueve a impulsarlo. Y no me enamora porque también tengo mis dudas e incertidumbres, veo peligros y tampoco me satisface plenamente. No sublimo este sistema, pero en el contexto en el que el país realmente necesita avanzar constituye una herramienta muy poderosa y fundamental.

No estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho respecto del resultado final de los fondos de pensión o de sistemas parecidos de otras partes del mundo. En los países desarrollados está probado estadísticamente que por cada dólar que se ahorra en el sistema de previsión se acumula entre treinta centavos y un dólar de ahorro más

en la economía, porque se produce un efecto multiplicador. Y cuando advertimos que en la Argentina la tasa de ahorro es inferior al 16 por ciento y en otros países llega al 40 por ciento; cuando advertimos que en 1980 la tasa era del 23 por ciento, y que la inversión bruta interna ha caído un 10 por ciento en la década del 80 y que se ha recuperado sensiblemente en los últimos dos años gracias al influjo de ahorro externo me pongo a pensar en la necesidad de utilizar los mecanismos de incentivo al ahorro que tengamos a nuestra disposición.

Por eso me entusiasma el vislumbrar de acuerdo con serias proyecciones macroeconómicas que la Argentina en pocos años puede sustituir totalmente el ahorro externo como fuente dinámica de su desarrollo.

El ahorro externo ha significado en 1992 el 2,75 por ciento del producto bruto interno, y para el año 2000 pasará a ser negativo en el 0,08 por ciento. No sé si está claro: sería bajar del 2,75 al -0,08, mientras que el ahorro nacional podría crecer del 13,95 al 21,07 por ciento del producto bruto interno. Esta es la cifra de la autonomía económica del país.

Pero hablar de un monto de ahorro suficiente como para financiar el crecimiento económico sería insuficiente si no dijera que hace falta también orientar el ahorro.

En este punto podríamos entrar —y no deseo hacerlo ahora— en un debate interminable acerca de un tema álgido para la economía moderna: ¿debemos dejar que sea el mercado quien determine hacia dónde se orienten las inversiones? En este caso particular se trata de las del sistema de previsión social bajo análisis que engendra una enorme paradoja que Carlos Marx nunca soñó: los ahorros voluntarios de los trabajadores en lugar de la plusvalía a través de un pacto tácito irán a financiar el desarrollo de los capitalistas. Siempre se pensó que el ahorro de los capitalistas debía financiar el "desarrollo" de los trabajadores. Pero ahora nos encontramos con que millones de trabajadores ahorrarán miles de millones de dólares para financiar a los capitalistas.

De todos modos esta paradoja no debe hacernos caer en el vituperio anticapitalista, es decir, considerar este asunto con los ojos críticos de quienes ven sólo un aspecto de la realidad. No me importa esta situación en la medida en que el capitalista responda a la responsabilidad

de lo que significa tener a su disposición los ahorros de millones de trabajadores.

Para eso hace falta definir si los van a invertir solamente teniendo en cuenta la seguridad y rentabilidad, como lo exige el sistema, o si vamos a dar un paso más adelante; esto es, si el Estado va a asumir en este contexto la responsabilidad de instaurar políticas económicas públicas y activas, políticas industriales activas.

De ahí, señor presidente, que un grupo de senadores hayamos presentado hoy un proyecto de ley por el que se crea el Banco de Inversiones para el Comercio Exterior, en cuyo articulado se propone que un porcentaje de los fondos que reúnan las administradoras de fondos de pensión se destine a las operaciones de financiamiento de exportaciones industriales. Un banco similar existe, creado por decreto del Poder Ejecutivo, mas no funciona todavía. Nuestra propuesta es que por ley se lo ponga en marcha y que cuente con estos fondos específicos. Nos parece que ésta es la manera de ir acercándonos al modelo de crecimiento autosostenido hacia afuera, haciendo valer la competitividad sistémica, motivando la calidad y el valor agregado de nuestras exportaciones.

Sin este componente es muy difícil crecer en el mundo. Si no, observen los mercados primarios y de *commodities*, la declinación que están teniendo, y dónde radicó el proceso que llevó a los llamados "tigres asiáticos" y a nuestros vecinos chilenos a tener el exitoso comportamiento económico que están exhibiendo.

No voy a hacer la defensa total e integral de la experiencia de Chile. Es cierto que el sistema está demostrando algunas fisuras, pero tengamos en cuenta lo siguiente. Fue creado en la época de la dictadura militar de Pinochet pero el gobierno de la concertación democrática, que como saben reúne al centro izquierda del espectro político chileno, no tocó una sola coma del sistema, que en este momento acumula el 35 por ciento del producto bruto, y que le ha permitido a Chile duplicar su tasa de ahorro nacional y hacer, por ejemplo, inversiones en la Argentina. Distinto es el caso nuestro, ya que posiblemente tendríamos necesidades nacionales insatisfechas mucho más grandes que las que tiene la economía chilena.

Tampoco me desagrade pensar que en algún momento administradoras de fondos de pensión argentinas incursionen en los países del Mercosur. Esa será, también, una forma de exhibir nuestra capacidad competitiva y de internacionalizar

nuestra economía, comandada por intereses argentinos.

Y no me digan tampoco que, en definitiva, esto es entregar el mercado de capitales a los monopolios extranjeros. Eso sí que yo no lo aceptaría ni siquiera a título de hipótesis.

El sistema es lo suficientemente flexible no sólo para admitir la presencia del Banco de la Nación, que a mi juicio se ha elegido equivocadamente como herramienta para este sistema, porque existe una institución mucho más apta para cumplir este rol. Me refiero a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, que tiene setenta y ocho años de fomento del ahorro. ¿O acaso todos nosotros —por lo menos los de nuestra edad, no sé si los más jóvenes— no nos acordamos de la libretita y las estampillas que nos daban en los colegios primarios?

**Sr. Genoud.** — La habrán vendido.

**Sr. Cafiero.** Está sujeta a privatización pero todavía no se la ha privatizado.

**Sr. Genoud.** - Es cuestión de días ...

**Sr. Cafiero.** — No sé si el Poder Ejecutivo va a recibir este mensaje. Hago la propuesta, que no sé si será compartida por mis compañeros de bancada. Simplemente digo que en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro se tenía una institución con sucursales en todo el país y con mil agencias de correos donde se recibía el depósito de los ahorros populares. Ella, entonces, bien podría ser la institución estatal adecuada, en vez del Banco Nación, que tiene otras finalidades.

Vuelvo al tema al que me estaba refiriendo. Hace falta orientar el esfuerzo inversor de la Argentina y para que no me llamen estatista, populista o peronista nostálgico, voy a citar a dos economistas modernos ...

**Sr. Alasino.** — Toffler, por ejemplo, que es moderno.

**Sr. Cafiero.** — El subsecretario de Economía, doctor Llach, excelente y estudioso economista argentino, cuando habla de estas reformas dice que esto supone "un verdadero cambio de régimen, que pone énfasis en la necesidad de crear desde el Estado las instituciones más aptas para generar el crecimiento desde adentro y mejorar la distribución del ingreso".

Y en otra colaboración dice: "Lo importante no es sólo aumentar el ahorro nacional sino canalizarlo hacia la inversión productiva. Ello implica crear condiciones favorables para evitar la fuga de capitales y asegurar el máximo nivel de productividad social para los proyectos de inversión públicos y privados".

Pero muchos más contundente es Javier González Fraga, ex presidente del Banco Central, quien dice que hace falta "una tercera etapa que contendrá definiciones estratégicas en materia económica. El perfil de la industria de un país no es el resultado espontáneo de las leyes del mercado. Tanto funcionarios como empresarios van procurando una concertación que implícita o explícitamente define, los sectores en los cuales debe apoyarse el desarrollo futuro. No se trata de planificación industrial ni de dirigismo, sino simplemente reconocer aquellos sectores que son considerados básicos para el crecimiento autosostenido. Estos sectores deberán ser exportadores y muy fuertes, para permitir que nuestras exportaciones se dupliquen en los próximos años, como resulta obvio al ver la comparación internacional adjunta...".

Claro, la Argentina exporta el 5 por ciento de su producto bruto interno, señores senadores; Alemania, el 27; Canadá, el 23; Chile, el 26; Francia, el 19; Italia, el 16; Corea, el 30; México, el 10. Y bien, señores, esto es con respecto a lo que me sugiere esta posibilidad de acumulación que ahora, de alguna manera, va a estar en parte en poder del Estado y en parte en poder de las asociaciones intermedias.

Esta es otra virtud del proyecto de ley que quiero enfatizar. No sólo se privilegia como administradora de fondos a una entidad estatal, como el Banco de la Nación Argentina, sino que incita a la sociedad civil a organizarse para transformarse ella misma en administradora de los fondos. Serán los sindicatos, las organizaciones intermedias, las agrupaciones de profesionales; será toda esa multiplicidad de matices y de activismos que tiene la sociedad argentina la que tendrá que asumir ese desafío de ser ella misma la administradora de estos procesos de ahorro e inversión.

Estas son las razones, más allá de algunos disensos que pueda tener, que me hicieron reflexionar sobre el sentido profundo de este proyecto de ley, y que me han impulsado a apoyarla y a votarla favorablemente.

Finalmente -termino- nuestra preocupación por un sistema de previsión absolutamente inédito —no hay ejemplos en el mundo— debería ser acompañada por el tratamiento de la situación actual de nuestros jubilados. Yo, señores, no necesito dar muchas cifras sino solamente significar que del total de 3.200.000 jubilados que hay en el país, el cuarenta por ciento, es decir, aproximadamente 835 mil jubilados y 458 mil pensionados, o sea casi 1.300.000, reciben una remuneración de ciento cincuenta pesos

mensuales. Esto daña nuestra dignidad porque es una situación tremendamente injusta que ofende la sensibilidad social que poseemos.

Es cierto que la gran parte de aquéllos son trabajadores autónomos, y sabemos de todas las insuficiencias que tiene el régimen que los contempla y de todas las corruptelas que tiene y ha tenido. No obstante, ya en agosto pasado presentamos un proyecto de ley que en el momento de votarse en general voy a pedir a la Cámara que se aparte del reglamento y se vote una preferencia para que este proyecto se trate en la tercera semana de octubre, con dictamen de comisión o sin él.

El proyecto al que me refiero establece tres cosas. En primer lugar, un censo general y obligatorio de jubilados en la Argentina. No tenemos cifras exactas ni correctas. No sabemos si entre los jubilados que perciben sus haberes, aun magros y mínimos, hay jubilados "truchos", para decirlo en lenguaje posmoderno. No sabemos por qué las pensiones de invalidez del régimen jubilatorio argentino triplican o cuadruplican el porcentaje normal que hay en todos los países del mundo. Son casi el veinte por ciento. ¿Por qué no revisar las jubilaciones por invalidez, sobre todo la de los menores de cincuenta años, o con menos de diez años de aportes, para verificar si están dadas todas las condiciones de legitimidad? Confieso que no tengo cálculos actualizados sobre cuánto esto puede significar de ahorro neto en las prestaciones del sistema.

También creo que si hacemos un trabajo consensuado —y en eso comprometo al señor ministro de Trabajo y al secretario de Seguridad Social, a quienes veo sentados en este recinto—, si hacemos un balance del sistema actual, el de reparto, el que todavía subsiste, atento el incremento sustancial de la recaudación previsional, estoy seguro de que podría llegarse a la conclusión de que hay un fuerte superávit en el sistema. Es cierto que un artículo del proyecto que estamos tratando dice que el superávit hay que emplearlo para bajar el costo laboral. Me permito disentir.. .

**Sr. Presidente (Vaca).** — La presidencia ruega al señor senador que redondee su exposición.

**Sr. Cafiero.** — Me permito disentir. Creo que al dar inicio a este nuevo sistema, podríamos aliviar la situación de los jubilados con remuneraciones mínimas. No digo de llevarlas inmediatamente a trescientos pesos para los que tienen otros ingresos o a cuatrocientos cincuenta para quienes no tienen otros ingresos. Pero en tanto se demuestre un superávit en las cajas, pro-

pongo que se aumenten en la medida que corresponda los haberes mínimos de los jubilados.

Esto, señor presidente, además de ubicarnos en los equilibrios macroeconómicos nos ubicaría también en el equilibrio macrosocial. No hay en el mundo, señor presidente, modelo macroeconómico que funcione si no lo acompaña un modelo macrosocial. Y permítaseme decir, asimismo, que también se necesita del equilibrio macropolítico.

Sumemos, entonces, a lo que significa como promesa y realidad este cambio en la cultura y mentalidad de los argentinos, que supone incentivar el ahorro en todas sus formas pero, especialmente, en la previsión, que es el más noble de los ahorros, un gesto aunque más no sea para esa enorme masa de gente que no tiene respuesta después de una larga vida de trabajo. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Vaca). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Genoud.** - Señor presidente: procuraré cumplir con lo comprometido o sea que mi exposición no supere los quince minutos, en un desafío por hablar de la forma más concreta y breve posible sobre un tema que reviste una gran complejidad técnica.

Hemos venido a este debate conociendo la decisión irreversible del bloque justicialista de aprobar el proyecto de reforma previsional tal como ha sido sancionado en su momento por la Cámara baja, aunque se han escuchado objeciones y reparos a gran parte del articulado del proyecto que consideramos e, incluso, se ha anunciado la presentación de un proyecto correctivo, lo que nos coloca ante un trámite parlamentario heterodoxo.

El propio bloque mayoritario admite, con este procedimiento, que va a votar un proyecto que contiene errores, que va a levantar la mano para dar sanción completa y definitiva a un proyecto imperfecto y que posteriormente, a través de un trámite parlamentario similar, habrá de corregir los defectos que el instrumento legal a sancionar va a tener.

Debo decir, señor presidente, que hemos venido a este recinto a librar una discusión por las ideas, sabiendo que nuestro número ni los argumentos a desarrollar van a alcanzar para modificar la decisión del oficialismo.

Distinto sería si el bloque justicialista de senadores hubiera tenido desde un comienzo una mayor permeabilidad, para buscar puntos de coincidencia que nos permitiesen modificar el texto que hoy analizamos.

Cuando este tema fue tratado por la Cámara de Diputados se reformuló en gran parte el proyecto que venía del Poder Ejecutivo. En algunos casos se perjudicó su redacción y en otros se mejoró su contenido.

El temperamento observado por el bloque de diputados peronistas no ha sido observado por el bloque de senadores del justicialismo. Se ha dicho con razón que no ha existido la posibilidad de discutir el tema en las comisiones respectivas. Esto nos ha privado de persuadir a la mayoría, a través de nuestros argumentos y sinceras convicciones, para que, por lo menos, esta iniciativa fuese perfeccionada.

Todas las alocuciones que se han escuchado aquí han descripto bien los dos únicos sistemas difundidos en el mundo para hacer funcionar el tema previsional. Existe el sistema de reparto, que es el que se funda en el aporte mensual del trabajador en actividad para pagar la jubilación a quienes están en condición pasiva, a cambio de que cuando él se jubile otro tanto hagan los que en ese momento estén en actividad laboral. Este sistema se funda en lo que se ha denominado bien "compromiso intergeneracional de solidaridad": los que trabajan pagan las jubilaciones o pensiones y este compromiso se va renovando de generación en generación.

A su vez, el otro régimen que también ha sido abordado y definido reiteradamente en este debate, se basa en el ahorro individual del trabajador para luego cobrar su jubilación, conforme hayan sido sus aportes y rentabilidad en su época de actividad laboral. Este sistema, denominado de capitalización, en el único país del mundo en que es aplicado absolutamente de un modo excluyente es en la hermana República de Chile desde hace una década. En el resto de los países se utiliza el sistema de reparto o bien existe la opción entre un sistema público de reparto y otro de capitalización privada.

En nuestro proyecto proponemos un sistema básicamente de reparto y, complementariamente y de un modo opcional, el de capitalización privada.

Se han descargado las críticas más atroces al sistema de reparto. No tenemos problemas en admitir que en nuestro país ese régimen entró en crisis hace mucho tiempo. Pero no creemos que sea intrínsecamente ineficiente. Creemos que una gran cantidad de factores lo han convertido en ineficiente, pero nadie en este recinto se ha dedicado a desarrollar cuáles han sido esos factores.



Por ello vamos a reivindicar el sistema de reparto, que funciona no solamente en los países subdesarrollados sino en gran parte de los desarrollados, donde los trabajadores pueden optar por él.

El sistema de reparto se fue desprestigiando como consecuencia de las crisis a las que se sometió al régimen previsional argentino. En primer lugar, por malas administraciones, prácticamente sin excepción, de todos los gobiernos que se sucedieron en el país.

En segundo lugar, se llegó a esta situación por el saqueo de los fondos de las cajas de jubilaciones. Este es un tema que ningún legislador de la bancada justicialista abordó en profundidad porque, casualmente, fue desde 1940 hasta 1960 cuando se produjo el escamoteo de los dineros de tales cajas para destinarlos a otros fines sociales o políticos. Allí comenzó la crisis del sistema de reparto.

En tercer lugar, han existido numerosos regímenes de privilegio...

Voy a conceder al senador Snopek todas las interrupciones que quiera, pero debo decir que no me gusta el murmullo.

**Sr. Presidente** (Vaca). — No dialoguen, por favor.

**Sr. Genoud.** — En tercer lugar, señor presidente, me refiero a los regímenes especiales en los cuales, en mayor o menor medida, tenemos muchos alguna cuota de responsabilidad porque hubo un exceso de carga política, por no decir demagógica, para establecer regímenes especiales, muchos de los cuales afortunadamente están comenzando a ser dejados sin efecto por disposiciones recientes de este Congreso. Esta situación determinaba que se quebrara la ecuación de activos con respecto a pasivos, que óptimamente tendría que estar en el orden de cuatro activos por cada pasivo.

**Sr. Snopek.** — ¿Me permite, señor senador?

**Sr. Genoud.** — Sí, señor senador.

**Sr. Presidente** (Vaca). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Snopek.** — La incidencia de los llamados "regímenes de privilegio" no es tan grande. Según estudios hechos por entidades que no tienen nada que ver con nuestro partido ni con ningún otro, ya que son fundaciones independientes, la incidencia en el sistema de los regímenes de privilegio no llega al 3 por ciento. Esto no solamente sucede en el nivel nacional sino también en el provincial, donde quienes alguna vez fuimos legisladores pudimos haber sido demasiado generosos y permisivos con una serie de situaciones. Pero, repito, la incidencia de los

regímenes de privilegio en el desajuste del sistema no llega a ser del 3 por ciento.

**Sr. Presidente** (Vaca). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Genoud.** — La incidencia es del 3 por ciento, pero éste es uno de los factores que estoy considerando como determinantes de la crisis del régimen previsional basado en el sistema de reparto. Quiero creer que el señor senador por Jujuy no ha querido con su intervención justificar las leyes que establecieron las jubilaciones de privilegio.

Debemos admitir como otra de las causales de deformación del sistema las numerosas jubilaciones y pensiones obtenidas en fraude a la ley. El señor senador por Buenos Aires doctor Cafiero ha hecho referencia correctamente a la gran cantidad de jubilaciones o pensiones por invalidez, en un porcentaje que duplica o triplica el habitual en otros países del mundo. Esto se debe a que se otorgan jubilaciones a la invalidez a través de procedimientos fraudulentos, sin que corresponda otorgarlas en función de la invalidez real que padecía quien las solicitaba.

La evasión previsional ha sido un mal crónico en la Argentina, que también ha sido soportado por otros países. Nosotros creemos que hay distintos modos de combatir la evasión previsional, y en su oportunidad desarrollaré nuestra propuesta.

Otro de los factores que contribuyó a deformar la relación óptima de activos y pasivos es el de los mínimos de edad obligatoria para jubilarse, que muchas veces estuvieron por debajo de lo razonable y que provocaron un abrupto aumento en el número de trabajadores que se acogieron a los beneficios de la jubilación. Al respecto, en este tema también tenemos una propuesta legislativa responsable.

**Sr. Cendoya.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Genoud.** — Sí, señor senador.

**Sr. Presidente** (Vaca). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Cendoya.** - Con relación a la excesiva permisividad en el nivel de edad, que fue uno de los factores del deterioro del sistema jubilatorio, me viene a la memoria una frase de Perón, aunque no soy un peronólogo muy autorizado, que dice: "Jubilados de pantalón corto". El señor senador Cafiero seguramente la recordará.

**Sr. Cafiero.** — Si sigue así, le vamos a dar una ficha. (*Risas.*)

**Sr. Presidente** (Vaca). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Genoud.** — Entonces, señor presidente, nuestra propuesta, que está contenida en el dictamen de la minoría y que apoya nuestro bloque, está fundada en el sistema de reparto como obligación indelegable del Estado nacional, sustentada, como bien se ha dicho aquí, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Interesa fundamentalmente a nuestra bancada que quede claro que todos los antecedentes históricos que he referido muy rápidamente y de un modo esquemático demuestran las bondades del sistema de reparto, deformado por una mala administración y por la serie de corruptelas que enumeré y que desviaron su correcta dirección.

Mientras tanto, advertimos de parte del justicialismo una prioridad inocultable —sobre todo si nos atenemos a las propias declaraciones del ministro Cavallo, que a diario impulsan la inmediata sanción de este proyecto de ley—, cual es la de abrir un mercado de capitales a través del nuevo sistema de capitalización privado de jubilaciones.

Esto es evidente y no solamente parte de las opiniones y declaraciones de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, sino también de sectores financieros interesados en la puesta en marcha, de un modo inmediato, del sistema aludido.

Este sistema, a nuestro juicio, reviste un serio riesgo debido a la posibilidad de que en nuestra economía pueda existir un minuto de inestabilidad —que ojalá nunca llegue— o un pico inflacionario que por breve que sea devorará parte del ahorro que el trabajador ha logrado durante muchos años. Este es un principio absolutamente incontestable.

Y si hablamos de una economía en crecimiento, queda por saber cuál de los dos mecanismos previsionales es más eficiente. Por supuesto que hay literatura abundante de economistas que expresan sus opiniones con respecto a economías en crecimiento sostenido. Podemos plantear la hipótesis de que la Argentina se mantenga así durante veinte o treinta años de aportes; ojalá ocurra eso. Sin embargo, como legisladores tenemos que ser realistas y no legislar a través de expresiones de anhelo, de meros deseos.

Así, pues, me voy a referir nada más que a la opinión de un Premio Nobel de Economía —Paul Samuelson—, quien dice, comparándolos dos sistemas previsionales, que el sistema de

capitalización tiene desventajas aun donde haya estabilidad y crecimiento. Si el crecimiento es sostenido, el sistema de reparto permite que cada generación reciba más de lo que aportó; el sistema de capitalización, no.

No voy a traer más opiniones, porque me estoy refiriendo a un Premio Nobel de Economía. Habrá que quejarse a los suecos en caso de que le hayan dado el Premio Nobel de Economía a un ignorante.

**Sr. Alasino.** — ¿De qué año?

**Sr. Genoud.** — De la década pasada.

**Sr. Presidente** (Vaca). — Por favor, señor senador, continúe con su exposición.

**Sr. Genoud.** — ¿Qué sucede en el resto de los países del mundo? Creo que es casi una obligación hacer un repaso de lo que ha ocurrido en Chile, en los Estados Unidos y aun en Francia, porque el senador por Mendoza ha hecho una muy breve y sólida exposición sobre este tema y ha presentado aquí el caso concreto de Francia. Vamos a empezar por allí.

Es cierto que Francia es uno de los países que tiene el cuadro más preocupante para el futuro inmediato, y es verdad también que prevé para dentro de ocho años —menos de una década— una relación de dos activos por cada pasivo, lo que significaría el estallido de su sistema previsional. Esto lo reconocen todos los partidos políticos pero Francia tiene hoy una desocupación del dieciséis por ciento. Además es, junto con Alemania, el país que tiene una brecha mayor entre el crecimiento y el empleo; o sea, se da la paradoja de crecimiento sin empleo, pues su producto aumenta pero también crece de modo alarmante el desempleo, que es uno de los causantes directos de este horizonte apocalíptico al que hizo mención el senador Bordón. Además, señor presidente, otro factor coadyuva para la crisis del sistema francés: que la edad mínima de los varones para jubilarse es de sesenta años. Esto quiere decir que se acelera el ingreso de los trabajadores activos al sistema pasivo.

En cuanto al caso de Chile, el senador Cendoya en su ilustradísima exposición señaló algunas pautas que me permitiré ahondar. El sistema previsional de Chile tiene aproximadamente diez años. Es el único país que cuenta con un sistema excluyente de capitalización. Hoy, solamente el 59 por ciento de los trabajadores chilenos han adherido al sistema previsional privado —el único que existe en Chile— a través de las administradoras de fondos de pensión. El resto queda sin cobertura previsional.

¿Puede la Argentina darse el lujo de tener un 30 o un 40 por ciento de sus trabajadores sin cobertura jubilatoria?

**Sr. Alasino.** — No es este sistema; es el de Chile.

**Sr. Genoud.** — Conozco la diferencia entre ambos proyectos. Luego veremos el de Estados Unidos...

**Sr. Branda.** — ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Genoud.** — Sí, señor senador.

**Sr. Presidente (Vaca).** — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Branda.** - La diferencia sustancial es que el sistema chileno es obligatorio y el nuestro optativo. Entonces, creo que esto debe tenerlo en cuenta en su análisis el señor senador por Mendoza.

**Sr. Presidente (Vaca).** — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Genoud.** - Me he referido al caso de Chile porque fue tomado como ejemplo por el señor miembro informante del dictamen de la mayoría. Si lo desean podemos revisar la versión taquigráfica...

**Sr. Alasino.** — Pero es un antecedente mejorado.

**Sr. Genoud.** — Es un antecedente no tan mejorado. Pero lo cierto es que sirve como elemento de análisis, pues todos sabemos cuál será el final: el Estado deberá subsidiar su sistema previsional. Un segundo elemento que se advierte en el caso de Chile es la vertiginosa caída en el monto de las cotizaciones. Hoy, por el 25 por ciento de quienes cotizan en el mercado previsional privado tienen un ingreso de sólo 100 dólares de tal modo que se achica el volumen financiero del sistema. Más grave todavía es el cada vez mayor costo del sistema, porque se ha desarrollado una cruda disputa en el mercado entre los distintos fondos de pensión que cada vez hay más gastos en publicidad. De hecho, los fondos para estos fines salen del bolsillo del trabajador y serán recursos de los que se verán privados ya que de ellos se nutre su jubilación. Del mismo modo, aumentan las comisiones y gastos de administración.

En el caso de la Argentina tenemos que agregar el costo del seguro. El señor senador Cafiero aspira a que la Caja Nacional de Ahorro y Seguro permanezca en manos del Estado. No tengo esa esperanza. O mejor dicho la tengo, pero asumo con realismo que será privatizada.

De mantenerse la Caja Nacional de Ahorro y Seguro en manos del Estado ese sería un costo que se reduciría; pero si también los seguros deben ser privados al costo de gestión y comisión habrá que agregar también el del seguro privado.

Anteriormente se mencionaron distintos informes de la OIT. Sobre el particular debo decir que dicho organismo incluso ha llegado a aconsejar como alternativa que cuando haya fondos de pensión no sean manejados por financieras sino por entidades públicas sin fines de lucro. De esta manera podrá reducirse sustancialmente el costo de administración y comisión de los fondos de pensión.

En el caso de los Estados Unidos, señor presidente, existe un sistema análogo al que está contenido en el dictamen de mayoría. Allí hay una opción entre un sistema de capitalización y el sistema de reparto público. Pero también él senador por el Chaco de la Unión Cívica Radical ha hecho referencia a las noticias que se reciben de los Estados Unidos, publicadas en el diario "Wall Street Journal", que señalan que más de 200 fondos de pensión están al borde de la quiebra como consecuencia de la caída de las tasas de interés. Y da el caso de la General Motors, que administra uno de los más importantes fondos de pensión, que tenía una previsión del 11 por ciento de rentabilidad en sus inversiones, y actualmente están en el 6,4 por ciento, de modo que se aproxima al umbral de un verdadero colapso financiero. Entonces, si tomamos como ejemplo lo que ocurre en los países que tienen sistemas similares al que impulsa el oficialismo —que seguramente será sancionado y entrará en vigencia en el país en los próximos días—, estaríamos cometiendo una gran torpeza. Nos queda la última apelación, la de abrir una posibilidad para encontrar una norma de concertación entre el radicalismo, otras fuerzas políticas y el justicialismo, para darle al país una norma que proteja fundamentalmente la situación de los trabajadores y no privilegie solamente al mercado financiero argentino.

Señor presidente: concluyo sosteniendo que hablaría mal del Parlamento si reconociésemos la sanción de este proyecto *ab initio* aceptando su imperfección y esperando que el Poder Ejecutivo la corrija a través de vetos parciales —mecanismos que no compartimos por entender que son absolutamente inconstitucionales— o bien gestionando una reglamentación que mejore el contenido de este proyecto, excediéndose del propio marco jurídico que corresponde a las reglamentaciones, o por último que se ponga en marcha un proyecto de ley para sancionar un

nuevo instrumento jurídico que corrija las graves irregularidades e incluso defectos técnicos contenidos en la iniciativa que hoy el justicialismo se apresta a aprobar.

Si institucionalizamos este sistema de votar las leyes para simultáneamente sancionar leyes "correctivas", creo que daríamos a la sociedad un mensaje que no se compadece con la necesidad de prestigiar al Parlamento argentino.

De tal modo, señor presidente, conforme lo anunciáramos desde hace ya varios meses y ratificando la línea que el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical mantuvo hasta la votación final de este tema en la Cámara respectiva vamos a votar en contra del dictamen en mayoría porque sostenemos el despacho en minoría que desarrolla una propuesta responsable.

Para terminar, a efectos de que el justicialismo no bata el parche como lo hace habitualmente diciendo que somos una máquina de impedir, aunque sea en forma telegráfica —como lo hemos hecho siempre cuando nos hemos opuesto a algún proyecto oficial—, vamos a decir qué es lo que proponemos al Congreso por medio de nuestro proyecto.

Nuestra alternativa se basa en un sistema de reparto bien administrado que supera todas las deformaciones de las últimas décadas que desnaturalizaron un sistema que no es intrínsecamente ineficiente.

En segundo lugar, para que se advierta que no estamos animados de un espíritu demagógico, participamos del criterio de modificar la edad mínima para poder jubilarse. Hablamos de 65 años para los varones y de 60 para las mujeres con un sistema gradual que ha sido correctamente explicado por el señor senador de la Rúa.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional

del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

**Sr. Genoud.** — También modificamos el régimen vinculado a la extensión del derecho a la pensión, para restringirlo a los efectos de procurar mantener la ecuación de cuatro activos por un pasivo. Disponemos rigurosos pasos para acceder al régimen de jubilación por invalidez, para evitar los mecanismos fraudulentos que habitualmente se han utilizado en los últimos años para obtener este tipo de beneficios, que han servido también para profundizar la brecha entre trabajadores activos y trabajadores acogidos al beneficio de la jubilación. Además —lo que ha sido motivo de la exposición de parte de algunos señores senadores de mi bancada— proponemos un sistema de recaudación con el fin de superar el cuadro de

evasión crónica que presenta el actual régimen. Para ello propiciamos que la eficacia que demuestra la Dirección General Impositiva —aquí estamos haciendo un reconocimiento hacia un área oficial— coadyuve a los efectos de combatir una de los males crónicos del sistema previsional argentino que es la evasión.

Sintéticamente, ésta es nuestra propuesta. Solamente he trazado los ejes sobre los cuales gira nuestra proposición contenida en el despacho de minoría, y que pormenorizadamente se encuentra en el articulado de nuestro proyecto, respecto del cual vamos a dar en su momento nuestra aprobación.

**Sr. Presidente** (Menem). — Se van a votar, en primer término, los pedidos de inserciones solicitados por los señores senadores por las provincias de Córdoba, del Chaco —bancada radical-, Mendoza —bancada justicialista— y del Chubut —bancada radical.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Menem). — Se procederá en consecuencia<sup>1</sup>.

**Sr. Molina.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

**Sr. Molina.** — Dado que el proyecto es muy extenso y que, prácticamente, hay acuerdo en todos los artículos entre todos los señores senadores que hemos decidido votar afirmativamente, propongo que la votación se haga por capítulos, salvo en los casos en que los señores senadores quieran hacer alguna objeción. Creo que este procedimiento resultará conveniente para aligerar el trámite. Esta es una propuesta del bloque justicialista.

**Sr. Presidente** (Menem). — En consideración la moción del señor senador por Santa Cruz. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Menem). — Se procederá en consecuencia.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Cafiero.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

**Sr. Cafiero.** — Como anticipé en mi exposición, pido que la Cámara se aparte del reglamento y trate la moción de preferencia para el proyecto que lleva el número de expediente 1.771, referido a la situación de las personas que están actualmente jubiladas.

Solicito que este tema sea tratado con preferencia en la tercera semana de octubre, con dictamen de comisión o sin él.

**Sr. Presidente** (Menem). — A continuación de la votación en particular podremos darle curso a su solicitud.

**Sr. Genoud.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Genoud.** - Señor presidente: he solicitado la palabra para adelantar que la bancada radical va a adherir al pedido que ha formulado el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Presidente** (Menem). — En consideración en particular.

- Se enuncian y aprueban los capítulos I a IV (artículos 1° a 15) del título I del libro I.

- Se enuncian y aprueban los capítulos I y II (artículos 16 a 22) del título II del libro I.

**Sr. Cafiero.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cafiero.** — Señor presidente: el artículo 21 habla del AMPO, que es el Aporte Medio Previsional Obligatorio. A mi juicio, debería ser calculado sobre la base de aportes y número promedio de afiliados a todo el sistema y no simplemente teniendo en cuenta los afiliados al sistema de capitalización. Esto hace a la racionalidad y la lógica del sistema.

No puede calcularse este valor tan esencial para la determinación de los valores del sistema sobre la base de una parcialidad que no se sabe cuánto va a significar.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Entiendo que es así, señor senador; es decir, que el cálculo se realiza sobre todo el sistema porque se hace referencia a los afiliados que se encuentran aportando en ambos sistemas. Esta es la explicación que yo tengo. Es decir —repito—, se calcula sobre todos los que aportan a ambos sistemas.

**Sr. Presidente** (Menem). — Las manifestaciones formuladas por los señores senadores se tendrán

en cuenta a los fines de la interpretación, ya que no se proponen modificaciones al artículo.

**Sr. Cafiero.** — Yo propondría una modificación expresa, señor presidente, pero voy a atenerme a la interpretación que hace el señor presidente de la comisión.

**Sr. Rubeo.** — Está bien.

— Se enuncia el capítulo III del título II del libro I (artículos 23 a 26).

**Sr. Cafiero.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Menem). - Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cafiero.** — Señor presidente: tengo una observación para formular con respecto al artículo 24.

En el inciso a), en vez de decir que serán computados los últimos diez años inmediatamente anteriores a la cesación en el servicio, debería expresar que se computarán los últimos diez años con aportes, por la sencilla razón de que en los últimos diez años o antes de jubilarse un jubilado puede haber estado desempleado, haber trabajado en el exterior o haber estado fuera del sistema de aportes.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Al igual que en el caso de la observación anterior, entiendo que ésta será tenida en cuenta para la interpretación. Obviamente la comisión no acepta la modificación.

**Sr. Cafiero.** Entonces, señor presidente, si se me autoriza voy a abstenerme en la votación de este artículo.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente** (Menem). — Se va a votar el capítulo III del título II del libro I, artículos 23 a 26.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el capítulo IV del título II del libro I (artículos 27 a 30).

**Sr. Cafiero.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cafiero.** - El artículo 27 dice: "Estarán a cargo del Régimen Previsional Público las prestaciones de retiro por invalidez y pensión por fallecimiento del afiliado en actividad hasta la suma de la Prestación Básica Universal más la Prestación Compensatoria que correspondiere al momento de producida la contingencia. . ."

Se ha omitido incluir en este caso la prestación adicional por permanencia.

El haber jubilatorio normal se compone de la suma de estos tres elementos. Por lo tanto, las

pensiones por invalidez y fallecimiento deben incluirlos, no pudiendo omitirse las prestaciones adicionales por permanencia en el sistema.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Entiendo que esta también es una observación.

¿O es una moción, señor senador?

**Sr. Cafiero.** — Es una moción para que se modifique el artículo. Solicito que se tenga en cuenta esta reserva que formulo.

**Sr. Presidente** (Menem). — Correcto. Así se hará.

**Sr. Cafiero.** — Con respecto al artículo 30 se establece que se considera que los afiliados al sistema son naturalmente del sistema de capitalización y que solamente haciendo una manifestación expresa pasan al sistema de reparto. Esta es una anomalía en el proyecto. Lo lógico es que todos los jubilados actuales más los que sobrevengan estén primitivamente en el sistema de reparto y tengan que pedir pasarse al sistema de capitalización y no al revés. Porque esta es la esencia del sistema. Entonces propongo que se haga una nueva redacción o que se me autorice para abstenerme de votar.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Alasino.** — ¿Me permite hacer una observación? Evidentemente, este artículo fue introducido por la Cámara de Diputados. El sistema que originalmente venía en el proyecto no establecía esta opción. Me he preguntado por qué los diputados lo han redactado de esta manera. Creo que ellos han querido tener en miras que la parte principal del sistema —y ésta es la equivocación— es el régimen de capitalización. De modo que han dicho: la regla es ésta; la excepción es lo otro. Entonces supongo que todos están en esta regla. Quiero entender que por ello lo han hecho así. Realmente el artículo 1º del proyecto no distingue sino que da el mismo nivel a los dos sistemas,

De manera que no es que a mí me satisfaga la interpretación que estoy haciendo, pero es la única posible que creo habrán tenido en cuenta los diputados cuando redactaron el artículo.

**Sr. Cafiero.** — No dejará de reconocer el señor senador que puesto que se cambió el espíritu original del proyecto, en lugar de un sistema de capitalización obligatorio, tenemos un sistema de capitalización optativo. En consecuencia, se deben modificar los artículos que por inercia han quedado comprendidos dentro del primitivo espíritu de la ley.

De cualquier manera estoy formulando una observación y pido permiso para abstenerme de votar.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Bordón.** — Señor presidente: en el espíritu de reflexión que hacía el señor senador por Entre Ríos comparto también la observación planteada por el señor senador Cafiero. Entiendo que en el espíritu del proyecto estaba originalmente el tema de que se debe optar por el cambio y no optar por la permanencia.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza, bloque radical.

**Sr. Genoud.** — Muy brevemente deseo expresar que este es un símbolo del espíritu que anima al Poder Ejecutivo en su proyecto, que es priorizar el sistema de capitalización y no el de reparto.

En primer lugar porque treinta días es un término muy exiguo y segundo, porque podría haber consignado que si en treinta días no había opción, se quedaba dentro del sistema público y no del privado. Ello quiere decir que este sistema, junto con otros artículos —hago referencia a éste porque es el que más claramente muestra la dirección que tiene el Poder Ejecutivo, modificado parcialmente en la Cámara baja— pretende darle prioridad, alentar y estimular el régimen de capitalización privada.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza, bloque justicialista.

**Sr. Bordón.** — Creo, y reitero, que ha sido la interpretación del señor senador por Entre Ríos que aquí lo que estamos tratando ya no es el proyecto del Poder Ejecutivo. El texto que estamos analizando es notablemente diferente. Y lo que yo interpreto —y comparto plenamente con el señor senador por Buenos Aires— es que el espíritu del proyecto del Poder Ejecutivo tenía un sentido diferente respecto de cómo ha quedado aparentemente redactado, y a ese espíritu apelo.

Entonces, quiero dejar aclarado que no estamos discutiendo el espíritu del proyecto original del Poder Ejecutivo, sino el del proyecto que ha sido remitido por la Cámara de Diputados, que es significativamente distinto, aunque respeto la interpretación de mi comprovinciano.

**Sr. Presidente** (Menem). — Se va a votar...

**Sr. Genoud.** — Pido la palabra para una acotación...

**Sr. Presidente** (Menem). — No vamos a tener suerte, nuevamente.

**Sr. Genoud.** - Este debate ha sido mucho más breve de lo que el justicialismo esperaba. Permítame hacer un agregado muy corto, señor presidente.

No estaba presente mi colega, el señor senador por la provincia de Mendoza, cuando yo señalé que en algunos aspectos el proyecto fue mejorando en la Cámara de Diputados al plantear el carácter optativo entre el sistema público y el privado. Fue una de las mejoras. Pero se trata de una mejora que no nos satisface plenamente, como lo han expresado los legisladores de nuestra bancada.

Y los treinta días bien pudieron ser tomados como una prioridad hacia el sistema público y no hacia el sistema privado.

**Sr. Presidente** (Menem). — Se va a votar...

**Sr. Alasino.** — Señor presidente ...

**Sr. Bordón.** — Deseo formular una última observación, señor presidente. . .

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Bordón.** — Estaba acá en la sala hablando con el gobernador de mi provincia por una reunión a la cual gentilmente el presidente de la Comisión de Industria, mi colega por la provincia de Mendoza, me había invitado, de manera que escuché la observación y ratifico la mía, estimado colega.

**Sr. Presidente** (Menem). — Recién concedí la palabra al señor senador por Entre Ríos y habló el señor senador por Mendoza. Ahora le doy la palabra al señor senador por Mendoza para que hable el señor senador por Entre Ríos. *(Risas.)*

**Sr. Alasino.** — Cordialmente, quiero decir al señor senador por Mendoza, del partido opositor ... *(risas)*... que no descubre la pólvora si dice que el Poder Ejecutivo ha auspiciado tal sistema. Ese es el proyecto original del Poder Ejecutivo.

Por eso nosotros insistimos, como con la reforma de la Constitución ... *(risas)* ... , que nadie cree que hemos hecho otro proyecto.

Creo que el proyecto de la Cámara de Diputados —y comparto la opinión del señor senador por Mendoza del partido de la mayoría— es sustancialmente distinto.

Entonces, de lo que se trata acá no es de decir lo que se propone o se proponía o a quién eso iba dirigido. Eso está claro. Lo que hemos logrado es un sistema mixto, y sostenemos que es sustancialmente distinto del originalmente remitido por el Poder Ejecutivo.

**Sr. Genoud.** — ¿Me permite una interrupción muy breve, señor senador?

**Sr. Alasino.** — Si., con todo gusto, señor senador.

**Sr. Solana.** — Pido la palabra para una moción de orden, señor presidente.

—*Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Genoud.** — Quiero hacer una interrupción muy breve, señor presidente. El plazo de treinta días es muy exiguo. Ocurre que en el caso de un trabajador del Chaco o de Formosa, por ejemplo, que no recibe los diarios, que no está informado, fijar un plazo de treinta días para que opte significa expulsarlo del sistema público y, prácticamente, condenarlo a que esté sometido al sistema de capitalización privada.

—*Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

**Sr. Solana.** — Señor presidente: para terminar con este recreo ... *(risas)*... a esta altura de la noche, solicito que se vote sin más trámite este capítulo.

**Sr. Presidente** (Menem). — Por tercera o cuarta vez, se va a votar el capítulo IV del título II del libro I, artículos 27 a 30.

—La votación resulta afirmativa.

-Se enuncia y aprueba el capítulo V del título II del libro I (artículos 31 a 35).

-Se enuncia y aprueba el capítulo VI del título II del libro I (artículo 36).

-Se enuncia y aprueba el capítulo VII del título II del libro I (artículos 37 y 38).

-Se enuncian y aprueban los capítulos I a XIII del título III del libro I (artículos 39 a 128).

-Se enuncia y aprueba el título IV del libro I (artículos 129 a 131).

-Se enuncian y aprueban los capítulos I a VIII del título V del libro I (artículos 132 a 155).

-Se enuncian los títulos I y II del libro II (artículos 156 a 168).

**Sr. Secretario** (Piuzzi). — Secretaría informa haber recibido de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación una fe de erratas con respecto a la última parte del segundo párrafo del artículo 163. Hay un error de tipografía.

**Sr. Presidente** (Menem). - Por Secretaría se va a consignar en qué consiste ese error.

**Sr. Secretario** (Piuzzi). - Donde dice "sistema integrado" debe decir "régimen general de jubilaciones y pensiones".

**Sr. Cafiero.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cafiero.** — Fue tan rápida la lectura anterior del señor secretario que no tuve tiempo de hacer notar, con el mejor espíritu, que el artículo 139 es incomprensible. Pido a los señores senadores que lo lean. El inciso a)...

**Sr. Presidente** (Menem). — El artículo ya ha sido votado, señor senador. Debería pedir la reconsideración.

**Sr. Cafiero.** — Que quede constancia entonces de que me abstuve de votar ese artículo. Es una barbaridad lo que estamos votando.

**Sr. Presidente** (Menem). — Continuamos con la consideración en particular. Se van a votar los títulos I y II del libro II (artículos 156 a 168).

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia y aprueba el libro III (artículos 169 a 173).

—Se enuncian los capítulos I, II y III del libro IV (artículos 174 a 182).

**Sr. Cafiero.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cafiero.** — Con respecto al artículo 175, hay un vacío en la legislación que estamos votando y deseo dejar constancia de él para enriquecer el texto de la norma y proteger de riesgos patrimoniales en que puedan incurrir los que se sumen al sistema que estamos creando.

Si bien el texto del proyecto establece en forma rigurosa los controles para la primera etapa del sistema, que es la del ahorro de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, no tiene disposiciones suficientemente expresas con respecto a las garantías, requisitos del capital y demás exigencias que deben cumplir las compañías de seguros privadas a cuyo cargo van a estar las prestaciones del sistema, una vez que se jubile la gente.

Quiero dejar constancia de que debería haber simetría entre las exigencias a las administradoras de fondos y a las compañías de seguros sobre las cuales se va a ejercer el derecho de los jubilados para percibir sus haberes.

Esto está implícito en mi observación a los artículos 175, 176 y 177. En consecuencia, pido permiso a la Cámara para abstenerme de votar estos artículos.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — En la comisión entendemos que los artículos 177 y 178 cubren los requerimientos necesarios en materia de entidades autorizadas. Pero, por otra parte, está la ley de seguros y también la Superintendencia de Seguros, que está mencionada varias veces en el texto de este proyecto.

Se ha dicho como crítica que en algunos artículos esta iniciativa es demasiado reglamentarista y ahora pareciera ser que la crítica se refiere a que es poco reglamentarista.

Creemos, reitero, que están cubiertos los requisitos básicos a que se refiere el señor senador por Buenos Aires.

Por lo demás, la ley de seguros y el organismo de contralor pertinente, la Superintendencia, tendrán que tomar los recaudos y garantías con que todos queremos que el sistema cuente.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Snopek.** — Comparto las inquietudes del señor senador por Buenos Aires, pero no son materia específica del proyecto de ley que estamos tratando. Son cuestiones propias de la ley de seguros, que ciertamente también es una materia pendiente que todos debemos rendir; me refiero a la necesidad de dictar una nueva ley de seguros.

De cualquier modo, no es propio de este régimen la reglamentación de las inquietudes que plantea el senador por Buenos Aires. Esto lo tenemos que conversar y discutir en el momento de tratar una nueva ley de seguros, teniendo en cuenta el colapso que se ha vivido en la Argentina en función de lo cual muchas áreas han quedado prácticamente sin tutela alguna. Pero insisto en que el tema es materia de otra ley o de la propia reglamentación.

Comparto la inquietud pero no resulta necesario ningún agregado; de lo contrario, estaríamos haciendo un verdadero código general de todos los temas y, entonces, habría que hacer también un código del seguro adentro de este proyecto de ley.

**Sr. Cafiero.** — Pero si estamos hasta modificando el Código Penal a través de esta ley, señor senador. Con el criterio que usted está sosteniendo, se podría haber referido todo este sistema a una simple modificación de la ley de entidades bancarias. Pero como éste es un sistema al que queremos dotar de todo el rigor necesario, y como estamos previendo penas no excarcelables por delitos que, obviamente, no tienen la gravedad de un homicidio premeditado, me parece que no está de más que la propia ley consagre estas garantías para los afiliados al sistema



cuando hagan ejercicio de los derechos acumulados durante su vida de trabajo.

**Sr. Presidente** (Menem). — Se van a votar los capítulos I, II y III del Libro IV (artículos 174 a 182), tal como figuran en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia y aprueba el Libro V (artículos 183 a 187).

—Se enuncia el Libro VI (artículos 188 a 193).

**Sr. Cendoya.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Cendoya.** — Señor presidente: en mi exposición señalé que esta iniciativa no se había cuidado mucho de modificar leyes, puesto que lo hace con el Código de Procedimientos en Materia Penal, con el Código Penal, con la Ley de Empleo. No hay ley que no se modifique.

El artículo 192, que consideramos ahora, modifica el artículo 11, inciso 8º), de la ley de concursos, que es el que establece que el comerciante que solicite esa situación debe acreditar el cumplimiento de las leyes de previsión social. Esta disposición ha sido reiteradamente declarada inconstitucional por los tribunales del país, por entender que hay principios superiores, como los de la conservación de la empresa y el cumplimiento de requisitos formales. Incluso, va en contra de un proyecto de ley de concursos que se estaría elaborando y sería enviado por el Poder Ejecutivo, en el sentido de que el concurso preventivo no solamente puede ser solicitado por el deudor sino también por los acreedores. Por lo tanto, creo que la modificación que se introduce no se compadece con la interpretación jurisprudencial sobre la validez del inciso 8º) del artículo 11 de la ley de concursos ni con la moderna tendencia sobre este particular. Dejo planteada esta cuestión a fin de que se tenga en cuenta en oportunidad de una próxima reforma.

**Sr. Presidente** (Menem). — Se va a votar el Libro VI, artículos 188 a 193.

—La votación resulta afirmativa.

—El artículo 194 es de forma.

**Sr. Presidente** (Menem). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

...

Queda levantada la sesión

—Es la 0 y 20 del jueves 23 de septiembre de 1993.

**MARIO A. BALLESTER.**  
Director del Cuerpo de Taquígrafos.